

HISTORIA POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS LATINOAMERICANOS

1

méxico
cuba
haití

república dominicana
puerto rico

Pablo González Casanova
(coordinador)

Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M.

 **siglo
veintiuno
editores**
división coediciones

HISTORIA POBRE historia DE LOS CAMPESESINOS LATINOAMERICANOS

VOL. I

GUATEMALA: PEDRO BRAH
HONDURAS: MARCO POLOS
EL SALVADOR: CARLOS DE CARRASQUILLA
NICARAGUA: ORLANDO MUÑOZ
COSTA RICA: GUILLERMO DE LA CRUZ
PANAMÁ: MARCO A. CARRASQUILLA (1910)

VOL. II

COLOMBIA: JESÚS ANTONIO BELARDO
VENEZUELA: RAÚL BONGIOVANNI C.
ECUADOR: HÉCTOR A. ILLERISSE
PERÚ: MIRIAM VAQUERANA L.
BOLIVIA: SILVIA RIVERA CISTRUCCI
PARAGUAY: JORGE LARA CASTRO

VOL. III

BRASIL: JOSÉ DE MOURA MARTINS
CHILE: SILVANA BRUNA
ARGENTINA: ALEJO BORGHI Y JUAN PEDERZOLI
URUGUAY: MANUEL A. ELIAS



COLABORADORES

VOL. 2

GUATEMALA: ANTONIO BRAN

HONDURAS: MARIO POSAS

EL SALVADOR: CARLOS R. CABARRÚS

NICARAGUA: ORLANDO NÚÑEZ SOTO

COSTA RICA: VLADIMIR DE LA CRUZ

PANAMÁ: MARCO A. GANDÁSEGUI (hijo)

VOL. 3

COLOMBIA: JESÚS ANTONIO BEJARANO

VENEZUELA: RAÚL DOMÍNGUEZ C.

ECUADOR: DIEGO A. ITURRALDE

PERÚ: MARIANO VALDERRAMA L.

BOLIVIA: SILVIA RIVERA CUSICANQUI

PARAGUAY: JORGE LARA CASTRO

VOL. 4.

BRASIL: JOSÉ DE SOUZA-MARTINS

CHILE: SUSANA BRUNA

ARGENTINA: ATILIO BORÓN Y JUAN PEGORARO

URUGUAY: MANUEL A. CLAPS

HISTORIA POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS LATINOAMERICANOS

coordinado por

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA





siglo veintiuno editores, sa

CERRO DEL AGUA 248, MEXICO 20, D.F.

siglo veintiuno de españa editores, sa

C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda

AV. 3a. 17-73 PRIMER PISO. BOGOTÁ, D.E. COLOMBIA

primera edición, 1984

© siglo xxi editores, s.a. de c.v.

ISBN 968-23-1305-8 (obra completa)

ISBN 968-23-1306-6 (volumen I)

la presente obra se publica por acuerdo especial
con el instituto de investigaciones sociales
de la universidad nacional autónoma de méxico

derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico
printed and made in mexico

INDICE

INTRODUCCIÓN, <i>por</i> PABLO GONZÁLEZ CASANOVA	9
LA LUCHA SOCIAL EN EL CAMPO DE MÉXICO: UN ESFUERZO DE PERIODIZACIÓN, <i>por</i> ARTURO WARMAN	14
HISTORIA POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS CUBANOS, <i>por</i> ADELFO MARTÍN BARRIOS	40
I. Antecedentes, 41; II. Las luchas campesinas en las primeras décadas del siglo XX, 54; III. 1940-1953, 71; IV. Los campesinos durante la lucha revolucionaria, 78; V. Después del triunfo de la Revolución, 82; Bibliografía, 92	
EL CAMPESINADO HAITIANO: SU POTENCIAL REVOLUCIONARIO, <i>por</i> SUZY CASTOR	93
I. Estructuras de dominación y de resistencia campesina. Dominación y explotación del campesinado, 95; II. La resistencia campesina, 108; III. Dominación duvalierista y resistencia del campesinado, 114; IV. Movimientos políticos y campesinado, 123; V. La participación del campesino en las luchas organizadas, 128; VI. Declive entre la concepción teórica y la aplicación real de la lucha armada, 136; VII. Hacia una articulación con las masas, 138; Bibliografía, 140	
LUCHAS CAMPESINAS Y REFORMA AGRARIA EN REPÚBLICA DOMINICANA, <i>por</i> PABLO A. MARÍÑEZ	143
Introducción, 143; I. Nuevas condiciones de lucha, 148; II. Reforma agraria y resistencia campesina, 165; Bibliografía, 202	
EL CAMPESINADO Y LA ESTRUCTURA AGRARIA EN PUERTO RICO (1898-1969), <i>por</i> FELIPE PÉREZ	208
Introducción, 208; I. Antecedentes, 210; II. Presiones que han atentado contra la estabilidad del campesinado puertorriqueño, 216; III. La campesinización de los peones agrícolas y el proceso de proletarianización y emigración que se produce a partir de 1941, 225; IV. La presencia del campesinado puertorriqueño en las luchas sociales y políticas, 239; Bibliografía, 247	

INTRODUCCIÓN

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA

Ésta es la primera historia de los campesinos latinoamericanos como actores políticos. En general cuando se estudia a los campesinos se les ve como parte de los problemas agrarios, o de los problemas rurales o de los problemas agrícolas. Pocas veces se piensa en ellos como actores políticos. Esta obra abarca la actuación política de los campesinos latinoamericanos en todos los países de esta región, incluido Puerto Rico. Aunque una parte de la narración y del análisis histórico comprenden etapas anteriores a la contemporánea el foco principal de atención es nuestro tiempo.

La historia varía de un autor a otro, de un tiempo a otro, de un país a otro. Las variaciones historiográficas se advierten cuando se pasa de la lectura de un texto como el de la Argentina, en que predomina el análisis de las relaciones sociales, a otro como el de Costa Rica, en que predomina la historia de los partidos y sus vínculos con los campesinos, o al de Guatemala en que aparece la historia principal de las masas. Muchos textos abarcan períodos largos, mientras los de Centroamérica se refieren sobre todo a lo reciente, a la coyuntura. En cualquier forma la obra tiene un aire campesino común, distinto por su riqueza y originalidad, por su variedad, su realismo y sus fantasías, por su fuerza, con sometimientos y rebeliones que abarcan parajes, aldeas, regiones y naciones enteras. Hay toda esa variedad campesina, diferente de la historia urbana o industrial, obrera o burguesa. Los textos la reflejan; a menudo son originales porque es original.

Las variaciones son enormes a lo largo del tiempo, pero con repeticiones, algunas que caen en los ciclos, en ese sentido aparente del eterno retorno que expresan los mitos clásicos. Conquistas, pacificaciones, incursiones, guerras de castas, guerras internas, no sólo se registran en los siglos xvi y xvii, sino en el siglo xix, hacia 1850 cuando las reformas liberales, hacia 1880 cuando la reestructuración de la dependencia y la modernización de los monopolios, y en el siglo xx, hacia 1948

cuando la institucionalización del sistema interamericano, y en los sesenta y setenta, hasta hoy, con la contrainsurgencia, la crisis, la sociobiología aplicada, militar, racista. Los modos de producción y dominación cambian sin desaparecer totalmente. Cambian en sus combinaciones y desigualdades mientras el capitalista domina al feudal y esclavista con esos y otros nombres. Todos cambian en un capitalismo colonial y neocolonial, con un mercado nacional, interno, transnacional, que los reproduce y rehace como colonialismo internacional e interno, como neocolonialismo internacional e interno, sobreterminado y mediado por sus formas de dominación, represión, y a veces, muy pocas veces, en muy pocos lugares, de concesión y hasta de negociación, rarísima ésta.

Todo parece cambiar para que nada cambie de la explotación colonial, original y ampliada, que va desde el capitalismo mercantil hasta el financiero transnacional, hegemonizado por las grandes empresas de Norteamérica y sus asociadas de las "potencias" intermedias. Las luchas y rebeliones también parecen repetirse como si fueran iguales, y surge en ellas lo distinto. Las luchas por la tierra y la autonomía, por los salarios y las condiciones de trabajo, en medio de su carácter secular varían por la fuerza cambiante de las ciudades y los obreros, de las propias comunidades campesinas y de los asalariados agrícolas, y por las alianzas de campesinos indios y ladinos, y con trabajadores industriales, pobladores urbanos, sectores medios, estudiantes e intelectuales, desarmados y armados, con ideologías que cambian visiones y perspectivas, liberales, conservadoras, positivistas, anarquistas, populistas, marxistas, y otras que en las luchas revolucionarias juntan escuelas e ideologías, modelos y creencias, en busca de las formas de acción que de acuerdo con la memoria colectiva y las experiencias han probado ser más eficaces para una misma lucha que se libra en forma distinta, pero por la tierra, la autonomía, la comunidad, la dignidad, el salario, el trabajo.

Aquí aparece una historia de la conciencia campesina diversa de la historia de las escuelas y doctrinas que llegan a tener influencia entre los campesinos. Hay una historia de la *conciencia campesina* frente a las políticas indigenistas y agraristas que acomete el Estado, o que realizan las instituciones indigenistas interamericanas. Existe una cierta conciencia histórica o política y a veces revolucionaria, del paternalismo conservador, del liberalismo autoritario, del indigenismo agrarista, populista, reformista, del indigenismo interamericano y del más re-

ciente de los antropólogos "indianistas". Hay una historia de la denuncia de los frenos de la conciencia campesina. Como en ella colaboran los intelectuales, hay una historia de la conciencia de los falsos radicalismos y de las falsas opciones entre indianistas e indigenistas, entre proletaristas y campesinistas.

La historia del surgimiento de la conciencia, de la estrategia y táctica de los indios y los campesinos es tan fascinante por sus desmistificaciones —entre otras las de los modelos y paradigmas, las de las escuelas y doctrinas, autoritarios y abstractos— como por el descubrimiento de toda una cultura de lucha contra la sumisión epistemológica y política, frente a las divisiones de los pueblos entre sí y la separación de sus dirigentes, o frente a la separación de los campesinos pobres, sean indios o ladinos, o frente a la separación de los campesinos pobres y los obreros y pobladores que se les unen, o frente a las limitaciones de las ideologías agraristas, sindicalistas y políticas, o las incipientes revolucionarias.

En las variedades de la historia surgen algunas características comunes de la mayor importancia. Entre los fenómenos generales destacan varios. Una lectura cuidadosa los enriquece en su generalidad concreta. Uno de ellos es que los campesinos y obreros del campo son una fuente esencial para la comprensión de las historias nacionales y del Estado Nación en América Latina. Las demandas y luchas campesinas por la tierra, por el salario, por la comunidad y las condiciones de vida son la base más general de las luchas nacionales, ya sea en defensa del territorio nacional frente al imperio, ya en la lucha de los trabajadores dentro de sus distintas secuelas reformistas, laboristas o socialistas, o en las que da la sociedad civil contra el tirano, todo en combinación crucial con los obreros industriales, generalmente más atrasados en radicalismo, pero necesarios para el triunfo, y para la consolidación de los triunfos generales.

El panorama es muy rico hasta en sus limitaciones y pobreza. Se advierte cómo los partidos de izquierda han subestimado el factor campesino. Se observan las dificultades de la expresión política del campesino en sindicatos y partidos, mayores que las del pueblo común, y mucho mayores que las del poblador urbano, por grandes que éstas sean.

El problema es de tal magnitud que uno siente la necesidad de una discusión conceptual, histórica y antropológica sobre lo prepolítico y lo político, y sobre las dificultades de lo político, particularmente agudas en el campo y la agricultura.

Pero también se advierten cambios significativos en los últimos tiempos, algunos igualmente dolorosos o más que los del pasado y también con un legado de cultura política mayor. En la historia de la conciencia y la cultura campesina es de ver cómo las multinacionales que borran fronteras generan por contragolpe proyectos campesinos comunes, cómo las migraciones internacionales de campesinos no sólo dan a éstos una conciencia dependiente, enajenada, sino también la rebelde e internacional; cómo en muchas regiones y subregiones el movimiento campesino deja de ser local para volverse regional, nacional e internacional. Las reformas no cumplidas por las burguesías democráticas y populistas son herencia para nuevos movimientos, y si las crisis y políticas de control alimentario de Washington y las transnacionales están provocando la asfixia económica e incluso el exterminio físico de muchos pueblos y comunidades campesinos, también están despertando movimientos nacionales e internacionales de solidaridad que no tienen precedente por la forma en que articulan esas luchas a las propias, políticas y revolucionarias. En éstas se advierten variaciones sustanciales dentro de la Iglesia, con curas revolucionarios muy parecidos a los de la Primera Independencia, por su vinculación con las masas, aunque mucho más conscientes que aquéllos de la lucha contra el neocolonialismo y de la lucha de clases.

De la lectura de la historia se deduce que el tiempo ha pasado entre las primeras guerrillas de los sesenta y las de ahora, aquéllas con lo que bien o mal se llamó foquismo, y éstas que operan sobre todo como núcleos armados de masas campesinas rebeldes, en que masas, núcleos y armas forman un conjunto único de una fuerza militar capaz de enfrentarse a los ejércitos de línea mejor armados, y de sobrevivir, crecer y ganar, como en Nicaragua y ahora en El Salvador. En esa historia destaca la importancia de los elementos culturales campesinos que con paciencia de años aprendieron los revolucionarios, y la de vincular la cultura agraria, la cultura nacional y la cultura revolucionaria.

La *Historia política de los campesinos latinoamericanos* es una obra fundamental para comprender el momento actual de América Latina, y de la revolución democrática y la campesina. En ella, el problema campesino aparece como el eje medular de la democracia en América Latina. Cualquier democratización de América Latina pasa por el desarrollo de los movimientos campesinos en una dialéctica que no es campesi-

nista u obrerista, sino de campesinos, y obreros, pobladores y clases medias, y hasta de algunos ricos que se juntan a ellos, a los movimientos populares y al movimiento del pueblo en lucha por la independencia nacional y por la democracia revolucionaria, viejas luchas en que el indio y el campesino son pioneros, y sin cuya presencia es incomprensible la historia de América pasada o actual.

Para la edición final de esta obra contamos con la valiosa ayuda de Arturo Warman, quien revisó y compendió algunos textos demasiado extensos dentro del conjunto. A él y a Elke Köppen, quien también colaboró en el cuidado de la edición, nuestro agradecimiento.

LA LUCHA SOCIAL EN EL CAMPO DE MÉXICO: UN ESFUERZO DE PERIODIZACIÓN

ARTURO WARMAN

En este trabajo se intenta, de manera provisional y tentativa, proponer una periodización en el desarrollo de las luchas sociales en el campo mexicano en el presente siglo. El intento es ambicioso, puede que hasta pretencioso, por lo que antes de entrar en la discusión de los períodos vale la pena tratar de justificar el intento, establecer sus límites y precisar su nivel de abstracción, muy cercano a la incomodidad. Adopto en este caso, una definición instrumental para el concepto de movimientos campesinos:¹ son aquellos que se originan, reclutan y sustentan en el medio rural y establecen demandas, implícitas o programáticas, orientadas a lograr la persistencia y crecimiento de los grupos de productores, que a partir de una base territorial, tienen una autonomía relativa en la realización de los procesos productivos. En tanto que estos productores, los campesinos, se encuentran sometidos a procesos comunes de explotación y de subordinación política, su lucha pretende la reproducción social de una clase específica.²

¹ El interés por los movimientos y rebeliones campesinos como una forma específica de las movilizaciones sociales, que requiere de marcos interpretativos propios, es relativamente reciente. Como simples referencias se mencionan algunos trabajos que, a mi juicio, resultan de interés para documentar este enfoque, como: Eric R. Wolf, *Peasants wars of the twentieth century*, Nueva York, Harper & Row, 1969 (*Las luchas campesinas del siglo xx*, México, Siglo XXI, 1982, 7ª ed.); Eric Hobsbawm, *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, 1968; Barrington Moore, *Social origins of dictatorship and democracy*, Boston, Beacon Press, 1966 (hay versión española); Henry Lansberger (comp.), *Latin American peasant movements*, Ithaca, Cornell University Press, 1969; Hamza Alavi, *Teoría de la revolución campesina*, México, Comité de Publicaciones de la ENAH, 1974; Rodolfo Stavenhagen (comp.), *Agrarian problems and peasant movements in Latin America*, Nueva York, Anchor Books, 1970. Todos ellos y muchos más influyeron en diferente medida en el enfoque de este trabajo. Sin embargo, vale la pena insistir en que para el propósito de este ensayo se optó por una definición puramente instrumental.

² La discusión respecto al campesinado como clase es amplia, puede que confusa, y está abierta. No pretendo intervenir en ella en esta ocasión y

En el caso de México, la reproducción social de la clase campesina ha implicado fundamentalmente la lucha por la tierra como el elemento central de sus movilizaciones. La demanda agraria constituye la principal reivindicación, el más poderoso elemento cohesivo y el más importante concepto ideológico en el surgimiento, organización y lucha de los movimientos campesinos contemporáneos. La presencia de este elemento constante no implica que sea el único y no puede interpretarse, como con frecuencia se hace, como un rasgo estético. La demanda agraria es un proceso dinámico que se ajusta a las condiciones objetivas de existencia y reproducción de la clase campesina. Cualquier intento de periodización carecería de sentido si la lucha por la tierra fuera un reclamo permanente e inflexible derivado de un atavismo conservador o de una vocación pequeñoburguesa. Por el contrario, la periodización pretende mostrar que la cuestión de la tierra, y la lucha por ella, es uno de los factores de más peso en la explicación de la transformación social del país, de su "modernización", o más estrictamente, de su modalidad en el desarrollo del capitalismo.

Trataré de analizar a los movimientos campesinos como un conjunto. Esto no implica que la multitud de movilizaciones rurales haya tenido una unidad organizativa, ni siquiera una identidad en sus propósitos, tácticas y alianzas. Por otra parte, también es evidente que existieron elementos comunes en las movilizaciones, derivados de una inserción común y colectiva del campesinado en una estructura social más amplia, en donde se establecen las condiciones generales de la explotación y la subordinación. De esta inserción colectiva se deriva una unidad en los efectos de las luchas campesinas sobre la sociedad más amplia, que permite analizarlas como un conjunto. Esto implica enfatizar las consecuencias sobre las causas y las generalidades sobre los datos concretos y los detalles.

Esta aproximación tiene un precio muy elevado ya que presta poca atención, y a veces ignora, a la riqueza de los movimientos conocidos e historiadados. Tiene, también, una compensación. Por complejas razones, son muy pocos los movimientos campesinos que han sido estudiados, menos aún los que han pasado a formar parte de la historia nacional oficializada por el discurso y la educación.³ El esfuerzo por analizar los

utilizo como marco mi trabajo sobre "Las clases rurales en México", publicado en Arturo Warman, *Ensayos sobre el campesinado en México*, México, Nueva Imagen, 1980.

³ El resurgimiento del interés por historiar y documentar los movimien-

movimientos campesinos como un conjunto intenta tomar en cuenta, a través de sus efectos, a los movimientos no historiadados, que siguen siendo mayoría. Además, intenta combatir las aproximaciones que ven los movimientos campesinos como sucesos aislados, parroquiales y limitados, que sólo interesan al historiador local pero que no tienen trascendencia en el proceso nacional.

Por regla general, los movimientos y rebeliones campesinos se han analizado a partir de sus peculiaridades y ámbitos locales. Los elementos particulares y locales que todo movimiento social incorpora, se usan con frecuencia, en el caso de los campesinos, como explicaciones completas. El enfoque de conjunto trata de destacar que los efectos y consecuencias de las movilizaciones rurales no pueden limitarse en el mismo marco en que éstas se generan y actúan. Una de las razones más obvias para esto es el hecho de que los movimientos campesinos son combatidos y reprimidos por fuerzas y poderes no locales, en especial por el Estado nacional. Hacendados, rancheros, neolatifundistas, ganaderos, guardias blancas, rurales y federales, no son grupos locales sino expresiones localizadas de un sistema más amplio, como también lo son los campesinos. Los movimientos campesinos no pueden explicarse sólo por sus integrantes sino también por sus opositores y enemigos.

La periodización intenta reconocer los efectos complejos de la acción política de los campesinos más allá de sus fines declarados y demandas inmediatas. Los movimientos sociales de cualquier grupo no pueden entenderse sólo a partir de sus declaraciones formalizadas con propósitos programáticos sino que es necesario recoger los efectos de la movilización de su contexto social. Con mucha frecuencia, movimientos ideológicamente bien articulados han tenido un efecto débil mientras que otros, aparentemente más confusos, logran un impacto superior. Las movilizaciones sociales son procesos muy complejos en los que las formalizaciones ideológicas y programáticas no pueden separarse como objetivo único de análisis.

tos campesinos en México puede fecharse, con un poco de arbitrariedad, 1969, cuando se publicó el libro de John Womack, *Zapata y la Revolución mexicana*, México, Siglo XXI, 1982, 12ª ed. A partir de esa fecha se han publicado un buen número de estudios, especialmente históricos, sobre los movimientos campesinos. Aún así, la atención se ha centrado en unos cuantos movimientos y en los primeros años del siglo, por lo que es justo afirmar que son muchos más los movimientos que desconocemos que los que apenas empezamos a entender.

Para el establecimiento de las etapas o períodos que se enuncian consideré cuatro dimensiones abstractas. La primera se refiere a los efectos de las movilizaciones campesinas en el orden político: en el establecimiento de un proyecto para la sociedad, de una hegemonía y un sistema de alianzas, y de un arreglo institucional en el aparato del Estado para promover el proyecto e imponerlo al conjunto de la sociedad. En esta dimensión, que se refiere al poder, la fuerza armada juega un papel importante, sobre todo en las etapas cercanas a la guerra civil. La segunda dimensión considera los efectos de la acción campesina en el orden socioeconómico, en la estructura de clases. La tercera y cuarta dimensiones procuran tomar en cuenta factores propios, generados o asumidos por los campesinos, aunque en momentos sean cooptados o impuestos por los aparatos de dominio. Así, la tercera dimensión se refiere a los programas y proyectos emanados de los movimientos campesinos, que implican a la ideología aunque no la expresen totalmente. La cuarta analiza los aspectos organizativos de los movimientos: su tipo, extensión, alianzas, liderazgo, reclutamiento. La abismal diferencia entre la abundancia de información indirecta respecto a las dos primeras dimensiones y la escasez respecto a las últimas, ocasiona que el tratamiento no resulte simétrico ni proporcionado en las diferentes etapas. Las cuatro dimensiones no se conservan ordenadas en beneficio de la fluidez y coherencia, o cuando menos así lo espero.

A partir de estas advertencias se establecen cuatro períodos para el desarrollo de la lucha campesina a partir del estallido de la Revolución mexicana. Los nombres que utilizo para ellos no son muy afortunados, pero casi nunca lo es el bautizo de abstracciones. Los cuatro períodos que analizo son: la lucha armada, la inserción, la negociación subordinada y, con reservas, la disrupción.

En el primer período, la lucha armada,⁴ los movimientos

⁴ Opté, dado el propósito de este trabajo, por agrupar la bibliografía de acuerdo con los períodos o etapas. Muchos trabajos rebasan los marcos temporales de las etapas que establezco, por lo que su colocación tiene algo de arbitraria y se justifica que los haya usado como apoyos en la escritura de este trabajo. Sólo cito los estudios que utilicé directamente, por lo que hay muchas omisiones. Pido disculpas por ellas, son gajes del oficio. Para el período de la lucha armada recurrí a la obra de Womack, que mencioné en la nota anterior, y a mi propio trabajo *Y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el estado nacional*, México, Ediciones de la Casa Chata, 1976, por lo que se refiere al zapatismo. Para el noroeste me apoyé en el libro de Héctor Aguilar Ca-

campesinos constituyeron la fuerza más poderosa en la destrucción del viejo orden y el surgimiento de una opción distinta y novedosa. Con la flexibilidad necesaria, este período se sitúa temporalmente entre 1910 y 1920. En él, los efectos revolucionarios de la acción armada de los campesinos pueden analizarse en tres órdenes: como el factor decisivo para la destrucción del porfiriato, como el grupo de presión que marcó las fronteras para establecer la nueva hegemonía, y como un conjunto de proyectos para el reordenamiento de la sociedad y del Estado.

El primer efecto, el destructivo, se reconoce con frecuencia. La violencia se recuerda con terror, pero pocas veces se explica y, menos aún, se reconoce su efecto sobre la estructura social. En los primeros años, la rebelión generalizada de los campesinos, organizados local y regionalmente pero sin un mando centralizado, superó la capacidad de represión del ejército profesional del porfiriato. Cientos, tal vez miles de bandas rebeldes mal armadas pero ampliamente distribuidas por vastas áreas geográficas, configuraron la crisis política que forzó la renuncia de Porfirio Díaz y permitió el acceso al poder a Francisco Madero. El ejército profesional no fue derrotado sino rebasado por un levantamiento multitudinario aunque desarticulado. En la segunda fase, los ejércitos campesinos, especialmente el villismo, liquidaron al ejército porfirista y forzaron su disolución y la de la base institucional del viejo orden. La destrucción del porfiriato en sus bases de poder, en sus fundamentos políticos y en su legitimidad, fue un prerequisite para la posibilidad de establecer un nuevo orden político.

Los efectos del levantamiento armado de los campesinos no se limitaron a la esfera política. Su impacto más importante

min, *La frontera nómada*, México, Siglo XXI, 1984, 4ª ed. Para el villismo me apoyé en diversas conferencias de Federico Katz y en su trabajo "Pancho Villa, peasant movement and agrarian reform in northern Mexico", publicado en David A. Brading (comp.), *Caudillo and peasant in the Mexican revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. Por cierto que este libro, en su conjunto, se usó ampliamente para esta y la segunda etapa o período de inserción; aprovecho la ocasión para mencionarlo aquí. Los libros de Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida*, México, Ediciones El Caballito, 1976; el de Arnaldo Córdova *La ideología de la revolución mexicana*, México, ERA, 1963; el libro de Eric Wolf antes mencionado, y aunque suene paradójico, el libro de Luis González, *Pueblo en vilo; micro-historia de San José de Gracia*, México, El Colegio de México, 1968, se usaron como marcos de referencia para el período en su conjunto.

lo resintió la estructura de clases que el viejo orden trataba de perpetuar. Los hacendados, la oligarquía agraria en proceso de crecimiento y diversificación capitalista, constituían el sustento del porfiriato. Alrededor de ellos se conformaba el núcleo del sistema de poder y la clase dominante. Sus amplios y diversos intereses y las inversiones extranjeras en concesiones y enclaves, frenaban el desarrollo de otros grupos capitalistas y acentuaban el carácter oligárquico de la clase dominante. La hacienda, núcleo de la actividad económica de la oligarquía, fue afectada directamente como unidad productiva por la rebelión armada de los campesinos. En algunas áreas la destruyó en los primeros años de lucha. Los campesinos ocuparon y disolvieron a las haciendas como unidades territoriales en el centro sur del país, donde más vigorosamente actuó el zapatismo. En el área central del movimiento villista, las haciendas fueron preservadas como unidades productivas, pero sus propietarios fueron expropiados por el ejército revolucionario. En muchas otras áreas, los ejércitos campesinos ocuparon las instalaciones hacendarias, aunque no pudieran disolverlas o conservarlas, pero afectaron severamente su producción y sus ganancias. Los sistemas de transporte y la red de mercados por los que transitaba la producción hacendaria fueron desarticuladas. Los mecanismos de reclutamiento forzoso de fuerza de trabajo, como el peonaje por deudas, fueron suspendidos. El sistema monetario y de crédito fue prácticamente suspendido en el medio rural. Hasta donde sabemos la vida cotidiana se transformó más radicalmente en el campo que en las ciudades; no de gratis, era en el medio rural donde se peleaba. Estos y otros efectos de la lucha campesina configuraron la debilidad de la hacienda como sustento del poder de la clase hegemónica. No todos los hacendados se empobrecieron, no todas las haciendas desaparecieron, pero la aristocracia terrateniente fue disuelta como clase dominante por la guerra civil caracterizada por la presencia campesina.

Los movimientos campesinos hicieron emerger una demanda agraria por la tierra. Expresada al principio como un reclamo de justicia que pedía la restitución de las tierras injusta e ilegalmente expropiadas a los pueblos y comunidades, la demanda agraria fue adquiriendo profundidad y precisión a lo largo de la década de 1910. A finales de 1911, el movimiento zapatista expidió el Plan de Ayala, que conforme a la situación del estado de Morelos, ya planteaba una radical transformación en la estructura agraria. Desde ese mismo año y con el apoyo

de las armas, se hicieron repartos de tierra por los jefes militares campesinos. En 1915, el villismo y el zapatismo promulgaron de manera independiente sus leyes agrarias, concebidas como proyectos nacionales. En 1917 y 1918, una vez promulgada la constitución de 1917 que consagraba la reforma agraria como un mandato legal, el zapatismo legislaba para otorgar autonomía política a las comunidades agrarias, empujando por radicalizar el ordenamiento legislativo en términos de un proyecto de clase.

La atención a la demanda agraria se convirtió, de hecho, en una condición para establecer y mantener un gobierno nacional. Ninguno de los grupos que buscó el control sobre el Estado pudo lograrlo sin atender la demanda agraria multitudinaria. Ésta, que no fue la única demanda de tipo social, se convirtió en condición general, en límite estricto para el establecimiento de un gobierno nacional después de la caída de Porfirio Díaz. La "paz social" sólo podía obtenerse por la reforma agraria. El gobierno de Madero fue minado por su incapacidad de cumplir las promesas agrarias de su plan revolucionario. El huertismo golpista, en su intento restaurador que excluía las reformas sociales, propició la formación de una coalición revolucionaria con la participación de los ejércitos campesinos. Carranza fundó su intención hegemónica en una ley agraria, la de enero de 1915, que no cumplió. El congreso de 1917 reconoció el límite y legisló sobre la tenencia de la tierra y su reparto. Aun así, la falta de aplicación de esta norma mantuvo la insurgencia campesina. Obregón consiguió la implantación del gobierno nacional al iniciar el reparto masivo de tierras. Los movimientos campesinos y su exigencia agraria fueron el factor que convirtió a la guerra civil en una revolución dirigida a cambiar la estructura de la sociedad.

La demanda agraria no fue sólo el límite o frontera para el logro de la hegemonía, también fue el sustento de proyectos originales para la reorganización total de la sociedad y del Estado. Un prejuicio heredado oscurece este hecho. Los planes políticos, los pocos documentos formalizados por los movimientos campesinos, se han analizado fuera de contexto, aislados del proceso de la lucha revolucionaria. La historiografía ha enfatizado las fallas formales de los documentos campesinos pero casi nunca ha intentado explicar sus implicaciones en el contexto concreto de la rebelión. Durante muchos años, por ejemplo, el Plan de Ayala fue considerado como un documento bárbaro que mal expresaba una demanda elemental y primi-

tiva. Incluso se llegó a afirmar, que pese a sus deficiencias, su elaboración era el resultado de una influencia ilustrada ya que los campesinos analfabetos no tenían la capacidad de formular sus ideas. Los trabajos recientes sobre el zapatismo y otros movimientos, no sólo han mostrado la falsedad de esas opiniones sino que han hecho aflorar programas políticos complejos, coherentes y sofisticados, que perseguían el establecimiento de una nueva sociedad. Estos programas se expresaron mucho mejor en la dirección cotidiana de las fuerzas revolucionarias que en una formulación documental intemporal. Los proyectos del zapatismo o del villismo no se expresan en un documento sino en un proceso congruente y cada vez más radical por establecer por la revolución un orden social distinto.

Los proyectos revolucionarios de los campesinos no se llevaron a la práctica más que en lapsos y espacios limitados, siempre cercados por tropas enemigas. Los proyectos campesinos no fueron los triunfantes. Concebidos con audacia, y de alguna manera desde los límites de lo posible, fueron capaces de mover el espectro nacional hacia las reformas radicales, pero no lograron la hegemonía. Los que básicamente hicieron la revolución no la ganaron. Sin embargo consiguieron que su demanda central, la reforma agraria, no fuera excluida. Los campesinos, como clase, quedaron incluidos en la coalición que llevaría adelante la conducción de la sociedad. Esta situación da paso, en 1920, al siguiente período: el de inserción.⁵

Al terminar la lucha armada, la posición de los movimientos campesinos era la inferior dentro del gobierno, la menos influyente. Su acción se dirigió a mejorar esta posición, a insertar-

⁵ Para el segundo período usé: Paul Friedrich, *Agrarian revolt in a Mexican Village*, New Jersey, Prentice Hall, 1970; Jean Meyer, *La Cristiada*, 3 volúmenes, México, Siglo XXI, 1973; José Díaz y Román Rodríguez, *El movimiento cristero*, México, CISINAH-Nueva Imagen, 1979; Heather Fowler Salamini, *Agrarian radicalism in Veracruz, 1920-1938*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1978 [*Movilización campesina en Veracruz, 1920-1938*, México, Siglo XXI, 1979]; Romana Falcón, *El agrarismo en Veracruz, la etapa radical (1928-1935)*, México, El Colegio de México, 1977; David A. Franz, *Bullets and bolshevist; a history of the revolution and reform in Yucatan (1910-1924)*, tesis de doctorado, University of New Mexico, 1973; Francisco Paoli y Enrique Montalvo, *El socialismo olvidado de Yucatán*, México, Siglo XXI, 1980, 2ª ed.; Luis Aboites, *Esclavos, socialistas y ejidatarios*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1980 (Reportes de investigación núm. 40); Gerrit Huizer, *La lucha campesina en México*, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1979; Laura Helguera, Ramón Ramírez y Sinecio López, *Los campesinos de la tierra de Zapata I; adaptación, cambio y rebelión*, México, SEP-INAH 1974.

se más efectivamente y con más poder en el proceso de reorganización de la sociedad y en su dirección. De ahí el nombre que le di a esta fase. En ella, la movilización campesina se expresa en tres tipos de acciones principales: la constitución de corporaciones agrarias para reclamar el reparto de la tierra y recibir las dotaciones; la formación de organizaciones políticas para participar en el gobierno; y la eventual acción armada, como rebelión en contra del Estado o como apoyo al gobierno.

La formación de corporaciones agrarias, primero como grupos solicitantes y luego como beneficiados por la dotación territorial de ejidos, fue el movimiento campesino más generalizado y extendido. Los efectos de esa masiva movilización local, que prácticamente no han sido estudiados, significaron cambios muy importantes en la comunidad rural, que fue reorganizada. La formación de estos grupos, requeridos por la legislación agraria, fue con frecuencia contradictoria y antagónica con la organización comunitaria previa. La diversidad de la vida rural fue artificialmente separada por los requisitos de la redistribución territorial y la formación de los comités y de ejidos se tradujo en una multiplicación de organizaciones. El conflicto interno y el faccionalismo, acentuados por la necesidad de mantener alianzas externas para la dotación agraria, se intensificaron y debilitaron las perspectivas de una organización campesina amplia y nacional. Las alianzas externas de los grupos campesinos, sustento del caciquismo regional, acentuaron la fragmentación de las comunidades y le quitaron legitimidad a sus líderes.

Esta situación era, en buena medida, un reflejo del carácter y la intención de la legislación agraria y su aplicación. El reparto de tierras se concibió y se organizó como un monopolio del Estado, al que servía como fuente de poder y de control. La hegemonía del Estado se reestableció a través del reparto agrario en las regiones en que la rebelión campesina fue más intensa y radical. La reforma agraria se manejó como un pacto social con los campesinos. El reparto fue administrado por una burocracia conforme a sus propias normas, que servían al Estado y a los intereses políticos y particulares de la propia burocracia. Surgió el clientelismo y los campesinos solicitantes fueron subordinados por las facciones y grupos surgidos dentro del aparato del Estado.

Otro efecto importante de la legislación, que también propició la fragmentación campesina, fue la exclusión del reparto de grupos importantes: los peones acasillados, los asentamientos

humanos sin categoría política de pueblo, los artesanos y los minifundistas, cuya propiedad se representaba y fragmentaba territorialmente al ejido. El radio de siete kilómetros a partir del centro de las comunidades solicitantes para definir las fronteras de las expropiaciones y la definición arbitraria y confusa de los límites de las dotaciones, provocaron disputas por tierras entre ejidos y pueblos. Estos conflictos, nunca resueltos y a veces artificialmente provocados, originaron enfrentamientos y desconfianza que hacían muy difícil la integración regional de movimientos con un interés común. Las divisiones internas y las alianzas subordinadas debilitaron a las movilizaciones campesinas, que perdieron capacidad de presión sobre el resto de la sociedad.

Aun así, la movilización campesina logró transformar la intención y el carácter del reparto agrario entre 1920 y 1940, lapso que cubre el período de inserción. En un principio, bajo el gobierno de los sonorenses, el ejido, principal forma de propiedad de las tierras repartidas, se concibió como un complemento para proporcionar bienes de subsistencia al peón agropecuario, como un pegujal. Por ello se legisló la fragmentación del ejido en parcelas de usufructo familiar. Por otra parte, los peones permanentes de las grandes haciendas fueron excluidos del reparto, lo que permitió la supervivencia de los núcleos de las haciendas y hasta la formación de nuevos latifundios posrevolucionarios. El ejido no fue considerado como un territorio económicamente productivo sino como un área de apoyo a la empresa agropecuaria moderna, en la que se fincaba el modelo de desarrollo de México como país agroexportador. El reparto era "político", concesión a la paz social y pilar de apoyo del régimen. Las unidades de dotación parcelaria eran pequeñas y la redistribución buscaba satisfacer el mayor número de solicitantes en las áreas rebeldes. El carácter provisional del ejido, como entrenamiento para conformar a una clase propietaria empresarial moderna, fue reiterado entre 1920 y 1932.

La insatisfacción campesina con esta concepción, junto con el impacto económico de la crisis de 1929, obligó a su transformación. Entre 1934 y 1937, el reparto de tierras alcanzó su máxima intensidad y se generalizó por todo el país. En tres años se repartió más tierra que en los quince previos y el número de beneficiados se duplicó en el mismo lapso. La vieja hacienda fue finalmente liquidada e incluso algunas empresas modernas fueron transformadas en ejidos colectivos. Se otorgó a los acasillados el derecho a ser dotados. El tamaño de las

unidades parcelarias se duplicó. Las tierras irrigadas por los sistemas modernos, construidos por el Estado en el norte y noroeste del país, que habían sido excluidas del reparto previamente, fueron afectadas. Aproximadamente la mitad de las tierras cultivadas, fueran de riego o de temporal, estaban bajo la propiedad ejidal al terminar la fase más intensa del reparto bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas.

Esta radical acción gubernamental alentaba una nueva visión de la reforma agraria. El ejido era concebido como una forma permanente de la propiedad, esencial para el desarrollo del conjunto del país. La unidad de dotación parcelaria, que seguía siendo la más importante pero ya no la única modalidad de la propiedad ejidal, se concebía como una entidad económica con una participación en el mercado y no como un complemento del salario. En estas unidades se depositó la función de abastecer al país de alimentos a precios bajos, mientras que se dejaba en las formas particulares de la propiedad la producción de materias primas y de exportación. El ejido colectivo, de concepción agroindustrial y empresarial, podía incluso suplir a la propiedad particular en su función, la reforma agraria se transformó en política económica sin dejar de jugar su papel central como política "política".

Cuando se analiza la acción agraria del gobierno cardenista, con frecuencia se olvida, o se le resta importancia, al hecho de que estaba orientada fundamentalmente a dar respuesta a una movilización campesina de gran magnitud que se expresaba políticamente dentro del mismo gobierno. Desde el final de la lucha armada, los movimientos campesinos se esforzaban por transformarse en organismos políticos dentro del aparato del Estado revolucionario. Este esfuerzo presenta una contradicción central: frente al surgimiento de movimientos regionales fuertes y poderosos, no surgió una expresión organizativa nacional del movimiento campesino.

Organizaciones como el Partido Socialista del Sureste, o las Ligas de Comunidades Agrarias de estados como Veracruz, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí o Tamaulipas, llegaron a adquirir gran fuerza y capacidad de presión para acelerar el reparto agrario y liquidar el latifundio. Incluso alcanzaron el control sobre algunos gobiernos estatales que mantuvieron por lapsos significativos, y adquirieron gran importancia como apoyos a las diversas fuerzas y tendencias en el gobierno nacional. En sus áreas de influencia, los movimientos regionales de ori-

gen y reivindicación campesina, establecieron organizaciones eficientes, con una dirección eficaz y una gran capacidad para la movilización de masas. En algunos casos, las organizaciones campesinas regionales formaron una rama de agitación y propaganda, un brazo político-ideológico, que superaba en capacidad de acción y claridad ideológica a los partidos políticos nacionales.

De manera contrastante, los esfuerzos por crear un partido nacional campesino, que fueron muy numerosos, se frustraron de manera repetida. El Partido Nacional Agrarista, que desempeñó un papel central en la elección del general Álvaro Obregón y en la consolidación de su gobierno, el primero con hegemonía nacional, no pudo organizarse de manera estable y se disolvió pocos años después. Diversos intentos por formar un partido que uniera y representara a los campesinos se hicieron entre 1920 y 1934, casi siempre con la iniciativa de los antiguos revolucionarios, fracasaron y se quedaron en memores. Tampoco corrieron mejor suerte los esfuerzos de algunas ligas campesinas regionales por convocar a congresos nacionales y crear una federación permanente. En los sucesivos intentos y fracasos, apenas conocidos, jugó un papel de gran importancia la desconfianza con que el gobierno federal veía la posibilidad de una organización nacional campesina que pudiera desestabilizar con sus demandas radicales el esfuerzo por lograr una conciliación de clases para la reconstrucción del capitalismo. El gobierno de Calles y su maximato, no sólo negó apoyo y reconocimiento a los esfuerzos organizativos sino que promovió activamente el fraccionalismo y llegó hasta el ejercicio de la represión. La revuelta delahuertista jugó un papel muy importante en la liquidación física de los líderes campesinos más radicales y prestigiosos en casi todo el país, que descabezó al movimiento campesino y suspendió las tendencias unificadoras más viables. Otros factores internos, poco conocidos, desempeñaron igualmente un papel importante en contra de la unificación. La desconfianza y la competencia entre los caciques regionales, que fincaban su poder en el clientelismo personal, destacaron entre ellos.

Frente al viraje antiagrarista del general Calles, una coalición de líderes revolucionarios logró la formulación del Plan sexenal, que implicó una radicalización del programa agrario, y obtuvo la elección del general Lázaro Cárdenas como presidente del país. Por su iniciativa, a través de un decreto presidencial que estableció una sola liga de comunidades agrarias

por cada estado del país y una confederación nacional única, se creó en 1935 la Confederación Nacional Campesina. En 1938, la CNC se transformó, sin perder su función de organismo del Estado, en el sector agrario del Partido de la Revolución Mexicana. La unidad campesina se consiguió desde arriba y básicamente para servir de apoyo a un programa de gobierno que reorientaba el proyecto nacional. A cambio, a los campesinos se les ofreció la tierra cuyo reparto se había suspendido. Se reestableció el pacto social entre el Estado y los campesinos del país.

La formación de la CNC fue posible como una derivación del monopolio del Estado sobre el proceso de reforma agraria. A la Confederación se le concedió en exclusiva la capacidad de negociar en la cuestión agraria. La CNC se constituyó en un apéndice administrativo gestor de la burocracia agraria que, como organismo político, podía capitalizar como apoyo al gobierno la movilización campesina en todo el país. Los remanentes de los poderosos movimientos regionales autónomos, golpeados por el callismo, se fueron incorporando a la Confederación, donde fueron sometidos por la dirección nacional, o quedaron aislados y marginados al ser desconocidos como interlocutores, inclusive como solicitantes, en la cuestión agraria.

Pese a los apuntes previos, aún no disponemos de estudios que permitan profundizar en la explicación de la fragmentación del movimiento campesino durante su fase de inserción. Destaca, sin embargo, la acción del Estado como factor de división y como promotor de la lucha interna entre el campesinado en tanto no tuvo la posibilidad de controlar e incorporar de manera centralizada a los movimientos campesinos; el reparto radical del cardenismo lo hizo posible.

Durante la fase de inserción entre 1920 y 1940, el movimiento campesino permaneció débilmente armado, aunque su principal línea de acción haya sido la política. La fuerza militar del campesinado no se ejerció unitariamente sino de manera fragmentada y en direcciones opuestas. Una dirección fue la rebelión en contra del gobierno. Este tipo de acción lo ilustra con fuerza el movimiento cristero, que en los últimos años llamó poderosamente la atención de los estudiosos. Aunque es aventurado caracterizar brevemente la guerra cristera, parece justo afirmar que se trató de una gran movilización regional campesina, que reaccionaba frente al manejo manipulador del reparto agrario y a su sometimiento a un proyecto de acumulación capitalista, que fue subordinada y cooptada por un movi-

miento conservador y contrarrevolucionario encabezado por la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, no todas las rebeliones armadas contra el gobierno tuvieron, como la historia oficial lo presume, un signo conservador. Las luchas en el estado de Veracruz lo muestran y sin duda los ejemplos se multiplicarán conforme se avance en reconstruir la historia de los movimientos campesinos en el país.

Con más frecuencia, la fuerza armada del campesinado se movilizó a favor del gobierno y se convirtió en el apoyo decisivo para mantener la continuidad y fortalecer la hegemonía de la coalición revolucionaria. Así sucedió frente a la rebelión delahuertista que liquidó a importantes líderes campesinos. Los campesinos armados también lucharon contra el movimiento cristero y otras asonadas. Finalmente, el apoyo armado al gobierno del general Cárdenas es uno de los factores que permiten explicar las decisiones radicales que ese régimen tomó no sólo en la cuestión de la tierra.

A pesar de estas acciones, la disposición de armas por los campesinos nunca fue vista con confianza por el Estado siendo percibida como amenaza por los grupos poderosos. Durante el período de inserción se realizaron sucesivos esfuerzos, con bastante éxito, por desarmar a los campesinos, lo que se convirtió en una fuente de tensión con el gobierno. El efecto de estas campañas y la modernización de un ejército profesional, a partir del levantamiento cristero, se tradujeron en una pérdida paulatina de poder militar para el campesinado. En la fase de alianza subordinada, que se inicia a partir del final del cardenismo, el campesino ya no representa una amenaza militar para el Estado. Ni siquiera cuenta con la capacidad de defensa frente a los grupos armados por los particulares, que junto con fuerzas públicas, concentrarán toda la capacidad de represión en los periodos posteriores. La pérdida de las armas dejó al campesinado en extremo vulnerable frente a la represión física, directa, que ganó importancia como forma de control.

La fase de inserción, entre 1920 y 1940 aproximadamente, se dio en el marco de un país cuya economía dependía básicamente de los productos primarios, extractivos y agropecuarios, que se exportaban, mientras que una proporción abrumadora de los productos manufacturados se importaba. En ese modelo, la participación del campesinado, después del reparto agrario, se concentraba básicamente en la producción de alimentos. Sólo de manera secundaria, y estadísticamente poco perceptible, producían bienes de exportación o materias primas, ramos que

acaparaba la empresa agrícola en proceso de modernización tecnológica. La producción empresarial, intensiva en el insumo de trabajo, dependía de la venta de fuerza de trabajo por el grupo campesino, que constituía una de las aportaciones más importantes de este grupo al proceso de acumulación. La crisis mundial de los treinta y su resolución en una economía de guerra, evidenció la vulnerabilidad de este modelo y creó los incentivos y condiciones para que se diera prioridad al proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones de bienes de consumo final.

La adopción del modelo industrialista cambió la posición del sector agropecuario, que fue subordinado al demandársele, como transferencia de capital, el financiamiento del desarrollo industrial. El capital transferido se originó en una exacción más intensa del campesinado, cuyo número crecía en términos absolutos. Los mecanismos de su explotación se multiplicaron. Se le demandó una producción más grande de materias primas, como el algodón y bienes exportables, al mismo tiempo que se conservaba su papel de abastecedor de alimentos a precios bajos para los centros urbanos en expansión acelerada. La mano de obra campesina no sólo se absorbió por las empresas agropecuarias nacionales, sino que amplió su mercado hacia fuera del país por el bracerismo y hacia los otros sectores de la economía nacional. La participación del campesinado se diversificó al mismo tiempo que se intensificaba su explotación. En ese marco se desarrolla el tercer período, el de alianza subordinada que puede situarse entre 1940 y 1965.⁶

La entrega de la tierra, que caracterizó al período previo, se suspendió y se inició un proceso de concentración relativa de la propiedad en favor de las empresas particulares. Las do-

⁶ Moisés González Navarro, *La Confederación Nacional Campesina*, México, Costa-Amic, 1968; Moisés González Navarro, *Raza y tierra, la guerra de castas y el henequén*, México, El Colegio de México, 1970; Francisco Gómez Jara, *El movimiento campesino en México*, México, Editorial Campesina, 1970; Elena Azaola y Esteban Krotz, *Los campesinos de la tierra de Zapata III; política y conflicto*, México, SEP-INHA, 1976; Clarence Senior, "Reforma agraria y democracia en la comarca lagunera", en *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. VIII, núm. 2, 1955; David Ronfelt, *Atencingo*, Stanford, Stanford University Press, 1973 (hay versión española del Fondo de Cultura Económica); Rubén Jaramillo y Froylán Manjarrez, *Rubén Jaramillo, autobiografía y asesinato*, México, Nuestro Tiempo 1967; Tomás Martínez, *El costo social de un éxito político, la política expansionista del estado mexicano en el agro lagunero*, Chapingo, Colegio de Posgraduados, 1980.

taciones que se hicieron, casi todas para apaciguar tensiones políticas, no alcanzaron la magnitud para contrarrestar esta tendencia y las proporciones entre las formas particulares y sociales de la propiedad ya no se alterarán en el futuro. Al suspenderse el proceso de redistribución, la estructura agraria se polarizará aceleradamente. El crecimiento demográfico del grupo usufructuario de la propiedad social, que se duplica en el lapso de 25 años, tuvo que absorberse en un territorio fijo. La tierra disponible por unidad productiva disminuyó y se reprodujo el minifundio, término que se usa con muchas reservas por sus connotaciones negativas, que no se justifican al analizar el comportamiento de la producción. La magnitud real de este proceso no tiene reflejo estadístico verosímil en virtud de que la legislación agraria estableció la herencia o transmisión no fragmentada de las parcelas ejidales. En la práctica esto no se cumplió pero tampoco se declaró. La herencia partió a las dotaciones ejidales y a partir de ello surgieron diversas formas de transmisión de las parcelas. La "ilegalidad" de estos procesos, inevitables frente al congelamiento del reparto, también favoreció, paradójicamente, la concentración limitada de la tierra ejidal en manos de campesinos ricos y con tendencias empresariales. Por el contrario, la propiedad particular capitalista, de circulación libre en el mercado, se concentró en manos de los empresarios más ricos. Este proceso fue favorecido, a partir de 1938, por la concesión de certificados de inafectabilidad, por los que el Estado garantizaba a los propietarios su excepción de las leyes agrarias con el propósito de estimular su producción. La estructura formal de la tenencia, a partir del ocultamiento en los extremos altos y bajos de la pirámide está mucho más polarizada de lo que estiman las de por sí severas mediciones estadísticas.

La concentración del capital fue mucho más intensa y acelerada que la de la tierra, por lo que la estructura de las unidades de producción conforme a los recursos productivos está mucho más concentrada que la distribución formal de la tierra. En las relaciones de producción hay un flujo entre tierras y capital, que no tiene medida estadística, que configura un patrón de concentración acentuado y creciente, que supera cualquiera de las mediciones disponibles y tal vez, imaginables. La renta de tierras ejidales, la venta de agua para riego, las concesiones forestales, las "asociaciones", permitieron a los empresarios usar del territorio de propiedad social. Por otro lado, la renta de maquinaria, el crédito usurero y el acaparamiento de

la producción, permitió que el capital participara con altísimas ganancias en la producción campesina.

El campesino, como clase, permaneció en la posición más baja y durante todo el período se distanció de otros grupos sociales que se fortalecían y crecían con la apropiación del excedente campesino y su transformación en capital. Pese a esta posición, la base territorial ganada previamente permitió la reproducción del grupo campesino aunque fuera a costa del incremento de su explotación y subordinación política. Aunque los campesinos aportaron mucha gente al proceso de urbanización acelerado, el número de gente sujeta a la misma relación de clase se incrementó notablemente a partir de una base territorial insuficiente y precaria. El tránsito de clase que muchos suponían inevitable, no alcanzó la magnitud suficiente para cambiar la posición del campesinado como la clase más numerosa.

En esta fase, la movilización campesina no intentará la modificación de la estructura de la sociedad, ni siquiera procurará el cambio de la posición del grupo dentro de la estructura existente, sino que negociará por la vía política la posibilidad de preservación y de reproducción social. Es una fase defensiva. El campesinado se encuentra aislado en su lucha de los otros grupos y está marginado de los proyectos ideológicos para la transformación de la sociedad. La idea de que el campesino estaba en claro e irreversible proceso de extinción permeaba los proyectos nacionales propuestos desde el poder o la oposición de cualquier signo. La subordinación efectiva del campesino se veía como una posición normal. El futuro del país, el único posible, se ligaba al "desarrollo", a la transformación fatal conforme al modelo de los países ricos e imperialistas. Se supuso que los campesinos que no tenían cómo hacerse oír, no tenían nada que decir.

La principal arena de la lucha campesina se dio en el ámbito de acción del Estado y en el marco de la CNC. La Confederación salió fortalecida por el reparto cardenista, del que había sido la única gestora. Contribuyó a esa fortaleza el reclutamiento forzoso: un ejidatario o un solicitante de tierra, por el solo hecho de serlo, se incorporaba automáticamente a sus filas. Adicionalmente y como sector agrario del partido oficial, actuaba como un aparato electoral en todos los niveles, desde el municipio hasta el congreso nacional. Sus cuadros locales y regionales eran premiados con puestos que se traducían en canonjías y privilegios pero que al mismo tiem-

po servían como eficaz mecanismo de subordinación y de control. Pero la fuente más importante de poder de la Confederación se derivaba del Estado, que le asignó una función administrativa exclusiva para el reparto de la tierra y más tarde para la recepción de créditos y otras inversiones derivadas de la acción pública. Como aparato de Estado, la dirección nacional de la Confederación era nombrada directamente por el presidente del país. En esas condiciones, la organización corporativa se convirtió en la arena y el cerco para la movilización campesina, en la medida que las acciones autónomas eran enfrentadas, con frecuencia creciente, por la represión gubernamental. Pocos conflictos rurales escapaban de la subordinación, manipulación y componenda que caracterizaba la acción de la Confederación. Entre ellos destacó el violento y cruel asesinato de Rubén Jaramillo en 1964. Con más frecuencia, los conflictos se disolvían sin solución en las antesalas de la CNC.

Cuando el reparto agrario se suspendió al entrar en contradicción con el programa de desarrollo, la CNC gestionó, como intermediaria exclusiva y poco eficaz, la entrega de elementos que permitieran la intensificación del uso del suelo ya entregado: crédito, maquinaria, acceso al mercado, etc. En esa gestión, la Confederación fue poco a poco subordinada por los aparatos "técnicos" del Estado. Los recursos sujetos a la gestión eran insuficientes y eran cada día más necesarios y urgentes para los campesinos, que tenían que incrementar su producción para enfrentarse a la creciente presión sobre la tierra y al deterioro de las relaciones de intercambio entre los productos agrícolas y los demás bienes y servicios. Por razones múltiples, la inversión de capital en las tierras de propiedad social en el campo dependió total y exclusivamente de los recursos del Estado. El manejo de la inversión pública, congruente con el modelo de desarrollo, otorgó al Estado funciones patronales directas respecto al campesinado. La CNC también fue gestora de la nueva relación, que se complementaba con la administración de la esperanza nunca satisfecha por la entrega de la tierra. En una compleja maraña de relaciones confusas y ambiguas con el Estado, se establecieron nuevas condiciones de subordinación política. Los campesinos votaron, respaldaron, agradecieron, solicitaron, esperaron y aplaudieron en tanto que podían aumentar su producción y vender más ampliamente su fuerza de trabajo.

La relación "patronal" del Estado con los campesinos, derivada del manejo centralizado de la reforma agraria y de la

inversión de capital en el campo, subordinado a un proceso de acumulación en el sector industrial, tuvo consecuencias complejas. Destaca entre ellas el papel de mediación que tomó el Estado respecto a las contradicciones entre los campesinos y las otras clases sociales. La lucha por la tierra no enfrentaba a los solicitantes con los latifundistas que la poseían, sino a los campesinos con el Estado, que regulaba la tenencia de la tierra y protegía al latifundio por razones de política económica. Las contradicciones en el proceso productivo y en el mercado de productos, también enfrentaban al campesino con el Estado que controlaba los factores críticos. El creciente papel del Estado en el campo, que regulaba la propiedad, invertía la mayor parte del capital fijo, controlaba los precios de los productos más importantes, otorgaba crédito y financiamiento, monopolizaba insumos y mercados y muchas acciones más, lo convirtió en mediador general y en contrincante obligado de todas las movilizaciones. Juez y parte, el Estado trató de absorber todos los conflictos y tensiones. El crecimiento del Estado se fundamentó, en buena medida, en su papel "patronal" en las relaciones de producción en el campo.

Cualquier demanda por parte de los campesinos los enfrentaba con el Estado y otorgaba a su lucha, independientemente de su contenido, un carácter político, que con frecuencia desataba la represión. Como contraparte, cualquier intento de organización podía ser manipulado, cooptado con propósitos políticos, y subordinado a un proyecto de desarrollo del capitalismo sin espacio para el campesinado. En ese marco, los campesinos optaron con frecuencia por la "desorganización", la apatía frente a los intentos manipuladores que tarde o temprano revertían en su contra. La "desorganización" como respuesta a las movilizaciones subordinadas, generadas desde arriba, permitía evitar el conflicto político con el Estado. Esta táctica informal y no planeada, una especie de resistencia civil espontánea, tuvo un precio elevado. Muchos de los mecanismos para la acción política creados previamente dejaron de funcionar. La cultura política en el campo se perdió. Otro efecto menor de la desorganización táctica fue que en el Estado y en las organizaciones políticas ganó fuerza la visión del campo como un universo anárquico, como un caos organizativo, que dio paso y soporte a las ideas de que en el campo no podrían surgir organizaciones autónomas y que toda movilización tendría que provocarse y dirigirse desde fuera. La "desorganización", frente a una política implantada desde fue-

ra y en contra de los intereses campesinos, es, a fin de cuentas, prueba de lo infundado de esas hipótesis. El campesinado sólo se desorganizó en una esfera en que estaba cercado y amenazado, mientras que conservó y fortaleció las organizaciones que hicieron posible su reproducción social.

La ampliación de la frontera agrícola en las tierras dotadas por el cardenismo, el uso más intenso del suelo y la venta más frecuente de trabajo campesino, generaron un crecimiento espectacular en la agricultura mexicana. Ésta cumplió satisfactoriamente con las funciones de producir divisas a través de la exportación, con la de abastecer de alimentos, materias primas y gente a la industria y los centros urbanos, todo a precios inferiores a los del mercado internacional. En esa expansión se sustentó el "milagro mexicano", el crecimiento del capitalismo a ritmos sensiblemente superiores a los del incremento de la población. Sin embargo, el crecimiento basado en el desarrollo industrial no se tradujo en una disminución absoluta de la población ocupada en la agricultura ni del campesinado. Pese al drenaje de gente para alimentar la expansión de otros sectores, la población campesina creció en términos absolutos. Formalmente, esto se expresó en el incremento de los campesinos sin tierra, a quienes las normas jurídicas conceden el derecho a la dotación territorial, hasta superar en número a quienes la poseían.

A partir de 1965, aunque evidentemente el proceso se presentó antes en algunas regiones y en otras lo hizo con más agudeza, la posibilidad de aumentar la producción agrícola y de vender más fuerza de trabajo, a partir de los recursos territoriales disponibles y de la demanda de mano de obra, se fue cerrando para los grupos campesinos. Consecuentemente, la capacidad de gestión de la confederación oficial y la acción del Estado como patrón, quedaron rezagadas frente a las demandas campesinas y no pudieron absorberlas. La burocratización, corrupción y la trabazón con los intereses de los grupos dominantes cerraban las posibilidades de gestión más allá de las severas limitaciones estructurales. La arena para la negociación política fue rebasada por las demandas campesinas. La demanda insatisfecha pero amortiguada por la redistribución de la tierra se convirtió en petición urgente que a veces se acompañaba de la acción en la forma de invasión de las grandes propiedades. La movilización campesina pasaba de la defensiva a la ofensiva.

El control de la confederación oficial fue insuficiente para

frenar la acción de los campesinos y se abrió la opción para la formación de nuevas centrales nacionales. Este intento de ruptura del monopolio organizativo en manos del gobierno ya se había presentado desde 1948, cuando se fundó la UGOCM, organización campesina del Partido Popular. En 1963 y con el auspicio del general Cárdenas surgió la Central Campesina Independiente, que en poco tiempo se escindió dando origen a la Confederación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Estas organizaciones que podían calificarse como de oposición pero ligadas a los grupos políticos nacionales, surgieron junto con otras que eran simples facciones de la confederación oficial que respondían a luchas internas dentro del aparato burocrático. Pero las grandes centrales nacionales de signo oficial o de oposición no pudieron formular programas agrarios alternativos y tampoco pudieron contener y encauzar al creciente movimiento campesino. Incluso surgieron brotes de lucha armada en regiones localizadas del país, que fueron extinguidos por la represión al quedar aislados de la movilización general. Ésta, en su primera etapa, no formuló ningún programa revolucionario, sino que se centró en la demanda legítima y consagrada legalmente por la tierra. Tampoco surgió una organización única, sino que se multiplicaron los movimientos locales autónomos. En la medida que la demanda central no podía concederse sin quebrar el modelo de desarrollo y el proceso de acumulación, la movilización campesina rebasó los cercos institucionales y tuvo un efecto disruptivo, de ahí el nombre que le di.⁷

La reacción del Estado frente a la movilización campesina ha sido irregular y confusa. Entre 1964 y 1970 se respondió con una reforma agraria ficticia. Formalmente, se entregó la

⁷ Evidentemente, los estudios y análisis para esta fase escasean. Cito algunos, que se complementan con la información periodística o documental dispersa, que no menciono. El proceso está abierto y la bibliografía también. Usé a Cynthia Hewitt de Alcántara, *La modernización de la agricultura mexicana*, México, Siglo XXI, 1984, 4ª ed.; Roger Bartra (comp.), *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Siglo XXI, 1982, 6ª ed.; Luisa Paré, *El proletariado agrícola en México*, México, Siglo XXI, 1982, 5ª ed.; Enrique Astorga Lira y Clarisa Hardy Raskovan, *Organización, lucha y dependencia económica, la unión de ejidos Emiliano Zapata*, México, CIDER-Nueva Imagen, 1978; Luis Suárez, *Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza*, México, Roca, 1976; Arturo Warman, "La colectivización en el campo, una crítica", en *Cuadernos Políticos*, núm. 11, 1977; Armando Bartra, *Apuntes sobre la cuestión campesina*, Mérida, Universidad de Yucatán, Centro de Investigaciones Regionales, 1978.

tierra a un ritmo espectacular, casi igual al del período cardenista. Pero fue una entrega de papel, un juego entre dos burocracias: la de la CNC y la del Departamento Agrario, que intercambiaron papeles entre sí. Mucha de la tierra repartida en este juego administrativo nunca se entregó a los campesinos. La que se entregó no servía: era tierra yerma, improductiva y a veces topográficamente inexistente. La superficie cultivada del país disminuyó en casi dos millones de hectáreas durante ese período en que aparentemente las tierras se estaban entregando a los campesinos. Congruentemente, la represión se intensificó durante esos años.

Desde 1970, hasta ahora, la demanda campesina no se atendió con tierra sino con dinero, con inversión pública. Hasta 1970, el gasto público dedicado al sector agropecuario representaba alrededor de 10% del total. De él, más de las tres cuartas partes se dedicaban a la construcción y operación de las grandes obras de irrigación. A partir de 1970, la proporción de una inversión creciente que se dedicó al sector agropecuario creció hasta alcanzar el 20% del total. Aunque la gran irrigación continuó como el renglón más importante, su participación en el total disminuyó en términos relativos. Esto permitió que se emprendieran programas amplios destinados específicamente a los campesinos como beneficiarios. La magnitud cuantitativa es, en buena medida, ilusoria. Más de la mitad de la inversión se capturó por la burocracia, que al parecer ha crecido más rápidamente que la inversión. Los programas tradicionales en beneficio de los productores capitalistas, también crecieron más aceleradamente que el total. Los programas destinados a los campesinos, pese a ser numerosos, fueron y son modestos en términos de inversión real y están básicamente dirigidos a transformar la producción campesina en empresarial. En ese marco se ubican los esfuerzos por reorganizar colectivamente a los ejidos con terrenos de un alto potencial productivo y, más recientemente, por promover la asociación entre el capital y los ejidatarios sancionada por la Ley de Fomento Agropecuario. Aunque el efecto de esa derrama de capital es complejo y su análisis no se ha llevado a cabo, parece claro que no respondió a las demandas campesinas y, por ello, no pudo frenar las movilizaciones autónomas, aunque tal vez contribuyera a generarlas en algunas zonas del país.

En 1976, el Estado intentó afectar la propiedad privada latifundista de las zonas irrigadas más ricas del país como res-

puesta a las grandes movilizaciones campesinas. El episodio, por complejas razones, tuvo consecuencias intrascendentes en el aspecto agrario pero centrales en el terreno político. El triunfo correspondió a los propietarios, que de hecho impusieron su programa agrario para la suspensión del reparto. El Estado, incapaz de apoyar la movilización campesina pero deseoso de subordinarla, quedó aislado frente al capital y negoció en desventaja. A corto plazo, se cerró la posibilidad de una respuesta agraria a la demanda campesina.

A partir de 1970, se hizo evidente que tras la movilización campesina alentaba no sólo una demanda de clase sino que también se expresaba una profunda crisis estructural. El sustento agrícola del "milagro mexicano" se suspendió y el crecimiento del valor de la producción agropecuaria descendió por debajo del ritmo de incremento de la población. Las exportaciones y la producción de mercancías agropecuarias para los mercados preferenciales siguió creciendo, sin embargo, a sus tasas históricas. En cambio, los alimentos y productos controlados por precios oficiales decrecieron en su producción no sólo en términos relativos sino absolutos y tuvieron que compensarse con importaciones. Tras este efecto general se expresaba que la explotación del campesino había alcanzado los límites de la irracionalidad y que los productores se sustraían del mercado en el que se cristalizaba la exacción; trataban de limitar su producción para adecuarla a su propia demanda directa y el pago de las deudas adquiridas en el proceso de producción. La crisis estructural puede expresarse de otra forma: la transferencia de capital del sector agropecuario se ha limitado y resulta insuficiente para mantener el dinamismo del sistema. El descubrimiento de una nueva fuente de transferencia de capital, la renta petrolera, permitió la continuidad y posiblemente la aceleración del modelo de acumulación, pero el problema estructural no está resuelto. Por un lado amenaza al sistema en su conjunto en la medida en que la importación de alimentos exporta proporciones importantes y crecientes de la renta petrolera. Por el otro, la amenaza a la supervivencia y reproducción de la clase mayoritaria, el campesinado, se ha acentuado. En esas condiciones la fase de disrupción evoluciona rápidamente.

Su solución permanece abierta y es todavía un período inconcluso. La movilización campesina no se ha frenado y, aunque dispersa, se sigue reproduciendo. Los primeros esfuerzos destinados a coordinar las movilizaciones autónomas ya se han

iniciado aunque es prematuro suponer sus posibilidades de éxito. Aun así, puede hablarse de un empate inestable. Los movimientos, con demandas muy específicas y concretas que dejan muy poco espacio para la negociación, han rebasado los marcos institucionales que antes pudieron contenerlos. Las nuevas arenas políticas no han aparecido todavía. Usando un símil inexacto pero ilustrativo, los movimientos campesinos tienen el efecto de guerrillas desarmadas que a través de acciones políticas legales, que no pueden ser resueltas por el Estado, desorganizan y debilitan el férreo control político en el campo. Son movimientos muy numerosos, suman millares en los últimos años, dispersos, heterogéneos y carentes de organizaciones nacionales que los representen y los apoyen, pero que ejercen un fuerte impacto sobre el sistema político.

La combinación de una crisis estructural, manifiesta en la insuficiencia de la producción agropecuaria, y una crisis política, que se expresa en el desgaste de los mecanismos de control, coloca a la acción campesina en una nueva dimensión que no ha sido bien comprendida. En la medida que el proceso es dinámico y no está todavía maduro, no puede predecirse su desarrollo. Aun así, hay un hecho incuestionable: la movilización campesina ya ha adquirido una nueva dimensión en la política nacional, que merece la más grande atención.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboites, Luis, *Esclavos, socialistas y ejidatarios*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1980 (Reportes de investigación núm. 40).
- Aguilar Camín, Héctor *La frontera nómada*, México, Siglo XXI, 1984, 4ª ed.
- Alavi, Hamza, *Teoría de la revolución campesina*, México, Comité de Publicaciones de la ENAH, 1974.
- Astorga Lira, Enrique y Clarisa Hardy Raskovan, *Organización, lucha y dependencia económica, la unión de ejidos Emiliano Zapata*, México, CIDER-Nueva Imagen, 1978.
- Azaola, Elena y Esteban Krotz, *Los campesinos de la tierra de Zapata III; política y conflicto*, México, SEP-INHA, 1976.
- Bartra, Armando, *Apuntes sobre la cuestión campesina*, Mérida, Universidad de Yucatán, Centro de Investigaciones Regionales, 1978.
- Bartra, Roger (comp.), *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Siglo XXI, 1982, 6ª ed.

- Córdova, Arnaldo, *La ideología de la revolución mexicana*, México, ERA, 1973.
- Díaz, José y Román Rodríguez, *El movimiento cristero*, México, CIESAH-Nueva Imagen, 1979.
- Falcón, Romana, *El agrarismo en Veracruz, la etapa radical (1928-1935)*, México, El Colegio de México, 1977.
- Fowler Salamini, Heather, *Agrarian radicalism in Veracruz, (1920-1938*, Lincoln, University of Nebraska Press, 1978 [*Movilización campesina en Veracruz, 1920-1938*, México, Siglo XXI, 1979].
- Franz, David A., *Bullets and bolsheviks; a history of the revolution and reform in Yucatan (1910-1924)*, tesis de doctorado, University of New Mexico, 1973.
- Friedrich, Paul, *Agrarian revolt in a Mexican village*, New Jersey, Prentice Hall, 1970.
- Gilly, Adolfo, *La revolución interrumpida*, México, El Caballito, 1976.
- Gómez Jara, Francisco, *El movimiento campesino en México*, México, Editorial Campesina, 1970.
- González, Luis, *Pueblo en vilo; micro-historia de San José de Gracia*, México, El Colegio de México, 1968.
- González Navarro, Moisés, *La Confederación Nacional Campesina*, México, Costa-Amic, 1968.
- González Navarro, Moisés, *Raza y tierra, la guerra de castas y el henequén*, México, El Colegio de México, 1970.
- Helguera, Laura, Ramón Ramírez y Sinécio López, *Los campesinos de la tierra de Zapata I; adaptación, cambio y rebelión*, México, SEP-INAH, 1974.
- Hewitt de Alcántara, Cynthia, *La modernización de la agricultura mexicana*, México, Siglo XXI, 1984, 4ª ed.
- Hobsbawm, Eric, *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, 1968.
- Huizer, Gerrit, *La lucha campesina en México*, México, Centro de Investigaciones Agrarias, 1979.
- Jaramillo, Rubén y Froylán Manjarrez, *Rubén Jaramillo, autobiografía y asesinato*, México, Nuestro Tiempo, 1967.
- Katz, Federico, "Pancho Villa, peasant movement and agrarian reform in northern Mexico", en David A. Brading (comp.), *Caudillo and peasant in the Mexican revolution*, Cambridge, University Press, 1980.
- Landsberger, Henry (comp.), *Latin American peasant movements*, Ithaca, Cornell University Press, 1969.
- Martínez, Tomás, *El costo social de un éxito político, la política expansionista del Estado mexicano en el agro lagunero*, Chapingo, Colegio de Posgraduados, 1980.
- Meyer, Jean, *La cristiada*, 3 vols., México, Siglo XXI, 1973.
- Moore, Barrington, *Social origins of dictatorship and democracy*, Boston, Beacon Press, 1966.

- Paoli, Francisco y Enrique Montalvo, *El socialismo olvidado de Yucatán*, México, Siglo XXI, 1980, 2ª ed.
- Paré Luisa, *El proletariado agrícola en México*, México, Siglo XXI, 1982, 5ª ed.
- Ronfelt, David, *Atencingo*, Stanford, Stanford University Press, 1973.
- Senior, Clarence, "Reforma agraria y democracia en la comarca lagunera", en *Problemas Agrícolas e Industriales en México*, vol. III, núm. 2.
- Stavenhagen, Rodolfo (comp.), *Agrarian problems and peasant movements in Latin America*, Nueva York, Anchor Books, 1970.
- Suárez, Luis, *Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza*, México, Roca, 1976.
- Warman, Arturo, *Ensayos sobre el campesinado en México*, México, Nueva Imagen, 1980.
- Warman, Arturo, "La colectivización en el campo, una crítica", en *Cuadernos Políticos*, núm. 11, México, 1977.
- Warman, Arturo, *Y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el Estado nacional*, México, Ed. Casa Chata, 1976.
- Wolf, Eric R., *Peasant wars of the twentieth century*, Nueva York, Harper & Row, 1969 [*Las luchas campesinas del siglo xx*, México, Siglo XXI, 1982, 7ª ed.]
- Womack, John, *Zapata y la revolución mexicana*, México, Siglo XXI, 1982, 12ª ed.

HISTORIA POLÍTICA DE LOS CAMPESINOS CUBANOS

ADELFO MARTÍN BARRIOS

El campesinado cubano tiene una hermosa tradición de lucha en la que el largo batallar por el derecho a cultivar la tierra y por una vida digna y decorosa, ha estado estrechamente vinculado a los combates librados por todo nuestro pueblo por la conquista de la plena independencia y soberanía de la patria, alcanzada definitivamente el primero de enero de 1959.

Como reiteradamente han expuesto connotados historiadores, para juzgar un hecho histórico se necesita conocer sus antecedentes, por lo que antes de entrar en el análisis de la participación del campesinado en el proceso político social de nuestro país, consideramos útil ofrecer al lector, en apretada síntesis, una reseña de las características principales del régimen latifundiarío de tenencia de la tierra implantado en Cuba por los colonizadores españoles, y el surgimiento del campesinado como sector social primero, y más tarde, con las peculiaridades que le son características, como clase social propiamente dicha.

Es conocido que en Cuba, cuando se inicia la colonización española, imperaba el régimen de la comunidad primitiva, por lo que la tierra y los restantes medios de producción, por cierto muy rudimentarios, con que contaba la población aborigen, eran de propiedad colectiva. Fueron los colonizadores los que introdujeron en Cuba el concepto y el régimen de propiedad privada.

Es oportuno reseñar cómo los emigrantes españoles que junto a Diego Velázquez realizaron la conquista y colonización de la isla a comienzos del siglo xvi, venían poseídos por la fiebre del oro, por lo que dedicaron a la búsqueda y explotación del precioso metal todos sus esfuerzos. Así, la agricultura quedó relegada en los primeros años de la conquista a un plano secundario.

I. ANTECEDENTES

La colonización y los repartos de tierra. Sus modalidades en Cuba

Es oportuno aclarar, o reiterar, puesto que es cosa conocida, que todas las tierras descubiertas en las Indias Occidentales —América española— fueron consideradas como pertenecientes a la Corona española. Eran “tierras realengas”, propiedad del rey, porque únicamente éste y las personas directamente autorizadas por él, que lo fueron primero los jefes de expediciones y más tarde los virreyes, estaban facultados para otorgar “mercedes” y hacer repartos de tierra. No obstante estas regulaciones, cabe señalar cómo en Cuba, mucho antes de las facultades otorgadas por las ordenanzas del oidor Alonso de Cáceres en 1574, ya desde 1536 los cabildos mercedaron y entregaron tierras.

Una reseña que describe las modalidades predominantes que caracterizaron los repartos de tierra en Cuba se hace tarea difícil, por la escasez de documentos oficiales de la época. No obstante, las mismas podrían sintetizarse en las siguientes:

Tierras comunales y de propios: eran las que se mantenían indivisas como patrimonio de las villas. Las primeras, como su nombre lo indica, eran tierras dedicadas al disfrute en común de todos los vecinos y consistían fundamentalmente en prados para pastar el ganado y bosques para la obtención de leña y madera de construcción. Las de propios, eran tierras que debían trabajar todos los vecinos, y cuyos frutos se destinaban a nutrir los fondos del consejo.

Peonías y caballerías: eran mercedes de tierra que se otorgaban, las primeras a peones y plebeyos y las segundas a caballeros. Este sistema de repartos de tierra, asentado en categorías socio-militares de la época, no parece haber tenido en Cuba una mayor connotación. No obstante, la caballería —equivalente a 13.43 hectáreas o 134 302 metros cuadrados— ha perdurado hasta nuestros días, como unidad de medida agraria.

Hatos y corrales: eran grandes haciendas medidas en forma circular. Los hatos, destinados al ganado mayor (vacuno fundamentalmente) tenían un radio de dos leguas (8 484 metros), y una superficie de 22 599 hectáreas. Los corrales, dedicados al ganado menor, principalmente cerdos, tenían un radio de una legua y una superficie de 5 557 hectáreas.

Cabe señalar el hecho de que estas medidas eran teóricas, pues dadas las circunstancias de la época y la abundancia de tierra agrícola en el país, especialmente en la primera etapa de la colonización, las mediciones se hacían al arbitrio de los concesionarios.

Tierras de composición: eran aquellas que los colonizadores ocupaban sin tener ninguna autorización ni título legal que los amparase. La real cédula del 16 de julio de 1819, legalizó definitivamente la propiedad de estas tierras usurpadas.

Sitios y estancias: esta modalidad de reparto, no obstante su generalización en todo el país, no ha sido suficientemente estudiada, por lo que no encontramos referencias que precisen su extensión. Sí está definido que eran pequeñas parcelas (en el marco de la época) dedicadas fundamentalmente al cultivo de frutos menores y en algunos casos a la crianza de ganado en pequeña escala. Para Julio Le Riverend, en relación con los sitios, las estancias, "desde el punto de vista de la capacidad de las tierras, suponen una mayor concentración de la propiedad y posiblemente prácticas más atrasadas".¹

De las diferentes modalidades aquí señaladas sólo vamos a detenernos en el análisis de los hatos y corrales y de los sitios y estancias, por considerar que los primeros constituyen la forma de tenencia de la tierra de mayor preponderancia y que más influyó en el régimen de propiedad agraria imperante en la etapa colonial, constituyendo el punto de partida de la propiedad latifundiaria y de la formación de la oligarquía burgués-terrateniente, y los segundos —los sitios y estancias— por constituir la raíz primera de la pequeña propiedad agraria y, por tanto, punto de partida para la formación del campesinado como clase social.

Los hatos y corrales, otorgados como mercedes por los monarcas españoles como recompensa a los servicios prestados por sus súbditos y también a partir de 1536, como ya se apuntó, por los cabildos, es lógico que estuvieran, en su inmensa mayoría, en manos de la más alta aristocracia de la época, las gentes de mayor poderío económico y de más influencia en las esferas de gobierno. Algunos de sus propietarios jamás residieron en el fundo.

Por los estudios realizados, se hace evidente que durante todo el siglo xvi y primeros años del xvii estas grandes hacien-

¹ *Historia económica de Cuba*, Instituto Cubano del Libro, 1974, 4ª ed., p. 311.

das estuvieron dedicadas fundamentalmente a la crianza de ganado vacuno. La ganadería extensiva era entonces una fuente de ingresos estable y poco riesgosa, en la que, además, no era necesaria mucha empleomanía. Dos o tres esclavos bastaban para atender una hacienda ganadera.

Se explica, pues, que los dueños de hatos y corrales no sintieran ningún interés en fomentar la producción agrícola, riesgosa y con un mercado mucho más limitado.

Los hatos y corrales no sólo tuvieron trascendencia en la problemática agraria del país por lo que ellos representaron como obstáculo para el desarrollo y diversificación de la agricultura, sino también porque, con su peculiar forma circular, se convirtieron en fuente de interminables litigios por la posesión de la tierra. Para una mejor comprensión de la naturaleza de los problemas creados en este orden, procedemos a agruparlos en dos aspectos: el primero concierne a los pleitos surgidos entre los dueños y herederos, y el segundo, a los provocados por la posesión de las tierras marginales —tierras realengas— que quedaban como sobrantes al practicarse la delimitación de varias haciendas. En el primer caso, al hecho de que las circunferencias en que estaban enmarcadas estas haciendas con frecuencia se superponían unas a otras en sus linderos, se sumaba el agravante de que, por su gran extensión, en las circunstancias de la época, se hacía materialmente imposible cercarlas y amojonarlas correctamente, por lo que generalmente se delimitaban por puntos naturales de referencia: ríos, arroyos, grandes árboles, etc. Con el deterioro de estos puntos de referencia, y en muchos casos debido a su abolición intencional, los linderos quedaban al libre albedrío de quien tuviera mayor poder e influencia.

En lo que respecta a las tierras realengas, el problema se presentaba aún más complejo. Por un lado, trataban de apoderarse de ellas los usufructuarios de las haciendas colindantes y los personajes influyentes interesados en fomentar nuevos cultivos o crianzas, y por el otro, afluían a ellas campesinos pobres, en la mayoría de los casos desplazados de sus sitios y estancias por el auge de la producción cañera y ganadera.

Estos últimos ocupantes de las tierras realengas, a quienes se les conoció como “realenguistas” y “precaristas”, habrían de jugar posteriormente en la república burguesa, junto a los ocupantes de las haciendas comuneras, un destacado papel en las luchas del campesinado cubano, razón por la cual habremos de referirnos a ellos más adelante.

En lo que respecta a los sitios y estancias es obvio que éstos, en su etapa inicial, fueron fomentados por los emigrantes de menos abolengo. Dedicados primero a una producción de subsistencia, en la medida en que crecía la población de las villas y comenzó a desarrollarse el sector de los comerciantes, los sitios y estancias aumentaron su importancia como fuente abastecedora de productos básicos, no ya solamente para la población establecida, sino también para la tripulación de la flota y transeúntes que de regreso a la "madre patria" se veían obligados a realizar en La Habana una larga estadía.

Fueron estas circunstancias las que motivaron, en 1574, la promulgación de las ordenanzas municipales de Alonso de Cáceres, por las cuales se facultó a los cabildos para fomentar sitios y estancias de cultivos en las tierras ya mercedadas para hatos y corrales.

Sobre el origen de las vegas y las haciendas comuneras

Esta exposición del origen de la tierra en Cuba quedaría inconclusa si en ella no incluyéramos, aunque tan sólo sea una breve referencia, a las "vegas" y las haciendas comuneras. Si bien éstas no aparecen entre las diferentes modalidades de tenencia instrumentadas por los colonizadores, razón por la cual no las incluimos en la relación que antecede, es evidente, como se verá más adelante, que ambas tuvieron una connotada repercusión en la problemática agraria del país, y en el desarrollo socioeconómico del campesinado. Las "vegas", nombre otorgado a las parcelas dedicadas al cultivo del tabaco, al igual que los sitios y estancias, nacieron en Cuba fomentadas por los emigrantes españoles más pobres, con la particularidad de que en este cultivo serían predominantes los "isleños", nativos de las Islas Canarias.

Las vegas, aunque como sucesoras de los "conucos" indígenas dedicados al cultivo de la aromática hoja es admisible que surgieran en Cuba desde los primeros años de la colonización, no es hasta la segunda mitad del siglo xvi que se registra su existencia ya con fines comerciales. Por sus características, que hacen del tabaco una planta exigente en cuanto a las condiciones de clima y suelo, y de esmerada atención en su cultivo, las vegas se originaron en las márgenes de los ríos, atendidas por el veguero y su familia, sin la participación del trabajo esclavo.

Por su cuenta y riesgo primero, y con la autorización de los cabildos después, el tabaco, que al decir de Fernando Ortiz aparece en la historia legislativa de la colonia "por las prohibiciones de que fue objeto y no como el azúcar, por los favores que se le brindaron",² llegó a ser en el siglo xvii y parte del xviii el ramo más productivo de la economía cubana de exportación.

Si bien al tabaco le correspondió jugar este importante papel en el desarrollo económico del país bajo el régimen colonial —y aún hoy continúa siendo un importante renglón de nuestra agricultura— lo que nos interesa destacar aquí es cómo sus productores, los vegueros, por su cuantía y por sus características, constituyen, junto a los sitieros y estancieros, un elemento decisivo en la formación del campesinado cubano.

En lo que respecta a las haciendas comuneras, éstas tuvieron su origen en los hatos y corrales y alcanzaron mayor relevancia en la región oriental del país, incluyendo en ésta la provincia de Camagüey.

Ocurrió que, mientras en el occidente del país la diversificación agrícola, especialmente a partir del auge de la producción cañera en el siglo xviii, dio al traste con la ganadería extensiva y provocó una fragmentación y redistribución de la propiedad agraria, en la región oriental, marginada de este desarrollo, continuó predominando la crianza extensiva del ganado y una agricultura de subsistencia. Estas circunstancias propiciaron la supervivencia de las antiguas haciendas como un todo. La ganadería y la agricultura con las características señaladas no necesitaban de la limitación de fundos.

Así, las tierras se traspasaban de padres a hijos y de hijos a nietos en forma natural, y para cuantificar la parte que a cada uno le pertenecía se crearon los "pesos de posesión", que otorgaban a los múltiples herederos el derecho al disfrute de la hacienda. El ganado se diferenciaba mediante hierros y marcas, pero la tierra permanecía en común: de aquí el nombre de hacienda comunera.

Como es lógico deducir, con el decursar de varias generaciones, en una hacienda había centenares de herederos condueños de la misma. Muchos de estos herederos carecían de documentos legales que los acreditaran como tales. Otros, aun teniendo "legalizados" los pesos de posesión, se encontraban con que

² *Contrapunteo del tabaco y el azúcar*, Dirección de Publicaciones, Universidad Central de Las Villas, 1963, p. 459.

la tierra físicamente no existía. Lo engorroso y dilatado de los procesos judiciales para fragmentar estas haciendas —más el escaso desarrollo ya apuntado— hizo que ellas supervivieran hasta los años iniciales de la época republicana.

La importancia que revisten las haciendas comuneras para el análisis de la temática campesina, radica en las prolongadas luchas libradas por sus ocupantes, especialmente a raíz de la instauración de la seudorrepública, contra los latifundistas criollos y las compañías imperialistas yanquis, las que amparadas en la fuerza de su imperio, culminaron apoderándose de sus tierras y desalojando de ellas a sus legítimos dueños.

Cañeros y caficultores

Con el desarrollo de la producción cañera ya con fines industriales en los años finales del siglo xvii y comienzos del xviii surge una nueva modalidad en el uso, y en cierta medida, en la tenencia de la tierra, y con ellas, nuevos elementos en las relaciones de producción.

El desarrollo cañero, que reclamaba para sí las mejores tierras y de más fácil acceso a las vías de comunicación, se convirtió en el principal enemigo de sitieros y estancieros y particularmente de los vegueros. Especialmente en la provincia de La Habana, millares de vegueros tuvieron que ceder sus tierras, desplazándose hacia la región de Pinar del Río.

En esta época, dada la escasa capacidad de molida de los ingenios existentes, quienes pretendían incrementar el cultivo de la caña, para garantizar su procesamiento se veían obligados a afrontar también la construcción de la fábrica, y como quiera que esto representaba una fuerte inversión, solamente podían hacerlo quienes dispusieran de suficiente capital.³

El nuevo sector de productores que surgía en el país tenía determinadas características que lo diferenciaban sustancialmente del sitiero y del veguero. La principal de ellas lo era el empleo del trabajo esclavo. Fue la industria cañera la principal impulsora y sostenedora de la esclavitud en nuestro país.

³ Es conocido ya desde finales del siglo xvii cómo un grupo cada vez más numeroso de colonizadores solicitaba préstamos para fomentar o ampliar sus ingenios. A manera de ejemplo puede citarse el préstamo de 40 mil ducados concedidos por la Corona española a 17 propietarios de trapiches, operación que consta en las actas del Cabildo Habanero de fecha 3 de febrero de 1601, p. 441.

Con el advenimiento de este sector, nació en nuestros campos una abigarrada capa social, burgués-terrateniente-esclavista, capa esta que con el decursar del tiempo, al cesar la esclavitud como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas, se convertiría en el núcleo central de clase burguesa terrateniente.

El colono, el campesino cañero propiamente dicho, que al igual que el sitiero y el veguero cultiva la tierra con su fuerza de trabajo y la ayuda familiar, usando sólo ocasionalmente el trabajo asalariado, no haría su aparición en este sector hasta el último tercio del siglo xix, cuando la abolición de la esclavitud y la especialización motivada por el desarrollo técnico obligaron a una separación de la producción agrícola de la fase industrial.

En lo concerniente al cultivo del café, cuyo auge inicial data de los años finales del siglo xviii y primera década del xix, cabe señalar cómo, al igual que la caña, este rubro productivo nació también sobre la base del colono esclavista. Es la década de los sesenta del siglo xix, con la baja registrada en las exportaciones, cuando su cultivo decae en las tierras llanas y se afianza más en las regiones montañosas, en que comienzan a participar en él los pequeños colonos, bien como propietarios, bien como arrendatarios y aparceros de los grandes productores.

Quedaban así definidos en el transcurso del siglo xix, atendiendo al cultivo predominante, los cuatro grandes sectores que habrían de tipificar hasta nuestros días al campesinado cubano: productores de frutos menores, vegueros o tabacaleros, cañeros y caficultores. No incluimos aquí a los campesinos ganaderos, puesto que la ganadería ha sido siempre en el sector campesino —entiéndase pequeño agricultor— con excepción de la provincia de Camagüey y algunas zonas muy específicas y de poca magnitud en el resto del país, una producción complementaria de la producción agrícola.

La rebelión de los vegueros

Un acontecimiento de singular importancia en la historia del campesinado cubano, la constituye, sin lugar a dudas, la protesta y movilización protagonizada por los productores de tabaco en el lustro comprendido entre 1717-1723, hecho registrado en la historia como “La Protesta (o Rebelión) de los Vegueros”.

La causa que originó esta rebelión fue la promulgación por Felipe V de la Real Cédula fechada el 11 de abril de 1717 mediante la cual se establecía en Cuba el Estanco del Tabaco.

Como se ha señalado, el tabaco era entonces el principal renglón de exportación de la isla y, por lo tanto, constituía una importante fuente de ingresos para la metrópoli.

En esencia, el estanco consistía en que todo el tabaco cosechado en el país debía ser adquirido por el gobierno de la metrópoli a través de la Factoría General creada al efecto. Se establecían precios límites, y el tabaco excedente, no comprado por la Factoría, tampoco podía ser adquirido por ningún otro comprador.

Medida de tal naturaleza no sólo afectaba a los vegueros, sino también a los comerciantes, al clero —que mediante el cobro de los “diezmos” recibía de los vegueros importantes contribuciones—, y a muchos funcionarios del gobierno vinculados a la comercialización de este producto.

La protesta de los vegueros, estimulados por los factores mencionados, no se hizo esperar. El 21 de agosto de 1717 más de 500 productores se amotinaron en las cercanías de La Habana, ocuparon prácticamente la ciudad, bloquearon las principales vías de acceso de víveres a las tropas del ejército y rodearon el Castillo de la Fuerza, donde radicaba el gobernador, don Vicente Raja.

Ante la magnitud de la revuelta y el evidente apoyo popular a las demandas de los vegueros, el gobernador de la isla optó por renunciar al cargo junto a los principales regentes de la Factoría.

El 23 de agosto de 1718 tomaba posesión como nuevo gobernador de la isla Gregorio Guazo Calderón.

Si bien el nuevo gobernador, revestido de poderes especiales y contando con un refuerzo de 1 500 soldados bien equipados, pudo momentáneamente aplacar a los vegueros, ya en 1720 se vio obligado, para evitar un nuevo conflicto, a permitir que éstos pudieran vender libremente los sobrantes de sus cosechas, no adquiridos por la Factoría.

No tardó, sin embargo, en generalizarse todo un abusivo sistema de rejuegos y maniobras patrocinado por los propios regentes de la Factoría que esquilma a los cosecheros y provocaba su indignación.

Entre otras, consistían estas maniobras, en comprar el tabaco a crédito, alegando la carencia de fondos de la Factoría. Como el pago se demoraba varios meses, los vegueros pobres

tenían que canjear los certificados de compra en los comercios, con los consiguientes descuentos. Por otro lado, los comerciantes, en contubernio con los funcionarios del gobierno, se aprovechaban de esta situación para comprar tabaco por debajo de su precio y después revenderlo a la Factoría a los precios oficiales.

Exasperados los vegueros por su precaria situación, decidieron apelar a medidas que obligaran a las autoridades a prestar atención a sus demandas. Para ello adoptaron la decisión de suprimir la siembra de tabaco por dos años. Como quiera que no todos los productores se sumaron a esta decisión —especialmente los más ricos, que en contubernio con los comerciantes se beneficiaban de la situación imperante—, decidieron los cabecillas del movimiento proceder a destruir las siembras de los disidentes.

La situación se tornó preocupante para las autoridades; el movimiento iniciado pronto se extendió a la totalidad de las zonas tabacaleras que bordeaban La Habana (Guanabacoa, Santiago de las Vegas y otros). Los cosecheros amenazaban con destruir las siembras en 20 leguas a la redonda.

Temeroso Guazo Calderón de que los acontecimientos pudieran desembocar en una situación similar a la de 1717, decidió actuar con toda energía. Informado de que varios cientos de vegueros se concentraban en el poblado de Santiago de las Vegas para marchar sobre La Habana, despachó contra ellos un fuerte contingente de tropas. Al amanecer del día 20 de febrero, los vegueros fueron interceptados por el ejército. Tomados de improviso por fuerzas regulares bien armadas, las poco aguerridas huestes campesinas fueron rápidamente diezmadas. En el irregular combate, un veguero resultó muerto, varios fueron heridos y once fueron hechos prisioneros.

Soberbio y prepotente, Guazo Calderón, sin previo juicio, ordenó la ejecución de los prisioneros. El 23 de febrero de 1723, los cadáveres de los once infelices vegueros aparecieron colgados en los árboles que bordeaban el camino de Jesús del Monte, donde, para “dar un escarmiento”, permanecieron insepultos durante tres días.

La sublevación de los vegueros constituye una de las más importantes manifestaciones de la lucha que habría de desarrollarse entre el capital comercial español y los productores criollos. Si bien sus protagonistas eran todavía españoles, sus intereses como productores ya empezaban a chocar con los de la metrópoli; ellos iniciaron el camino por donde habrían

de transitar los “naturales de la tierra” y los “criollos” que 150 años más tarde, ya convertidos en cubanos, empuñarían las armas para luchar por la independencia de Cuba.

Cabe señalar también cómo décadas después, en 1762, cuando la toma de La Habana por los ingleses, fueron los criollos, y en buena proporción campesinos, capitaneados por Pepe Antonio, regidor de La Villa de Guanabacoa, los que con mayor coraje se enfrentaron a los invasores.

Surgimiento del régimen de la aparcería y los arrendamientos

Si bien el pequeño agricultor, especialmente aparcerero y arrendatario, es una prolongación del régimen de la servidumbre feudal, el cual surge como resultado de la descomposición y evolución de la sociedad esclavista, en Cuba, como consecuencia de la alteración provocada en el desarrollo social por la conquista y colonización española, el pequeño agricultor surge en pleno auge de la sociedad esclavista.

El régimen de la esclavitud implantado en Cuba no fue un régimen esclavista “puro”, sino que el mismo estuvo permeado por rasgos y mecanismos propios de la sociedad feudal imperante a la sazón en la metrópoli. No surgió en nuestro caso el pequeño agricultor como una prolongación del esclavo transformado en siervo, sino que simultáneamente con la plantación explotada sobre la base de la mano de obra esclava, surgió la pequeña parcela cultivada por el agricultor con la ayuda de su fuerza de trabajo familiar.

Aunque todo parece indicar que hubo una primera etapa en la que predominó —en el sector campesino propiamente dicho— el pequeño agricultor independiente (sitiero, estanciero y más tarde el veguero), es incuestionable que desde época muy temprana hubo también quienes, para poder cultivar un pedazo de tierra, tuvieron que aceptar la entrega de una parte de su cosecha, a los dueños o usufructuarios que ya la poseían, convirtiéndose en aparceros.

Si bien el sector de los campesinos independientes, o semi-independientes —puesto que en todos los casos estaban sujetos al pago de censos, impuestos y diezmos— disfrutó, al amparo de las ya mencionadas Ordenanzas de Cáceres, de una etapa de cierta garantía en la explotación de sus parcelas, al promulgarse la Real Cédula del 16 de julio de 1819, millares de ellos pasaron a engrosar las filas de los aparceros y arrendatarios.

La mencionada Real Cédula venía a satisfacer la exigencia de la oligarquía burguesa-terrateniente, aliada natural del colonialismo, que reclamaba nuevas tierras para el incremento de sus plantaciones cañeras. No obstante que el decreto orgánico de fecha 19 de julio del propio año, complementario de la mencionada Real Cédula, establecía en su artículo primero que se respetaría como legítimo título de dominio toda concesión o merced de tierra conferida por cualquier ayuntamiento de la isla hasta el año de 1729, y en el artículo segundo ordenaba que, cuando faltase el título de la concesión o merced, debía admitirse y reconocerse como tal la posesión continuada durante cuarenta años, "por lo que una política agraria encaminada a favorecer al pequeño cultivador con el propósito económico social de multiplicar la pequeña propiedad, hubiera podido conducir a la interpretación del real decreto, en el sentido de que los sitios o estancias y las vegas debían segregarse de los grandes fundos [...] y pasar a ser propiedad de las familias de agricultores que los ocuparon",⁴ ocurrió todo lo contrario. Porque como expresa el propio autor: "una interpretación de ese género estaba en contra del interés de los grandes terratenientes, cuya influencia dominaba en la Intendencia de Hacienda, el Consulado y los ayuntamientos".

Las numerosas y airadas protestas de los sitieros y vegueros produjeron poco efecto. El gran terrateniente hizo valer su condición de legítimo propietario y millares de pequeños agricultores tuvieron que resignarse a la condición de aparceros o arrendatarios, para poder continuar cultivando la tierra que, en muchos casos, habían trabajado durante varias generaciones.

De esta forma, se generalizó en Cuba desde comienzos del siglo XIX el oprobioso sistema de los arrendamientos y la aparcería, mediante el cual durante casi siglo y medio, la oligarquía burguesa-terrateniente explotó y esquilmo a más de cien mil pequeños agricultores.

Participación de los campesinos en las gestas independentistas de 1868 y 1895

La gesta independentista contra la dominación española iniciada el 10 de octubre de 1868, encabezada y dirigida por el

⁴ Ramiro Guerra, *Manual de historia de Cuba*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971, p. 253.

sector más progresista y radical de la burguesía agraria de la región oriental del país, contó desde sus inicios con la entusiasta incorporación del campesinado pobre y medio.

La demarcación donde Carlos Manuel de Céspedes proclamó la decisión de los cubanos de luchar por la independencia de la patria, a la vez que se caracterizaba por tener la menor población esclava del país,⁵ tenía también la peculiaridad de estar poblada por numerosos campesinos independientes, pequeños propietarios, comuneros y precaristas. Los pequeños agricultores, expoliados por los abusivos impuestos de la metrópoli y la usura de los comerciantes peninsulares; vejados y maltratados frecuentemente por los capitanes generales y los tenientes pedáneos, es lógico que vieran con simpatía la causa independentista.

Al respecto es interesante destacar el testimonio del general Francisco Lersundi, a la sazón gobernador de la isla, cuando expresó que: "exasperados por lo irritante y lo insoportable del nuevo tributo, están dispuestos (los guajiros) a pelear hasta morir contra el gobierno, deponiendo su antiguo y acendrado españolismo".⁶

Si desde el inicio de la lucha armada fue importante la participación de los campesinos, es de destacar cómo en el transcurso de la contienda, a medida que la lucha se prolonga y que se afianza su carácter popular y su contenido nacional-liberador, se acrecienta la participación del campesinado y surgen de sus filas combatientes de la talla histórica de Máximo Gómez y Antonio Maceo, los que con el decursar de la guerra, habrían de convertirse en figuras cimeras del proceso insurreccional.

Cuando en 1895, bajo la prédica del héroe nacional José Martí, se reinicia la lucha armada contra la dominación española, la participación del campesinado tendría aún una mayor conno-

⁵ Al respecto, en el discurso pronunciado el 11 de mayo de 1973, el comandante en jefe Fidel Castro expresó: "Un 40% de la población de Occidente era esclava [...] No era igual la situación en la región oriental del país. Oriente era la provincia con menos porciento de esclavos: un 19%. Le seguía Camagüey, con un 21%, y después Las Villas, con un 25% de población esclava."

"En la jurisdicción de Bayamo, Manzanillo, Tunas, Holguín, Jiguaní y Baire —en aquellas jurisdicciones donde se inicia precisamente la guerra por la independencia—, la población esclava apenas alcanzaba el 6% del total, y el número de modestos campesinos independientes era elevado."

⁶ *Historia de Cuba*, La Habana, Dirección Política de las FAR, 1968, 4ª ed., p. 158

tación. Como ha expresado el compañero Fidel Castro: "Fueron campesinos humildes los que llenaron mayoritariamente las filas de nuestras tropas mambisas en el 68 y el 95."⁷

Esta participación campesina en las gestas independentistas posibilitó a centenares de hombres nacidos en los más humildes hogares campesinos, foguearse en la lucha y templar en ella un carácter opuesto a toda clase de injusticias, forjándose como aguerridos combatientes. Muchos de ellos, al convertirse en oficiales del ejército libertador, adquirieron aptitudes de mando en la conducción de sus coterráneos, las que avaladas por el cariño y el respeto a que se hicieron acreedores, les serían de gran utilidad en las luchas que habrían de librar posteriormente en la república mediatizada en defensa de la tierra, contra los desalojos y por todas las reivindicaciones económicas y sociales de sus hermanos de clase.

Al terminar la guerra de los 10 años (1868-1878), que como es conocido culminó con la derrota de las fuerzas mambisas, acaeció un hecho que habría de tener gran repercusión en las luchas ulteriores del campesinado cubano.

Ocurrió que el general español Arsenio Martínez Campos, a la sazón gobernador general de la isla, entre sus planes apaciguadores para evitar nuevos alzamientos incluyó la entrega de tierras a los integrantes del ejército mambí que las solicitasen. Para esta misión fue designado el general Guillermo Moncada (Guillermón), prestigiosa figura del ejército libertador, al cual se le facultó para mensurar y repartir las tierras realengas existentes en la región más oriental del país (Sagua, Santiago de Cuba y Baracoa).

Si bien la deportación de Guillermón, motivada por su participación en la llamada "guerra chiquita" de 1879, dejó trunca la labor a él encomendada, hay bastantes evidencias de que había sido iniciada, razón por la cual muchas tierras realengas, especialmente en las zonas de Santiago y Guantánamo, llegaron a ser delimitadas. Al calor de esta situación, centenares de combatientes mambises, con autorización o sin ella, procedieron a ocuparlas. Situación análoga se produce a la terminación de la guerra del 95, cuando numerosas familias carentes de otros medios de subsistencia procedieron a ocupar tierras baldías y fomentaron en ellas sitios y estancias para procurarse el sustento de sus hambreadas familias.

⁷ Informe al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, La Habana, Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central, 1975, p. 17.

Concedemos gran importancia a estos antecedentes, por cuanto nos permiten descubrir el hilo conductor que vincula, y más que vincular, funde y transforma al campesino-mambí, en el mambí-precarista, que en la república burguesa habría de defender el derecho a cultivar la tierra con el mismo denuedo con que antes luchó por la independencia de la patria.

II. LAS LUCHAS CAMPESINAS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX

La intervención norteamericana en Cuba y los cambios operados en la tenencia de la tierra

Es conocido que la aspiración a la patria libre y soberana por la que durante un tercio de siglo peleó derrochando coraje y heroísmo el pueblo cubano, se vio frustrada por la intervención del imperialismo yanqui.

Cuando ya el ejército colonialista español estaba al borde del colapso, se produjo la intervención militar norteamericana a finales de 1898.

No intervinieron los yanquis en la guerra hispano-cubana para afianzar con su presencia la independencia de Cuba, sino todo lo contrario, para frustrarla y mediatizarla; más aún, su real propósito era anexionar la isla a su territorio.

Cuando el 20 de mayo de 1902 Cuba obtenía su independencia formal, las medidas adoptadas, el mecanismo instrumentado por el amo imperialista, hacían de ella una clásica neocolonia. El país simplemente había cambiado de amo.

Disuelto el glorioso ejército mambí y sustituido éste por un ejército castrense, en el cual alcanzó especial relevancia la odiosa guardia rural;⁸ impuesta la enmienda constitucional (Enmienda Platt) que otorgaba a los Estados Unidos el derecho a intervenir en Cuba y a ocupar una parte del territorio nacional (base militar de Guantánamo); elevado a un primer plano lo más podrido y reaccionario de la sociedad colonial, a Cuba le serían impuestos gobiernos entreguistas, fieles servidores de los intereses del amo imperialista.

⁸ Destacamento del llamado "Ejército Constitucional" creado para "mantener el orden y perseguir el bandolerismo en las zonas rurales" y que a lo largo de la seudorrepública fue servidor incondicional de la oligarquía burguesa-terrateniente.

Que el principal interés de los Estados Unidos era apoderarse de las riquezas del país y propiciar en él la penetración de su creciente capital monopolista, lo demuestra el hecho de que las inversiones de capital norteamericano, que en 1895 ascendían a 50 millones de pesos, ya en 1911 ascendían a 205 y en 1923 alcanzaban la cifra de 1 200 millones, monopolizando ya en esa fecha las tres cuartas partes de la industria azucarera, la principal del país.

Las características agrícolas de nuestro país, motivadas por la feracidad de su suelo y las bondades de su clima, explican que en buena medida, los esfuerzos y las inversiones de los nuevos colonizadores estuvieran dedicados al acaparamiento de nuestras tierras y al fomento de la industria azucarera.

Como quiera que para el logro de estos objetivos los interventores yanquis necesitaban romper la vieja estructura del régimen de tenencia de la tierra imperante en el país, se dieron a la tarea de instrumentar un conjunto de medidas —verdaderas patentes de corso— que les dieran viso de legalidad a sus empeños geofágicos.

La primera medida de esta naturaleza fue la Orden Militar núm. 34, promulgada por el primer gobierno interventor el 7 de febrero de 1902, la cual, con el pretexto de facilitar a las compañías azucareras el establecimiento de líneas ferroviarias privadas, posibilitó a éstas el control de grandes extensiones de tierras agrícolas.

No había transcurrido un mes de estar en vigor la anterior disposición, cuando el 5 de marzo de 1902, el gobierno interventor dictaba la famosa Orden núm. 62, conocida popularmente como "Ley del despojo", mucho más draconiana y de más vasto alcance que su antecesora.

El objetivo central de esta nueva disposición era facilitar el deslinde, demolición y consecuente titulación de las haciendas comuneras, poseedoras, como ya señalamos anteriormente, de vastas extensiones de tierra en la provincia de Camagüey y la región oriental del país. ¿Cómo podrían la mayoría de los ocupantes de las haciendas comuneras justificar con "título escrito" o "por medio de información", como estipulaba la mencionada ley, su derecho a poseerlas?

Una interesante descripción de cómo los campesinos fueron despojados de sus tierras al amparo de esta resolución, nos la ofrece el dirigente campesino Antero Regalado Falcón en su libro *Las luchas campesinas en Cuba* cuando expresa: "La Orden 62 dio origen a deslindes y juicios amañados demolito-

rios de haciendas comuneras. Para agravar la situación, el 17 de mayo de 1907 el gobierno de la segunda intervención yanqui dictó el Decreto 566, en virtud del cual se hizo extensiva la aplicación de la Orden 62 al deslinde y división de toda clase de fincas rústicas. Con estas dos disposiciones, se puso en juego el leguleyismo, el papelismo y el forrismo, el abuso de la influencia y el poder, el padrinazgo y el caudillaje contra los intereses de los campesinos, los verdaderos poseedores de títulos de propiedad de las haciendas y de otras fincas. En este proceso, elementos leguleyos en contubernio con intereses latifundiaros fabrican papeles de pesos de posesión imaginarios y escrituras notariales...”

“[...] Los promoventes se despacharon a su gusto. Los peritos presentaron informes y planos arbitrarios, caprichosos”, señalando los linderos que el promovente arbitrariamente tenía a bien fijar.

“Como los campesinos interesados no conocían la forma de defenderse y casi todos por su ignorancia, otorgaron poderes para que los representaran a los propios leguleyos, los títulos falsos quedaron vigentes y fue reconocido como ‘legítimo’ el despojo a los campesinos, sin derecho siquiera a reclamar la indemnización de las mejoras y bienhechurías [...]”.

En el informe central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el compañero Fidel Castro nos ofrece una acabada síntesis de las consecuencias de esta política del despojo instaurado por los gobiernos de la intervención militar yanqui cuando expresa: “No pasó a manos de los campesinos —combatientes por lo general del Ejército Libertador— la tierra que con su propia sangre habían abonado, sino que a los viejos latifundios se unieron los nuevos, constituidos muchas veces con las parcelas de los que habían muerto o luchado por la independencia. A precios irrisorios, fraudes, desalojos o simples concesiones, las empresas yanquis o los oligarcas aliados al imperialismo se hicieron dueños de inmensas extensiones. Así surge la trágica historia de los infinitos sufrimientos que el dominio de Estados Unidos impuso a los campesinos durante más de cincuenta años.”⁹

⁹ *Informe al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. La Habana, Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central, 1976, p. 17.*

Las primeras organizaciones campesinas

Las primeras organizaciones campesinas de que se tienen antecedentes surgieron en el sector de los colonos azucareros a finales del siglo XIX. Alrededor de 1899 surgió una asociación de colonos en la región de Manzanillo y Bayamo, en la actual provincia de Granma. Por esa misma época se organizaron los colonos de Remedios y Sagua, en la actual provincia de Villa Clara.

Como ya apuntamos anteriormente, en la década de los sesenta del siglo pasado, producto de las innovaciones técnicas, comenzó a producirse una cierta especialización en la industria azucarera: la fase industrial se separaba de la agrícola. Para proveerse de las cañas que los ingenios demandaban cada vez en mayor cuantía como consecuencia de la ampliación de su capacidad de molienda, los dueños de éstos cedían tierras en arrendamiento para el fomento de nuevas plantaciones, y también muchos agricultores independientes dedicaron sus tierras al cultivo de la rica gramínea. En ambos casos, el colono debía recibir una parte proporcional del azúcar que produjeran sus cañas. Como no todas las fábricas tenían la misma eficiencia, ni todas las cañas producían igual cantidad de azúcar, la cuota que recibían los colonos variaba considerablemente entre una y otra región. Por ejemplo, en la época que tratamos —finales del siglo XIX— mientras los colonos de La Habana y Matanzas recibían hasta 5.5 arrobas de azúcar por cada 100 arrobas de caña procesadas, en muchas regiones del país solamente recibía 3.5 arrobas. Es lógico que en la medida en que las centrales extraían mayor cantidad de azúcar a las cañas, los colonos reclamaran aumento en la parte que a ellos se les asignaba. De aquí surgió la primera gran demanda de este sector que dio origen a la creación de asociaciones en diferentes zonas del país, para vertebrarse más tarde en una organización de carácter nacional.

La primera organización agraria de carácter nacional de que se tiene noticia, sin que existan documentos que acrediten la fecha exacta de su constitución, fue la Liga Agraria de la República de Cuba.

Se conoce de una carta dirigida por el presidente de esta organización, Rafael Fernández de Castro, al gobernador militar yanqui Charles E. Magoon en noviembre de 1907, en la cual solicita sean condonados "los capítulos, con sus réditos

vencidos y no pagados de los censos y capellanías instituidos principalmente a favor de instituciones eclesíásticas".¹⁰

Esta organización, patrocinada por elementos de la burguesía agraria, no obstante contar con filiales en algunas provincias y regiones del país, parece haber tenido una membresía no muy numerosa y una actuación de poca trascendencia.

El 16 de marzo de 1913, en el local de Círculo de Trabajadores de San Antonio de los Baños, era constituida la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba.

Esta organización, a diferencia de la Liga Agraria, nació con un fuerte apoyo del campesinado pobre y medio de la región. El hecho de constituirse en el local de los trabajadores y que meses más tarde participara en el Congreso Obrero efectuado en la ciudad de La Habana, donde presentó una moción abogando por la creación de escuelas y vías de comunicaciones, evidencian su carácter progresista y popular.

Entre las demandas enarboladas por esta organización, conjuntamente con su contemporánea, la Asociación de Güines, pueden enumerarse las siguientes: que no fueran cedidos bienes del Estado a particulares, compañías o empresas extranjeras; reparto de tierras del Estado en pequeñas parcelas a los agricultores pobres; el establecimiento de bancos de créditos que facilitasen préstamos a los pequeños agricultores; rebaja de las rentas; el abaratamiento de los artículos de primera necesidad, etcétera.

En el mes de agosto de 1914, esta asociación, en carta abierta firmada por 2 348 agricultores, denunciaba al entonces presidente de la República Mario García Menocal, la crítica situación por la que atravesaba el pueblo trabajador y reclamaba, "de quienes están en el deber de hacerlo, se tomen medidas que situación tan grave requiere"; a la vez instaba a los miembros del Senado a que asistieran a las sesiones y legislaran a "fin de salvar a la Patria".¹¹

Cabe a la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba el mérito histórico de ser la primera organización campesina de que tengamos conocimiento que propició el establecimiento de relaciones fraternales con el movimiento obrero, participando inclusive en desfiles del primero de mayo, "para conmemorar dicha fecha, por ser el día de los trabajadores".¹²

¹⁰ Antero Regalado Falcón *Las luchas campesinas en Cuba*, La Habana, 1973, p. 57.

¹¹ *Ibidem*, pp. 58-59.

¹² *Ibidem*, p. 59.

Por el contenido de sus demandas se evidencia que las organizaciones campesinas nacidas en los finales del siglo xix y comienzo del presente —unas más progresistas que otras— todas tenían un carácter reformista, por lo que sus demandas eran fundamentalmente de carácter económico. Si bien algunas de ellas, como la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba, abogaban por el reparto de tierra, en su programa y en su acción no estaba todavía la decisión de organizar y movilizar a los campesinos para defender el derecho a cultivar la tierra.

Si bien es evidente que los realenguistas y comuneros desde los años iniciales de la república se enfrentaron a la geofagia, también lo es que estos enfrentamientos se producían un tanto espontáneamente, sin ningún tipo de organización. No fue hasta la década de los veinte que la oposición al desalojo de realenguistas y comuneros empezó a devenir en resistencia organizada, la que engendraría años después el surgimiento de organizaciones campesinas, asociaciones, uniones, ligas, etc., directamente vinculadas a la lucha por la tierra.

Promesas engañosas de repartos de tierra en los primeros años de la seudorrepública

Los primeros años de la era republicana se caracterizaron, de un lado, como ya se ha señalado, por la usurpación de las mejores tierras agrícolas del país por parte de las compañías imperialistas yanquis, y del otro, por las reiteradas promesas de los diferentes gobiernos de conceder tierras a los integrantes del Ejército Mambí y a los campesinos pobres en general.

En tanto por un lado, los elementos más conservadores de la burguesía criolla, los que menos habían aportado y menos se habían sacrificado por la causa de la independencia, elevados a la categoría de personajes influyentes al calor de las intervenciones militares yanquis, participan junto a los consorcios norteamericanos en el acaparamiento de las mejores tierras agrícolas del país, por el otro, los mambises, los que todo lo habían ofrendado a la lucha independentista, se encontraban en el más total desamparo.

Desde la instauración de la república burguesa los campesinos fueron víctimas de toda una serie de medidas engañosas que se decían encaminadas a dotar de tierras a los más pobres; algunas de estas medidas estuvieron patrocinadas por

gentes bien intencionadas, pero los mecanismos del parlamento burgués obstaculizaban su aprobación.

A manera de ejemplo citamos algunas de las mencionadas leyes:

- Ley del 9 de enero de 1904, que establecía la distribución de tierras del Estado a los integrantes del ejército mambí, mediante el procedimiento de compra-venta.
- Ley del 11 de julio de 1906, mediante la cual se concedía un crédito de un millón de pesos para la colonización y distribución de tierras del Estado.
- Decreto núm. 492, del 24 de julio de 1911, que establecía el reparto de una caballería de tierra a cada familia campesina que careciese de ella.

Ninguna de estas leyes llegó a ejecutarse. Todas quedaron engavetadas, sirviendo sólo como proyectos demagógicos para calmar la demanda campesina de tener tierra para trabajar y como instrumento para obtener votos en las campañas electorales.

La penetración imperialista en el agro cubano

Igual ineptitud que la demostrada para afrontar la entrega de tierras al campesinado trabajador, demostró el parlamento de la república mediatizada, para detener el proceso de monopolización de la tierra por los grandes consorcios extranjeros.

El 3 de marzo de 1903, el prestigioso mambí Manuel Sanguily, denunciaba ante el Senado de la república “la irrupción de extranjeros que vienen a Cuba con el exclusivo objetivo de adquirir a bajo precio porciones inmensas de tierras”, y agregaba: “es fácil notar el número considerable de extranjeros, en su mayor parte americanos del norte, que llegan a La Habana y se derraman por el territorio de la isla, con el propósito de adueñarse de la tierra”. En vano reclamó el venerable mambí del alto cuerpo legislativo que interpusiera su “salvadora acción [...] para contener la calculada y artera codicia que nos amenaza de ruina y descrédito”.¹³

Igual suerte que el proyecto de Sanguily corrió el presentado

¹³ *Ibidem.*, p. 54.

por el también ilustre patriota Juan Gualberto Gómez, el 15 de noviembre de 1915.

Fue así como en el transcurso de los primeros 20-25 años de la seudorrepública, los poderosos consorcios imperialistas se apoderaron de vastas extensiones de tierra, llegando a poseer el 25% de las mejores tierras agrícolas del país.

Solamente un grupo de 13 poderosas compañías eran propietarias de más de un millón 200 mil hectáreas de tierra.

	<i>Hectáreas</i>
Cuban Atlantic Sugar Co.	284 404
Cuban American Sugar Co.	143 862
American Sugar Ref. Co.	136 750
United Fruit Company	109 480
West Indies Sugar Co.	109 146
Vertientes-Camagüey Sugar Co.	106 595
Manatí Sugar Co.	79 252
Francisco Sugar Co.	71 703
The Cuba Company	68 388
Punta Alegre Sugar Co.	46 591
Cuban Trading Co.	29 148
Guantánamo Sugar Co.	12 695
Central Soledad	11 998
Total: 13 principales latifundios azucareros norteamericanos:	1 209 015

Se considera que a través de sus alianzas y maquinaciones con latifundistas cubanos, las compañías norteamericanas controlaban, de una u otra forma aproximadamente el 50% de las tierras dedicadas en Cuba al cultivo de la caña de azúcar. Si a esta situación sumamos el hecho de poseer los mejores y más modernos centrales azucareros, se comprenderá fácilmente el control que ellos ejercían sobre la producción azucarera del país, renglón decisivo de nuestra economía.

Junto a las compañías imperialistas existía una poderosa oligarquía criolla, que monopolizaba también grandes extensiones de tierra. Entre ambos, compañías extranjeras y latifundistas criollos, controlaban alrededor del 50% de las tierras de Cuba.

Al respecto son elocuentes los datos del censo agrícola de 1946, último disponible al triunfo de la revolución.

NÚMERO DE FINCAS CLASIFICADAS POR SU TAMAÑO

<i>Tamaño (hectáreas)</i>				<i>Número</i>	<i>Fincas %</i>	<i>Área (hectáreas)</i>	<i>Total %</i>
Hasta		0.4		1 148	0.7	280.4	—
De	0.5	a	0.9	1 877	1.2	1 399.1	—
De	1.0	a	4.9	29 170	18.2	84 353.7	0.9
De	5.0	a	9.9	30 305	19.0	210 705.7	2.3
De	10.0	a	24.9	48 778	30.5	725 070.9	8.0
De	25.0	a	49.9	23 901	15.0	789 714.9	8.7
De	50.0	a	74.9	8 157	5.1	488 647.6	5.4
De	75.0	a	99.9	3 853	2.4	329 681.4	3.6
De	100.0	a	499.9	10 433	6.5	2 193 599.7	24.1
De	500.0	a	999.9	1 442	0.9	992 530.7	10.9
De	1 000.0	a	4 999.9	780	0.5	1 443 500.2	16.0
De	5 000.0	o	más	114	—	1 817 602.2	20.1
Total				159 958	100.0	9 077 086.3	100.0

Un simple análisis de esta distribución de la tierra nos demuestra cómo 2 336 grandes fincas, que solamente representaban el 1.4% de las registradas, ocupan el 47% de las tierras, mientras que 111 278 fincas —casi el 70% del total— sólo tenían el 11.2% de las tierras.

Como se expresa en la tesis agraria del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba: “Los terratenientes burgueses y semi-feudales tenían individualmente, como promedio, 25 veces más tierra que los campesinos.”

Según los datos del censo, había en Cuba 142 385 agricultores, cuyas fincas no sobrepasaban las 5 caballerías (67 hectáreas de los cuales 111 166 eran arrendatarios, colonos, aparceros y precaristas y 31 219 pequeños propietarios.

Si bien los de más precaria situación eran los no propietarios, por cuanto una buena parte de sus ingresos tenían que invertirlos —excepto los precaristas— en el pago de la renta, ya fuera ésta en dinero o en especie, en lo referente a otros muchos aspectos tales como la obtención de créditos, precios estables para sus productos, atención médica y educacional, etc., los pequeños propietarios eran, por igual, víctimas del total abandono de las esferas gubernamentales.

En lo referente a la educación y la vivienda, son ilustrativos algunos datos del censo de población y vivienda realizado en 1953. Según el mencionado censo, el analfabetismo en las zonas rurales se elevaba al 41.7% y en la antigua provincia de Oriente alcanzaba el 49.7. El 63.4% de las viviendas era de yagua, madera, guano y piso de tierra; el 54.1% carecía de inodoro o letrina sanitaria; el 90.5% no tenía baños y el 87.6% no tenía alumbrado eléctrico.

No menos angustiosa era la situación de los obreros agrícolas. Según el estudio realizado por una institución católica universitaria en 1957, de los 600 mil obreros agrícolas registrados en el país, el 44% no había podido asistir a la escuela; solamente un 20% tomaba leche, un 4% comía carne y un 2% huevos. El 14% había padecido de tuberculosis, el 13% fiebre tifoidea y el 36% tenía parásitos.

Los trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales sólo trabajaba un promedio de 4 meses al año, no disponían de un pedazo de tierra para cultivar.

Refiriéndose a esta situación, el máximo líder de la revolución, compañero Fidel Castro, en su histórico alegato pronunciado con motivo del juicio celebrado a los asaltantes del Cuartel Moncada, conocido como "La historia me absolverá", expresó: "Hay doscientas mil familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar unas viandas para sus hambrientos hijos y, en cambio permanecen sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de trescientas mil caballerías de tierras productivas. Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y la prosperidad de nuestra nación depende de un campesino saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas?"¹⁴

14 *La historia me absolverá*, La Habana, Comisión de Orientación Re-

La lucha por la tierra se transforma en movimiento organizado

Es en la década de 1930, como ya expresamos, que la decisión de los campesinos de defender la tierra que cultivan comienza a transformarse en movimiento organizado.

Especialmente en la región oriental del país, son numerosos los lugares en los cuales los geófagos y compañías extranjeras tropiezan con la decisión de los campesinos de no dejarse arrebatar sus tierras.

Realengo 18 y El Vínculo en Guantánamo, Ventas de Casanova en Jiguaní, San Felipe de Uñas en Holguín y Viramas en Victoria de las Tunas, son entre otros muchos, algunos de los escenarios donde los campesinos, ya de forma organizada, oponen resistencia al desalojo.

De los numerosos lugares del país, transformados por la resistencia campesina en escenarios de lucha por la tierra, fue Realengo 18, sin lugar a dudas, el de mayor connotación.

Los ocupantes de este realengo, situado en las cercanías de la ciudad de Guantánamo, que desde los inicios de la república venían enfrentándose a la geofagia de latifundistas criollos y compañías extranjeras que pretendían usurpar las tierras donde ellos libraban el sustento de sus familias, tuvieron que enfrentarse en los años iniciales de la década de los treinta, a una ofensiva de mayores proporciones.

Al lograr, quienes ambicionaban apoderarse de aquellas tierras mediante artimañas leguleyescas, que el registro del realengo fuera cancelado como tal —como tierras del Estado cubano— por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 8 de mayo de 1933, consideraron llegado el momento para ejecutar sus ambiciosos planes.

Así las cosas, los meses finales de 1933 y el año de 1934, marcarían la época de los mayores enfrentamientos entre los realenguistas y quienes pretendían apoderarse de las tierras que ellos ocupaban.

Los vecinos de la zona agrupados en la Asociación de Productores de Realengo 18 y sus colindancias, bajo el liderazgo del veterano mambí, Lino de las Mercedes Alvarez, se decidieron a paralizar las trochas y deslindes, que de ejecutarse culminarían con el desalojo de centenares de familias.

Pertrechados con las armas suministradas por el Partido Comunista y enarbolando la consigna de "Tierra o Sangre", volucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 1973, p. 44.

centenares de campesinos se enfrentaron a los destacamentos de la guardia rural, y obligaron a los agrimensores y testafierros pagados por los geógrafos a paralizar los deslindes.

La magnitud del movimiento, que pronto abarcó a más de 5 mil familias de las zonas colindantes y la solidaridad ofrecida por el movimiento obrero y estudiantil, hicieron que el entonces coronel Fulgencio Batista, a la sazón jefe del ejército, ordenara a sus subalternos parlamentar con los campesinos. Como resultado de este parlamento se firmó una tregua y se comprometieron las autoridades a paralizar los desalojos por dos años.

Al describir la lucha de los realenguistas, el destacado periodista revolucionario Pablo de la Torriente Brau, quien más tarde cayera combatiendo junto al ejército republicano español expresó: "Aquel problema tiene, a mi juicio, un interés enorme. Es el comienzo, ya organizado y con decisión, de un movimiento campesino por la recuperación de las tierras. Es algo así como el preludio de la Revolución Agraria."¹⁵

La gallarda resistencia de los pobladores de Realengo 18 y la extraordinaria repercusión que tuvo la victoria por ellos alcanzada, no sólo estimuló a los precaristas de todo el país a luchar contra los desalojos, sino que, a su vez, fue un poderoso estímulo para el movimiento campesino. A partir de entonces, el reclamo de las justas reivindicaciones económicas y sociales de los hombres del campo, alcanzarían una amplia repercusión nacional.

Cabe consignar cómo esta elevación del movimiento campesino a un plano superior no fue un hecho casual, sino que la misma estuvo condicionada por factores económicos y hechos sociopolíticos de trascendencia en el desarrollo de nuestra sociedad.

En el orden económico, tuvo gran repercusión el auge alcanzado por la industria azucarera en la década de 1915-1925 y sus consecuencias, y en el aspecto sociopolítico, la creación del Primer Partido Comunista de Cuba y la inclusión del problema agrario en la plataforma de lucha del movimiento obrero y estudiantil. Veamos brevemente la influencia de estos factores en el movimiento campesino.

En lo que respecta al desarrollo de la industria azucarera, es incuestionable que el auge alcanzado por ésta en la mencionada década tuvo una repercusión negativa para los peque-

¹⁵ *Pluma en ristre*, La Habana, Ediciones Venceremos, 1965, p. 153.

ños agricultores. Fue ésta la época en que se construyeron grandes centrales azucareros por las compañías extranjeras y también por grandes magnates criollos.

Para obtener las tierras donde incrementar las plantaciones cañeras que estas nuevas fábricas de azúcar necesitaban, no vacilaron los magnates criollos y extranjeros, en complicidad con los gobiernos de turno, en usar los más brutales procedimientos.

Se considera que más de 40 mil familias campesinas, especialmente en las tierras llanas de Camagüey y parte de las actuales provincias de Tunas, Holguín y Granma, fueron despojadas de sus tierras.

Millares de familias campesinas, en busca de nuevas tierras donde librar el sustento de sus familias, emigraron a las zonas montañosas, yendo a nutrir el sector de los precaristas; otras muchas pasaron a engrosar las filas del proletariado agrícola, y no pocas de ellas, a nutrir las filas de los desocupados.

En lo que concierne al aspecto sociopolítico cabe señalar cómo la labor desplegada por el Primer Partido Comunista de Cuba desde su creación en 1925, ejerció una positiva influencia en la vertebración del movimiento campesino. En su Segundo Congreso, efectuado en 1934, el destacamento marxista cubano postuló la necesidad de "la realización de la revolución agraria antifeudal y antimperialista" y llamó a "virar hacia la penetración profunda y amplia en estas masas (las masas campesinas), preparar sus luchas y dirigirlas, dándoles carácter nacional, colocando el trabajo agrario como uno de los más importantes de nuestras actividades".¹⁶

Es importante consignar que el apoyo del partido no se limitó a la mera formulación teórica, sino que el llamado al "viraje" formulado en la resolución del Segundo Congreso se materializó con el envío de un numeroso grupo de valiosos militantes a los principales escenarios de lucha, quienes con su presencia y consecuente trabajo, contribuyeron a sembrar el germen de la ideología marxista y a la elevación del movimiento campesino a un plano superior.

Al calor de este apoyo ofrecido por el destacamento marxista se produce la toma de conciencia de muchos luchadores agrarios y comienza a surgir un movimiento campesino propiamente dicho, el que se proyecta hacia una estructuración orgánica y comprende la necesidad de su vinculación con el

¹⁶ Antero Regalado Falcón, *op cit.*, p. 82.

movimiento obrero. A partir de entonces tomó un auge considerable la creación de asociaciones, uniones, comités y ligas campesinas, las que tomando como cuestiones centrales la lucha contra los desalojos y el reclamo de la reforma agraria, postulan un conjunto de reivindicaciones de carácter económico y social, tales como mejores precios para los productos del campo, arreglo de caminos, creación de escuelas, atención médica, etcétera.

Gran influencia ejerció también en el movimiento campesino la ayuda solidaria ofrecida por la clase obrera. Puede afirmarse que desde la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba en 1925, el movimiento obrero cubano levantó siempre, junto a sus reivindicaciones, las más sentidas demandas del campesinado.

Bajo la dirección de prestigiosos dirigentes portadores de la ideología marxista (Lázaro Peña y Jesús Menéndez, entre otros), la clase obrera brindó su experiencia organizativa y materializó en combativas movilizaciones el apoyo a las justas revoluciones de los hombres del campo.

En Barajagua, Realengo 18, Ventas de Casanova y Hato de Estero, entre otros muchos escenarios de luchas, la clase obrera, al enfrentarse junto a los campesinos a los latifundistas y compañías imperialistas que pretendían despojarlos de sus tierras, materializó en hechos concretos la alianza obrero-campesina.

En lo que respecta al movimiento estudiantil, es de consignar cómo la presencia de Pablo de la Torriente Brau en Realengo 18 en 1934 y sus vibrantes crónicas sobre las luchas de los realenguistas —que al decir del compañero Fidel “inmortalizaron al Realengo”— crearon toda una corriente de simpatía en el estudiantado cubano hacia los campesinos realenguistas, la que se materializó más tarde en una activa participación de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y de los Institutos de Segunda Enseñanza del país contra los desalojos campesinos y por la reforma agraria.

Especialmente en la década de los cuarenta y comienzos de los años cincuenta la FEU y la Asociación de Estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de Guantánamo, tuvieron una activa participación en la lucha contra los desalojos. Los dirigentes estudiantiles visitaban con frecuencia los escenarios de lucha, organizaban mítines y conferencias donde protestaban de los desalojos, denunciaban la represión de la guardia rural y la actitud de los jueces venales que se hacían cómplices de los latifundistas y compañías imperialistas.

La orientación del primer partido marxista y la ayuda solidaria del movimiento obrero y estudiantil, enmarcadas en el auge alcanzado por el movimiento revolucionario a partir del derrocamiento de la tiranía machadista en 1933, y que tuvo su más alta expresión en la asamblea constituyente de 1940, propiciaron el auge del movimiento campesino y su vertebración a escala nacional.

En agosto de 1941, con la asistencia de más de 800 delegados, se celebró en La Habana el II Congreso Nacional Campesino, en el cual quedó constituida la Asociación Nacional Campesina de Cuba, primera organización clasista del campesinado cubano de carácter nacional.

Teniendo como consignas centrales la lucha contra los desalojos y por la realización de una reforma agraria profunda y radical, esta asociación, bajo la presidencia del recio luchador agrario Romarico Cordero, libró —hasta su ilegalización por la tiranía batistiana— importantes batallas en pro de las justas reivindicaciones del campesinado.

Cabe señalar cómo el trabajo realizado por la Asociación Nacional Campesina contribuyó de forma destacada a despertar en los campesinos el espíritu de lucha y hacerles comprender cómo unidos y organizados podían enfrentarse a sus enemigos de clase.

Los partidos políticos y la cuestión agraria a partir de la década de 1930

Resulta de interés señalar —aunque ello lo hagamos en apretada síntesis— cómo el auge alcanzado por el movimiento campesino a partir de los primeros años de la década de los treinta repercutió en los programas y la actuación de los partidos políticos.

Si bien los partidos tradicionales controlados por la alta burguesía criolla, como el Liberal y el Demócrata, no se preocuparon por introducir en sus programas las reivindicaciones del campesinado, limitándose en las campañas electorales a formular demagógicas promesas de ayuda a los “pobrecitos” campesinos, es de constatar cómo la problemática agraria comenzó a reflejarse en los programas de los nuevos partidos políticos y organizaciones surgidas al calor de la conmoción revolucionaria provocada por el derrocamiento de la tiranía machadista.

Así vemos que en el programa de La Joven Cuba (organización creada por el combatiente revolucionario Antonio Guiterras en 1934) aparecen postulados que hasta entonces, excepto el partido marxista, no había formulado ninguna otra organización política o social del país. Muestra de ello son los siguientes párrafos:

- Nacionalización de las riquezas del subsuelo.
- Implantación de la reforma agraria... Expropiación de las tierras cultivables en poder de los latifundistas, cuando proceda declaración de interés público o necesidad social... Revisión de todos los expedientes de deslindes y demoliciones de las haciendas comuneras, iniciados con posterioridad el año 1902...
- Las leyes agrarias tendrán efecto retroactivo...
- Creación del instituto agrario con jurisdicción para reivindicar, adquirir y expropiar tierras para el Estado [...]
- Concesión de las tierras pertenecientes al Estado, al campesinado pobre y medio, ensayando las formas colectivas de explotación siempre que las condiciones lo permitan.
- Creación de cooperativas de agricultores.
- Institución del crédito agrícola.

Por su parte, el ABC, partido político fundado por el político demagogo Alberto Martínez Sáenz en 1931, que nació con un ropaje revolucionario y más tarde devino en organización neofascista, también se autotituló, "un partido fundamentalmente agrario" y proclamó el lema de "la reconquista de la tierra", e hizo mucha demagogia con la tragedia de "los hombres sin tierra, frente a la tierra sin hombres", sin que posteriormente, cuando su jefe llegó a ser ministro de Agricultura, hiciera nada por resolver esta angustiosa realidad.

De igual forma cabe mencionar al Partido Agrario Nacional (PAN), integrado por profesionales, intelectuales y elementos de la pequeña burguesía, con ideas progresistas, pero que, carentes de decisión para enfrentar la lucha, tuvieron poco arraigo popular, por lo que en poco tiempo este partido desapareció de la arena política sin honores ni gloria.

En lo que respecta al Partido Revolucionario Cubano (auténtico) fundado en 1934, que tuvo como figura principal y máximo inspirador al doctor Ramón Grau San Martín, es de señalar que no obstante postular en sus estatutos como base-doctrina la más completa defensa de la economía nacional, la

más amplia liberación económica del cubano y la más efectiva implantación de la justicia social, en lo que respecta al problema agrario, sólo se recogían tibias formulaciones, como la de que: El Estado podrá fijar por medio de una ley, si lo estima necesario a la utilidad pública, la cantidad de tierra que pueda poseer un individuo o corporación. Llegado ese caso la ley determinará la forma en que se procederá a la expropiación y repartición de las propiedades que sobrepasen a la limitación. O esta otra, que podía parecer un empeño más concreto: se establecerá una caja de rescate de la tierra. Sus ingresos serán determinados por la ley. Sus fondos serán destinados: 1] A la expropiación de tierras. 2] A la adquisición de fincas rústicas rematadas en procedimientos de apremio.

No obstante que sus principales personeros hicieron reiteradas promesas sobre la reforma agraria y la adopción de medidas para proteger al campesino, lo cierto es que en los ocho años que el Partido Auténtico detentó el gobierno —de 1944 a 1952— sólo se promulgaron —como tendremos oportunidad de ver más adelante— decretos demagógicos, todos ellos llenos de contradictorios preceptos jurídicos, que sólo sirvieron para hacer propaganda política y enriquecer a jerarcas del régimen sin aportar ninguna solución real a la angustiosa situación en que se debatían los hombres que trabajaban la tierra.

En el mes de julio de 1937, el entonces coronel y jefe del ejército, Fulgencio Batista, dio a conocer un amplio plan de reformas sociales, políticas y económicas denominado “Plan de reconstrucción económico-social”. Se le bautizó con el nombre de “Plan trienal”, porque los postulados básicos del mismo debían ejecutarse —según su propulsor— en tres años.

Batista, hombre fuerte del momento, no afrontó dificultades para que su ampuloso proyecto fuera rápidamente aprobado por el Congreso de la República.

Siete de los 29 aspectos que abarcaba el mencionado plan estaban dedicados a la problemática agraria. En ellos se abordaban temas de palpitante interés, tales como: aparciamiento y colonización de las propiedades rústicas del Estado. Regulaciones de los contratos de arrendamiento y aparcería. Enseñanza agrícola. Intensificación del cultivo de frutos menores y otros, alrededor de los cuales Batista y sus colaboradores desplegaron una aparatosa propaganda, que ciertamente despertó ilusiones y permitió a este ambicioso personaje granjearse el apoyo de un amplio sector del campesinado, apoyo que en buena medi-

da contribuyó a su elección como presidente de la República en las elecciones posteriores a la constituyente de 1940.

Salvo la construcción de algunas escuelas rurales —llamadas cívico-militares— y algunas tímidas reformas en el régimen del colonato, dictadas en su mayoría antes de ostentar la presidencia de la República, los postulados básicos del Plan trienal se esfumaron como pompas de jabón. El anunciado reparto de las tierras del Estado jamás se acometió con seriedad, por lo que los campesinos, con su proverbial jocosidad, ridiculizaron el plan llamándolo "reparto de tierra en cartuchos".

El hecho de que la temática agraria apareciera en los programas de las agrupaciones y partidos emergentes de la década de los treinta, aunque con las limitaciones, y en muchos casos enfoques demagógicos ya apuntados, sirvió en cierta medida para popularizar los problemas del agro, posibilitando al movimiento campesino, en estrecha ligazón con el movimiento obrero y revolucionario de la época, insertar en la palestra nacional el debate de sus justas reivindicaciones.

III. 1940-1953

La Constitución de 1940 y el problema agrario

Fue en este contexto cómo, interpretando el anhelo de los campesinos y apoyándose en una fuerte movilización de masas, el Partido Unión Revolucionaria Comunista, con una pequeña representación de sólo seis delegados, logró que en la Constitución de 1940 se incluyeran preceptos progresistas sobre la cuestión agraria. La Constitución plasmó en su artículo 90 la proscripción del latifundio, aunque estableciendo la liquidación inmediata y en efectivo de las tierras afectadas y supeditando a una ulterior legislación del Parlamento la reglamentación del mencionado precepto.

Asimismo se logró mediante una transitoria constitucional, la paralización de los desalojos campesinos en proceso de tramitación. Realmente esta transitoria no pasó de un mero postulado, ya que a los latifundistas, con la complicidad del poder judicial, les bastó iniciar nuevos procesos, al amparo de los cuales continuaron desalojando campesinos.

De todas formas, el hecho de que la paralización de los

desalojos y la limitación del latifundio aparecieron como postulados de la Constitución, sirvió para, en cierta forma, legitimar la lucha de los campesinos por estas sentidas reivindicaciones, actuando a su vez como elemento compulsor para los futuros gobernantes, a quienes les resultaría difícil eludir el problema agrario, viéndose obligados para "cubrir las formas", tratar de demostrar que propiciaban medidas para proteger a los campesinos.

Medidas y planes demagógicos de los gobiernos burgueses

Es por las razones antes señaladas por lo que, a partir de la promulgación de la Constitución de 1940, los diferentes gobiernos que se sucedieron en el país hasta el triunfo de la Revolución, aprobaron numerosas leyes y decretos que decían estar encaminados a proteger a los campesinos. Decretos y leyes para "proteger a los precaristas", "para el reparto de tierras del Estado", para la "ejecución de planes modelos", y otros destinados al reparto de semillas y aperos de labranza, los que no por ser menos ambiciosos eran menos demagógicos.

Como quiera que una enumeración detallada de las diferentes leyes promulgadas y planes elucubrados a lo largo de esta etapa, se haría demasiado tedioso, solamente mencionaremos algunos ejemplos que sirven para ilustrar su naturaleza demagógica y falta de seriedad.

Un caso de gran notoriedad fue el reparto de la hacienda Uvita, en la Sierra Maestra, bajo el gobierno constitucional de Fulgencio Batista en 1942. Este proyecto, precedido de una intensa propaganda, fue presentado por el equipo gobernante como parte de un supuesto plan de reforma agraria.

En la mencionada hacienda, de una capacidad estimada de mil caballerías, Batista y su flamante ministro de Agricultura Rivero Agüero, proyectaron asentar a 700 familias campesinas, a las que prometieron viviendas, caminos y recursos para cultivar la tierra.

El resultado de este cacareado plan lo sintetiza Antero Regalado en el mencionado libro *Las luchas campesinas en Cuba* cuando expresa: "Muy pocas familias fueron llevadas a la Uvita, no recibieron tales recursos, sólo 5 gallinas y un gallo, un arado, un machete y unos pocos pesos. Dichas familias debían desmontar y hacer producir la tierra, razón por la cual la mayoría de los pocos que allí se instalaron, se marchó pocos

días después, defraudados por las promesas incumplidas, por el engaño politiquero."

De igual forma resultó un engendro puramente demagógico y un lucrativo negocio el proyecto para la construcción de un "Centro Agrícola Modelo" en la finca Ventas de Casanova, anunciado por Grau San Martín en 1946. Mediante el decreto núm. 2 649 del 22 de octubre del mencionado año, se asignaron 3 millones de pesos para la ejecución del mencionado plan. Al conocer los campesinos que del presupuesto aprobado se designaban nada menos que 554 mil pesos para la compra de la finca, surgió de inmediato su protesta. Ocurría que la finca por la que ahora el Estado se proponía pagar más de medio millón de pesos, era la misma que los campesinos —conocedores de que ésta había sido usurpada por el tirano Gerardo Machado— habían ocupado y repartido revolucionariamente a la caída de su régimen en 1933.

Cuando el proyecto llegó a su fin en 1951 bajo el gobierno de Carlos Prío Socarrás, se evaluaron las edificaciones y maquinarias del flamante "Centro Modelo" en 300 mil pesos, de donde resultaba que más de 2 millones de pesos había ido a parar a los bolsillos de los propulsores del plan, y a partir de entonces, los campesinos tuvieron que pagar renta por una tierra que ocupaban desde hacía 18 años.

Entre los muchos decretos promulgados "para proteger a los precaristas" pueden citarse el 4 138, aprobado por el gobierno de Prío Socarrás en noviembre de 1951, y el 247, promulgado en julio de 1952 por la tiranía batistiana.

En realidad, ambos decretos se diferenciaban solamente por el número de orden y la fecha de su promulgación, porque su contenido reaccionario y engañoso era esencialmente el mismo. En ambos casos los campesinos quedaban obligados a pagar renta por la tierra que desde hacía decenas de años venían cultivando.

Fueron los propios precaristas los encargados de desenmascarar el carácter demagógico de los decretos en cuestión, cuando en nutridas y enérgicas concentraciones efectuadas en Rea-lengo 18, en Rancho Mundito y en otros muchos lugares del país, expresaron su repulsa y se negaron a recibir a los funcionarios del Estado encargados de su aplicación.

Organismos colegiados y asociaciones campesinas con fines divisionistas

Es necesario destacar que en la década de los cuarenta, paralelamente al auge alcanzado por el movimiento campesino, se registró, especialmente a partir de 1945, un recrudecimiento en la actitud represiva de los diferentes gobiernos que ostentaron el poder, y que a su vez esta represión, que tenía como objetivo dividir y desarticular al movimiento campesino, como parte que era del movimiento popular en ascenso, se entrelazó con maniobras más sutiles que, al crear la dispersión y la división en el movimiento, coadyuvaban al fin perseguido.

En este contexto dos hechos merecen ser destacados:

El primero de ellos es el relativo a las asociaciones creadas mediante la colegiación obligatoria¹⁷ y el segundo concierne a la creación de una organización campesina con fines divisionistas, paralela a la Asociación Nacional Campesina.

En lo que respecta a los organismos colegiados, es de señalar que, aunque desde 1934 existía la Asociación de Colonos de Cuba con ese carácter, no es hasta los inicios de la década de los cuarenta que éstas se extienden y proliferan en los restantes sectores del agro.

Fue precisamente la experiencia —positiva para los hacendados y grandes colonos— lo que hizo pensar a la casta burgués-terrateniente del país en la conveniencia de extender la colegiación obligatoria a los restantes sectores del agro, pues al agrupar a los campesinos en las organizaciones así creadas que sólo luchaban por reivindicaciones económicas de limitado alcance (precios, mercados, etc.), se les sustraía de las asociaciones independientes, donde la lucha por la reforma agraria y por reivindicaciones tales como el derecho a la educación, a la atención médica, contra los desalojos campesinos, etc., tomaban una mayor connotación. Además, el hecho de que los mecanismos instrumentados por la colegiación obligatoria facilitaran el control de los organismos creados a su amparo por los grandes productores y los elementos puestos a su servicio, hacía que aun cuando muchas demandas de este tipo fueron enarboladas, se plantearan de una forma muy vaga, o más exac-

¹⁷ Colegiación obligatoria, facultad otorgada por la Constitución al Senado de la República para crear organizaciones de productores y que los gobiernos burgueses se arrogaron para sí, procediendo a crear estas asociaciones por acuerdos del Consejo de Ministros.

tamente demagógica, cuidando de no transgredir los marcos de la legalidad burguesa, de los intereses de clase.

Una idea de cómo funcionaban los mecanismos que facilitaban el control de estas asociaciones por los elementos políticos, nos la ofrece el Reglamento de la Asociación de Colonos, el cual establecía que la asamblea o junta general de miembros de las Delegaciones Locales para elegir a sus dirigentes y delegados ante los organismos superiores "se celebraría el segundo domingo de abril de cada año, a la una de la tarde, sin necesidad de previa convocatoria, en el domicilio social de la delegación, *sin que se exija quorum específico* determinado para que quede legalmente constituida, celebrándose por consiguiente *con cualquier número de asistentes a la reunión* (las cursivas son nuestras). Es decir, que en una delegación que tuviera 100 o más asociados, 10 o 12 señores podían "legalmente" elegir la directiva y los delegados a los organismos superiores.

Siguiendo este patrón fueron constituidas en la década de los cuarenta la Asociación de Cosecheros de Tabaco, la de caficultores y de otros sectores agrícolas.

A estas asociaciones era obligado pertenecer, pues ellas controlaban las cuotas de siembra, y la cotización que debían pagar los "productores asociados" se les descontaba en la liquidación de sus cosechas.

Es fácil comprender que estas asociaciones así formadas eran fácilmente controladas por los elementos más reaccionarios, que después decían representar a los productores del sector.

La otra corriente, no menos peligrosa a la que tuvo que enfrentarse el movimiento campesino independiente, fue la encabezada por elementos oportunistas que usando una fraseología revolucionaria, decían luchar también contra los desalojos campesinos, por la reforma agraria y por todas las reivindicaciones del campesinado, pero, todo ello, bajo el manto del anticomunismo.

Esta corriente comenzó a desarrollarse bajo el gobierno auténtico de Grau San Martín —1944-1948— y continuó ampliándose bajo el gobierno sucesor de Carlos Prío Socarrás —1948-1952. Recuérdese que fue ésta la etapa de la división del movimiento obrero, en la que se asaltaron sindicatos y se impusieron dirigentes por decreto.

Para desarrollar su disociadora labor en el movimiento campesino, los jerarcas del autenticismo crearon la llamada Confederación Campesina de Cuba. Esta organización, al disponer

de cuantiosos recursos del Estado, pudo desarrollar una amplia propaganda, con la cual logró confundir a campesinos honestos, sembrando así la división en el movimiento campesino.

Es necesario consignar que ni la labor divisionista de la Confederación Campesina de Cuba ni los esfuerzos conciliadores de los organismos colegiados, lograron frenar la lucha de los campesinos por sus justas reivindicaciones.

La década de los cuarenta y los años iniciales de la década de los cincuenta, fueron años de grandes luchas de los campesinos cubanos en las cuales, junto a las demandas por mejores precios para sus productos, ampliación de mercados, crédito oficial, y otras reivindicaciones de carácter económico y social, no sólo se mantuvo, sino que fue en ascenso la lucha contra los desalojos y por el derecho a cultivar la tierra.

La exigencia de un movimiento campesino organizado, con organismos de dirección a todos los niveles y con fuerte apoyo del movimiento obrero y estudiantil, alentaba a los campesinos a resistir el desalojo y a enfrentarse cada vez con mayor decisión a los planes geográficos de los latifundistas y compañías imperialistas, y como a su vez éstos contaban con la complicidad de jueces venales y el apoyo de la guardia rural, los enfrentamientos fueron adquiriendo cada vez una mayor connotación. Para lograr sus propósitos, los geófagos apelaban a la quema de viviendas y la destrucción de sembrados, originándose verdaderas batallas campales.

Realengo 18, El Vínculo y Caujerí en Guantánamo, Hato de Estero en Las Tunas, Camalote en Camagüey y Rancho Munito en Pinar del Río, tipifican los numerosos lugares del país convertidos por la resistencia campesina en verdaderos escenarios de lucha.

En este batallar fueron muchos los campesinos que cayeron vilmente asesinados.

En los nombres de Niceto Pérez y Sabino Pupo simboliza hoy el pueblo cubano a todos los mártires campesinos que ofrendaron sus vidas luchando por el sagrado derecho a cultivar la tierra.

Con la instauración de la tiranía batistiana el 10 de marzo de 1952, la situación del campesinado trabajador se hizo aún más agobiante.

Abolida la constitución de 1940 y suprimidas las libertades públicas ya bastante maltrechas bajo el gobierno de Carlos Prío; abolido el derecho de los obreros y campesinos a elegir libremente sus dirigentes y ratificados en sus cargos los dirigentes

traidores y oportunistas impuestos por el autenticismo, el movimiento campesino independiente y clasista, correría pareja suerte que el movimiento obrero y revolucionario. Sus dirigentes, acusados de comunistas o filo-comunistas, eran perseguidos y encarcelados; sus reuniones tachadas de subversivas eran prohibidas o disueltas.

Junto a la situación política, a la supresión brutal de las libertades ciudadanas, se agravó la situación económica para los trabajadores y de manera especial para el campesinado pobre.

El primer año de la tiranía la producción azucarera experimentó una drástica reducción.

En contraste con la producción de 7 559 172 toneladas de azúcar alcanzada en la zafra de 1951-1952, ésta se redujo a 5 159 172 toneladas en la zafra de 1952-1953. En las próximas tres zafas, 1953-1954 a 1955-1956, la producción de azúcar estuvo siempre por debajo de los 5 millones de toneladas. De igual forma se registraron drásticas reducciones en la producción tabacalera, la que fue restringida en la cosecha 1954-1955 en un 30%.

Dado el carácter antipopular y el sometimiento servil a los dictados del imperialismo que caracterizaban la actuación de la tiranía, esta política restrictiva recaía de forma unilateral y despiadada sobre las espaldas de los pequeños productores.

Es de destacarse cómo no obstante las limitaciones impuestas a la producción, los precios de los productos agrícolas —y no sólo de la caña y el tabaco, sino también, de la papa, el frijol y el maíz— eran cada vez más bajos e inestables. Aun en aquellos productos que tenían precios oficiales establecidos, la tiranía se mostraba incapaz de garantizar su cumplimiento.

Un ejemplo elocuente de esta situación lo constituye el hecho de que, al producirse el triunfo de la Revolución, en los meses de enero y febrero de 1959, fueron incinerados y pagados a los productores por el gobierno revolucionario más de 100 mil quintales de tabaco de la anterior cosecha —1957-1958— que, ya deteriorados, sin haber sido elaborados, permanecían en los depósitos del Fondo de Estabilización Tabacalero sin liquidar a los campesinos.

IV. LOS CAMPESINOS DURANTE LA LUCHA REVOLUCIONARIA

El Moncada, un rayo de luz

Cuando era más angustiosa la situación del pueblo cubano, cuando la tiranía había cerrado brutalmente toda posibilidad de cambio por la vía pacífica, el asalto al Cuartel Moncada se proyectó como un rayo de luz en el horizonte de la patria.

El programa del Moncada, expuesto por el compañero Fidel Castro en el ya mencionado histórico alegato *La historia me absolverá*, como síntesis de las aspiraciones y objetivos de los autores de la audaz acción, era un medular programa nacional liberador, en el cual, la reforma agraria anhelada por los campesinos, e imprescindible para que Cuba pudiera alcanzar su pleno desarrollo económico y social, ocupaba un destacado lugar.

Al enumerar en el proceso del juicio, las cinco leyes que los autores de la heroica acción se proponían proclamar inmediatamente después de tomar el Cuartel Moncada, el compañero Fidel expresó: "La segunda ley revolucionaria concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios a base de la renta que devengarían por dichas parcelas en un promedio de diez años".¹⁸ Más adelante, razonando los distintos aspectos del programa, el compañero Fidel expresaba: "Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre sus parcelas con carácter de dueños a los cien mil agricultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería a concluir definitivamente el problema de la tierra, primero: estableciendo como ordena la Constitución un máximo de extensión para cada tipo de empresa agrícola y adquiriendo el exceso por vía de expropiación, reivindicando las tierras usurpadas al Estado [...], segundo: reparando el resto disponible entre las familias campesinas con preferencia a las más numerosas, fomentando cooperativas de agricultores para la utilización común de equipos, de mucho costo, frigoríficos y una misma dirección profesional técnica en el cultivo y la crianza y facilitando, por último, recursos, equipos, protección y conocimientos útiles al campesinado."¹⁹

¹⁸ *La historia me absolverá*, op. cit., p. 49.

¹⁹ *Ibidem.*, p. 50.

Quedaban así expuestas de manera diáfana, sin lugar a equívocos, las proyecciones de los asaltantes del Cuartel Moncada en relación con el problema agrario. En el Programa del Moncada tuvieron los campesinos una bandera, bajo la cual continuar la lucha por la tierra, la que ahora más que nunca, se fundía con la lucha de todo el pueblo por la plena independencia y soberanía de la patria.

Participación de los campesinos en el proceso insurreccional

Desde el desembarco del Granma, el 2 de diciembre de 1956, los expedicionarios contaron de inmediato con el apoyo decidido y entusiasta de los campesinos serranos.

El apoyo y la incorporación de los campesinos de las montañas al naciente ejército rebelde no fue obra de la casualidad. Fue la expresión lógica de una tradición patriótica nacida en las gestas independentistas contra el colonialismo español, y que mantenida a lo largo de la seudorrepública en la lucha por la tierra y contra la explotación burguesa-terrateniente, estuvo siempre vinculada —como ya hemos expresado— a la lucha por la soberanía nacional.

Que la valoración de estos antecedentes estuvo presente en la elaboración del plan estratégico de los expedicionarios del Granma, lo ha confirmado el máximo líder de la Revolución, al expresar:

“Nosotros confiábamos en los campesinos, en las tradiciones de nuestro pueblo, en la historia de nuestra patria, en las leyes de la historia y de las luchas de clase. Estábamos convencidos de que los campesinos se sumarían a la Revolución, sabíamos que estos campesinos no eran diferentes a los campesinos de 1868 y 1895, que hacía falta iniciar de nuevo la lucha, que hacía falta reanudar los combates por la Revolución, que en esa lucha los campesinos estarían al lado de la Revolución y lucharían abnegados y heroicamente.”

“Nuestras fuerzas no tenían muchas relaciones previas con los campesinos; pero desde el primer instante, sin embargo, algunos campesinos se sumaron a nosotros. En los difíciles días que siguieron a la Alegría de Pío (ataque sorpresivo de las tropas de la tiranía a los revolucionarios recién desembarcados) cuando sobrevivió sólo un puñado de combatientes los campesinos comenzaron a servir como guías, a colaborar y a ayudar a reagrupar aquel puñado de hombres y a recuperar algunas

armas. Desde el primer momento empezaron a prestarnos ayuda material, y ulteriormente a sumarse ya como soldados revolucionarios.”²⁰

En la medida en que el territorio liberado se consolidaba y ampliaba, se hacía evidente para los campesinos la diferencia diametral entre la política ejecutada por el ejército de la tiranía y la practicada por el ejército rebelde. La primera era la personificación del abuso, el atropello y la humillación; la segunda era la del absoluto respeto, la del trato fraternal. De ahí que el apoyo de la población campesina y su incorporación a las filas del nuevo ejército libertador se hicieran cada vez más conscientes y masivos.

Cuando la guerra se extendió a la zona del noroeste de la antigua provincia de Oriente, con la apertura del “Segundo Frente Oriental Frank País”, bajo la jefatura del comandante Raúl Castro Ruz —actualmente general de ejército y segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba—, el apoyo de los campesinos no sólo fue igualmente masivo, sino que alcanzó un estadio superior en el aspecto organizativo.

El trabajo desarrollado en este frente guerrillero por el Buró Agrario adscrito a la comandancia del frente y el Comité Regional Campesino, creado el 11 de julio de 1958, posibilitó la celebración del Congreso Campesino en Armas el 21 de septiembre del mencionado año.

Este evento, presidido por el comandante Raúl Castro y un grupo de destacados luchadores agrarios encabezados por el actual miembro suplente del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente de la ANAP, compañero José Ramírez Cruz (Pepe), constituyó un hito histórico en las luchas del campesinado cubano.

El Congreso y la organización regional campesina en él constituida, sirvieron para establecer una vinculación orgánica entre el ejército rebelde y el movimiento campesino, transformando el apoyo, hasta entonces disperso y en gran medida instintivo de los campesinos, en apoyo organizado y conciente.

En el histórico evento, los campesinos, junto a la reiteración de sus justas demandas, patentizaron su absoluta confianza en el nuevo ejército libertador y su disposición de incorporarse a

²⁰ Fidel Castro Ruz, *Discurso pronunciado con motivo del XV Aniversario de la reforma agraria*, Ediciones O. R., Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1974, p. 25.

él como combatientes, convencidos de que el ejército rebelde era su propio ejército.

Al reseñar la participación de los campesinos en el proceso insurreccional se hace necesario consignar la destacada participación de la mujer campesina, la que con igual fervor que sus esposos, hermanos e hijos, brindó al ejército rebelde su valiosa cooperación. Ella curó a los combatientes heridos y enfermos, les cocinó alimentos y zurció sus ropas; actuó, además, como intrépida mensajera y en muchos casos fue también combatiente.

La Ley Agraria de la Sierra

A los diecinueve días de la celebración del Congreso Campesino en Armas, el 10 de octubre de 1958, se promulgaba en "La Plata", sede de la Comandancia General del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, la histórica Ley núm. 3, sobre el derecho de los campesinos a la tierra, conocida popularmente como "Ley Agraria de la Sierra".

La promulgación de esta Ley el 10 de octubre de 1958 no fue un hecho casual. En esa fecha se conmemoraban 90 años del "Grito de Yara", que dio inicio a la gesta independentista de 1868 contra la dominación española, y precisamente la ley se promulgaba, como expresa su párrafo final: "Como homenaje a los patriotas que, en aquella ocasión gloriosa, se despojaron de sus tierras, de sus esclavos y de todos sus bienes, para conquistar la libertad de Cuba."

La histórica ley ratificaba en su articulado claro y preciso, la fidelidad del movimiento guerrillero al Programa del Moncada.

En el artículo primero se establecía: "Se concede la propiedad de la tierra que cultivan a los poseedores de tierras del Estado, así como a los arrendatarios, subarrendatarios, aparceros, colonos, subcolonos y precaristas que ocupen lotes de cinco o menos caballerías de tierra particular, a los cuales se les expedirán títulos de propiedad con los límites y requisitos establecidos en esta Ley."

En los artículos 8 y 9, se expresaba: "las tierras del Estado se adjudicarán gratuitamente a sus poseedores hasta una extensión mayor de dos caballerías [...]"

En el primer párrafo de la disposición transitoria se consignaba: "En la Sierra Maestra, en el Segundo Frente Oriental

Frank País y en todos los frentes dominados firmemente por fuerzas rebeldes esta Ley será de aplicación inmediata.”

La Ley Agraria de la Sierra, con su inmediata aplicación en el territorio liberado, representó para los campesinos de todo el país la ratificación convincente de que, en los hombres del Moncada y del Granma, había la firme decisión de convertir en realidad los postulados de “La historia me absolverá”, y que, por lo tanto, de triunfar el proceso revolucionario, esta vez sí habría reforma agraria verdadera.

Y efectivamente; a menos de cinco meses del triunfo de la Revolución, el 17 de mayo de 1959, en “El Día del Campesino”, como el mejor homenaje a los mártires del campesinado que habían caído luchando por el derecho a cultivar la tierra, el gobierno revolucionario promulgó la histórica primera Ley de Reforma Agraria.

V. DESPUÉS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN

Aspectos principales de la primera Ley de Reforma Agraria

La Ley de Reforma Agraria promulgada por la Revolución cubana removió en sus cimientos al régimen de propiedad burgués-latifundista imperante en el país y dio comienzo a profundas transformaciones en el agro cubano, por lo que, como expresara el compañero Fidel, más que de reforma agraria, podemos en propiedad hablar de una verdadera revolución agraria.

Veamos algunos de los rasgos principales de esta trascendental ley:

- Proscribió el latifundio, estableciendo el límite máximo de tierra que podía poseer una persona natural o jurídica en 30 caballerías (402.6 hectáreas), aunque admitiendo excepciones para áreas dedicadas a determinados cultivos —caña y arroz— y la ganadería, que reunieran los parámetros productivos establecidos por la propia ley. En estos casos se admitía la propiedad de hasta 100 caballerías (1 342 hectáreas).
- Entregó gratuitamente la tierra que trabajaban, hasta una extensión de 5 caballerías (67 hectáreas), a todos los arrendatarios, subarrendatarios, colonos, subcolonos, aparceros y

- precaristas del país, beneficiando a más de 100 mil familias campesinas. (Aunque la ley establecía la entrega gratuita de la tierra hasta 2 caballerías —26.84 hectáreas— y que el resto hasta 5 caballerías deberían adquirirla sus poseedores mediante pago aplazado de hecho, todos los agricultores que cultivaban la tierra mediante el concurso familiar e inclusive usando obreros asalariados, siempre que no practicaran el arrendamiento o la aparcería hasta el límite de 5 caballerías, recibieron gratuitamente la tierra).
- Se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad autónoma y con personalidad jurídica propia, para la aplicación y ejecución de la ley.
 - Se dotó al INRA de un departamento de crédito agrícola y se estableció a la vez que el Banco de Fomento Agrícola e Industrial adaptaría su política de créditos a las determinaciones del Instituto de Reforma Agraria.

Un aspecto importante a tener en cuenta al examinar el contenido y la aplicación de esta ley, es el referente a que los grandes latifundios, tanto los que estaban improductivos como los explotados mediante el trabajo asalariado, no fueron fragmentados. Estas tierras pasaron a patrimonio del Estado, lo que posibilitó la creación del sector agropecuario estatal, que contó ya desde entonces con el 40% de las tierras agrícolas del país.

Es oportuno consignar que el INRA, bajo la presidencia del comandante en jefe Fidel Castro, con una política ágil y dinámica, la misma que había de caracterizar toda la ejecutoria del gobierno revolucionario, posibilitó la aplicación de la reforma agraria simultáneamente en todo el país. Puede afirmarse que la reforma agraria, en lo relativo a la delimitación de fincas y la entrega de la tierra a quienes justamente les correspondía —aparceros, arrendatarios, etc.— quedó cumplimentada en el transcurso de poco más de un año.

Es de señalar también que, paralelamente con la aplicación de la ley, el gobierno revolucionario adoptó un conjunto de medidas complementarias, decisivas para el éxito de la reforma agraria, tales como: otorgamiento de crédito oficial a bajo interés, fijación de precios oficiales para los productos del agro, abastecimientos, servicio de maquinaria y asesoramiento técnico.

Los campesinos cubanos no habrían de sufrir las amargas decepciones de los de otros países, beneficiados por supuestas reformas agrarias, que al no recibir el crédito en la cuantía necesaria, ni la garantía de mercados seguros y precios justos

para sus cosechas, en el transcurso de unos pocos años, víctimas de prestamistas, garroteros e intermediarios, se han visto nuevamente convertidos en aparceros, arrendatarios o simples asalariados, o una mezcla de todas estas categorías, tan común en países hermanos de América Latina.

Como es fácil observar, con el límite de 406 hectáreas establecido por la primera Ley de Reforma Agraria, si bien se afectó al gran latifundio nacional y extranjero, no ocurrió así con el sector de la burguesía agraria nativa, que en lo fundamental sufrió pocas afectaciones. Un grupo de aproximadamente 10 mil tenedores de tierra continuaron en posesión de 1 725 102 hectáreas, lo que representaba un poco más de 40% de las tierras del sector privado.

En contraste con la actitud del campesinado trabajador, de pleno respaldo a la reforma agraria, los campesinos ricos, movidos por su interés de clase y obedeciendo a los dictados del imperialismo yanqui, se pasaron con armas y bagaje a las filas de la contrarrevolución.

Si bien, dado el carácter socialista de la Revolución, una segunda ley de reforma agraria era inevitable, hay que señalar que los burgueses agrarios, con su actitud hostil al proceso revolucionario, de sabotaje a los planes de producción, negándose a cultivar sus cañas, no atendiendo el ganado y fomentando la bolsa negra en detrimento del acopio estatal, y peor aún, convirtiendo sus fincas en refugio y centro de aprovisionamiento de las bandas de forajidos alzados en armas contra la Revolución, precipitaron su extinción como clase.

La segunda Ley de Reforma Agraria

Frente al acoso imperialista, la Revolución se vio en la necesidad de adoptar medidas que privasen a la contrarrevolución interna de su base material de apoyo. Y como quiera que las fincas de los burgueses agrarios desempeñaban un importante papel en ese orden, se hizo impostergable una segunda ley de reforma agraria, la cual fue promulgada el 3 de octubre de 1963.

Esta ley redujo a 5 caballerías (67 hectáreas) el límite máximo de tenencia de la tierra.

Las áreas excedentes del límite fijado fueron nacionalizadas y pasaron, por lo tanto, a engrosar el patrimonio del Estado.

La ley facultaba al presidente del INRA para exceptuar de la aplicación de la ley aquellas fincas que mantuvieran excepcionales condiciones de productividad y cuyos dueños o poseedores hubieran demostrado una plena disposición a cooperar a la realización de los planes de producción y acopio agropecuarios del Estado.

Como aspectos importantes derivados de la aplicación de esta ley pueden señalarse los siguientes:

- Se fortaleció el sector agropecuario estatal, el que pasó a tener el 70% de las tierras agrícolas del país.
- El sector campesino, depurado de los elementos burgueses, mayoritariamente enemigos de la Revolución, se hizo más homogéneo y, en consecuencia, quedó fortalecida la alianza de obreros y campesinos.

Quedaron así definidos los dos sectores, los dos pilares, como expresara el compañero Fidel, en los que a partir de entonces se asentaría el desarrollo agrícola del país: el sector estatal y el sector de los pequeños agricultores.

El papel de la ANAP

Al reseñar la participación de los campesinos en las profundas transformaciones registradas en el agro cubano, a partir del triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, no puede obviarse el importante papel desempeñado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Esta asociación, creada el 17 de mayo de 1961, nació con el propósito —expresado en sus estatutos— de unir y organizar a los pequeños agricultores en apoyo del programa agrario de la Revolución.

Al hablar del papel desempeñado por la ANAP se hace necesario un breve recuento de la situación imperante en el movimiento campesino en esta etapa inicial del proceso revolucionario.

Es conocido que al triunfo de la Revolución, los burgueses agrarios, como parte que eran de la burguesía nacional, frente al masivo apoyo popular, y quizás con la ilusión de con "su ayuda" poder frenar las proyecciones radicales de sus jóvenes conductores, demagógicamente ofrecieron la donación de

tractores y 500 novillas cargadas (gestadas) como demostración de su apoyo a la reforma agraria.

Fue precisamente la promulgación de la primera ley de Reforma Agraria y su rápida y consecuente aplicación la que empezó a definir los campos.

Pronto se hizo evidente la existencia de dos bandos perfectamente definidos. De un lado, junto a las fuerzas revolucionarias, se agrupaban los campesinos pobres y los obreros agrícolas que apoyaban sin vacilaciones la reforma agraria y demandaban su más enérgica aplicación, y del otro, la oligarquía burguesa-terrateniente-latifundista, que se oponía con todas sus fuerzas a la aplicación de la histórica ley. Dentro de este bloque, queriendo aparentar independencia y usando un lenguaje más moderado, se encontraba un importante sector de la burguesía agraria —los poseedores de más de 57 y hasta 400 hectáreas— que aunque no afectados por la ley, pero por instinto de clase, hacían causa común con los grandes afectados.

Este sector de los burgueses agrarios, tomando como instrumento las organizaciones colegiadas, que por su maridaje con la tiranía habían logrado sobrevivir, adoptó la táctica de no oponerse frontalmente a la aplicación de la ley, sino que, aparentando apoyarla condicionaban este apoyo a la introducción de “pequeñas modificaciones” tales como: el pago inmediato y en efectivo de las tierras expropiadas, la no afectación de las áreas en plena producción y otras de similar contenido.

Una fuerte batalla tuvo que librar la Revolución, y en particular el movimiento campesino, para desenmascarar la demagogia de estos elementos y lograr la depuración y ulterior disolución de las mencionadas organizaciones que pretendían arrogarse la representación de todo el campesinado.

El clamor de los campesinos que exigían la depuración de los organismos colegiados fue saboteado por el entonces ministro de Agricultura Humberto Sorí Marín (más tarde fusilado por alta traición), quien con hábiles maniobras evadió la destitución de los dirigentes de la Asociación de Colonos, y en las restantes organizaciones —de cosecheros de tabaco, caficultores, etc.— designó en las comisiones interventoras a elementos oportunistas entonces camuflados de revolucionarios.

Fue la negativa de los dirigentes de la Asociación de Colonos a elegir los delegados que debían representar a los cultivadores de caña en la reunión convocada por el gobierno para perfilar la estrategia a seguir en la realización de la primera

zafra del pueblo —1960-1961—, la que provocó la crisis en esta organización.

Al decidirse, obedeciendo al clamor de los campesinos, la intervención de esta asociación, el compañero Fidel expresó la necesidad de crear una organización que representara a todo el campesinado cubano.

Las asociaciones campesinas y comités de reforma agraria que ya se habían creado en todo el país, y que en varias provincias estaban agrupadas en federaciones provinciales, calorizaron de inmediato la iniciativa del máximo líder de la Revolución y se aprestaron a su materialización.

El trabajo desplegado a lo largo y ancho de la nación posibilitó que el 17 de mayo de 1961, en el segundo aniversario de la promulgación de la reforma agraria, quedara constituida la ANAP como organización única del campesinado cubano.

La ANAP, continuadora, en las nuevas condiciones históricas, de la Asociación Nacional Campesina de Cuba, no tendría ahora que luchar por la tierra ni oponerse a los desalojos campesinos; no tendría tampoco que reclamar la obtención de créditos y mercados para los productos del agro, ni demandar la constitución de escuelas y la atención médica para los campesinos.

Desde el instante mismo en que se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria, el gobierno revolucionario comenzó a instrumentar los mecanismos que permitieran entregar crédito oficial a bajo interés a todos los agricultores y garantizar los acopios de toda la producción agropecuaria. De igual forma había evidenciado el propósito de llevar la atención médica, la educación y la cultura a todo el campesinado. Así, pues, le correspondía a la ANAP, como organización representativa de los pequeños agricultores, unir y movilizar a éstos, para junto a los organismos del Estado, crear los mecanismos necesarios para que estas proyecciones se materializaran en el menor tiempo posible, y a la vez, ayudar a desarrollar y fortalecer la conciencia revolucionaria de los hombres del campo para enfrentar los obstáculos y riesgos que necesariamente debe afrontar una revolución verdadera, máxime cuando ésta se desarrolla en un pequeño país situado a 90 millas del "todopoderoso" imperialismo yanqui.

Ninguna síntesis mejor del trabajo de la ANAP que la realizada por el compañero Fidel, cuando en el informe central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba expresó:

"A esta organización no sólo le ha correspondido un papel

importante en la lucha por la elevación de la producción y los acopios del sector campesino, sino que también ha contribuido a impulsar la transformación social de nuestros campos: participó en la movilización de las masas campesinas en las filas de las Milicias y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para la lucha frente a la contrarrevolución y a las bandas organizadas por la CIA en montañas y llanos del país; ha dado su aporte al desarrollo de las tareas de educación, salud pública, cultura, deporte y recreación; ha trabajado por la divulgación de las ideas revolucionarias entre los agricultores privados, por el avance político e ideológico de éstos, y por el triunfo de las posiciones de la Revolución frente a la labor corrosiva de algunas sectas religiosas con marcado fondo político, el oscurantismo y todas las demás campañas realizadas por nuestros enemigos ideológicos en el medio rural."

Antecedentes de la cooperación

Si bien la ayuda mutua y la cooperación entre los campesinos tienen en Cuba antecedentes lejanos en las tradicionales "Juntas Campesinas", cuando los agricultores más pobres se juntaban para realizar siembras, recolectar cosechas y también para techar sus viviendas o construir caminos vecinales, no es hasta el triunfo de la Revolución que esta cooperación se generaliza y se extiende a través de las brigadas de ayuda mutua.

Desde su creación en 1961, la ANAP, paralelamente con la atención e impulso a las brigadas, también fomentó las cooperativas de créditos y servicios (ccs) en las cuales los campesinos, manteniendo la condición de productores privados, adquieren y usan en común la maquinaria agrícola y construyen naves para almacenar cosechas y fertilizantes; también las ccs tramitan colectivamente los créditos y recibos y distribuyen los insumos para la producción de sus asociados.

Es necesario consignar que paralelamente con las formas simples o intermedias de cooperación (brigadas de ayuda mutua y ccs), desde los años 1961-1962 comenzaron a desarrollarse entre los campesinos formas superiores de trabajo colectivo.

En diversos lugares del país, numerosos grupos de campesinos unieron sus tierras y demás medios de producción y fomentaron lo que dio en llamarse Sociedades Agropecuarias. En estas sociedades los campesinos, con crédito del Estado, producían colectivamente, recibían un anticipo diario equivalen-

te a un salario por el trabajo realizado y, al final del año agrícola, las utilidades finales se repartían tomando como base el trabajo aportado por cada socio.

A partir de un cierto auge inicial, estas sociedades se estancaron y ya para la década de los setenta sólo existían alrededor de cuarenta.

Con independencia de otras causas —como el hecho de constituirse muchas de ellas con tierras estatales y con predominio de obreros agrícolas, con poca experiencia como productores y habituados a ganar un salario, deficientes controles económicos, ausencia de normación del trabajo y el desarrollo de una corriente igualitarista manifestada en el no cobro el autoconsumo—, la causa principal de que las sociedades agropecuarias no progresaran, radicó en el hecho de que al Estado, al tener que afrontar grandes inversiones en el desarrollo del sector agropecuario estatal —el 70% de las tierras agrícolas del país—, no le fue posible brindar al incipiente movimiento cooperativo la ayuda necesaria. Por otro lado, es evidente que no había en esa etapa una clara comprensión de la necesidad y la conveniencia de usar las dos vías —los planes estatales y la cooperativización— para lograr la transformación socialista de la agricultura. Como expresara posteriormente el compañero Fidel en el V Congreso de la ANAP: “No habíamos visto con toda claridad la realidad y las conveniencias de no usar un solo camino.”

Hacia las formas superiores de producción

En la Tesis y Resolución “Sobre la Cuestión Agraria y las Relaciones con el Campesinado”, aprobada en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba efectuado en diciembre de 1975, quedó claramente establecida la línea de trabajo para el desarrollo del movimiento cooperativo como vía para lograr, junto a los planes estatales, la transformación socialista de la agricultura.

La agricultura campesina, dispersa y minifundiaria, con sus técnicas anticuadas, incapaz de poder utilizar la mecanización y la moderna tecnología agropecuaria, había cumplido en la Cuba socialista su ciclo histórico.

Al unir los campesinos sus tierras y medios fundamentales de producción, posibilitando compactar sus áreas, la cooperativización debía posibilitar un uso más racional de la tierra y la fuerza laboral, propiciando a su vez, con el uso de la agro-

técnica y la mecanización, tecnificar, humanizar y hacer más eficiente la producción campesina.

La cooperativización es, además, la única vía que posibilita llevar a cada familia campesina la electricidad, el agua corriente, las viviendas adecuadas para cada núcleo familiar y los servicios culturales, educacionales y médicos en condiciones óptimas, que no podrá lograrse jamás con la dispersión de los campesinos a lo largo y ancho del país. Dejó bien sentada la tesis agraria del partido, e hizo énfasis en que la incorporación de los campesinos a las cooperativas era un proceso que debía realizarse paulatinamente sobre la base del más absoluto respeto a la voluntariedad, asignándole a la ANAP la tarea histórica de lograr, mediante una paciente y sistemática labor de divulgación y esclarecimiento, convencer y conquistar a cada familia campesina para el propósito de marchar hacia formas socialistas de producción.

A partir de la celebración del V Congreso de la ANAP, efectuado en mayo de 1977, que hizo suya e instrumentó la aplicación de la Tesis Agraria aprobada en el máximo evento de los comunistas cubanos, comenzó a desarrollarse en Cuba el proceso de cooperativización.

En mayo de 1983 se registraba la cifra de 1 454 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) constituidas nacionalmente, las que agrupaban en su seno a 71 306 asociados y contaban con un área de 59 920 caballerías (804 126 hectáreas). El área cooperativizada representaba aproximadamente el 50% de las tierras del sector campesino.

Este importante logro de la cooperativización en Cuba, sobre todo teniendo en cuenta que se respeta la voluntariedad del campesino, ha sido posible porque junto al trabajo político-ideológico desarrollado con el campesinado ha estado presente también una firme y permanente ayuda por parte del Estado revolucionario.

Para que se tenga una idea de la importancia del apoyo brindado por el Estado, basta señalar algunos de los rubros más importantes suministrados por los organismos estatales al movimiento cooperativo. En la fecha que señalamos —mayo de 1983— las cooperativas poseían, entre otros muchos equipos e implementos agrícolas: 4 120 tractores de goma y 505 de estera (más de tres tractores por cooperativa), 3 738 carretas y trailer, 667 camiones, 213 combinadas cañeras, 111 novias (talleres móviles de reparación) y 1 130 sistemas de regadío.

De la eficiencia productiva del movimiento cooperativo ha-

blan con elocuencia sus resultados financieros: las cooperativas que realizaron sus balances económicos en el transcurso de 1982 y el primer trimestre de 1983 obtuvieron un costo de producción promedio de 0.69 pesos, por cada paso productivo; en el aspecto social cabe señalar que 358 cooperativas ya disfrutaban en esta fecha del servicio de electricidad, y en ellas se contaban, entre terminadas y en proceso de construcción, 5 261 confortables e higiénicas viviendas.

Por último, cabe señalar que los cooperativistas cubanos, al amparo del decreto-ley del 18 de enero de 1983, disfrutaban actualmente de los beneficios de la seguridad social.

Que conozcamos, no existe legislación de ésta naturaleza que proteja a los campesinos en ningún otro país de la América Latina.

Por esta ley, además de otorgar subsidios por enfermedad o accidentes del trabajo, se les garantiza a todos los cooperativistas una pensión de jubilación por vejez o incapacidad permanente para trabajar. Todos los cooperativistas fundadores—condición esta que se le otorgará a todos los que ingresen en cooperativas en un período de cinco años a partir de la vigencia de esta ley, sean o no aportadores de tierras—, tendrán derecho a una pensión mínima por vejez o incapacidad para el trabajo, de 60 pesos mensuales.

Los que ingresen en las cooperativas con posterioridad a la fecha señalada, tendrán derecho a una jubilación equivalente al 40% del promedio de ingresos obtenidos en los 5 años de mayores ingresos dentro de los 10 últimos años trabajados.²¹

Los datos expresados, en apretada síntesis, permiten afirmar que el movimiento cooperativista cubano, aunque joven aún, es ya un movimiento sólido, pujante y vigoroso.

Al cumplirse el postulado de la filosofía marxista de que el hombre se transforma a sí mismo en la medida en que transforma al medio que lo rodea, el campesino aislado y nostálgico del ayer capitalista, inseguro en su presente y en su futuro, se transforma en el campesino alegre y optimista de la Cuba revolucionaria, en el campesino cooperativista, que al cambiar su forma de producir, cambia también su forma de vivir y de pensar, sintiéndose cada día más revolucionario y dispuesto, por lo tanto, junto a todo el pueblo cubano, a vivir con su

21 La naturaleza de este trabajo no permite entrar en el análisis de las especificidades de la ley. Los interesados en ampliar sus conocimientos al respecto pueden acudir a la *Gaceta Oficial* extraordinaria núm. 4 de la República de Cuba, de fecha 26 de enero de 1983.

Revolución o morir peleando por ella hasta el último hombre y la última mujer.

BIBLIOGRAFÍA

- Castro Ruz, Fidel, *Discurso pronunciado con motivo del XV aniversario de la Reforma Agraria*, La Habana, Ediciones O. R., Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 1974.
- Guerra, Ramiro, *Manual de historia de Cuba*, La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1971.
- Historia de Cuba*, La Habana, Dirección Política de las FAR, 2ª ed., 1968.
- Historia económica de Cuba*, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 4ª ed., 1974.
- Informe al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba*, La Habana, Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central, 1975.
- Ortiz, Fernando, *Contrapunteo del tabaco y el azúcar*, Dirección de Publicaciones, Universidad Central de Las Villas, 1963.
- Pluma en ristre*, La Habana, Ediciones Venceremos, 1965.
- Regalado Falcón, Antero, *Las luchas campesinas en Cuba*, La Habana, 1973.

EL CAMPESINADO HAITIANO: SU POTENCIAL REVOLUCIONARIO

SUZY CASTOR

Antes de abordar el tema de la resistencia campesina en Haití, se hace necesario considerar el contexto estructural en el que se desarrolla. Por ello, enfocamos el sistema de relación social que se establece entre las clases dominantes y el campesinado desde el ángulo de las estructuras de dominación y de resistencia. La permanencia de dichas relaciones constituye la tela de fondo sobre la cual se desarrollan las acciones campesinas en sus diversas etapas.

Haití es un país rural. En 1950, el 90.2% de la población haitiana vivía en el campo y sólo el 9.8% residía en las zonas urbanas. Un tercio de siglo después el fenómeno de la urbanización se ha manifestado en un crecimiento acelerado de la capital.¹ Puerto Príncipe cuenta con unos 800 000 habitantes (1980), o sea el 20% de la población del país, con una tasa de crecimiento de más del 10% anual. Por ello la población urbana total llega en 1980 a 28% y la población rural a 72%. En 1979 la población económicamente activa en el campo representó el 86.23% del total de la población económicamente activa del país.²

Debemos precisar que en este estudio consideraremos como campesinado a toda la población que vive en las áreas rurales, cuyo trabajo esté ligado a la actividad agrícola, en unidades de producción campesina o como asalariados en plantaciones de tipo capitalista.

Al hablar entonces del campesinado no nos referimos a una masa homogénea o indiferenciada. Existe una estructura de clase y una jerarquización social bien definida entre el campesino propietario de extensas tierras que utiliza la mano de

¹ La tasa anual del aumento de la población urbana es de 4%. En 1950 Puerto Príncipe absorbía 40% de la población urbana y 58% en 1971. En este último año Puerto Príncipe tenía 12% de la población global y 15% en 1975 (Girault Christian y Lagra Jerry, *Caracteristiques structurelles de la commercialisation interne des produits agricoles en Haïti*, p. 11).

² George Anglade, *L'espace Haïtien*, p. 88

obra de peones o medieros; el pequeño propietario; el mediano o pequeño arrendatario de tierras privadas o estatales, que sobrevive gracias a su trabajo y el de su familia, y la gran masa de campesinos sin tierra que se encuentra obligada a vender su fuerza de trabajo.³

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, ciertas características (tales como el modo de vida, la manera de pensar, la relación con el Estado y la ciudad) más allá de las diversas categorías sociales existentes, abarcan al campesinado en general.⁴ Por ello, en este trabajo nos referimos al campesinado en general.

La agricultura constituye el sector predominante de la economía. En 1950 los productos agrícolas representaban más del 90% del valor total de las exportaciones y el 90% de éstas correspondían al café. A partir de 1960 la participación de la agricultura en el comercio exterior empezó a disminuir debido a la baja absoluta de la producción, a la penetración del capital extranjero en ciertos sectores, tales como la minería (en particular la bauxita explotada por la compañía transnacional Reynold Mining Co.), y sobre todo a la creación, en la década de los años sesenta en los suburbios de Puerto Príncipe, de un complejo manufacturero para promover la industria maquiladora ("run away industries"). Sin embargo, la industrialización muy embrionaria se orienta principalmente hacia bienes de consumo (alimentos, bebidas, textiles).⁵

No obstante y a pesar de la disminución de su participación, el café sigue siendo el producto de mayor importancia en las exportaciones (siendo el 33.5% en 1973-1974)⁶ sumando con el aceite esencial (9.5%), el henequén (6.5%) y el azúcar (2%) un total de 51.5%.⁷

³ Paul Moral habla de 4 niveles en la sociedad campesina: los desheredados, los pequeños propietarios, los propietarios medios y los "gros-habitantes, especuladores. (*Le paysan haïtien*, p. 208). El Banco Mundial en 1976 estimaba que en el mundo rural alrededor de 3 mil personas tenían un ingreso mensual de 6 mil dólares, mientras que para el conjunto del campesinado, éste llegaba a 100 dólares. (*Condition haïtienne* núm. 5, p. 60.)

⁴ Mats Lundals, *Peasants and poverty: a study of Haiti*, p. 40.

⁵ En 1977 el sector industrial empleaba 6% de la PEA y 14 500 personas, 89% de las cuales eran empleados de tipo familiar o artesanal. En 1981 370 fábricas de industria maquiladora emplaban 65 mil obreros.

⁶ En 1980 pasa a representar el 40%.

⁷ En 1980 la agricultura proporcionó el 57% de las exportaciones y empleó a 63% de la población económicamente activa, asegurando en un

Para comprender el peso del campesinado en la producción agrícola, hay que tomar en cuenta que apenas se está esbozando la penetración del capitalismo en el campo. Actualmente se están impulsando algunos complejos agroindustriales tales como ASDEM, FACOLEP, ARCO, POLAROME, orientados hacia el mercado interno (fabricación de pasta de tomate, frutas en conserva, etcétera).

Las plantaciones capitalistas, ya sea con fuentes de financiamiento nacional o extranjero, tienden a acoplar sus necesidades a la situación imperante en el campo. A menudo, las empresas producen sólo una parte mínima de sus requerimientos (sisal, caña de azúcar, tomate, etc.) y compran los productos al pequeño agricultor que trabaja en condiciones precapitalistas. Como consecuencia del ausentismo de los terratenientes, la producción agrícola proviene de las pequeñas y medianas explotaciones campesinas.⁸

Tradicionalmente el Estado haitiano se ha sustentado en gran medida en la producción agrícola, ya que su fuente principal de ingresos proviene del cobro de impuestos sobre todo a la exportación. El pulso económico y político del país depende de las buenas o malas cosechas; como lo señala Marion Leopold "el trabajo campesino, proporciona al Estado casi su razón de ser".⁹

I. ESTRUCTURAS DE DOMINACIÓN Y DE RESISTENCIA CAMPESINA. DOMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CAMPESINADO

En el transcurso de la historia nacional la oligarquía ha movilizado sus fuerzas para estructurar y aplicar procedimientos muy eficaces con el fin de asegurar la dominación y explotación de las otras clases sociales. Señalaremos sus métodos de acción sobre el campesinado desde los campos económico, político, social y cultural.

80%, el suministro de los productos alimenticios básicos, tales como maíz, arroz, mijo, plátanos, tubérculos, etcétera.

⁸ Durante el período 1930-1957, el sector capitalista agrícola únicamente produjo 5% de la producción agrícola bruta. (Schiller Thébaud, *L'évolution de la structure agraire d'Haïti*, p. 347.)

⁹ Marion Leopold, *Résistance populaire et lutte des classes en Haïti*, p. 199.

1. *Mecanismos de dominación económica*

En Haití, como en cualquier formación social donde la producción agrícola es predominante, las relaciones sociales de producción se establecen alrededor de la tierra.¹⁰ La propiedad, el derecho de uso o la ocupación de ésta, constituyen la vía más importante en la acumulación de capital y determinan una compleja red de dominación. Las relaciones del Estado y de los sectores oligárquicos con el campesinado están determinados por la tenencia de la tierra y por el control de la distribución de los productos agrícolas.

El primer eslabón en la cadena de la dominación del campesinado se sitúa a nivel de la apropiación de la tierra. Pocos son los estudiosos que admiten la existencia del latifundismo en el país. Se sigue repitiendo que el campesino haitiano cuando no es propietario tiene acceso a la propiedad al ocupar *de facto* las tierras baldías.¹¹ Se afirma que ya después de la independencia Haití realizó su reforma agraria y que la proliferación de los minifundios que no pueden salir del cuadro de la economía de subsistencia constituyen el mayor problema económico. En Haití se impone, al contrario de la situación imperante en otros países de América Latina, el reagrupamiento de las tierras aparcadas.

Sin embargo, los planteamientos de Gérard Pierre-Charles en 1964 en su libro *La economía haitiana y su vía de desarrollo*, y de Gérald Brisson en *Las relations agraires dans l'Haïti contemporaine* en 1968, tuvieron el mérito de rechazar estas tesis y de considerar en su dimensión real "la naturaleza social de la propiedad agraria y de la sobrepoblación agrícola". Sus estimaciones fueron corroboradas ulteriormente por las investigaciones realizadas entre otros por George Anglade, Serge Larose, etc., y por el censo de 1971.

En efecto, según las estadísticas de 1971, 91% de las explotaciones agrícolas ocupa a 88% de la población agrícola y utiliza el 62% del fondo de las tierras en cultivo. El 71% de ellas tienen menos de una hectárea y las demás (29%) no alcanzan ni siquiera tres hectáreas. En contrapartida, el 9% de las explotaciones ocupan 38% del restante fondo agrario en cultivo o susceptible de ser cultivado; tal situación tiene sus

¹⁰ Véase el trabajo colectivo del Centre d'études et de Recherches Marxistes (CERM), *Sur la féodalité*, capítulo 1.

¹¹ Véanse los trabajos de Marion Leopold, Sidney Mintz, Mats Lundals, Paul Moral, Jean-Jacques Honorat, entre otros.

raíces en factores históricos que marcaron la evolución de la nación.

A partir de la independencia, en 1804, el Estado ha sido el mayor latifundista del país: el 90% de las plantaciones de los colonos franceses fueron confiscadas y pasaron a ser, en gran medida, propiedad estatal. Desde entonces, en ciertos momentos de crisis, el Estado tuvo que conceder algunas propiedades al campesinado, pero sobre todo ha traspasado sus tierras a los altos funcionarios, y a las compañías extranjeras. Por lo tanto las propiedades estatales no sólo se están reduciendo cada vez más sino que también el Estado se está convirtiendo en propietario de tierras de segunda y tercera categoría.

Al amparo de la legislación agraria y con el apoyo del aparato burocrático, los terratenientes acaparan las mejores tierras de riego (en las llanuras) y acaban por arrinconar al pequeño campesino en las tierras montañosas más inhóspitas y difíciles de cultivar. Los terratenientes y el Estado por ser dueños ausentistas dejan sin cultivar una parte importante de las tierras cultivables.

La mayoría de las plantaciones capitalistas (sobre todo de caña de azúcar y de sisal) son propiedad norteamericana y fueron establecidas a partir de la ocupación militar. Además, durante los últimos años, fueron hechas importantes concesiones tanto para la explotación minera (bauxita, oro, cobre, etc.) como para la instalación de modernos complejos turísticos.

Marion Leopold señala que "la propiedad jurídica no desempeña un papel importante en el tipo de relaciones que liga al campesino con la tierra",¹² ya que a menudo éste ocupa tierras sin ser amparado por ningún documento legal. El mismo título de propiedad resulta precario debido a numerosos motivos históricos, a la falta de un registro agrario y a la política llevada a cabo por el Estado. Al considerar a la población económicamente activa en las áreas rurales encontramos, por una parte, una gran cantidad de campesinos dueños de su tierra, los cuales con motivo de despojos y de divisiones por herencia están reducidos a vivir en unidades antieconómicas, verdaderos "pañuelos de tierra" —según la expresión de Paul Moral; y por la otra, una considerable fracción de la población agrícola no dispone de ninguna explota-

¹² Marion Leopold, *La résistance paysanne en Haïti; Elements pour une analyse*, p. 16.

ción, ni como propietarios, arrendatarios, aparceros, gerentes, ni simplemente como ocupantes. En 1964 Gérard Pierre-Charles estimaba a ésta en 49.71%; desde entonces la situación se ha agravado.

Por consiguiente, si se hace a un lado a la reducida capa de terratenientes rurales que conforma más o menos 5% de la población del campo, la gran mayoría no tiene acceso a los medios de producción de subsistencia.

De esta manera la apropiación de la tierra por unos cuantos, inherente a las estructuras de poder y dominación vigentes, determina las relaciones sociales y jurídicas que refuerzan estas mismas estructuras. Las relaciones de producción se establecen a partir de la realidad de la carencia de tierra que afecta al grueso del campesinado. El arrendamiento, la medianería, la aparcería y la gerencia, definen tales relaciones que se concretizan a través de la renta agraria, la *corvée*, la renta natural y en dinero. Así se transfiere automáticamente a los dueños de la tierra parte sustancial del trabajo del campesinado.¹³ Con razón Gérald Brisson se refiere a Lenin cuando dice que "las regiones en donde domina la aparcería, son aquellas de mayor retraso, de mayor dependencia y de mayor opresión de las masas trabajadoras".¹⁴

Algunos autores, entre ellos Marion Leopold, André Corten y Christian Girault, han descrito el complejo juego de las relaciones de producción existentes en el campo. Un mismo campesino puede ser a la vez mediero de un terrateniente de la ciudad, propietario de otra parcela que se pone en medianería con un campesino más pobre, y volverse obrero agrícola de una empresa capitalista durante la zafra. Con base en encuestas locales y regionales, se han detectado más de 30 formas diferentes de organización social del cultivo de la tierra.¹⁵ Sin embargo detrás de esta complejidad se impone la siguiente situación: el campesinado sufre la dominación y explotación del Estado, de los terratenientes y del carácter expoliador de la renta agraria.

La explotación a que está sometido el campesinado se refuer-

¹³ Véanse los trabajos citados de Marion Leopold, Paul Moral, Gérald Brisson, Matts Lundal, Christian Girault.

¹⁴ Gérald Brisson, *Les relations agraires dans l'Haïti contemporaine*, p. 47.

¹⁵ Christian Girault, "Nouvelles données sur l'économie haïtienne", en *Problèmes d'Amérique Latine* núm. 4, p. 49.

za en la esfera de los intercambios, ya que los sectores oligárquicos controlan los canales de distribución de la producción agrícola. Todo un aparato legislativo protege los intereses de estos sectores y les permite acaparar una parte sustancial del excedente económico producido por el campesinado. Si tomamos como ejemplo el producto de mayor importancia, el café, vemos que 180 000 ¹⁶ pequeños productores alimentan el mercado nacional e internacional. Sin embargo, ellos no tienen libre acceso al mercado ya que por ley deben recurrir a los intermediarios.

Los artículos 254 y 258 del Código Rural señalan que sólo el especulador puede comerciar con el exportador que representa el nexo con el mercado internacional. Sobre señalar que entre los campesinos productores y los especuladores autorizados (unos 750), así como entre estos últimos y los exportadores (menos de 30) ¹⁷ se multiplican los intermediarios, a pesar de las prohibiciones legales. Así pues se realiza un descomunado despojo del campesinado. Christian Girault apoyado en algunos estudios de caso y en una encuesta realizada en 1976 por la YWK Internacional Corporation señala que en la comercialización del café, la masa de productores solamente recibe el 45.4% de los ingresos por exportaciones, mientras que el gobierno y los intermediarios acaparan el 54.6%.

Mecanismos similares se han aplicado a todos los productos de exportación (algodón, cacao, aceites esenciales, henequén, etc.). En cuanto a la venta de los bienes agrícolas de consumo interno, el campesino goza de un margen más amplio de acción, ya que los precios que no son fijados por el gobierno están regidos por la oferta y la demanda en el mercado.

La opresión del campesinado se acentúa por medio de múltiples mecanismos, entre ellos, la usura y los impuestos. Frente a condiciones precarias de vida, aunado con la ausencia de organismos de crédito y con una producción raquítica que apenas le asegura la subsistencia, el campesino tiene que recurrir al prestamista, al usurero local, al terrateniente, al comerciante o al especulador (que a menudo son una misma persona),

¹⁶ Christian Girault, *Le commerce du café en Haïti*, p. 27.

¹⁷ Gérard Pierre-Charles subraya que en 1971 los tres más importantes exportadores realizaban 45.16% de las exportaciones y los diez más grandes el 77.89%. ("Économie et développement", *Conjonction*, núm. 144, julio de 1979.) Véase Cary Hector y Marion Leopold, "La bourgeoisie haïtienne une classe en devenir", *Amérique Latine*, núm. 5.

cuyos préstamos exigen tasas de interés siempre exorbitantes del 15 o 28% al mes y en algunos casos hasta el 40%).¹⁸

Este mecanismo no sólo permite el control sobre la producción mediante la compra adelantada de la cosecha a bajos precios sino que también provoca el acaparamiento de la tierra y establece una relación de dependencia que llega al paternalismo explotador.

Ya hemos señalado el papel de los productos de exportación en las recaudaciones del Estado. La política fiscal descansa casi exclusivamente sobre el campesino (80% de los impuestos). La carga impositiva pesa más sobre el campesinado que sobre cualquiera otra capa social, mientras que los exportadores industriales, comerciantes y las capas urbanas, evaden sus obligaciones fiscales mediante un sinnúmero de artimañas. Los inspectores fiscales son implacables con los campesinos en la recaudación de los impuestos. Sin lugar a dudas, la nación vive gracias al campesinado. Mientras que los pequeños productores apenas sacan lo necesario para sobrevivir, el excedente económico se derrama por todas las otras capas y no vuelve a ser reinvertido en la agricultura. Como lo señala Robert Maguire "90% de la población rural se encuentra en un grado último de miseria, las tres cuartas partes ni siquiera tienen 40 dólares anuales para vivir".¹⁹

Vinculados a la problemática agraria y productiva en su conjunto, estos mecanismos de explotación económica no se pueden aislar del sistema de dominación política.

2. La discriminación política

La legislación así como la práctica política, tienden a asegurar la no participación del campesinado en la vida ciudadana. De manera legal, el mundo urbano y rural están separados. "En Haití existen —escribe Paul Moral— dos regímenes administrativos: uno de inspiración francesa reservado al sector urbano (departamento *arrondissement*, comuna) y el otro que rige únicamente a la masa campesina, es decir, a las 555 secciones rurales."²⁰

El último Código Rural, promulgado bajo el gobierno de

¹⁸ André Corten, *Chronique d'une recherche*, p. 32; Christian Girault, "Nouvelle...", en *Problèmes d'Amérique Latine*, op. cit.

¹⁹ Robert Maguire, *Develòpman ki solti man baz nan payi Dayti*, p. 13.

²⁰ Paul Moral, *Le paysan haïtien*, p. 343.

François Duvalier en mayo de 1962, pretende "salvaguardar los derechos e intereses del hombre de campo y favorecer el acceso del campesino a las condiciones de existencia conforme a la eminente dignidad de la persona humana".²¹ En realidad sus disposiciones se integran a los mecanismos de dominación utilizados por el Estado y la oligarquía. No sólo el código reglamenta la tenencia agraria sino que también controla los cultivos, la higiene y la vida social del campesinado e incluso sus diversiones, danzas, palenques, las actividades religiosas (vodú) y deportivas, etcétera.

Las secciones rurales son entidades administrativas encabezadas por un consejo de administración de tres miembros (los cuales deben saber leer y escribir), presidido por un "líder" que es una personalidad de la región. El brazo ejecutor del consejo de administración lo constituye la policía rural formada por un jefe de sección y dos adjuntos. En realidad, el jefe de sección es el representante del Estado en el campo.

En otras funciones el Código reconoce como atribución del jefe de sección: investigar delitos y contravenciones, castigar y arrestar los infractores, controlar la calidad de los productos alimenticios, tener libre acceso a los campos, pastos, establos, y depósitos, entregar permisos para circulación de productos, autorizar bailes y ser auxiliar de la policía judicial.

Bajo el gobierno de François Duvalier con la introducción del cuerpo de los Tontons Macoutes en el campo, éste y el jefe de sección a menudo son una misma persona. En 1978 Jean Claude Duvalier reforzó este poder casi absoluto al responsabilizar al jefe de sección para reprimir la vagancia en las áreas rurales. Si se considera que el desempleo rural alcanza más de un 50%, no se podrá soslayar el hecho de que este término se presta a toda clase de abusos. Se obliga al campesino a trabajar gratuitamente en las propiedades del jefe de sección o de los terratenientes y a realizar la *corvée* en condiciones aún más opresivas.

Resultan ilimitadas las arbitrariedades y la omnipotencia del jefe de sección y de sus ayudantes los *chouquettes la rosée* y otros agentes represivos reclutados todos bajo el criterio de la total obediencia al duvalierismo y que integran el cuerpo de los Tontons Macoutes en el mundo rural.

21 Département de Justice, *Code rural Dn. François Duvalier*, p. III. Los códigos rurales anteriores fueron publicados en 1973 (Lonthonax), 1976 (Rolvérel), 1801 (Toussaint Louverture), 1826 (Jean-Pierre Boyer) y 1804 (Faure Nicolas Geffrard).

Por otra parte, el *habitant*²² se encuentra impotente ante el complicado aparato judicial, ligado a todos los mecanismos de expropiación, que defiende los intereses de los especuladores, abogados, políticos, agrimensores, prestamistas, etc. Para el campesino resulta inútil acudir a las cortes locales o a otros organismos oficiales porque casi siempre sale perdiendo.

Los representantes del poder, ya sean elegidos formalmente cualesquiera que sean las modalidades que adopten o nombrados —como los diputados, alcaldes, prefectos, y aun el presidente de la República— son individuos lejanos, omnipotentes y temibles que personifican al Estado. La única relación que se establece entre el mundo rural y estos agentes del gobierno se sitúa a nivel del despojo y del terror... El Estado es una abstracción... lo concreto es el jefe de sección y la corte local de justicia, el campesino teme y respeta a esas "autoridades", como les llama, porque reconoce su fuerza y sabe que las sanciones que aplican pueden ser brutales.²³

En definitiva, el campesino no ignora que el aparato estatal no representa sus intereses. Asiste a las campañas electorales y los mítines, vota cuando lo obligan a hacerlo y para quien lo obligan a votar, pero siempre obra con desconfianza y desinterés. Se siente ajeno a esa política que se está desarrollando fuera de y en contra de él. Los proverbios campesinos con relación al Estado y a la vida política son muy ilustrativos respecto a este fenómeno.

Además el Estado utiliza las instituciones religiosas tales como la Iglesia católica, las sectas protestantes²⁴ y la jerarquía vodú.

Desde la época colonial, la Iglesia católica ha constituido un aliado poderoso del sistema esclavista. Después de la independencia pasó a ser un Estado dentro del Estado, sobre todo a partir de 1860 con la firma del Concordato entre el Vaticano y el gobierno haitiano. Muy celosa de su hegemonía, la Iglesia católica combatió sin cuartel al vodú y al protestantismo. De hecho, junto con el ejército creado después de 1915 por la ocupación norteamericana representa, hasta los últimos

²² El *habitant* es el término para designar al campesino.

²³ Mats Lundal, *op. cit.*, p. 345.

²⁴ Cuando nos referimos a la utilización de las Iglesias católicas y protestante para la dominación del campesino no desconocemos la posición de algunos grupos de sacerdotes católicos o de pastores protestantes quienes se han adherido a la teología de la liberación. Sin embargo, el papel de esas instituciones no se define por la acción de esos grupos.

años, la única institución que tenía una dimensión nacional y una organización adecuada para ejercer un control territorial efectivo sobre todo el país.

Sin embargo, últimamente las sectas protestantes, sobre todo las norteamericanas, han proliferado en el país y se han orientado hacia el campo. Ya en 1968 un estudio del Partido de Entendimiento Popular detectó el funcionamiento de 77 sectas protestantes diferentes en el país.²⁵ Hoy día suman casi 800, algunas de ellas con órganos de prensa y radiodifusora propios. Los grandes recursos de que disponen han facilitado su labor de proselitismo durante estos últimos años: construcción de escuelas, promoción de acciones comunitarias, distribución de comida y ropas, etc. Ejercen un control efectivo y casi policiaco sobre las poblaciones donde operan, poseen un fichero muy detallado sobre los feligreses, sus actividades, aspiraciones, amistades, etc., así como de sus familiares y allegados.²⁶

En cuanto a la estructura religiosa del vodú y el *houngan* (sacerdote del vodú), su cooperación se convierte en piedra angular del sistema de dominación y explotación. En efecto, mientras sacerdotes católicos y pastores protestantes vienen del extranjero o de la ciudad para "convertir" al campesino, el *houngan* es parte de su tierra, de su mundo y de su mística.

Todos los gobiernos haitianos han tratado de cooptar al *houngan* para integrarlo al aparato de dominación.²⁷ A menudo el *houngan* es al mismo tiempo el *chef bouquement*,²⁸ prestamista, especulador, o terrateniente. El duvalierismo ha introducido ciertas variantes en las relaciones del Estado con la jerarquía vodú, ya que las mismas se han vuelto públicas perdiendo su carácter presupuestadamente clandestino. "Los loas sanguinarios africanos (congos, ibos) o criollos (petros) de la religión anticolonial de la libertad, ceden el paso a los loas de la obediencia, a los loas de la familia unida y pacífica... Para el cultivador, el pequeño campesino, los medieros, los aparceros... es el vodú de la paz social, respetuoso del sistema y de su hierarquía."²⁹

²⁵ *Voix du Peuple*, junio de 1968.

²⁶ Véase *Sel* núm. 40, mayo de 1978.

²⁷ Véase *Sel* núm. 42, noviembre de 1978.

²⁸ El *chef bouquement* es el agente electoral que asegura votos a los candidatos.

²⁹ Jean Dominique, "Une quête d'haïtiennité", en *Conjonction*, núm. 129, mayo de 1976. El loa es el dios de la religión vodú.

Durante los últimos años los organismos internacionales pasaron a formar parte de los mecanismos de dominación política. Bajo el rubro de asistencia técnica en el campo, suelen convertirse en agentes de un encuadramiento político de las masas campesinas que fortalecen al sistema de poder. En 1976 se señalaba la presencia en el país de 146 organismos internacionales, multinacionales, bilaterales o no gubernamentales.³⁰ Jean-Jacques Honorat habla de "una forma original de utilización de la fuerza campesina".³¹

3. La opresión cultural³²

La cultura haitiana tiene sus raíces con la sociedad colonial basada en la dominación por parte de los esclavistas blancos, que representaban el 5% de la población sobre la masa de negros. Éstos, provenientes de diversas etnias y culturas africanas, formaban aproximadamente el 80% de la población. Colonos franceses y esclavos africanos forjaron en Saint Domingue una cultura a partir de la economía de plantación.

Para asentar su hegemonía y asegurarse la óptima explotación de la mano de obra, los amos emprendieron un proceso de "desculturación" de los esclavos, imponiéndoles sus propios patrones de vida y de conducta. Por su parte, los esclavos buscaron crearse una identidad a partir de ciertos elementos diferenciados de la cultura del esclavista blanco para oponerse a esta despersonalización y a la destrucción de su universo cultural.

Con la abolición de la esclavitud y la proclamación de la independencia los colonialistas franceses fueron eliminados físicamente o expulsados del territorio nacional. Sin embargo, la sociedad independiente hereda, como es natural, muchos de los esquemas de valores de la mentalidad colonial. Para asentar su hegemonía, las clases dominantes haitianas recurrieron a los mismos patrones culturales de sus antiguos amos. Las llamadas élites, en su búsqueda de identificación con lo francés y lo occidental, tradicionalmente manifestaron un desprecio total hacia la cultura nacional. Desde entonces, el raquítico desarrollo de una burguesía local, la penetración imperialista y

³⁰ Robert Maguire, *op. cit.*, p. 17.

³¹ Jean-Jacques Honorat, *Le manifeste du dernier monde*, p. 125.

³² Véase el estudio de Jean Casimir, *La cultura oprimida*.

el subdesarrollo estructural, moldearon los rasgos culturales del país.

Al momento de la proclamación de la independencia, eran contados los nuevos dirigentes que hablaban francés, puesto que el créole era el idioma nacional. Pese a ello, se adoptó el idioma francés como el idioma oficial. Hasta hoy en día se vive en Haití la aberración de un idioma oficial que no es entendido o hablado por más del 90% de la población, imponiéndose sobre la lengua nacional relegada y estigmatizada. Lo mismo ocurre respecto al vodú, la religión popular y al cristianismo (sobre todo el catolicismo) que es la religión oficial. Otra herencia del colonialismo es el prejuicio de color que se desprende del racismo, por medio del cual los sectores mulattos manifiestan su sentido de superioridad y su desprecio hacia los de color de piel más oscuro. Dicho factor ha desempeñado un papel importante en la ideología de las clases dominantes y se encuentra presente a lo largo de toda la vida política. "La imposición religiosa, la imposición racista y la imposición lingüística fueron las tres armas utilizadas por los esclavistas en contra del negro, las cuales serán mantenidas y utilizadas posteriormente. Para la élite, la religión, el color y el lenguaje se han convertido en tres instrumentos de explotación económica." ³³

En épocas de crisis, surge el nacionalismo cultural impulsado por los sectores progresistas y la pequeña burguesía liberal, el indigenismo durante la ocupación norteamericana y la batalla para el reconocimiento del créole durante el duvalierismo. Pero las masas campesinas no están involucradas en el reencuentro de las expresiones estéticas y artísticas de la cultura popular ya que nunca han renegado de ellas sino que, por el contrario, forman parte de su ser.³⁴

La enajenación cultural cimentada sobre diferencias socio-económicas se encuentra íntimamente ligada a las estructuras de dominación. La ideología dominante pregona que el poder político y económico puede ser detentado solamente por las clases cultas, civilizadas, *eclairées* (iluminadas).

La "desculturación" viene a ser un instrumento de legitimización del poder. La opresión cultural se integra así al sistema de dominación.

³³ Jean-Jacques Honorat, *Enquête sur le développement*, p. 202.

³⁴ Véase Amílcar Cabral, "El papel de la cultura en la lucha por la independencia", en *Arte, Sociedad, Ideología*, núm. 21, junio-julio de 1977.

4. El Estado y el mantenimiento del "statu quo"

Pese a las reiteradas declaraciones sobre la importancia de la agricultura y a la evidente crisis que existe en el campo, el gobierno no tiene ningún plan de reforma agraria.

Si bien es cierto que la problemática de la producción agrícola va más allá de cualquier reforma parcial, la solución a algunos de los problemas, incluso desde el punto de vista de un Estado reformista, podría contribuir a hacer más rentables los beneficios del Estado y de la oligarquía. La pasividad del Estado y la oligarquía se coloca más bien en la perspectiva del mantenimiento del *statu quo*. Cualquier cambio en las estructuras existentes podría desbaratar o desestructurar todo el sistema de dominación, sobre todo tratándose del campo, que es la base de ese sistema.

Ni siquiera se trata de legitimar el sistema a través de una educación de docilidad. 85% de la población total del país es analfabeta y alcanza más del 90% en el campo. En 1971, "de una población de niños escolarizables de 1.4 millones, 125 000, es decir menos del 10% estaban inscritos en la escuela. Menos del 2% de todos los niños en el campo tienen la posibilidad de terminar el ciclo primario".³⁵ Todo el sistema escolar en el campo, los programas, la formación de los maestros, las condiciones materiales de alumnos y maestros, etc., tienden a cerrar el camino de la instrucción al campesinado.

Al mismo tiempo, las áreas rurales se caracterizan por la inexistencia de los servicios médicos y sanitarios más elementales. Se ha dicho, y con mucha razón, que la casi totalidad del campesinado nace, vive y muere sin nunca haber tenido la ocasión de tener contacto con un médico. La desnutrición endémica mantiene al campesinado en niveles de subsistencia inhumanos.

Además "todos los años el espectro de la hambruna se perfila en alguna región. La población de las zonas más áridas está reducida a buscar su alimentación en lo que queda de vegetación natural, recolectando hierbas y raíces... La mayoría de la población rural come mal, casi al límite del hambre crónica. Se muere todavía de inanición en el campo haitiano".³⁶ Basta citar los estragos causados por las hambrunas en 1915, 1928, 1954, 1963, 1964, 1966, 1978 y 1980. En 1977, por ejemplo, en la región de Leogane, el 3% de las personas murió de ham-

³⁵ Mats Lundals, *op. cit.*, p. 491.

³⁶ Paul Moral, *Le paysan haïtien*, p. 217.

bre. Durante estos últimos años, la población del noroeste ha vivido una situación de permanente hambruna.

Para mantener la dominación económica, política, social y cultural sobre las masas campesinas, se recurre a formas de opresión extremadamente violentas. Al hablar de duvalierismo, los politólogos se refieren a la violencia institucionalizada desde 1957. En realidad, para el campesinado, tal violencia siempre ha existido, y si bien las disposiciones constitucionales y legales habrían tenido alguna efectividad entre los integrantes de la oligarquía, las capas medias y aun los sectores populares urbanos, nunca funcionaron a nivel del campo. La existencia misma del Código Rural, la legislación de la *corvée* y muchas otras disposiciones atestiguan este hecho.³⁷

Podemos apreciar que el campesino no sólo vive en la miseria sino en una humillación constante y un desprecio abierto. Sus condiciones materiales de vida resultan tan duras, que más bien se parecen al tratamiento dado por los vencedores de una guerra a sus enemigos. Esta situación por sí misma encierra una gran violencia. Para ilustrar las condiciones en las cuales vive el campesino señalaremos a continuación algunos indicadores socioeconómicos. En vista de la riqueza y del antagonismo campo-ciudad, bien sabemos que estas cifras aumentan o disminuyen sustancialmente cuando se trata del campo.³⁸

- Tasa de mortalidad: 14.5 por mil;
- Tasa de mortalidad infantil: 149.1 por mil;
- Esperanza de vida al nacimiento: 52.2 años;
- 1 médico por 11 111 habitantes;
- 1 dentista por 100 000 habitantes;
- 1 farmacéutico por 50 000 habitantes;
- 1 enfermera por 6 250 habitantes;

³⁷ En el campo es un hecho común que el jefe de sección castigue a quien sea (hombres, mujeres, o ancianos) haciendo que se arrodille durante horas y hasta días, según su capricho, y los golpea con látigo. Por el robo de una gallina o por cualquier otro hurto, el jefe de sección rural, a falta de esposas, ata al acusado con una cuerda detrás de su caballo, obligándole ir al trote durante kilómetros hasta el pueblo más cercano. Durante todo el camino grita a los cuatro vientos "ladrón, ladrón".

³⁸ Hemos tomado como fuente la publicación oficial *Diagnostic de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population haitienne* del Consejo Nacional de Desarrollo y Planificación (CONADEP). Si bien algunos indicios están distorsionados (por ejemplo la tasa de analfabetismo), quedan todavía muy elocuentes y subrayan algunas diferencias entre campo y ciudad.

- 1 cama de hospital por 1 110 habitantes;
- En Puerto Príncipe se concentran el 70% de los recursos del sector de la salud;
- Tasa de analfabetismo: 75%;
- Porcentaje presupuesto para la educación: 9.5% (1976);
- Salario mínimo: \$2.64, diario;
- Tasa de inflación: 16.8% (1976);
- Ingreso per cápita: \$86.77, zona rural \$55 (1975-1976);
- Desnutrición 60% de la población menor de 5 años;
- Distribución de agua potable: 43.5% a la población total; zona rural 3%;
- Desempleo zona rural; 75% de desempleados disfrazados;
- Sistema de excreta: 28.5% del total de la población; zona rural 0.5%.
- En 1977 el sector público contaba con 265 agrónomos, 200 técnicos en agricultura y 50 enfermeros veterinarios.

En resumen, debido a la incapacidad del sistema para promover el desarrollo de las fuerzas productivas y del estado global de la sociedad haitiana, las estructuras de dominación tienden a reforzarse cada vez más y han convertido al campesino en un "verdadero zombi", desde el punto de vista de su participación activa en el sistema. Resulta paradójica la situación de una clase dominante omnipotente, pero en realidad tan débil que nunca pudo ni siquiera considerar unas soluciones populistas o reformistas para el campo. Cualquier cambio en los métodos de dominación puede estimular el surgimiento de reivindicaciones más radicales, creando una situación incontrolable que marcaría el derrumbe de las estructuras dominantes.

II. LA RESISTENCIA CAMPESINA

A merced de los fenómenos naturales, del Estado expoliador y de la oligarquía, el campesino se convierte en un cimarrón permanente; tiene que desarrollar toda una estrategia de sobrevivencia en una lucha que ya comprende varias generaciones.

1. La defensa colectiva

En el mundo rural, las tradiciones enriquecidas a través del tiempo a la vez que han impedido la desestructuración del campo han contribuido al desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos.

Frente a las dificultades del cultivo en terrenos cada vez más pobres y erosionados, y ante la falta de asistencia y orientación técnica, el campesino ha desarrollado una tecnología³⁹ adaptada a sus propias necesidades. Recurre a los métodos tradicionales empíricos sobre la utilización del suelo, los cultivos asociados, las luchas contra insectos, parásitos, enfermedades, etc. Sin este espíritu creador, aun los raquíticos resultados de nuestra producción agrícola habrían sido imposibles.

Ante la falta de servicios sanitarios y personal médico, la farmacopea tradicional ha tenido un gran desarrollo: los curanderos, los hierberos (médicos feuilles), los *houngans*, las mambo (sacerdotisas del culto vodú), etc. También la adopción de formas de trabajo colectivo suple la falta de dinero o de maquinaria para realizar ciertas faenas. Las asociaciones de trabajo permanentes, tales como las *escovades* o las *sociétés*, o temporales, como la *coumbite*, forman parte de la cultura del campesino.⁴⁰

Todos esos mecanismos forman parte de la cosmovisión y la práctica de una colectividad explotada, cuya situación empeora día a día. Aunque no podemos hablar de movimientos coordinados de resistencia se detectan ciertas actitudes y acciones que constituyen formas de defensa de la colectividad campesina para su misma sobrevivencia. "La esencia del movimiento campesino —señala Henri Landberger— es una reacción 'colectiva' (esto es, similar) ante su bajo status. Sin embargo, la acción puede ser similar sin estar coordinada."⁴¹

³⁹ A partir de una experiencia realizada en el Centro Agrícola de Madian Salignac (en el sur, cerca de Miragoane) por los estudiantes y profesores de la Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria, las Naciones Unidas filmaron una película: *Jardin, compé moulin* (El jardín de mi compadre) sobre las prácticas de cultivo utilizadas con eficiencia sobre las minúsculas parcelas de tierras campesinas.

⁴⁰ Sobre este tema véase Michel Laguerre, *Les associations traditionnelles de travail dans la paysannerie haïtienne*.

⁴¹ Henri Landberger, *Rebelión campesina y cambio social*, p. 36.

2. La pasividad como forma de resistencia

El estudio de las capas más explotadas de una sociedad siempre muestra la actitud del profundo desinterés que éstas manifiestan ante las diversas iniciativas tendientes a "mejorar" su situación. En todas las sociedades represivas, la llamada pasividad de las capas explotadas no es más que una forma de resistencia, ya que "todas las otras formas de protesta están bloqueadas por severas sanciones".⁴²

En el Haití colonial, los esclavistas se referían a la estupidez del esclavo y a su desinterés por trabajar. A lo largo del siglo XIX y hasta fechas recientes, muchos autores se referían a las pocas necesidades del campesino haitiano, lo que explicaría la aceptación de sus condiciones de vida infrahumana. En otras palabras, su pasividad sería la expresión de su "satisfacción".

Desde principios de siglo el doctor León Audain señalaba: "Es para tener que dar menos, que el campesino produce tan poco." En efecto, además de los factores estructurales que explican la poca productividad agrícola, hay que interpretar ésta como una adaptación del campesinado a las estructuras de explotación y un recurso para, cuando menos, neutralizarlas.

La preocupación expresada a menudo por los sectores dominantes de aumentar la producción agrícola de exportación se encontró tradicionalmente en contradicción con las aspiraciones del "habitant" a la pequeña propiedad y a la producción de subsistencia. El campesino manifiesta un marcado desinterés por el cultivo de los productos de exportación mientras que se hace evidente su deseo por desarrollar el cultivo de productos alimentarios.⁴³ Incluso en 1966 el Estado tuvo que tomar medidas drásticas tratando de restringir el cultivo de viveres. En 1979 se estimaba que las dos terceras partes de la superficie cultivable se dedicaban a productos de consumo interno.⁴⁴

⁴² Véase Gerrit Huizer, *El potencial revolucionario del campesino en América Latina*, p. 28.

⁴³ Después de una gira por el campo haitiano realizada en 1979, el sociólogo Bernard Ethéart hace la siguiente observación: "Los campesinos no arrancan los plantíos de café, pero si una catástrofe natural los destruye, no se volverá a cultivar café. Recorrí varias zonas, en las cuales me dijeron que eran cafetaleras antes del ciclón "Flora". Al momento de mi visita no había más que maíz en esa zona." (*Conjonction*, 1975, pp. 145-146.)

⁴⁴ Département de l'agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, *Evolution de certains produits agricoles*.

Cultivar víveres y no productos de exportación es la forma de cimarronaje del campesino, su mecanismo de defensa, así se asegura el *primum vivere*, su alimento cotidiano, y se protege de la inflación y del hambre. Además, la venta de víveres no se rige por las fluctuaciones de precios en el mercado internacional y el pequeño productor goza de cierto margen de control sobre el mercado interno. Tenemos que señalar que en ciertas regiones el comercio ilegal de víveres hacia las pequeñas Antillas —San Martín, Bahamas, etc.—, se ha reforzado en los últimos años.

3. Desconocimiento del aparato estatal

El campesino también manifiesta una actitud de resistencia frente al aparato estatal y a menudo vive “fuera de la ley”, casi siempre al margen de ella porque sabe que funciona siempre en su contra. Le tiene respeto y miedo, a la vez que siempre que le es posible evita el contacto con los representantes del Estado. Por ejemplo, ignora por completo al oficial del registro civil, en este caso el jefe de sección, y puede pasar su vida sin tener necesidad de identificarse.⁴⁵ Tiene su propio derecho consuetudinario y siempre que le es posible desconoce los fallos de los tribunales, por ejemplo, no le da importancia al título de propiedad, rigiéndose por el principio de que la tierra pertenece al que la trabaja. Para el campesino, el *placage* (concubinato) implica las mismas obligaciones que el matrimonio legal y desconoce las diferencias legales entre hijos naturales e hijos legítimos. Al respecto, Jean Casimir subraya con razón, que “las prácticas campesinas no caben dentro del marco jurídico criollo”.⁴⁶

La actitud de pasividad y “no cooperación” del campesino ha sido notada por la legión de expertos que han desfilado por las áreas rurales del país. Tal como lo recalca Gerrit Huizer, esta actitud “puede interpretarse como una resistencia a los campesinos dentro de un sistema social del cual no esperan mejoras esenciales”.⁴⁷ Por lo general tales cambios tienden a reforzar el poder local en la región.

⁴⁵ Hubert De Ronceray, *Sociologie du fait haïtien*, p. 14.

⁴⁶ Jean Casimir, *op. cit.*, p. 184.

⁴⁷ Gerrit Huizer, *op. cit.*, p. 99.

4. El refugio místico

Se puede señalar como otra forma pasiva de resistencia, la creación de un mundo mágico y el refugio en el misticismo. Frente a la agravación de la crisis y a la inseguridad que lo envuelve, el campesino busca la protección en sus creencias, ya que en realidad el vodú "es una religión práctica y utilitaria que se preocupa más de los asuntos de la tierra que de los del cielo".⁴⁸ El vodú familiar constituye toda una "estrategia social", puesto que "permite mantener una amplia red familiar y representa la garantía de un mínimo económico para el individuo".⁴⁹

Indefenso, recurre a sus loas (sus dioses) para pedirles protección. Para obtener justicia y alejar a las desgracias, las supersticiones, los "ouangas" se multiplican. El vodú también permite la venganza a nivel personal. A través de las generaciones, amplios sectores del campesinado han conservado una gran tradición de conocimiento de hierbas y plantas. En la época colonial, los esclavos hacían uso del veneno contra sus amos. La extensión de esta práctica provocó una verdadera psicosis del miedo entre los franceses. En la actualidad, ya que las leyes no pueden proporcionar justicia, existe siempre la posibilidad de recurrir, sin ser molestados por los aparatos legales, a una forma drástica de venganza: la muerte por veneno.

En época de crisis al mismo tiempo que se acentúan los aspectos místicos y defensivos del vodú, se multiplican las actividades de las llamadas sociedades secretas "(zobops, bizangos, galipotes, vlabindimue, champouelle, etc.) consideradas tradicionalmente como bandas de criminales... ligados por crímenes que han hecho juntos".⁵⁰ Los adeptos a estas sociedades se reúnen con regularidad, tienen signos distintivos que les permiten reconocerse entre sí y poseen un salvoconducto para circular de noche de un "territorio" a otro. La voz popular cuenta que en sus orgías, los "iniciados" comen carne y beben sangre humanas. Debido al hermetismo de sus miembros y la estricta clandestinidad de la organización, se conoce muy poco sobre la estructura, objetivo y funcionamiento de esas sociedades. Sin embargo, según Laennec Hurbon, ya no "representan un fe-

⁴⁸ Alfred Metraux, *Le vaudou en Haïti*, p. 81.

⁴⁹ Laennec Hurbon, *Culture et dictature en Haïti*, p. 68. En este libro Hurbon señala unos aspectos muy importantes del vodú y sugiere campos de investigación interesantes.

⁵⁰ Alfred Metraux, *Le voudou en Haïti*, p. 259.

nómeno restringido porque su número aumenta cada vez más. Si muchas personas se vuelven miembros de esas cofradías es por necesidad de protegerse. Algunos buscan realizar una venganza en contra de un enemigo, otros hacerse justicia, algunos más quieren asegurarse un trabajo u obtener una promoción social. En cada banda de *champouelle* se ejerce una cierta solidaridad económica y se obtiene, en principio, la garantía de no ser perseguido”.⁵¹

Estas sociedades están ligadas con las bandas de *raras*, integradas por campesinos, encuadrados por los bokos (sacerdotes vodú a la vez magos o brujos).

Estas “sociedades”, las *raras* no clandestinas, con una estructura muy definida, se forman durante la cuaresma y la Semana Santa. Las leyes les prohíben el acceso a las ciudades. Sus canciones a menudo constituyen críticas acerbas de la situación imperante.

Los estudios de Eric Hobsbawm sobre el fenómeno del bandidismo social y los de María Isaura de Queiroz sobre el mesianismo en Brasil, esclarecen estos fenómenos. En Haití, a todo lo largo de su historia, no se encuentran manifestaciones que puedan ser identificadas con este tipo de movimientos. Sin embargo, se podría preguntar en qué medida estas sociedades secretas, con todas las particularidades del caso, podrían considerarse como mecanismos de desafío en contra del orden establecido.

Hay que despojarse de muchos prejuicios para abordar este fenómeno y realizar investigaciones para conocer la estructura, organización y funcionamiento de esas sociedades y determinar cómo las percibe la población. A pesar de las evidentes limitaciones que manifiestan, es necesario evaluar en su justa dimensión el papel que eventualmente están jugando en el fenómeno de resistencia y el papel que podrían desempeñar en el futuro.

La violencia que impregna los métodos de dominación y explotación de las masas campesinas asegura la eficacia del aparato de opresión. Al mismo tiempo, la estrategia de sobrevivencia adoptada por el campesinado permite su funcionamiento dentro de los límites impuestos por el sistema. De ahí el mantenimiento de un cierto equilibrio: por una parte las clases explotadoras se aseguran el funcionamiento de la maquinaria opresiva al mantener a la masa del campesinado fuera

⁵¹ Laennec Hurbon, *op. cit.*, pp. 138-140.

de toda toma de decisión; y, por la otra, las estructuras de resistencia, efectivas en la lucha sorda y cotidiana para la sobrevivencia no llegan a traspasar el umbral que permitiría una lucha abierta y declarada. Sólo la irrupción en la escena política de las masas campesinas en alianza con las otras clases explotadas, puede romper dicho equilibrio abriendo el proceso de profundos cambios en la estructura agraria y de una transformación radical de la sociedad haitiana.

III. DOMINACIÓN DUVALIERISTA Y RESISTENCIA DEL CAMPESINADO

Tras reñida lucha electoral (1956-1957), tomó el poder François Duvalier, representante de la oligarquía negra, apoyado por la pequeña burguesía negra y por algunos sectores populares.

Durante la campaña electoral se hizo patente la envergadura de la crisis socioeconómica y las agudas contradicciones de clase que sacudían al país. En realidad, al acceso de François Duvalier a la Presidencia marcó el derrumbe del sistema político que había sido establecido desde hacía más de dos décadas por la ocupación norteamericana.

Se estructuraron nuevos métodos de dominación política traducidos en la implantación de un terrorismo de Estado, una dictadura de carácter personalista con rasgos fascistoides y un sistema de poder basado en la violencia institucionalizada.⁵²

Fue así como el duvalierismo aniquiló a las fuerzas políticas tradicionales y desmembró a las instituciones del poder, en particular al ejército, pilar fundamental del sistema que fue neutralizado y debilitado con la creación de un nuevo cuerpo represivo, los Tontons Macoutes, exclusivamente al servicio del presidente. Por otra parte, el poder judicial y la Iglesia fueron domesticados, y la prensa amordazada.

Los sectores progresistas, los estudiantes, los sindicatos y las asociaciones profesionales lucharon en contra de la fascistización del Estado haitiano. Sin embargo, Duvalier repitió estos movimientos recurriendo a la tortura, la cárcel, el asesinato y el exilio. Para 1964 se habían suprimido las garantías consti-

⁵² Véase entre otros, Gérard Pierre-Charles, *Radiografía de una dictadura*; Bernard Dietrich y Al Burt, *Papa Doc: The truth about Haiti today*.

tucionales, se encontraban acalladas todas las expresiones democráticas del país, "macoutizadas" las instituciones existentes y prohibidas las organizaciones de masas; en una palabra, el terror se había convertido en el instrumento predilecto del gobierno.

La crisis económica se profundizó tras la maquinaria represiva y la consolidación del duvalierismo. Durante el período 1957-1958, el país sufrió un verdadero colapso económico. Todos los indicadores económicos disminuyeron en términos absolutos con la consecuente degradación, cada vez más acentuada, de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En el nuevo contexto surgido en América Latina a partir de la Revolución cubana, el imperialismo norteamericano estrechó su alianza con el duvalierismo; le proporcionó ayuda política, económica, militar y policiaca, permitiendo una mayor integración de todos los aspectos de la vida nacional al sistema de dominación. La dictadura creó las condiciones óptimas para las inversiones capitalistas, mientras se consolidaba el bloque oligárquico subordinado al imperialismo.

En abril de 1971 Jean-Claude Duvalier, hijo del dictador, recibió el poder y así la presidencia vitalicia cobra también el carácter de hereditaria. El aplastamiento de la oposición al final de la década de los sesenta y el apoyo irrestricto de Estados Unidos y de la burguesía, permitieron al heredero anunciar una nueva etapa del duvalierismo, caracterizada por la modernización de los métodos de represión, un relativo desarrollo capitalista con la llamada "revolución económica" (altos precios del café, instalación de industrias maquiladoras, incremento de las inversiones extranjeras) y la reconciliación social entre la burguesía negra y la burguesía mulata. Sin embargo, los efectos de la crisis económica en Estados Unidos y la caída del precio del café en el mercado internacional, no tardaron en repercutir en la economía haitiana; al mismo tiempo se apreciaba un auge sensible de las luchas populares. La conjunción de esos factores mostraron la fragilidad de la "estabilidad" del gobierno de Jean-Claude Duvalier.

En esta parte del trabajo nos proponemos analizar algunos aspectos de las luchas políticas del campesinado bajo el gobierno de François Duvalier. Si bien el movimiento campesino no llegó a consolidarse y a entroncarse con una lucha amplia y nacional, representó una etapa en la resistencia contra la do-

minación secular de las masas populares, abriendo paso a las futuras luchas de liberación nacional.

François Duvalier asentó su dictadura sobre una maquinaria de terror y de represión. No sólo reforzó los mecanismos de dominación que había creado la oligarquía, sino que también los revigorizó al crear nuevas instituciones e instrumentar prácticas nuevas en la vida política haitiana. Al mismo tiempo recurrió sistemáticamente a un arsenal teórico-político que se plasma en la llamada "doctrina duvalierista". Con relación al campesinado consideraremos el duvalierismo en sus aspectos ideológico, político y económico.

1. *El campesinado bajo el duvalierismo*

a) *La 'négritude' y la manipulación ideológica.*⁵³ En la década de los años treinta, junto con Lorimer Denis y Kleber Jacob, François Duvalier fundó la escuela Les Griots que propugnó la ideología noirista como legitimación e instrumento de dominación política. Esta corriente explica la evolución haitiana fundamentalmente a partir de la llamada "cuestión de color". De acuerdo con esta interpretación, la historia del país se presenta como expresión de la constante lucha por el control del Estado entre la "clase mayoritaria negra" y la "clase minoritaria mulata". Esta última tradicionalmente ha acaparado el poder político y económico.⁵⁴ Fortalecidos por la ocupación norteamericana, los mulatos pretendían "constituirse en plutocracia y habían establecido el exclusivismo como sistema de gobierno". De ahí que para asegurar una política de equilibrio se hacía necesaria la alianza de los "humillados" y explotados, es decir, el campesinado, el proletariado y la clase media negra. Dicha alianza sería encabezada por un negro descendiente de campesinos pero con un nivel intelectual alto.

⁵³ Véase Laennec Hurbon, *Culture et dictature en Haïti*. En este trabajo, Hurbon realiza un análisis muy interesante de la ideología duvalierista.

⁵⁴ "Cómo explicar que desde 1804 la clase negra sin embargo mayoritaria haya sido dominada por la clase minoritaria (mulata)" (cursivas del autor). François Duvalier y Lorimer Denis, *Le problème des classes dans l'histoire d'Haïti*, p. 94.

Dumarsais Estimé (1946-1950) y los *aunthentiques*⁵⁵ con su doctrina del noirismo estimularon en una primera etapa, la emergencia en la escena política de un sector de la pequeña burguesía negra permitiéndole participar de los privilegios económicos otrora monopolizados por la burguesía mulata. François Duvalier tendría la misión de consolidar dicho proyecto noirista. La concepción noirista deliberadamente confunde los conceptos de clase y color para disfrazar los problemas de explotación y discriminación, recurriendo a un ropaje demagógico para convencer a las masas. Por esta razón, el campesino, "el gran desconocido de la historia nacional" goza de un lugar privilegiado en el discurso duvalierista.

De hecho, el ideólogo del noirismo desplaza el problema del campesino del terreno político-económico hacia lo cultural. "El problema haitiano nos parece ante todo cultural", advierte. "Se necesita una reforma integral de la mentalidad haitiana [...]. Soy un candidato para salvar al campesino de la superstición de sus ancestros." Ante el problema así planteado, Duvalier, en una actitud ambivalente, se presenta como rescatador de los valores culturales del campesinado.

Durante la campaña presidencial, Duvalier declaró al periodista Bernard Dietrich: "He sido capaz de estudiar la cultura mental y material del campesinado."⁵⁶ En efecto, aprovechó su amplio conocimiento de la psicología, las costumbres y la vida de los campesinos para fortalecer su aparato de dominación.

Quizás por vez primera en la historia nacional, el gobierno no prohibió oficialmente el vodú, sino que el presidente reivindicó su práctica. Concedió posiciones de poder a conocidos sacerdotes vodús, como Zacharie Delva de Gonaïves, Antoine Sapired, Edouard Joseph (Ti Bofié) de la llanura del Cul-de-Sac; invitó asimismo, a *houngans* de todos los rincones del país a visitar el palacio nacional. Anticipándose al impacto de tal actitud sobre la mentalidad popular, Duvalier manipuló estos elementos para asentar su dominación y asegurarse que la cultura popular permaneciera en su condición de "cultura oprimida". Con espíritu maquiavélico, utilizó el vodú para enmascarar los actos de represión del régimen y aislar cualquier intento de organización campesina.⁵⁷

⁵⁵ Palabra surgida en 1946 para designar a los elementos negros de la obligarquía o de la clase media, aspirantes o recién ascendidos al aparato político y burocrático.

⁵⁶ Bernard Dietrich y Al Burt, *Papa Doc*, p. 335.

⁵⁷ En el campo, cuando los agentes del gobierno empezaban a raptar

b] *Los Tontons Macoutes en el campo y la falsa ampliación de la base política.* Al abandonar los senderos de la democracia representativa y consolidar su poder personalista y exclusivista, François Duvalier no sólo recurrió a nuevos mecanismos de dominación sino también cambió las reglas del juego prevalecientes en el mundo político haitiano. Se destacó el desmantelamiento de la institución más fuerte de la nación: el ejército. "No vacilé, confiesa en un discurso pronunciado en abril de 1959, en blandir el hacha en contra del edificio del ejército, el cual estaba amenazado de derrumbarse." Previendo cualquier posibilidad de golpe de Estado, Duvalier debilitó al guardián del *statu quo* establecido por la ocupación norteamericana y con ello al único monopolizador de la violencia política regulador de la vida política del país. Transformó la estructura del ejército, sus modos de reclutamiento y de promoción, logrando convertirlo —según la expresión de Kern Delince— en un ejército presidencializado. Así, esta institución pierde toda independencia a la par que disminuye en extremo su capacidad operativa. Bajo el régimen de François Duvalier el ejército se somete a tal punto a la Presidencia de la República, que "aparece como un ejército privado sostenido por fondos públicos. Se convierte en el feudo del jefe de Estado y realiza tareas de policía cada vez más degradantes".⁵⁸

Duvalier creó además un cuerpo paramilitar, los Tontons Macoutes, fuera de la estructura del ejército. El 7 de noviembre de 1962, dicho cuerpo, llamado también milicia,⁵⁹ se institucionaliza al convertirse en "Voluntarios de la Seguridad Nacional". En un discurso oficial pronunciado en 1968, Duvalier proclamó: "asocié el pueblo, a través de la organización de los Voluntarios de la Seguridad Nacional, a la defensa de sus

a los habitantes, se rumoreaba que los grupos vodú de *zobops* eran responsables de esas desapariciones. A menudo para impedir la extensión de la influencia de ciertos líderes naturales, se les acusaba de ser *loup-garoups* y antropófagos. Rápidamente éstos y su familia se encontraban aislados dentro de su comunidad.

⁵⁸ Kern Delince, *L'armée d'Haïti*, p. 80.

⁵⁹ El duvalierismo se caracteriza por esa tendencia de apropiarse y de prostituir ciertos conceptos, instituciones y héroes nacionales o progresistas. Impuso el nombre de milicia a los cuerpos de Tontons Macoutes no como una reminiscencia de la milicia colonial (cazador de esclavos) sino de la milicia cubana, un cuerpo eminentemente popular de defensa de la revolución. Más tarde, cuando los revolucionarios haitianos rescatan en su dimensión popular y libertadora al cimarrón, se observará la misma actitud del dictador que edificó sobre la plaza del palacio, una gran estatua del cimarrón.

intereses. Este cuerpo tiene un amo único, Duvalier, tiene un jefe único, Duvalier; y lucha para un solo destino, Duvalier en el poder... Esa institución se ha constituido como una fuerza de disuasión capaz de defender enérgicamente la estabilidad del gobierno y la soberanía nacional".⁶⁰

Sin embargo, el gobierno no circunscribió estos cuerpos paramilitares a Puerto Príncipe y a las ciudades de provincia. Desde el comienzo del régimen estableció una práctica nueva para acarrear a los campesinos a la capital para festejar las fechas importantes del duvalierismo.⁶¹ A partir de 1960-1961, en una innovación de grandes consecuencias políticas, la formación de los Tontons Macoutes se extendió al campo, penetrando hasta los rincones más aislados del país; esta fuerza se volvió omnipresente y omnipotente. En el campo, el tontonmacoutismo se propagó rápidamente debido a que, en un esfuerzo por protegerse, muchos campesinos se integraron a sus filas. *Avant-Garde*, periódico teórico del Partido d'Entente Populaire, destacaba esta situación al señalar que los trabajadores agrícolas del noreste, aunque sostenían una lucha económica sin cuartel contra las compañías norteamericanas, se habían integrado a la "milicia" civil reaccionaria del gobierno. Algunas veces, motivados por sus luchas reivindicativas, los campesinos recurren a los Tontons Macoutes aprovechando los conflictos y rivalidades entre ellos. Por ejemplo, durante 1963-1964, los campesinos de l'Artibonite pidieron ayuda a Zacharie Delva para expulsar al terrateniente Attié de las tierras que éste había acaparado.⁶²

Al integrar elementos campesinos a su aparato paramilitar, el régimen extendió su control policiaco y fortaleció su red represiva haciéndola más eficaz. Al mismo tiempo, al proporcionar al tonton macoute poder de decisión sobre la población, al darle un revólver y al investirlo de autoridad, creó el espejismo de una aparente incorporación del campesinado al aparato estatal. De esta manera quienes siempre habían sido objeto de exacciones y humillaciones, podían ahora a su vez, humillar, robar y cometer desmanes de manera impune.⁶³ Además, se les crea la ilusión de poseer el poder, pues el tonton macoute depende a veces directa y exclusivamente del presidente. En este sentido consideramos que el duvalierismo in-

⁶⁰ François Duvalier, discurso del 22 de junio de 1964.

⁶¹ Gérard Pierre-Charles, *Radiografía de una dictadura*.

⁶² *Avant-Garde*, 12 de septiembre de 1964.

⁶³ Véase Gérard Pierre-Charles *Radiografía de una dictadura*.

trdujo una nueva relación entre el poder y el campesinado. La institución de los Tontons Macoutes en el campo tuvo repercusiones muy importantes en la vida rural.

Por otra parte el Código Rural de 1964 introdujo disposiciones que, pese a nunca ser aplicadas, pretendían la cooptación de un sector más amplio del campesinado y creaban más expectativas.

Estos intentos subrayan cómo el duvalierismo, si bien no buscó las bases de consenso a su régimen, trató, sin embargo, de conseguir una ampliación de sus bases políticas.

c] *La política de desarrollo del duvalierismo.* La política agrícola duvalierista no se desvió de la línea adoptada por los gobiernos anteriores. Una vez más, se multiplicaron ambiciosos proyectos de desarrollo agrícola y surgieron numerosos organismos nacionales para promover el aumento y diversificación de la producción exportable.

Lejos de reflejar una estrategia de desarrollo, esta situación pone de manifiesto la irracionalidad y también la ausencia de una auténtica política agraria, ausencia que, aun dentro de una perspectiva reformista, no obedeció a factores fortuitos. La estructura agraria era tan arcaica y la crisis tan profunda que cualquier reforma podría generar un dinamismo incontrolable por la oligarquía y, tal vez, señalaría el inicio del derrumbe del sistema. En efecto, los factores estructurales, institucionales y en menor medida coyunturales, ligados a la ineficiencia e incapacidad del régimen, constituyen un enmarañamiento tan complejo que mientras no se desate, cualquier pretensión de desarrollo en el campo resulta ilusoria.

El duvalierismo ha sido incapaz de modernizar los rasgos precapitalistas y arcaicos de la estructura agraria, situación que ha frenado el desarrollo de la agricultura, impuesto su sello a la economía y constituido, también, un obstáculo a la acumulación del capital.

Además, bajo el régimen duvalierista, nuevos mecanismos de explotación y de opresión han agravado los tradicionales padecimientos de las masas rurales.

d] *Situación del campesino.* Desde los principios del duvalierismo se observó una verdadera fiebre hacia el acaparamiento de tierras: "La acción de despojo contra el pequeño propietario se convirtió en un fenómeno cotidiano y generalizado".⁶⁴ El último cuarto de siglo ha presenciado una transferencia inu-

⁶⁴ Parti d'Etente Populaire, *Voies Tactiques*, pp. 1-2.

sitada de la propiedad agraria. Fiel a la tradición, los despojos sufridos por los campesinos se realizaron en provecho de algunas compañías extranjeras, particularmente norteamericanas. Basta citar algunos ejemplos. La Compañía Sedren recibió en 1961, 90 000 *carreaux* (116 000 hectáreas) para la explotación del cobre. En mayo de 1963, el gobierno concedió 750 *carreaux* (967 hectáreas) en el noroeste del país a la compañía norteamericana HACOR. En octubre de 1965, en la llanura de Cayes, Torbeck, el gobierno otorgó al canadiense Louis Vachon, una concesión sobre una superficie considerable destinada a la instalación de industrias alimenticias. El contrato se firmó por 99 años con opción a renovarlo. Además, en ese mismo año, inmensas extensiones de tierra en la región del sureste (Morne l'Hospital) fueron declaradas zona turística en beneficio de una compañía norteamericana. En noviembre de 1969, parte del litoral norte (comuna de Cap Haïtien, Acul du Nord, Limbé, Borgne) fue declarado zona de utilidad pública y concedida a una empresa con capital suizo para la edificación de un centro turístico. Como resultado de estas concesiones miles de campesinos, pequeños propietarios y arrendatarios de tierras estatales fueron desalojados.

Por su parte, con una voracidad sin precedentes en la historia de Haití, la oligarquía gobernante no se limitó a acaparar tierras de campesinos sino también se apropió de tierras del Estado. Aunque todavía no se han realizado estudios al respecto, algunos hechos permiten suponer que durante el gobierno de François Duvalier hubo un proceso intenso y acelerado de concentración de tierras en manos de una minoría escudada tras la poderosa maquinaria de la dictadura.

De pequeño médico rural, Duvalier se convirtió en un importante terrateniente y, con él, se enriquecieron muchos de sus partidarios. Los Tontons Macoutes de mayor jerarquía desplazaron a los terratenientes tradicionales no duvalieristas y no vacilaban en despojar a pequeños propietarios y arrendatarios para formar sus propias plantaciones. Siguiendo el ejemplo de sus superiores, agentes represivos de menor categoría, algunas veces, se apropiaban de hasta un cuarto de hectárea perteneciente a los pequeños propietarios. A título de ejemplo, apuntamos algunos casos de despojos:

- En Carrefour Poy, Duvalier estableció una granja de gran extensión.

- En la sección de los Vastes se apropió de 200 *carreaux* (290 hectáreas) del dominio estatal.
- Luckner Cambronne despojó a los campesinos de Courjolles, Imbert, Robert, Lalanne y Sous Bassin para establecer plantaciones de limón y plátano.
- Lucien Cantave en la región de la Cerise (Les Matheux) se apropió de más de 50 *carreaux* (72.5 hectáreas).
- Joseph Molière en los Matheux se apoderó de 350 *carreaux* (507 hectáreas).
- Stripolet en la comuna de Thiotte acaparó más de 100 *carreaux* (145 hectáreas).
- Jean Julmé en la región de Ganthier y Thomazeau tenía más de 300 *carreaux* (435 hectáreas).
- Madame Francesca Saint Victor obtuvo tierras de la SHADA para la Sociedad Nacional Agrícola e Industrial (SONAGRIN) más de 2 000 *carreaux* (2 850 hectáreas) en la región de Anse d'Hainault.
- Joel Bastier ocupó la Habitación Marie Jeanne Fougère de más de 400 hectáreas.
- En Nan Colline (cerca de Leogane), el tonton macoute Gesner Cherubin acaparó 500 *carreaux* (625 hectáreas).
- El terrateniente Mervilus acaparó en Archaise la Habitación Aumont de 815 *carreaux* (1 051 hectáreas).

Los acaparamientos se llevaron a cabo principalmente en las ricas llanuras del norte, Artibonite, Leogane, Cayes y Cul-de-Sac, regiones que no demoraron en manifestar un proceso acelerado de latifundización.⁶⁵ Este fenómeno provocó la desarticulación del mundo rural y estimuló el "bandolerismo", según el lenguaje oficial. Los campesinos expropiados se veían obligados a emigrar hacia regiones más prósperas.⁶⁶ Este movimiento migratorio cobró tal dinamismo que al cabo de 25 años alcanzó dimensiones incalculables.

⁶⁵ Podemos citar a los caciques duvalieristas protagonistas de despojos en gran escala que llamaron la atención de periódicos clandestinos de la época y provocaron reacciones violentas del campesinado.

Llanura del Cul-de-Sac: F. Duvalier, Luckner Cambronne, Bernadotte, Audain Muscardin, Bernard Charles, Raymond, Alexis, Brutus Brave, Joseph Sorna, Bertho, Raymond Roy, Aristene Jecrois, Jean Julmé, Veillevalaix Liautaud, Marcial Célestin, Jacques Bellegarde, Ludger Frédérique, Pierre Dessources, etc. En la región de Jérémie: Saint Ange Bontemps, Numa Saint Louis, Clément Saint-Cloud, Willy Doubeau, Michael Mont-Louis, Daphnis. En la región de Jacmel, André Simon.

⁶⁶ *Avant-Garde*, 12 de diciembre de 1964.

Al mismo tiempo, se intensificaron todos los mecanismos de opresión, extorsión y explotación del campesinado, como monopolización de los canales de agua, excesivos impuestos fiscales, despotismo, etc. Como si esto fuera poco, se impuso nuevamente la tristemente célebre modalidad de trabajo forzado, que había sido abolida después de una larga lucha durante la ocupación norteamericana. A esta modalidad recurren los Tontons Macoutes, los terratenientes duvalieristas, los empleados, y los administradores de grandes plantaciones. Por ejemplo en 1967, *Voix du Peuple*, denunció que los propietarios de la región del Cul-de-Sac, "repartieron unas parcelas ínfimas de sus propiedades a los medieros e impusieron la *corvée* a los 500 o más que explotaban directamente. Una vez a la semana, todos los vecinos de la aldea son obligados a cumplir la *corvée*, si se niegan tienen que pagar un dólar al policía macoute y si tampoco acceden a esta medida, entonces se les golpea y, a menudo se les manda a la cárcel".⁶⁷ En todo el país se utilizó esta práctica que obliga al campesino a trabajar no sólo sin remuneraciones sino también sin una alimentación siquiera simbólica. También se recurre a la *corvée* en las obras públicas.

Con relación a los regímenes anteriores, la opresión al campesinado cobra formas más violentas.* El tonton macoute no respeta ninguna ley, ninguna tradición, ninguna moral. En el campo, rige la ley de la fuerza, en el sentido estricto del término. Las cosechas son robadas, las mujeres violadas, los campesinos maltratados, golpeados, humillados y en ocasiones, como lo veremos más adelante, se llevan a cabo verdaderas masacres colectivas.

IV. MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y CAMPESINADO

El campo ha sido escenario de algunos movimientos oposicio-

⁶⁷ *Voix du Peuple*, diciembre de 1967.

* Para ilustrar el grado del primitivismo de la represión en el campo, citaremos el ejemplo siguiente: el jefe de sección en Degan, Raymond Isaac, arrestó a un campesino que pasando sobre sus tierras recogió dos aguacates. Después de amarrarlo con lazos, Isaac le cortó una oreja y le obligó a tragársela y a ingerir un litro de aguardiente. El campesino murió bajo sufrimientos atroces.

nistas, encabezados por ciertos sectores de la pequeña burguesía y algunos sectores del ejército con filosofía y orientación diferentes. Podemos dividirlos en dos: a] las invasiones desde el exterior y b] los movimientos que se organizaron dentro del país.

Movimientos antidualieristas desde el extranjero

Desde su ascenso a la Presidencia, Duvalier adoptó una nueva fórmula política en contra de sus adversarios: el exilio. Efectivamente, a partir de 1958, muchos políticos haitianos se encontraban en Cuba, República Dominicana o en Estados Unidos. Las fuerzas antidualieristas en el exterior, principalmente desde Estados Unidos y República Dominicana, prepararon diversas "invasiones". Cabe señalar la acción militar en contra del régimen duvalierista, preparada en agosto de 1959 por el ex candidato presidencial Louis Déjoie, quien se valió de 29 jóvenes cubanos, entusiasmados por la exitosa experiencia de la Sierra Maestra; las invasiones dirigidas por el ex coronel León Cantave y un grupo de ex oficiales en República Dominicana —apoyados por los sectores más reaccionarios del ejército dominicano— en agosto de 1963, septiembre de 1963 y en septiembre de 1964, así como las acciones militares bajo la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Haitianas, encabezadas por Fred Baptiste, y de la organización Jeune Haïti en 1964. En enero de 1970, los hermanos Baptiste, Fred y Renel, intentaron una última incursión desde territorio dominicano.

En realidad, este esquema de acción militar rescataba las prácticas utilizadas durante el siglo XIX en las luchas interoligárquicas por el control del Estado. Pero los sectores que lo aplicaban no tomaron en cuenta los cambios introducidos en el país desde la ocupación norteamericana y durante el duvalierismo. Al operar en el campo esperaban por cuestión de clase contar con la participación espontánea del campesinado en su movimiento, por lo cual, se puede comprender la pasividad de los campesinos frente a las tropas de "invasión". En algunos casos, debido a la nueva estructura de dominación y de control, los campesinos delataban las actividades insurreccionistas a los agentes duvalieristas por miedo o porque no veían reflejados sus intereses en dichos movimientos.

Después de las incursiones de León Cantave, se perpetraron

ron verdaderas masacres de campesinos hasta un kilómetro de distancia de toda la extensión del límite fronterizo. Los desmanes más notorios fueron los de Dodo Nassar, sacerdote vodú, encargado de quemar cosechas y casas. En Jérémie, de donde provenían algunos de los guerrilleros, las familias Sansaricq, Drouin, Laforet, Guilbaud, Villedrouin fueron asesinadas, sus casas incendiadas y sus negocios saqueados. Jérémie y sus alrededores se convirtieron en una zona de terror. La sección rural de Nan Mapou, en la región de Jacmel, sufrió las atrocidades del ejército y de los Tontons Macoutes, encabezados por André Simon. En Jacmel se arrestaba a cualquier campesino que compraba con dólares y muchos fueron asesinados por poseer uno o dos dólares.⁶⁸ Para atemorizar a la población, el gobierno recurrió a medidas repugnantes: el cadáver de Yvan Laraque fue expuesto hasta su descomposición en la calle principal de Puerto Príncipe; las cabezas de Roland Rigaud, Réginald Jourdan y Guslé Villedrouin fueron exhibidas como trofeos en el campo y en ciudades de provincia.

No analizaremos todas las causas explicativas del fracaso de estos movimientos, pero es necesario señalar no sólo la complicidad y la cooperación de Washington y la CIA con Duvalier sino también la colaboración de las fuerzas policíacas y políticas dominicanas. Por otra parte, es importante destacar entre otros factores, la improvisación en la preparación de los movimientos, la composición urbana de los integrantes, la falta de una base organizativa en el interior mismo del país, etc. Únicamente se especulaba sobre los sentimientos antiduvalieristas y acerca de la espontaneidad de las masas para integrarse a esos movimientos. Además, algunos de los dirigentes, por falta de visión política, se negaban categóricamente a negociar cualquier alianza antiduvalierista con la izquierda organizada clandestinamente en el país.

La actitud del campesinado fue de simpatía, pero sin compromiso. Al principio, los "invasores", sobre todo los de Jeune Haïti atacaron con éxito las guarniciones militares y recuperaron armas. Además realizaron diversas operaciones punitivas contra los Tontons Macoutes bien conocidos por su crueldad, y repartieron sus bienes entre los campesinos. Esta actitud les aseguró un apoyo momentáneo. Sin embargo, no enarbolaban ningún proyecto para establecer una identificación entre su movimiento y la causa campesina.⁶⁹

⁶⁸ Bernard Dietrich, *op. cit.*, p. 297.

⁶⁹ La ideología del movimiento Jeune Haïti se refleja en un artículo

La falta de participación de las masas rurales en estos movimientos antidualieristas no debe explicarse, de ninguna manera, por la apatía o imposibilidad de su movilización; más bien, es necesario referirse a los objetivos políticos y a la táctica de los grupos armados. Después de cada derrota de los insurgentes, el gobierno se fortalecía.

2. Movimientos desde el interior

En los primeros años del duvalierismo, frente a la fascistización del Estado, los sectores progresistas y las organizaciones democráticas existentes manifestaron una oposición al gobierno que alcanzó su apogeo durante los años 1961-1963. Merecen ser señaladas en particular las luchas de los estudiantes agrupados en la Unión Nacional de Estudiantes Haitianos (UNEH) en 1961, la de los profesores dentro de la Unión de los Profesores de la Enseñanza Secundaria (UNMES), y la de los obreros a través de la Unión Intersindical Haitiana (UIH). Estos movimientos, circunscritos a Puerto Príncipe, fueron reprimidos por el gobierno que prohibía el funcionamiento de organizaciones y asociaciones sin importar sus objetivos y orientación. Así, el régimen duvalierista fue cerrando la posibilidad de toda oposición democrática legal ante el gobierno.

Por otra parte y sin relación con estos movimientos urbanos, las acciones espontáneas de campesinos víctimas de los despojos empiezan a adquirir un nuevo carácter en diversas regiones rurales. Los campesinos se levantan no en contra del régimen sino para defender sus tierras robadas por los rapaces duvalieristas y Tontons Macoutes.

Citaremos dos casos bastante ilustrativos en donde el movimiento tomó un camino legal. En 1959-1960, la viuda del ex presidente Dumarsais Estimé recibió una concesión de 258 hectáreas (*carreaux*) plantadas de arroz, ubicadas en la rica llanura del Artibonite al este de obva (Organismo de Desarrollo del Valle de Artibonite). Estas tierras estaban ocupadas

de Gérald Brière que subraya: "Si no aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la historia actualmente, para realizar una revolución decisiva y realista, antes de un cuarto de siglo una REVUELTA CAMPESINA dirigida por una intelligentsia aliada al comunismo internacional se producirá con una justa violencia para realizar una revolución radical, extremista y sangrienta." *L'élite et la Nation*, *Jeune Haiti*, núm. 2, enero-febrero de 1963.

desde años atrás por pequeños arrendatarios y plantadas de arroz. El ejército de St. Marc quiso desalojar *ipso facto* a los ocupantes, pero éstos se resistieron y llevaron el caso ante el tribunal de St. Marc. A pesar de un juez corrupto, la determinación casi desesperada de estos pequeños campesinos, lo obligó a dictaminar que no podrían ser desalojados de estos terrenos.⁷⁰

En los años de 1963-1964, el terrateniente Attié trató de adueñarse de 645 a 700 *carreaux* (aproximadamente 903 hectáreas) ocupadas por medieros en la región de la Hatte Chevreau. Los campesinos armados con machetes, picos, piedras, etc., lucharon exitosamente contra los gendarmes enviados desde St. Marc y el conflicto se resolvió a su favor aprovechando además una rivalidad entre los jefes macoutes (Attié contra Zacharie Delva).

En mayo y junio de 1965, el verdugo Ludger Frédérique —apoyado por Jean Julmé, ministro de la Defensa y Villevalaix Liautaud diputado de la circunscripción— no sólo suspendió un proceso de desalojo y expropiación en Boen sino que también fue obligado a dar marcha atrás, frente a la determinación de los campesinos de la zona por defender hasta con las uñas sus predios amenazados. Estaban decididos a vengar los abusos sufridos y la muerte de algunos de sus habitantes de la región, entre ellos Lhérisson Dorval, victimados por los Tontons Macoutes.

Aparte de los movimientos realizados en protesta por los despojos, podemos señalar también otros que solicitaban la irrigación de la tierra, el establecimiento de cooperativas y algunas mejoras en la vida de los campesinos. En 1965 por ejemplo, los cultivadores de caña en la llanura de los Cayes, arrancaron sus plantíos en protesta porque la empresa estatal no les había pagado. Incluso se pueden citar algunos casos en donde se registraron enfrentamientos con el poder. En febrero de 1966, Gasner Cherubin, gran terrateniente y verdugo conocido en la zona de Nan Colline, fue designado oficialmente candidato a diputado para Leogane. La agitación en contra de Cherubin fue tan grande que el gobierno desistió de su propósito. De todos modos y pese a que estos movimientos no podían adquirir carácter de levantamientos, la intolerancia del gobierno no permitió siquiera que el campesinado canalizara su descontento por vías legales. La represión siempre fue despiadada

⁷⁰ Testimonio, mayo de 1981.

y produjo muchas muertes. Reconociendo esta desvinculación entre el movimiento espontáneo de los campesinos y una organización política, el Partido de Entente Popular señala en 1966: "Bajo el gobierno de Duvalier brotaron diversos movimientos en varias regiones del país en las cuales la presencia de los revolucionarios era inexistente o nula. Los campesinos han carecido de orientación. El gobierno los ha masacrado."⁷¹

Sin embargo, estos movimientos estuvieron circunscritos a determinadas regiones (llanuras del Cul-de-Sac) de Artibonite y del Norte) y no constituyeron sucesos que pudieran desembocar en una organización campesina permanente.

V. LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPESINO EN LAS LUCHAS ORGANIZADAS

El fracaso de las "invasiones" organizadas entre 1959 y 1964 puso de relieve la debilidad de cualquier movimiento sin la participación de la población rural. Pese a la miseria y descontento del campesinado, no se podía contar con su movilización espontánea. Es por ello que a partir de 1965-1966 se empezó a definir un nuevo tipo de articulación entre la oposición y el campesinado. Esta concepción fue promovida por dos partidos: el Partido Popular de Liberación Nacional (PPLN), surgido en 1954, y el Partido de Entendimiento Popular (PEP), en 1959. Frente a la violencia del régimen, estos partidos empezaron a instrumentar nuevas formas de lucha clandestina y se orientaron hacia una sistemática penetración en el campesinado y en la clase obrera. Propusieron la constitución del Frente Unido, democrático, antidictatorial, anti-feudal y antimperialista, para satisfacer la necesidad de la alianza obrero-campesina. Como la dictadura controlaba estrictamente todo contacto político entre campo y ciudad, era imprescindible innovar procedimientos para llegar al campesinado. Por lo tanto, estos partidos exhortaban a sus militantes a impulsar las cooperativas, participar en la campaña de alfabetización y en las escuelas nocturnas y fomentar la constitución de mutuales campesinas, cajas populares, etcétera.⁷²

⁷¹ *Voix du Peuple*.

⁷² Esta postura está señalada en 1966 en la publicación del Partido de Entendimiento Popular (PEP) *Voies d'établissement de l'alliance ouvrière-paysanne*, de Legrand (seudónimo de Gérald Brisson). En efecto este documento destacaba: "Considerando las grandes responsabilidades del campesino, el PEP, Partido de los Trabajadores, ha establecido las tareas táct-

A pesar del postulado que reconocía la necesidad de trabajar con los campesinos, la presencia de los revolucionarios en el campo fue débil. Los movimientos espontáneos del campesinado, sobre todo en 1962-1963, brotaron en diversas partes del país, pero las organizaciones revolucionarias no se encontraban preparadas para incorporarse a ellos y menos aún para impulsarlos o dirigirlos.

1. *Los planteamientos de la lucha armada*

En 1966, el movimiento revolucionario y antiduvalierista experimentó un estancamiento caracterizado por una falta de perspectivas. En septiembre de ese año, el PEP planteó "el desmantelamiento del poder duvalierista por la lucha armada",⁷³ y como paso concreto en la preparación de la nueva línea se postuló la formación de Ligas Campesinas para la Reforma Agraria (LPRA). El PEP las definió como "organizaciones con vocación de masas antidictatoriales, antifeudales y antimperialistas, que agrupan campesinos de cualquier tendencia, opinión y religión, sobre la base de reivindicaciones inmediatas y fundamentales inscritas en el Programa Agrario de la Revolución Nacional".⁷⁴

En mayo de 1967, el documento "*Voies tactiques pour la nouvelle independance*", vino a constituir el manifiesto estratégico y táctico para la guerra de guerrillas propugnada por el partido. Este documento fue calificado por Antoine Levantin (seudónimo de Raymond Jean François) como un "cambio cualitativo tanto en la concepción de nuestra actividad cotidiana como en la del partido".⁷⁵ De esta manera el campesinado pasa a desempeñar un papel muy importante en esta concepción de la lucha.

ticas de una alianza política indispensable para el desarrollo del proceso revolucionario."

⁷³ Este análisis se basa en el documento *Voies tactiques pour la nouvelle independance* del PEP. Sin embargo, en 1965, el Partido Popular de Liberación Nacional (PPLN) en un texto intitulado *Puda face aux imperatives de la conjoncture* "reconoció la vía de la lucha armada como inevitable. La lucha armada se ha vuelto la principal forma de lucha del pueblo haitiano. Todas las demás deben jugar un papel auxiliar en la lucha armada". Sin embargo, la línea del PEP, tal como fue señalado en *Voies Tactiques* es la que se llevó a la práctica. Por ello, aquí consideramos este texto y su estrategia de lucha.

⁷⁴ *Voix du Peuple*, febrero de 1968.

⁷⁵ Antoine Levantin, *Voix du Peuple*, 1968.

"Voies tactiques" plantea la necesidad de la lucha armada, partiendo de "la concepción de una guerra popular que requiere de un ejército popular para desarrollarse en el campo como teatro principal de operación y con una acción de larga duración. Antes de la aparición de la guerrilla la resistencia armada, tanto en el campo como en la ciudad, es una conducta política oportuna y necesaria en la creación de condiciones subjetivas para la revolución". Sin embargo, no se considera a la actividad guerrillera urbana como la principal forma de lucha armada.

En una primera etapa, "Voies tactiques", prevé una acumulación de fuerzas a partir de acciones militares ilimitadas. Resucitando por un lado la antigua forma de lucha anticolonial llevada a cabo por los esclavos en contra de los colonialistas franceses, y recuperando por el otro la tradición de los *Cacos* de Charlemagne Peralte contra los norteamericanos, se plantea así el desarrollo del cimarronaje rural, el cual se concibe como una acción revolucionaria violenta con más consecuencias políticas que militares. Una de las tareas fundamentales del cimarronaje es la organización y el desarrollo de la propaganda armada, que tiende no sólo a crear en el pueblo la conciencia de la necesidad de un cambio sino, sobre todo, la certeza de la posibilidad de derrocar a Duvalier.

El cimarronaje se propone movilizar a los campesinos, unirlos, organizarlos adecuadamente inculcando a esa base social principal un espíritu de rebeldía, insubmisión, sublevación y odio contra sus explotadores.

En una segunda etapa se previó la formación de *bandas*, en un esfuerzo por recuperar una de las formas de lucha empleadas durante la guerra de independencia. Estas *bandas* eran grupos guerrilleros encargados de toda una serie de tareas concretas y, en realidad, constituían eslabones que posteriormente servirán para la creación del ejército popular. Así se pasaría del cimarronaje a la guerrilla. No obstante, en ciertas regiones se organiza inmediatamente el movimiento guerrillero sin pasar por el cimarronaje y, en otras, donde las condiciones geográficas no permiten la guerrilla, los cimarrones sirven de abastecimiento para los guerrilleros, organizan grupos de autodefensa y contribuyen a proporcionar informaciones y a asegurar el traslado de armas.⁷⁶

En mayo de 1967, un documento del Comité Central del

⁷⁶ PEP, *Plan de travail du Parti*, mayo de 1967.

PEP enfatizaba: "en vista de su mayoría numérica y sus reivindicaciones, el campesinado constituye la piedra angular de nuestra revolución. Los campesinos constituyen los principales aliados de nuestro proletariado. Sin el campesinado, ninguna transformación es posible en Haití. Además, es esencialmente en medio de las masas campesinas que se establecen los principales focos de la guerra revolucionaria. Los principales soldados de nuestras fuerzas armadas de liberación serán campesinos".⁷⁷

2. La táctica y su aplicación

A partir de 1966, se puede apreciar un nivel de organización más complejo en el campesinado. Desde entonces y hasta principios de 1969, los movimientos organizados adoptaron diversas formas: los campesinos se negaban a someterse a la *corvée* y rehusaron pagar impuestos por el agua; hubo choques con los recaudadores de impuestos; sustrajeron el agua de las grandes propiedades; se negaron a participar en las manifestaciones oficiales y a trabajar tierras robadas, asimismo tomaron represalias contra las expropiaciones, incendiaron plantaciones y hasta ajusticiaron algunos verdugos macoutes, por ejemplo, el incendio de la casa del temido Ti Piquant y su ejecución el 19 de julio de 1968 en la llanura de Cul-de-Sac.

No queremos limitarnos a un nivel general pues estos aspectos de la lucha campesina son casi desconocidos. Por ello, señalamos algunas de esas manifestaciones:

En mayo de 1965, los campesinos de la región noreste realizaron manifestaciones públicas contra los despojos. Los pequeños propietarios de la Habitación Boen en Cul-de-Sac se levantaron con sus machetes para enfrentarse a los policías que efectuaban los despojos en favor de Ludger Fréderique.

En noviembre de 1965, los campesinos de St. Michel de l'Attalaye (en el Plateau Central) apoyados por el alcalde de Croix des Bouquets protestaron contra las expropiaciones de tierra y la *corvée*.

Ese mismo año, los campesinos de la Habitación Des Cloches formaban un comité de defensa para protegerse del terrateniente Duncan quien pagaba solamente 20 gourdes por las pacas de caña (4 dólares) para después venderlos a la HASCO a 150-200 gourdes (30-40 dólares).

⁷⁷ PEP, *Plan de travail du Parti*, mayo de 1967.

En diciembre de 1965, en Cazale, los campesinos saquearon la residencia del jefe de sección y liberaron a todos los presos de la cuarta sección. Durante ese mismo año ocurrieron varios incendios en las plantaciones de la HASCO.

Durante los meses de enero a marzo de 1966, sucedieron diversas agitaciones en la llanura de Cul-de-Sac. Los campesinos nuevamente se opusieron a las tentativas de despojo del tonton macoute Ludger Frédérique. Durante este año hubo manifestaciones campesinas en el Artibonite e incendios en diversas plantaciones de la HASCO.

En 1967 se registran nuevamente incendios en las propiedades de la HASCO y en febrero de 1968 son incendiadas las plantaciones de terratenientes en Croix-des Missions, Coupon, Drouillard, etc. En algunos casos, "los terratenientes y los gerentes hicieron repicar las campanas de las iglesias para solicitar ayuda de los campesinos. Ninguno se presentó y el fuego consumió todo".⁷⁸

En Arcahaie los campesinos armados con machetes, bastones y cuchillos, se levantaron para contrarrestar la ola de despojos y asesinatos perpetrados por los Tontons Macoutes de la zona dirigida por Frédérique Noumfort.

Durante ese mismo año ocurren más incendios que arrasan con varias plantaciones de la HASCO y suscitan grandes pérdidas. En abril se registran siniestros en las plantaciones de los macoutes Sibet, Bernadel, Baker, Riviera Anestol, entre otros, y ocupaciones de tierras de la Compañía.

En Nan Cayes, quinta sección de Bocozele, los campesinos encabezados por Joel Jean Bart emprendieron una gran batalla contra los Tontons Macoutes en un esfuerzo por recuperar sus tierras. En Artibonite se manifestaron diversos movimientos de protesta en contra de los abusos de los macoutes. También en febrero de 1968, en Cazale, los campesinos tomaron e incluso llegan a controlar los pozos y los canales de agua. Al llegar los Tontons Macoutes y la policía les hicieron frente con sus machetes e incendiaron plantaciones de terratenientes de Croix des Missions, Coupon, Drouillard. El 30 de marzo en Lefronne estallan incendios en las habitaciones de Villevaléix Liautaud y en junio se registraron incendios en plantaciones de algunos tontons macoutes en Carcouche. En agosto hubo manifestaciones campesinas en La Chapelle en contra del mercado negro y de la *corvée*. Incluso se realizó un desalojo en la jefatura de policía.

⁷⁸ *Voix du Peuple*, 21 de mayo de 1968.

Frente al auge de estas manifestaciones, el régimen se alarmó e intensificó la represión.

En un intento por calmar a los descontentos, particularmente en regiones del norte y el Artibonite, el gobierno "entrega" la tierra a los campesinos despojados, instituyendo la "recuperación de tierra". Incluso, los comandantes de distrito organizaron mítines para denunciar las arbitrariedades de los *macoutes* e informar a los campesinos expropiados que podían recuperar sus propiedades pagando determinada suma. Naturalmente, la disposición irritó todavía más a la población rural. Esta época se caracteriza por un auge del movimiento campesino.

3. El sublevamiento de Cazale

En las inmediaciones de la capital (a 35 km) la rica llanura azucarera de Arcabaie se enfrentaba, por un lado, a la voracidad de los terratenientes y, por el otro, a la explotación de la empresa norteamericana HASCO. Durante esta época la región experimentó una creciente agitación particularmente después del ajusticiamiento de algunos verdugos tristemente célebres (Ti Piquant y Chenet). El tonton *macoute* Zacharie Delva, conocido como el "Rasputín haitiano", vigilaba dicha zona y realizaba frecuentes expediciones punitivas en busca de comunistas.⁷⁹ En distintas ocasiones había efectuado arrestos indiscriminados, incluso de mujeres y niños.

En la llanura de Arcabaie que comunica con la región de Croix des Bouquets (la cual se extiende en el flanco de la Sierra Les Matheux), también el trabajo político con los campesinos había alcanzado un nivel sobresaliente. En esta zona la combatividad de los campesinos les había llevado a múltiples enfrentamientos con las fuerzas represivas.

El 26 de marzo de 1969, se alzaron en armas el maestro rural Nefort Victomé, un ex sargento del ejército, Jérémie, y dos jóvenes militantes del PUCH, Roger Méhu y Alix Lamauthe,⁸⁰ quienes apostados en la zona realizaron un gran trabajo político. Después de ocupar los destacamentos del ejército y de los Tontons *Macoutes*, convocaron a la población a un mitin con el fin de explicarles el objetivo de su insurrección: desarro-

⁷⁹ *Voix du Peuple*, 15 de octubre de 1968.

⁸⁰ Esos militantes habían estudiado en Alemania y habían regresado a Haití clandestinamente para integrarse a la lucha.

llar un movimiento armado para derrocar al régimen de opresión de los Duvalier. Aunque llegaron de inmediato refuerzos militares de Arcahaie, Duvalier-Ville y Puerto Príncipe, los rebeldes lograron ocupar la localidad durante seis horas. Sin embargo, se vieron obligados a refugiarse en el monte donde no resistieron y cayeron poco después.

La respuesta del gobierno fue brutal. Después de la insurrección de Cazale, una represión desenfrenada se abatió sobre la región. La sección de la Tremblay sufrió un verdadero genocidio. Desaparecieron familias enteras de campesinos, sus casas fueron quemadas y sus cosechas robadas.

En toda la región de Cul-de-Sac y de Thiotte, así como en Cap Haïtien, Jérémie y Jacmel, la operación de "limpieza" siguió durante meses. El jefe de los Tontons Macoutes en Ganthier, Jean-Louis Juste, relató una de las ejecuciones colectivas que se llevaron a cabo en su sección en julio de 1969. "La gente llegaba por decenas, recordó. Mujeres, hombres y niños fueron ametrallados y después echados en los hoyos previamente preparados en el cementerio. Las ejecuciones se perpetraron durante dos noches consecutivas. Los habitantes de las zonas oían los gritos de terror y el crepitar de las ametralladoras.⁸¹

Después de una entrevista con el presidente en Puerto Príncipe (mayo de 1965), Zacharie Delva regresó a Arcahaie y ordenó al jefe tonton macoute Charlotin que procediera de la siguiente manera con los campesinos arrestados: "Fusile a todos los que usted estime que no son recuperables." 167 personas fueron ejecutadas esa noche y por azares del destino, solamente cinco de los condenados lograron salvarse.⁸²

Posterior a la captura de Emmanuel Calixte, Paul Martelly y de algunos campesinos en las montañas,⁸³ se llevó a cabo una represión feroz en las regiones de Limbé y Plaisance. Además, en agosto de 1968, se incendiaron casas de campesinos en Dumay y Drouillard. En la región de Thiotte las familias Adrien, Fandall y Jean Paul fueron asesinadas y sus bienes acaparados.

Esos ejemplos ilustran claramente el elevado grado de brutalidad de la represión al campesinado. En el campo el gobierno no guarda las apariencias... Las acciones policiacas golpean

⁸¹ Extracto del testimonio de dos sobrevivientes.

⁸² Testimonio de dos sobrevivientes (mayo de 1981).

⁸³ Emmanuel Calixte (Foto Calixte) y Paul Martelly de la región de Cap Haïtien habían realizado sus estudios en Alemania y habían regresado al país para integrarse a las fuerzas revolucionarias.

de manera indiscriminada a la población, incluso las mujeres y los niños son tomados como rehenes y masacrados sin piedad.

4. *Algunas consideraciones analíticas*

No se puede analizar el intento de aplicación de *Voies Tactiques*, su fracaso ni su rápida aniquilación, sin considerar la lucha antiduvalierista y el movimiento revolucionario en general. Habría que señalar la falta de experiencia del movimiento revolucionario, especialmente respecto a los métodos de organización. "Nuestro partido es joven —escribía Santigène Guillaume, militante del PEP— nuestros militantes y dirigentes constituyen la primera generación haitiana de hombres que enarbolaron la bandera creadora del marxismo-leninismo."

"Es cierto que nuestros predecesores, como Jacques Roumain, fundador del movimiento comunista en Haití, nos han indicado el camino de Marx y Lenin. Sin embargo, respecto a la organización y las tácticas, tuvimos que aprender todo, en las circunstancias concretas de nuestra lucha, pagando caro nuestros errores."⁸⁴

Desde el inicio de su gobierno, Duvalier recurrió al terror sistemático como instrumento de control político interiorizando en cada ciudadano un miedo paralizante, lo que neutralizaba las posibilidades de participación popular. En esos tiempos, la lucha requería de un heroísmo continuo para avanzar. La falta de cuadros, la nula politización de los habitantes, la ausencia de organizaciones democráticas y patrióticas legales y las condiciones de clandestinidad, dificultaban en extremo la creación de organizaciones de masas y determinaban el aislamiento de cualquier movimiento de vanguardia, privándole de un respaldo más amplio. Además, Washington y la CIA ampliaron su apoyo a Duvalier.

En efecto, frente al auge de la resistencia y sobre todo después de la fusión orgánica de los partidos, que en una actitud de madurez política se convierten en enero de 1969 en el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos (PUCH), la CIA organizó una operación de gran envergadura para dismantelar el movimiento revolucionario y afianzar el régimen duvalierista. Gérard Pierre-Charles hace notar a este respecto: "el golpe contra el PUCH constituye uno de los más eficaces reali-

⁸⁴ Santigène Guillaume, *Nouvelle Revue Internationale*, núm. 196.

zados por la CIA en contra del movimiento revolucionario latinoamericano".⁸⁵

Debido a que nuestro tema gira en torno a la problemática del campesinado, volveremos a limitarnos a este aspecto. No obstante, es preciso destacar el hecho de que la discusión, adopción y aplicación de las tesis de las *Voies Tactiques* apenas transcurrieron en un período de tres años.

VI. DECLIVE ENTRE LA CONCEPCIÓN TEÓRICA Y LA APLICACIÓN REAL DE LA LUCHA ARMADA

a] El cimarronaje se había iniciado con el ajusticiamiento de verdugos, ataques a centros represivos e incendios de plantaciones, entre otras operaciones.

Sin embargo, estas acciones del campesinado no surgieron de manera autónoma, tal como fueron concebidas en *Voies Tactiques*. Si bien se nota el surgimiento de algunos líderes campesinos como Jules Ste. Anne, Lhérisson Dorval, Safete Taleyart y Emmanuel Napoléon, entre otros, en realidad el campesinado aún no había asumido la dirección de estas actividades.

b] El cimarronaje brotó en zonas muy delimitadas: las llanuras de Arcahaie, Cul-de-Sac, Artibonite y, en menor medida, en la Grande Anse y la región de Cap y Limbé. Desde años atrás, estas zonas, particularmente la de Arcahaie y la de Cul-de-Sac, se habían caracterizado por un elevado nivel de politización y, por consiguiente, no representaban el prototipo del campesinado haitiano, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de una línea política. No fue por casualidad que

⁸⁵ En el plano internacional, las condiciones no eran tampoco las más favorables.

En el contexto posterior a la Revolución cubana, la hipersensibilidad contrarrevolucionaria de Norteamérica, la doctrina de contrainsurgencia y de la seguridad nacional ocasionaron la guerra a muerte contra cualquier movimiento progresista insurgente, y más aún, contra una lucha encabezada por los comunistas. La solidaridad internacional no había alcanzado el grado mostrado en la década de los setenta, fundamentalmente en la Revolución sandinista. Por esto y por otras múltiples razones la denuncia contra la dictadura duvalierista y la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano no alcanzaron el nivel que pudiera contener el apoyo abierto del imperialismo al régimen de Papa Doc. (Gérard Pierre-Charles, *Nueva antropología*, núms. 15-16, p. 177.)

el brote guerrillero estallara en Cazale. Las fuerzas policíacas y militares del gobierno pudieron concentrarse con facilidad en esta zona debido a su cercanía con la capital (a escasos 35 kilómetros). En consecuencia, emprendían su actividad represiva con mayor fuerza y eficacia que en regiones más apartadas.

c) En cuanto a su aplicación, el cimarronaje superó los objetivos considerados en la movilización de las masas campesinas. Para despertar la conciencia política del campesinado y para asegurar su participación cada vez más amplia, *Voies Tactiques* considera, en esa primera etapa, una política de realización de actividades muy concretas: abolición de la *corvée*, movimiento contra los impuestos, reclamación de agua, castigos a los tontons macoutes conocidos, autores de graves atropechos contra el pueblo, etc. Sin embargo, cuando los militares plantearon la necesidad de una reforma agraria y de una lucha antidictatorial, antifeudal y antimperialista, no lograron movilizar al campesinado debido a su bajo nivel de politización y a su falta de militancia política. En realidad, se puede señalar un desajuste considerable entre las metas de la dirección y las de la base. Antoine Levantin (seudónimo de Raymond Jean François) apunta de manera certera que "ciertas discusiones nos han permitido constatar que muchos militantes que han acogido el texto con entusiasmo no lo entienden, se limitan a considerar únicamente un aspecto, la adopción de la vía armada".⁸⁶ Es por ello que se puede apreciar claramente la falta de preparación y la improvisación de los cuadros. Además, el ambiente represivo dificultaba el trabajo político en el seno del campesinado y aun no se habían elaborado nuevas formas para impulsar una verdadera concientización en las zonas rurales.

d) Este último punto nos lleva a considerar un nuevo elemento a nivel de la estrategia política de la línea adoptada. Sobre todo se puede señalar una subestimación de las fuerzas militares y policíacas del gobierno. *Voies Tactiques* fue redactada en un momento de transición en el cual las formas represivas más primitivas del duvalierismo fueron superadas por métodos más complicados y científicos al servicio del terror. A partir del carnaval de 1966 y específicamente después del estallido de bombas y la consiguiente purga en el seno del ejér-

⁸⁶ *Voix du Peuple*, 18 de agosto de 1967. En muchos casos estos cuadros abandonaron la línea del trabajo político y adoptaron algunas veces una actitud puramente militarista.

cito (19 oficiales duvalieristas fueron fusilados), el gobierno inició la modernización de su aparato represivo con el beneplácito de Washington. En ese momento las fuerzas revolucionarias no apreciaron la trascendencia de este nuevo elemento ni sus implicaciones, e incluso quisieron emprender tareas más complejas y difíciles. Subestimando la fuerza militar del ejército y el asesoramiento estadounidense a las fuerzas policíacas, no reforzaron las medidas de seguridad del Partido.

VII. HACIA UNA ARTICULACIÓN CON LAS MASAS

a] A pesar de la escasa participación campesina, se puede percibir, particularmente en la región de Cul-de-Sac y de Cazale, un despertar del campesinado y los comienzos de su injerencia en la actividad política. Según testimonios de los militantes, muchas familias agrícolas protegían a elementos urbanos perseguidos por la policía sin cuya cooperación no se hubiera podido realizar actividad alguna en el campo, dado el férreo control policiaco.

A menudo este apoyo fue más allá de lo tácito hasta convertirse en una complicidad real y concreta, llegando incluso, en algunos casos, a enfrentamientos con la policía.*

En los medios revolucionarios es un hecho conocido que cuando los campesinos están convencidos de la necesidad de la lucha, rara vez la traicionan. Debido a su negativa de delatar a un compañero o al movimiento, muchos pagaron su silencio con la tortura y la muerte. Además, es interesante notar que en ciertas regiones, algunos campesinos tontons macoutes se negaron a arrestar a ciertas personas o a emprender actividades represivas.

Para entender por qué no había brotado una resistencia más combativa y decisiva del seno del campesinado, es menester referirse al nivel de la lucha del pueblo haitiano de esta época en términos globales.

b] Después de la ocupación norteamericana, los políticos

* Por ejemplo, en Morne Nan Caos, un médico realizaba un trabajo político. La policía lo arrestó y lo llevó a Petite Rivière. Después del intento de fuga, se confirmó que era un opositor al régimen. Mientras tanto, centenares de campesinos de Nan Caos llegaron a Petite Rivière para defender al médico y exigir su libertad (testimonio de un militante).

manifestaron constantemente un marcado desdén hacia los *gros orteil*.*

Para ello, el motor de la política haitiana se hallaba en Puerto Príncipe y en Washington, e incluso los sectores progresistas no pudieron divorciarse totalmente de este criterio. A pesar de un esfuerzo por definir científicamente a la sociedad haitiana en términos de clases, ni siquiera Jacques Roumain (en su *Análisis esquemático, 1932-1934*) logró atribuir al campesinado la importancia política que merece. El lema de "Frente Único Proletario en contra de la Burguesía" del Partido Comunista de la década de los años treinta, ignora el papel del campesinado. Algunos años después, el Partido Socialista Popular en su periódico *La Nación*, analizó y denunció la situación campesina aunque, en la práctica, concedió un papel político de poca relevancia al sector agrario. En 1946, aun cuando el populista Daniel Fignolé fundó el Movimiento Obrero Campesino (MOP), en definitiva su acción se limitó a los suburbios populares de Puerto Príncipe y nunca se volcó hacia el campesinado para incorporarlo a la lucha política. No fue sino hasta 1959 cuando el Partido Popular de Liberación Nacional en *Las tesis de marzo*, reivindicó el papel determinante del campesinado en el movimiento de liberación. Es el Programa del Partido de Entendimiento Popular (PEP) el que examina por primera vez en la historia nacional, la evolución histórica global del pueblo haitiano desde una perspectiva marxista. Al analizar la formación social haitiana, refiere el predominio de las relaciones económicas de tipo feudal y articula su programa político sobre la reforma agraria. Propugna la formación de un frente unido para llevar a cabo la revolución nacional democrática, antifeudal y antimperialista. Por ello, el programa le concede una gran importancia al campesinado y señala: "El nuestro, es un país atrasado en donde la rural constituye el 85% de la población total. Toda actividad en las ciudades fracasará en tanto que el campesinado no se alíe con los trabajadores y los patriotas de las ciudades..."

Hay que poner fin al exclusivismo de la República de Puerto Príncipe. "Los trabajadores de las ciudades y otros aliados urbanos mostrarán mucha indecisión mientras el campesinado no participe en la batalla libertadora."⁸⁷

No obstante, el reconocimiento de este aspecto crucial no

* Manera despectiva de designar al campesino.

⁸⁷ *Manifeste du Parti d'Entente Populaire d'Haiti*, Programme pour la nouvelle indépendance.

llevó al Partido de Entendimiento Popular a definir una estrategia para la incorporación del campesinado a la lucha.

Voies Tactiques representa una nueva etapa. No sólo adopta posiciones teóricas que reconocen el papel imprescindible del campesinado sino que propone una línea práctica para articular el trabajo político e impulsar la participación campesina a la lucha política. Constituye el primer escalón, ya que por primera vez en la historia nacional los intelectuales y militantes revolucionarios se unieron con los campesinos para luchar por una misma causa. Centenares de compañeros entre ellos, Gérald Brisson, Alix Lamauthe, Raymond Jean François, Guy Lominy, manifestaron una actitud valiente y un espíritu de sacrificio en pos de la libertad y la liberación de la patria.

A pesar del fracaso de la aplicación de *Voies Tactiques*, nos podemos preguntar en qué medida constituía una alternativa real y una táctica viable. Aparte de los errores políticos aludidos, la falta de continuidad en la aplicación de esa línea no le permitió alcanzar su plena madurez. Al golpear en su médula al movimiento revolucionario, la represión debilitó y desarticuló toda su organización. Si comparamos la aplicación de *Voies Tactiques* con la acción de los guerrilleros del Frente Sandinista en Nicaragua, podemos apreciar que, a pesar de los altibajos, algunas veces prolongados en la guerrilla sandinista, nunca existió una verdadera discontinuidad en el movimiento. Mientras que en Haití se produce un corte en la acción.

El movimiento revolucionario haitiano tiene que considerar detenidamente la concepción y aplicación de la línea señalada por *Voies Tactiques*, debe profundizarla, enriquecerla y conocer otras experiencias (particularmente las de Nicaragua, El Salvador, Guatemala) en donde la participación del campesinado juega un papel decisivo en la lucha de liberación nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Anglade, Georges, *L'espace haïtien*, Montreal, Les presses de l'Université du Québec, 1975, 221 pp.
Brisson, Gérald, *Les relations agraires dans l'Haïti contemporaine* México, 1968 (mimeografiado).

- Cabral, Amílcar, "El papel de la cultura en la lucha por la independencia", en *Arte, Sociedad, Ideología*, núm. 21, junio-julio de 1977.
- Casimir, Jean, *La cultura oprimida*, México, Nueva Imagen, 1981, 393 pp.
- Centre d'Études et de Recherches Marxistes (CERM), *Sur la féodalité*, París, Études Sociales, 1971, 272 pp.
- Corten, André, *Chronique d'une recherche* (mimeografiado).
- CONADEP, *Diagnostic de la situation alimentaire et nutritionnelle de la population haïtienne*, Puerto Príncipe, 1981.
- Department of Justice, *Code rural François Duvalier*, Puerto Príncipe, 1963.
- De Ronceray, Hubert, *Sociologie du fait haïtien*, Quebec, Canadá, Université du Quebec, 1979, 270 pp.
- Dietrich, Bernard y Al Burt, *Papa Doc: The truth about Haiti today*, Nueva York, McGraw Hill, 1969, 393 pp.
- Duvalier, François, *Le problème des classes à travers l'histoire d'Haïti*, Puerto Príncipe, 1938.
- , *Oeuvres essentielles*, tomo 1, *Éléments d'une doctrine*, Puerto Príncipe, Presses Nationales d'Haïti, 1966.
- , *La marche à la présidence*, Puerto Príncipe, 1968.
- Dominique, Jean, "Une quête d'haïtiannité", en *Conjonction*, núm. 129, Puerto Príncipe, mayo de 1976.
- Estime, Jean Robert, "Contribution à l'élaboration d'une politique agricole en Haïti", en *Conjonction*, núm. 123, Puerto Príncipe, 1976.
- Girault, Christian, *Le commerce du café en Haïti*, París, Centre National de la Recherche Scientifique, 1982, 293 pp.
- Girault, Christian, "Nouvelle données sur l'economía haïtienne", en *Problèmes de l'Amérique Latine*, núm. 4, París.
- Girault, Christian y Lagra Jerry, *Caractéristiques structurales de la commercialisation internes des produits agricoles en Haïti*, Puerto Príncipe, Institut Interaméricain des Sciences Agricoles, 1975 (mimeografiado).
- Hector, Cari y Marion Leopold, "La bourgeoisie haïtienne, une classe en devenir", en *Cahier d'Amérique Latine*, núm. 5.
- Hector, Michel, *El movimiento obrero haitiano, 1932-1963* (inédito), 136 pp.
- Honorat, Jean-Jacques, *Le manifeste du dernier monde*, Puerto Príncipe, Imprimerie Henri Deschamps, 1980, 219 pp.
- Huizer, Gerrit, *El potencial revolucionario del campesinado en América Latina*, México, Siglo XXI, 1973, 357 pp.
- Hurbon, Laennec, *Culture et dictature en Haïti. L'imaginaire sans contrôle*, París, L'Harmattan, 1979, 201 pp.
- Jeune-Haïti* (periódico), Organisation Jeune-Haïti, 1963-1965.

- Kelinche, Kern, *Armée et politique en Haïti*, París, L'Armattan, 1979, 268 pp.
- Leopold, Marion, *Résistance populaire et lutte des classes en Haïti*, tesis de doctorado, Universidad de París (mimeografiado), 678 pp.
- Laguerre, Michel, *Les associations traditionnelles de travail dans la paysannerie haïtienne*, Puerto Príncipe, Institut Interamericaine de Sciences Agricoles, 1976 (mimeografiado).
- Landsberger, Henry, "The role of precisants mouvements and revuelts in development and analyticy framework", en *Boletín International Institute for labour studies* núm. 4, febrero de 1968.
- Lundals, Mats, *Peasants and poverty: a study of Haiti*, Londres, Grem Holm, 1977, 699 pp.
- Maguirre, Robert, *Bottom-up development in Haiti*, The Interamerican Foundation, octubre de 1979, 63 pp.
- Matraux, Alfred, *Voodoo in Haiti*, introducción de Sidney W. Mintz, Schocken Books, Nueva York, 1972, 100 pp.; *Le voudou en Haïti*, París.
- Mintz, Sidney, "Le systeme du marche rural dans l'économie haïtienne", en *Bulletin du Bureau d'Entologie*, vol. 3, 1960.
- Moral, Paul, *Le paysan haïtien. Étude sur la vie rurale en Haïti*, París, Maisonneuve et Larose, 1961.
- Parti D'Entente Populaire, *Voies tactiques por la nouvelle indépendance*, s.l., s.f.
- , *Voies d'établissement de l'alliance ouvrière-paysanne* (Firmado Legrand, seudónimo de Gérald Brisson).
- , *Plan de travail du Parti*, mayo de 1977.
- , *Voix du Peuple* (periódico), 1966 a 1969.
- , *Voix du Peuple* (periódico), 1966 a 1969.
- , *Avant-Garde* (periódico interno), 1964 a 1967.
- Pierre-Charles, Gérard, *Radiografía de una dictadura en Haiti bajo el régimen del doctor Duvalier*, México, 1969.
- , "Experiencias de luchas armadas del pueblo haitiano", en *Nueva Antropología*, núms. 15-16, diciembre de 1980, pp. 177-196.
- , "La economía haitiana y su vía de desarrollo", en *Cuadernos Americanos*, México, 1965, 331 pp.
- , "Économie et développement", en *Conjonction*, núm. 144, julio de 1979.
- Romulus, Marc, *Las mazmorras de la muerte*, 1978, s.l., s.e.
- ScI* (periódico en idioma créole), núm. 40, mayo de 1978 y núm. 92, noviembre de 1978.
- Thebaud, Schiller, *L'évolution de la structure agraire en Haïti*, tesis doctoral (mimeografiada).

LUCHAS CAMPESINAS Y REFORMA AGRARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (1924-1978)

PABLO A. MARÍÑEZ

A *Florinda Muñoz Soriano*
(Mamá Tingó)

INTRODUCCIÓN

El campesinado dominicano presenta una tortuosa y dura trayectoria política desde su conformación como tal en el siglo XIX hasta la actualidad. En la segunda mitad del siglo pasado desempeñó un papel decisivo en las luchas sociales que el pueblo libró contra el dominio español, en lo que se conoce como la guerra de Restauración, iniciada en 1863. Después de algunos años de "paz social", impuesta por la dictadura del general Ulises Heureaux, en 1899, el campesinado vuelve a irrumpir en el escenario político dominicano, participando en luchas o revueltas sociales conocidas como "revoluciones". En realidad eran insurrecciones de caudillos militares o regionales que armaban al campesinado, conformando verdaderos ejércitos de cientos o miles de hombres capaces de derrocar a un gobierno. Esta situación se prolongó hasta 1916, en que se produce la primera ocupación militar norteamericana, y donde el campesinado nuevamente desempeñaría un papel significativo en la resistencia armada contra las tropas de ocupación. Durante las revueltas de los años 1899 a 1916 en realidad el campesinado no luchaba por sus intereses sino que se dejaba arrastrar por las pugnas interoligárquicas que de alguna manera trababan la consolidación del Estado nacional dominicano, en la medida en que ninguno de los sectores sociales en pugna era lo suficientemente poderoso como para tener hegemonía e imponer su control a nivel nacional. Los caudillos regionales, representantes de los intereses terratenientes, lograban formar

pequeños ejércitos e incluso cobrar sus propios impuestos con los cuales operaban dentro de una cierta autonomía. A la par que se producía esta situación social, en el ámbito económico se desarrollaba un fuerte proceso de expropiación de tierra por parte de sectores nativos y extranjeros, orientados por el papel que comenzaba a tener la economía de plantación azucarera en el país.

Las modalidades de expropiación más importantes en esa época fueron las de falsificación de títulos e implementación de varias leyes, como la de división de terrenos comunes de 1911 y la de inscripción de títulos de terrenos rurales de 1912. La expropiación continuaría con procedimientos violentos durante los años de la ocupación militar (1916-1924) y se prolongaría bajo la dictadura de Trujillo (1930-1961).

Ya en los primeros quince años del presente siglo las expropiaciones habían afectado a amplios sectores del campesinado dominicano, comenzando a conformarse el mercado de fuerza de trabajo que requería la naciente industria azucarera, y que a su vez se engrosaba a partir de la descomposición de la economía campesina. No obstante, parece que aún la estructura agraria del país le daba al campesinado una doble posibilidad de resistencia. Por un lado, un considerable porcentaje de él se recluía en su economía campesina, no respondiendo así a las expectativas y necesidades del capital agroazucarero en su demanda de fuerza de trabajo. Esta situación a su vez impulsaría a dicho capital a generar una corriente inmigratoria de braceros de las pequeñas posesiones del Caribe anglófono, y más tarde de Haití (Del Castillo, s/f). Como respuesta a esta decisión del capital agroazucarero, el campesinado que sí estaba en condiciones o necesidad de proletarizarse, expresaría otra modalidad de resistencia: protestando abiertamente por el flujo inmigratorio que venía a entorpecer la posibilidad de negociación salarial.

De 1900 a 1915 se importaron 27 648 braceros para el corte de caña. A partir de 1910 el promedio de éstos por año llegó a cinco mil (Duarte, 1980, p. 126).

Es dentro de estas condiciones que se registran las primeras agitaciones de los trabajadores del agro contra la competencia que los inmigrantes causaban (Bryan, 1979).

A mediados de 1916, al producirse la intervención militar norteamericana en la República Dominicana, es el campesinado quien, a partir de diferentes modalidades, presenta la más seria y prolongada resistencia. En 1922 ésta se quiebra

desplazándose a las zonas urbanas, donde los sectores de la pequeña burguesía intelectual y el pueblo en general asumen la lucha a través de movilizaciones, denuncias y negociaciones, hasta lograr la desocupación militar en 1924.

No tenemos conocimiento de que el campesinado tuviera organización alguna a través de la cual programara su resistencia armada. Sin embargo, lo cierto es que por lo menos un sector de éste actuó como si de antemano conociera que uno de los objetivos inmediatos y fundamentales del imperialismo era desarrollar un amplio e intensivo proceso de expropiación de tierras, modificando el perfil agrario dominicano. Sin embargo, las acciones armadas en el campo fueron escasamente registradas. Los motivos son diversos. Por un lado, la censura que las tropas invasoras impusieron a los medios de comunicación del país; por otro, porque los mismos sectores nacionalistas de la pequeña burguesía intelectual urbana no supieron aquilatar las acciones del campesinado en su verdadera dimensión. De esta manera, a diferencia de la resistencia urbana, que se encuentra registrada en documentos, manifiestos o proclamas, emitidos por los propios sectores patriotas, en el caso del campesinado, en ocasiones es necesario trabajar con informes proporcionados por las mismas tropas invasoras. En éstos, como de costumbre, el número de sus bajas es insignificante, en tanto que el de los patriotas es numeroso; y por supuesto, ningún otro tipo de resistencia aparece registrado. Sólo podemos percibir la resistencia pasiva a partir de los casos de algunos campesinos que fueron torturados o finalmente asesinados por el hecho de no delatar a los guerrilleros (Hoepelman y Senior, 1973), o por las memorias escritas por combatientes como Gregorio Urbano Gilbert (1975), donde se puede apreciar muy rica y ampliamente la ayuda que el campesinado brindó a los guerrilleros.

Paralelamente a las expropiaciones de tierras y a las inversiones de capital en los ingenios azucareros, uno de los objetivos fundamentales del gobierno militar de ocupación fue el de desarmar al campesinado. Aunque parece ser bastante embarazoso precisar el número de armas requisadas durante los años de ocupación militar, el general Espaillet —quien fuera jefe del Servicio de Inteligencia Dominicano durante la dictadura de Trujillo— señala que los marines “Confiscaron y hundieron en el mar unos tres millones de armas pequeñas” (p. 40). Aunque desconocemos la fuente consultada por el general Espaillet, tal cantidad nos parece algo exagerada, si es que consi-

deramos que en 1920 la población de la República apenas llegaba a 894 665 habitantes; si descontamos los menores de catorce años, ésta se reduciría a cerca de la mitad, lo cual significaría seis armas cortas por habitante, incluyendo mujeres y viejos. De todas maneras, cualquiera que haya sido la proporción, el desarme se practicó y fue, además, un buen pretexto para que se cometiera todo tipo de abuso contra el pueblo.

Lo que nos interesa destacar es que el desarme de la población civil constituía un prerrequisito para que posteriormente el gobierno militar dictara las normas jurídicas que permitieran legalizar las expropiaciones de tierra que muy pronto se comenzaron a practicar. Estas medidas legales —que empezaron a impartirse como leyes u ordenanzas desde 1917— se incrementaron a raíz de los efectos de la primera guerra mundial en que el país experimentó un gran auge azucarero alcanzando su punto más alto en 1920; este fenómeno fue llamado en el Caribe la “Danza de los millones”. Los años que preceden a dicha coyuntura son los de mayor intensidad en la penetración del capital norteamericano, cuando los ingenios azucareros incrementaron en una mayor proporción su producción y extensión de tierra bajo cultivo, así como la dedicada a la reserva, pastos, etcétera.

Aunque no podamos precisar la extensión de tierra expropiada al campesinado durante la ocupación militar, existen suficientes elementos como para sustentar que la misma se centró en la región del este. No es nada casual que haya sido precisamente allí donde el campesinado expresara su más alto nivel de resistencia, en la medida en que se oponía al invasor tanto en su condición de patriota, como en la de campesino propiamente dicho. Es así como sus intereses particulares, al expresarse en forma de resistencia al poder interventor, coincidían con los intereses generales de la sociedad.

En 1925, un año después de la desocupación militar, el área de tierra propiedad de los ingenios azucareros se incrementó sustancialmente alcanzando las 18 049 hectáreas, en tanto que la exportación de azúcar se duplicó, pasando de 144 911 toneladas en 1916 a 331 270 en 1925. Según Melvin Knight, “Posiblemente, la sexta parte de los 12 000 000 de acres de tierras de la República Dominicana, terrenos de costa y de valles, están habitados. Las empresas azucareras son propietarias de la cuarta parte, más o menos, de la mejor de estas tierras” (p. 148).

Además de las tierras destinadas a las plantaciones azucare-

ras, el otro renglón que alcanzó una gran importancia en los años de la ocupación militar fue el maderero. "Las compañías madereras extranjeras dominan un área de terreno mayor que la que posee la industria azucarera" (Knight, 1939: 159). Tres compañías norteamericanas tenían bajo concesiones cerca de 600 mil hectáreas y según el mismo Knight, por lo menos una de ellas tenía parte de sus títulos dudosos.

Como hemos podido observar a muy grandes rasgos, en el período que transcurre entre 1899 y 1924, el campesinado dominicano ha vivido dos etapas bien diferenciadas dentro de su trayectoria política, que la hemos querido presentar a manera de antecedentes históricos que permitan comprender mejor el período con el que se abre nuestro estudio, fundamentalmente a raíz de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1930. Entendemos que el desarme realizado por las tropas de ocupación constituye un prerrequisito esencial para que se pudiera instalar este último gobierno.

Este trabajo se propone dos objetivos muy precisos. En primer lugar, delinear la trayectoria político-económica del campesinado dominicano a partir de la década de los treinta; por otro lado, esbozar algunos aspectos básicos de los intentos de aplicar una reforma agraria, desde principios de la década de los sesenta, a raíz de la muerte de Trujillo.

No obstante, debemos dejar bien claro que este trabajo apenas pretende ser una primera aproximación a nuestro objeto de estudio, que requerirá, necesariamente, ser profundizado con otras investigaciones que recurran a fuentes documentales e incluso a trabajos de campo, así como a un mayor análisis desde un punto de vista teórico.

En último lugar, no quisiéramos concluir esta nota introductoria sin expresar nuestro profundo agradecimiento a Marcos Peña y a Maritza Maríñez, quienes desde Santo Domingo nos enviaron con una rapidez y amabilidad poco usual en estos casos, gran parte del material que hemos requerido para la elaboración del presente trabajo. A riesgo de ser injustos omitiendo el nombre de otros amigos que nos facilitaron algunos textos que difícilmente hubiésemos podido consultar de no haber sido por su gentileza, señalamos los siguientes: en México, Franc Báez y Julio Rodríguez; en República Dominicana, Pascal Peña, Irma Nicasio e Isis Duarte. A todos ellos, nuestro reconocimiento.

Sólo nos resta expresar un profundo agradecimiento a Julieta Haidar, con quien discutimos ampliamente el trabajo y

a Suzy Castor, quien nos alentó en la realización de la investigación. Los amigos y compañeros Fernando Cortés, Roger Bartra y Manuel Coello tuvieron la amabilidad de leer el manuscrito y formular interesantes observaciones que —aunque necesariamente no han sido incorporadas en su totalidad al presente trabajo— serán de gran ayuda para la realización de un estudio más profundo sobre la temática, que ya hemos emprendido.

I. NUEVAS CONDICIONES DE LUCHA

Aunque la intervención militar no modificó sustancialmente la estructura de clases de la sociedad dominicana, al menos creó las condiciones materiales para su posterior alteración. El auge que le imprime el capital norteamericano a la producción azucarera, las expropiaciones de tierra a que fue sometido el campesinado y, por último, el desarme que se le practicó a éste, tendrían importancia significativa en décadas venideras.

Después de la intervención los intentos insurreccionales fracasaban de antemano. Se había creado una guardia nacional compuesta por "1 500 a 2 000 hombres, cuidadosamente seleccionados e instruidos y bien uniformados y equipados" en quien descansaría el poder político y militar de la República en los años siguientes. Cualquier tipo de conspiración política tendría que contar con el apoyo de los jefes militares de esta institución. Ese ejército estaría bajo la jefatura de Rafael L. Trujillo, quien se convirtió en el hombre fuerte del país desde los primeros años de la desocupación. Ésta es la razón por la que en 1929-1930, cuando se conspira contra el presidente Horacio Vázquez, los líderes políticos tuvieron que acercarse a Trujillo para pedirle colaboración. Aunque los caudillos regionales no habían desaparecido, se carecía de las armas necesarias para movilizar al campesinado en las insurrecciones de antaño. Y a partir de este momento el armamento urgía más, pues de no hacer alianza con los jefes militares habría que enfrentarse a un ejército relativamente bien entrenado y armado. Con mucha razón Jiménez Grullón señala que cuando Estrella Ureña, líder del Partido Republicano, decidió oponerse al presidente Horacio Vázquez "se encontró frente a este dilema: introducir armas del extranjero, cosa costosa y difi-

cil, o celebrar pactos secretos con miembros importantes del ejército para realizar a su lado y con los armamentos que ellos brindaran, el movimiento subversivo" (Jiménez Grullón, 1974: 157).

Lo destacable es que esta acción reflejaba el cierre del ciclo de los levantamientos armados y por lo tanto de la participación del campesinado en los mismos. El centro de poder político y militar se había desplazado a los cuarteles. La hora de los caudillos tradicionales había concluido, el campesinado entraba en una nueva etapa, posiblemente expuesta a una mayor explotación y represión. De ahí en adelante —sobre todo una vez que Trujillo se consolida en el poder a partir de 1930— la única alternativa que encontrarán los opositores al régimen, durante varias décadas, será la de las invasiones armadas desde el exterior.

En efecto, los únicos movimientos armados que conoce la nación hasta 1960, son dos desembarcos contra el régimen dictatorial de Trujillo, el primero en 1949, y el segundo diez años después, en 1959. En ambos se partía del supuesto de que el campesinado y otros sectores del pueblo se unirían a los rebeldes antitrujillistas. Al parecer los grupos exiliados desconocían los cambios que se habían comenzado a producir en el campesinado dominicano.

Los años que transcurren entre 1922 y 1930 se tornaron como una especie de paréntesis en lo que respecta a las expropiaciones de tierra y a la represión a que nuevamente sería sometido el campesinado durante la dictadura de Trujillo. Aunque es muy posible que durante este período se produjeran algunas agitaciones del proletariado agroazucarero en demanda de condiciones salariales o de trabajo —pues la crisis del 29 comenzaba a golpear la economía dominicana—, no hay indicios de que se dieran movilizaciones tendientes a recuperar las tierras expropiadas durante la ocupación militar. Más bien lo que comienza a practicarse es la política de asentamientos en colonias agrícolas. Sin embargo, es muy posible que esta política de asentamientos haya respondido a una presión social de los campesinos sin tierra, de los expropiados, la que pudo tener diferentes manifestaciones, pero que nosotros desconocemos. En el gobierno de Horacio Vázquez (1924-1929) se establecieron nueve colonias, cinco de ellas en la zona fronteriza. "Tenían 909 colonias y una población de 3 611 habitantes. El área de estas colonias era de 19 877 hectáreas, pero sólo 1 295 estaban cultivadas" (*Agricultura*, 1948:47): Desconocemos la importan-

cia económica de estas colonias, pero lo cierto es que ellas han supuesto la existencia de una masa relativamente importante de campesinos sin tierra, como acabamos de señalar. Durante el régimen de Trujillo la política de asentamientos y de colonización ocupará un lugar central, tanto para incrementar la producción agropecuaria como para aplacar el posible potencial revolucionario del campesinado.

A nivel agropecuario, otra de las medidas tomadas por el gobierno de Horacio Vázquez fue la de construcción de canales de riego, que ya en el momento de su derrocamiento, en 1930, alcanzaban a irrigar algo más de 3 000 hectáreas. El objetivo era hacerle frente a la crítica situación del país que estaba requiriendo importar en productos alimentarios un promedio de cinco millones de dólares anuales que, como el arroz, había capacidad de producir.

Estos intentos de imprimir un cierto impulso a la producción agropecuaria dominicana, por tímidos que fueran, se vieron interrumpidos —para posteriormente tomar un curso diferente, de mayor alcance— por dos hechos fundamentales e interrelacionados: la crisis de 1929 y la instauración de la dictadura de Trujillo. La primera implicó el descenso de los productos agrarios (azúcar, café, cacao y tabaco) de exportación. El valor de su exportación durante 1928 —último año en que los precios se sostuvieron— fue de 24 572 000 dólares, en tanto que en 1931 —primer año en que se notó el mayor descenso— fue de 11 100 000 dólares. Durante el mismo año 1930 y como consecuencia de esto, el gobierno de Trujillo tomó medidas para disminuir el gasto público, que contemplaban, entre otras, el cierre de 273 escuelas rurales de un total de 673, es decir, nada menos que el 40.5% de dichas escuelas. Respecto a las clases sociales, la crisis debilitó considerablemente a la oligarquía dominicana; si a ello sumamos el desplazamiento que en el orden militar atravesaba esta clase social, tanto por la importancia que habían perdido los caudillos regionales como por el desarme de la población campesina, comprenderemos la magnífica oportunidad que se le presentaba al dictador Trujillo para imponerse tanto a la oligarquía como al campesinado.

El segundo hecho fundamental, la instauración del régimen dictatorial de Trujillo, consistió en la aplicación de un nuevo proyecto político-económico de dominación, donde el Estado jugaría un papel fundamental. Este proyecto se podría resumir en los mecanismos instrumentalizados para realizar el

pasaje de un "Estado intervenido" a un "Estado interventor" de la economía del país, donde el eje de acumulación tendía a girar alrededor de la producción agroindustrial. Esto implicaría el sometimiento de la producción agropecuaria por el capital industrial a través de diversos mecanismos del Estado, y por lo tanto, la subordinación del campesinado a una situación contradictoria, en tanto que simultáneamente aceleraba y obstruía el proceso de descampesinización y proletarianización (Marín, 1980).

1. *Mecanismos represivos y expropiatorios.*

El sometimiento de que fue objeto el campesinado dominicano bajo la férrea dictadura de Trujillo, estuvo precedido por una real y constante preocupación del dictador por este importante sector de la sociedad. Desde antes de ser elegido formalmente como presidente en mayo de 1930, ya Trujillo incluía en un lugar destacado al campesinado, así como a los problemas agropecuarios en su conjunto; con posterioridad, los primeros años de su gobierno fueron de un fuerte trabajo en las zonas rurales de la República. El dictador recorrió a caballo, en vehículo motorizado, o se desplazó por barco hasta penetrar en los más recónditos lugares del campo dominicano. Esta situación escondía dos propósitos fundamentales. Por un lado, una fuerte campaña demagógica, a partir de la cual Trujillo intentaba proyectarse como el "protector del campesinado"; por otro, una ostentación del poder militar que al dictador le asistía, capaz de destruir cualquier levantamiento armado, al estilo de los que se habían escenificado algunos años antes.

En efecto, dos días antes de la farsa electoral del 16 de mayo de 1930, Trujillo se expresaba en los siguientes términos: "La agricultura recibirá el más decidido apoyo del Gobierno, que protegerá su desarrollo y científico crecimiento provocando, asimismo, por medio de leyes apropiadas, la creación, con fondos del Estado de bancos agrícolas y de cooperativas agrícolas que respalden y emulen la acción del trabajo individual" (Trujillo, 1946:7-8).

Dos años más tarde, en una proclama "a los trabajadores del campo", el incipiente dictador manifestaba que "todo campesino que se sienta perjudicado por las autoridades locales en su persona o en sus intereses, puede dirigirse a mí directa-

mente en la seguridad de que será atendido" (Trujillo, 1946: 240). Ésta sería la tónica de su retórica discursiva para dirigirse al campesinado durante los 31 años de su dictadura, sin que podamos negar que logró parte de sus objetivos: quedar desvinculado, a los ojos del campesinado, de la explotación y abusos a que éste era sometido. Más bien había que recurrir al dictador para que las irregularidades del campo fueran solucionadas. Trujillo se erigía como el benefactor.

Durante el primer año de gobierno, es decir en los primeros meses de 1931, el tirano emprendió un recorrido por las regiones del Cibao, del noroeste y del sur, donde su propósito último era perseguir a algunos caudillos que se le presentaban como rivales, o al menos como potenciales opositores. Cuando se sigue con detenimiento las alocuciones del dictador durante su recorrido, se observa que muchas en realidad eran "partes de guerra". En algunos se daba cuenta de los enfrentamientos con "brotes subversivos"; otras parecían ser un ultimátum a los "rebeldes campesinos". Quizás las victorias más importantes logradas en este primer recorrido fueron la eliminación de dos caudillos muy relevantes: el general Desiderio Arias, en el noroeste, y del general Cipriano Bencosmo en la región del Cibao. El primero posiblemente simbolizara —no sólo en el noroeste, sino en toda la República— la única alternativa real de enfrentamiento al dictador. Trujillo nunca perdió de vista este hecho, por lo que después de asesinarlo brutalmente, utiliza su lenguaje siempre apegado a la legalidad, el orden y las instituciones del país, para proclamar lo siguiente: "haciendo uso de mis prerrogativas constitucionales, proclamo bajo mi palabra de Primer Magistrado de la República, y de Comandante en Jefe del Ejército Nacional, que todos los ciudadanos que hayan abandonado sus hogares con fines subversivos tienen plenas y absolutas garantías de libertad, intereses y vida para reintegrarse a sus hogares o hacer su presentación a las autoridades gubernamentales en un plazo de 48 horas" (Trujillo, 1946:102-103).

La importancia de tal acontecimiento para el dictador en parte se puede apreciar por el lugar destacado que ocupa en el mensaje que dirigiera al Congreso Nacional en febrero de 1932, dando cuenta de la labor realizada por el Poder Ejecutivo durante el año 1931. Cerca de cuatro páginas fueron ocupadas para relatar los pormenores de la intriga, enfrentamiento y muerte del caudillo Desiderio Arias; en cambio, para exponer la labor desarrollada por las secretarías de Agricultura

y Comercio, así como por Sanidad, Beneficencia y Obras Públicas, sólo se tomó tres páginas y media. La eliminación de Desiderio Arias significaba un hecho trascendental en sus planes preparativos de las condiciones que posteriormente le permitirían desarrollar una despiadada expropiación y explotación al campesinado.

El otro caudillo importante caído en este primer recorrido de Trujillo fue el general Cipriano Bencosme. Refiriéndose a él —una semana antes de las declaraciones sobre Desiderio Arias— el dictador manifestaba que “su bravura temeraria contra el propio querer de su familia y el de casi todos los mocanos, dio lugar a aquel encuentro desgraciado en que cayó sin vida en campos de Puerto Plata, perdiéndose en él uno de los más notables creadores de riqueza agrícola [...] cuya amistad cultivé largo tiempo” (Trujillo, 1946:100).

El insuperable cinismo del lenguaje empleado nos excusa de cualquier comentario.

En realidad los primeros cuatro años de gobierno del tirano siguieron esta tónica: eliminación de los últimos vestigios del caudillismo y doblegamiento del campesinado, al margen de las conspiraciones que en los medios urbanos tenía que enfrentar.

Meses más tarde, durante el mismo año de 1931, Trujillo realizaría un segundo recorrido. En esta ocasión por la región sur, y aunque no hay referencias de enfrentamiento con caudillo alguno, el mismo dictador expresaría en la ciudad de Azua lo siguiente: “No quiero terminar mis palabras sin antes manifestar que no espero hallar aquí la inconsecuencia de algunos habitantes de las regiones cibañas” (Trujillo, 1946: 129). La labor intimidadora se hacía evidente.

Como estos recorridos no eran reconocidos, al menos oficialmente, como desplazamientos con miras militares o antisubversivas, generalmente se hacían bajo cualquier otro pretexto: conocer mejor los problemas del campesinado; visitar las autoridades locales, etc. Sólo una vez que fueron eliminados los más importantes enemigos potenciales, los desplazamientos fueron señalados con propósitos militares.

En efecto, en diciembre de 1931, Trujillo declararía que iniciaba “una breve recorrida (*sic*) militar por diversas regiones del País al frente de algunos contingentes del Ejército Nacional, comandados por mí personal y directamente, patentizando que, así como mi Gobierno está patrióticamente dispuesto a ser suave y suavizar hasta donde sea posible las asperezas con que se ha pretendido obstaculizar el logro de sus fines

de rehabilitación nacional, también estoy preparado para debelar fulminantemente, destruyéndola por medio de las armas y castigando con rigor a sus autores, cualquier intentona contra el orden establecido, cualquier brote subversivo contra la paz de la República" (Trujillo, 1946:142).

La suerte estaba echada en el campo, y por si a las tropas norteamericanas se les hubiesen escapado algunas armas, se intensificó la búsqueda de éstas, incluso de escopetas de cacería y de armas blancas. Ante tal situación, la lucha popular sólo brotaría muy desorganizada en ciertos lugares del país, como el Cibao, donde según Crassweller (1968) "Empezó a florecer un nuevo oficio: la fabricación de bombas caseras y de escopetas de cañón recortado" (p. 115). Las medidas represivas se extendieron por todos los ámbitos, alcanzando a las farmacias, a las que se les prohibió "expedir, sin llenar requisitos importantísimos, fórmulas que contuvieran glicerina o cualquier substancia utilizable para la preparación de materiales explosivos" (Jiménez Grullón, 1974:187). En este nuevo tipo de resistencia el campesinado se encontraría ausente, como lo estaría durante unas cuantas décadas más.

Los aparatos represivos ya habían sido instalados e incluso habían comenzado a funcionar; sólo había que esperar muy poco para que se diera inicio a una nueva etapa de expropiación de tierras al campesinado.

Desde los primeros años de la década de los treinta se comenzaron a dictar las primeras leyes tendientes a regularizar el registro de títulos de propiedad rural, sobre todo de las tierras comuneras, las que continuaban siendo el gran problema de las pretensiones de penetración del capitalismo en el agro. Aunque en este primer momento la magnitud del despojo de tierra por parte del Grupo Trujillo, posiblemente sea insignificante con relación al que se produciría a fines de la década de los cuarenta, lo cierto es que ya el dictador comenzaba a expandir sus haciendas. El fenómeno empezaba a tomar cuerpo en la región del sur, particularmente en la provincia de San Cristóbal, de donde era oriundo Trujillo. Crassweller señala que desde fines del primer período presidencial del dictador, comenzó "a tomar forma la gran finca conocida como Estancia Fundación", la que en el curso de algunos años llegaría a comprender "más de 30 000 hectáreas, y los títulos de propiedad llegaron a pesar cerca de 50 kilos (pp. 158-159).

Los 50 kilos de títulos de propiedad, aunque parezca una exageración, pueden dar una idea aproximada de la cantidad

de pequeños propietarios que perdieron sus terrenos. Aunque todavía en la década de los treinta la frontera agrícola podía expandirse bastante, consideramos que desde sus orígenes la Estancia Fundación demandó diversos métodos coercitivos. A mediados de la referida década Trujillo daría inicio, desde el Estado, a su política de colonización, asentando a los campesinos sin tierra en parcelas otorgadas por organismos estatales. Entendemos que en ese primer momento lo que comenzaba a darse era el despojo de las mejores tierras o de las que colindaban con las fincas del dictador, en proceso de expansión; en tanto, el campesinado iniciaba el desplazamiento hacia las tierras más distantes o peor comunicadas, como las de la región fronteriza. De todas maneras, con la Estancia Fundación, Trujillo se iniciaba en su calidad de "gran terrateniente", condición que mantendrá a lo largo de todo su régimen dictatorial.

A finales de la década de los treinta, concretamente en 1937, se produce la salvaje matanza de decenas de miles de haitianos, fundamentalmente en los parajes y provincias fronterizos con Haití. Aunque no estemos de acuerdo con la tesis de que el móvil principal de dicha matanza fuera la expropiación de tierra, pues lo cierto es que detrás de tal acción se escondían propósitos mucho más complejos, no podemos negarnos a reflexionar y tratar de indagar acerca de si muchos de los miles de campesinos haitianos que desaparecieron eran pequeños o medianos propietarios. Y de haber sido así ¿qué pasó con esas tierras? ¿A cuánto ascendió el total de tierras abandonadas? ¿Pasaron a manos de Trujillo, del Estado, de los personeros de Trujillo? Entendemos que esta problemática demanda ser estudiada sin olvidar las modalidades diversas de expropiación de tierra que en la época se aplicaron. De todas maneras consideramos que reducir el estudio de la matanza a su posible vertiente económica, implica despojar al fenómeno de la especificidad propia que le imprimió la concepción ideológica del antihaitianismo de la oligarquía y demás sectores de la clase dominante dominicana.

Durante los últimos años de la dictadura se crearon nuevos aparatos represivos en el campo: la Policía Rural, que si bien ya existía, adquirió mayor importancia; los Jinetes del Este y los Cocuyos de la Cordillera o Cocuyos de Bonao,¹ entre otros.

¹ En 1959, ante el temor de que se produjera una invasión de los grupos opositores en el exilio, Trujillo organizó un ejército de mercenarios europeos que denominó Legión Extranjera, pero además se formaron dos cuerpos represivos locales. Víctor A. Peña Rivera, uno de los esbirros del

Pero el importante continuaba siendo el de los alcaldes pedáneos. Ya el acucioso pensador dominicano José Ramón López alertaba en algunos de sus escritos sobre ciertos abusos y medidas represivas de los alcaldes con el campesinado desde fines del siglo pasado. Más tarde Servio Ducoudray (1976) señalará en su obra sobre los *Gavilleros del este*, el papel que al servicio de las fuerzas invasoras jugaron los alcaldes pedáneos. Durante los gobiernos que siguieron a la ocupación militar éstos siguieron constituyendo una autoridad importante a nivel rural. Si tenemos en cuenta que en cada poblado del campo dominicano existe un alcalde pedáneo y un segundo alcalde, se podría calcular que este cuerpo represivo es mucho mayor de lo que generalmente se piensa; quizás esté conformado por varios cientos de hombres en toda la República. Aunque en la actualidad la figura del alcalde haya sido relegada a un segundo plano, solamente cuando éstos no pueden resolver un litigio entre campesinos, se pasa a las autoridades militares o civiles de la ciudad importante más próxima.

Aunque posiblemente el caso que a continuación exponremos no esté vinculado a los mecanismos específicos de expropiación de tierra, sí lo está al de las actividades de los alcaldes pedáneos, además de ilustrar sobre la forma de actuación del

dictador y miembro del Servicio de Inteligencia Militar, describe a uno de estos cuerpos de la manera siguiente: "Cuando se produjo la invasión del 14 de junio de 1959, Petán obtuvo una amplia ganancia práctica que le consolidó más en sus aspiraciones. El Generalísimo le había permitido, primero por necesidades tácticas del momento y luego por estrategia de más largo alcance, que organizara una fuerza auxiliar del Ejército compuesta por campesinos rastreadores de la montaña, residentes en aquellos apartados lugares de la cordillera, o en sus accesos, donde pudiesen hacerse fuertes los guerrilleros:

"Como estos campesinos del lugar conocían todos los pasos montañosos y senderos, por los que fácilmente se podían desplazar de noche sin perderse, eran invaluablees guías y mensajeros eficientes para el Ejército regular, cuyas tropas hubiesen estado tan confusas en un terreno que no conocían como los propios guerrilleros que habían llegado por sorpresa aterrizando en la pista de Constanza.

"Así nacieron los que serían llamados 'Los Cocuyos de la Cordillera', a quienes Petán y sus seguidores de confianza sometieron a los rigores de la disciplina militar. Era una extraña fuerza de *voluntarios obligados*" (1981, p. 5).

A su vez, Crassweller (1968), se refiere a los Jinetes del Este del modo siguiente: "En las provincias orientales se organizó otro grupo bajo la dirección del notorio Félix Bernardino. Esta cuadrilla, conocida como los Jinetes del Este, estaba compuesta por terratenientes y hacendados que patrullaban, en parejas, por valles y colinas" (pp. 357-358).

régimen de Trujillo, cuando hizo frente a alguna protesta del campesinado por cuestión de despojo de tierra. En enero de 1938, en el Carretón —un paraje de Baní, en la región sur del país— se produjo una airada protesta de los campesinos del lugar, por ciertos abusos cometidos por las autoridades del lugar. En la revuelta murieron dos soldados y un oficial de la policía. Ante la sospecha de que tal acción tuviera carácter político, el dictador hizo llegar rápidamente al lugar varios camiones con cientos de soldados preparados para el combate, militarizando toda la zona. El Carretón fue destruido en su totalidad; las casas fueron incendiadas, muriendo algunos campesinos y quedando otros heridos; el resto fue hecho prisionero. Sin embargo, los cabecillas de la revuelta, una familia conocida como los Lereres —contando siempre con la solidaridad del campesinado de la zona—, pudo escapar ilesa. Posteriormente se entregaría a las autoridades. El hecho parece haber tenido tanta importancia para los moradores del lugar, que aún hoy en día (1981) —a más de cuarenta años de haber sucedido— cualquier campesino de los poblados aledaños es capaz de contar los detalles de la revuelta, como hemos podido comprobar recientemente. No olvidemos que esta revuelta se produce a los pocos meses de haberse efectuado la matanza de haitianos en la zona fronteriza. Éste era el estilo represivo del régimen dictatorial recién instituido.

La verdadera fase expropiatoria se produce a fines de la década de los cuarenta y principios de los cincuenta. Son los años de la gran expansión azucarera en el país con la incursión del Grupo Trujillo en dicha actividad agroindustrial. El área de tierra cultivada de caña pasó de 1 519 316 hectáreas en 1950 a 2 982 949 en 1960; en tanto que el número de fincas se reducía de 12 850 en 1950 a 2 791 en 1960. Trujillo pasó a comprar los más importantes ingenios azucareros de la República así como a fundar otros, entre ellos el Río Haina, que según la propaganda oficial era anunciado como el más grande del mundo. De 16 ingenios azucareros, 12 eran de su propiedad; tres de capital privado dominicano y uno norteamericano.² Con el azúcar el capitalismo penetraba a los más recónditos lugares del país, desarticulando las estructuras precapitalistas que durante siglos habían existido. Las regiones más afectadas eran la del sur y la del este, pero incluso la del Cibao —que tradicionalmente se había dedicado a otros cultivos—

² Un estudio amplio sobre la industria azucarera dominicana puede encontrarse en Franc Bález (1978).

no escapó a la embestida de las plantaciones azucareras. Paralelamente a la expansión de este cultivo, se introducían o incrementaban otras plantaciones como las de arroz y sisal, que contribuían al desarrollo del capitalismo en el agro, aunque en forma muy contradictoria, por la especificidad que le imprimía el Estado. De todas maneras, la sustitución de cultivos y la eliminación de pequeños productores era una realidad.

Juan Bosch señala que los pequeños y medianos propietarios de los lugares donde Trujillo extendió sus plantaciones "fueron desalojados a la mala; en algunos casos se picaron los alambres de púas de sus cercas y sus animales fueron sacados y vendidos o repartidos entre los encargados de llevar a cabo la operación del desalojo, y eso lo hacían en presencia de los campesinos propietarios que contemplaban el abuso sin que pudieran hacer nada para evitarlo. Hubo ocasiones en que los tractores se llevaron por delante las viviendas de madera de los dueños de esas tierras, y en presencia suya, con todo lo que tenían adentro: mesas, sillas, ropa. En varios casos, las viudas tuvieron que vender, por lo que los agentes de Trujillo quisieron darles, las propiedades que se habían negado a vender sus maridos" (Bosch, 1979:7).

Fue bajo estos procedimientos que el Grupo Trujillo pudo apropiarse de por lo menos 200 mil hectáreas de tierra, que a la muerte del tirano en mayo de 1961, pasaron a manos del Estado.

Uno de los primeros efectos que comenzó a percibirse de la intensificación de los mecanismos expropiatorios, fue el éxodo campesino a los centros urbanos, fundamentalmente a la ciudad capital. El fenómeno parece haber alcanzado tal proporción, que en 1953 el gobierno, alarmado, se vio en la necesidad de recurrir al aparato represivo del Estado para solucionar el problema. Un decreto ley obligaba a los campesinos que habían emigrado en los dos últimos años, a volver a su lugar de origen o a uno similar.³ Paralelamente se iniciaba una polí-

³ Nos referimos al decreto número 9563, del 9 de diciembre de 1953. Sus dos primeros artículos señalan lo siguiente: "Ningún campesino, ni ninguna persona que tenga su residencia en zonas rurales podrá trasladarla a los centros urbanos sin un permiso del Poder Ejecutivo expedido a solicitud del interesado a través del Gobernador Civil y del Síndico Municipal correspondiente, quienes al tramitar dicha solicitud deberán expresar su opinión al respecto."

"Todo campesino que hubiera fijado su residencia en algún centro urbano desde el año 1951, inclusive, estará obligado a reintegrarse a su

tica de asistencia social, brindando alimentación diaria a los miles de campesinos que deambulaban por las calles de la capital sin encontrar trabajo, ya que el proceso de industrialización era incapaz de absorber el flujo de migrantes que diariamente llegaba. De 1950 a 1960 la población rural disminuía de un 76.2% a un 69.5, en tanto que la urbana se incrementaba de un 23.8% a un 30.5.

2. Descampesinización y colonización

El verdadero volumen de la población expulsada del campo a los medios urbanos y que entra en un claro proceso de pauperización o proletarianización, sólo se evidencia en la década de los cincuenta cuando la frontera agrícola, si bien no se agotaba, disminuía su capacidad de expandirse como lo había hecho en décadas anteriores. Hasta ese momento el campesinado había logrado valerse de múltiples recursos para recluirse en una economía campesina e incluso había permanecido en el campo en calidad de proletariado agrícola o de semiproletariado. Alrededor de la década de los cincuenta esa capacidad parecía comenzar a agotarse aceleradamente.

En realidad a partir de ese momento sería el Estado quien entraría a brindar más ampliamente sus recursos para contrarrestar el éxodo campesino (al margen de la ley coercitiva de 1953, ya señalada) a través de su programa de colonización. Justamente desde 1948 se incrementa considerablemente el reparto de tierra a los campesinos en colonias del Estado. De 1948 a 1960 se repartieron cerca de 90 000 hectáreas de tierra bajo este sistema entre más de siete mil colonos. Y lo importante del proyecto es que no sólo apuntaba a atenuar las posibles consecuencias del potencial revolucionario del campesinado sino que que también se lograba una cierta eficiencia en la producción. Ya en 1947 estas colonias llegaron a aportar entre un 15 y un 25% de la producción nacional de algunos de los cultivos más importantes para el mercado interno.

Las colonias eran controladas por el Estado, quien las entregaba bajo contrato. Los colonos sólo tenían derecho de posesión y usufructo del predio recibido, por lo menos durante los cinco primeros años, y a partir de entonces pasaban a ser sus

última residencia rural, o a cualquier otro sitio de similar naturaleza." *Gaceta Oficial*, número 7633, Ciudad Trujillo, República Dominicana, 1953.

propietarios, siempre y cuando hubieran cumplido con los compromisos contraídos con el Estado. Aunque los colonos tenían libertad de cultivar los productos que consideraban adecuados, podían recibir instrucciones de los organismos oficiales sobre el tipo de cultivo que debían realizar.

Con el objeto de incentivar al campesinado a aceptar los repartos en determinadas regiones muy apartadas, como era el caso de la frontera con Haití, el Estado ofrecía mayores extensiones de tierra a los colonos, así como otras ventajas. De todas maneras, las colonias estaban distribuidas en determinadas regiones, tanto en función del papel social que podían brindar, como de la calidad y tipo de terreno que pudiera adaptarse al cultivo de ciertos productos.

Había un segundo sistema de reparto de tierra, algo más complicado, organizado por las Juntas Protectoras de Agricultores. Este reparto en realidad consistía en una especie de arrendamiento, que en el fondo sólo perseguía proporcionar fuerza de trabajo en las regiones que así lo demandaban. El promedio de tierra repartida no superaba las dos hectáreas por agricultor. Ello suponía que tanto el jefe de la familia como los demás integrantes se veían en la necesidad de vender temporalmente, o en forma permanente, su fuerza de trabajo. El total de tierra entregada al campesinado bajo este sistema no parece haber sido menor que la distribuida bajo el sistema de colonización.

De esta manera se lograba crear una especie de quietud social en el campesinado, lo que de hecho constituía una precondición para que el Grupo Trujillo, instrumentalizando el aparato de Estado, pudiera consolidar las condiciones materiales, a partir de las cuales impulsaría su proceso de acumulación capitalista.

La trayectoria seguida por el Grupo Trujillo hasta alcanzar su objetivo de someter la producción agropecuaria a las necesidades del capital industrial o agroindustrial, a través del Estado, se puede sintetizar de la siguiente manera: a] eliminación de los caudillos regionales; b] culminación del desarme al campesinado, que prácticamente había sido logrado en su totalidad por las tropas invasoras norteamericanas; c] represión y despojo de tierra al campesinado e incluso a algunos terratenientes enemigos del régimen; d] reparto de tierra al campesinado, con la doble intención de eliminar conflictos sociales y de aumentar la producción agropecuaria.

En resumen, ésas eran las condiciones en que se encontraba

el campesinado dominicano en el momento de producirse las invasiones antitrujillistas de 1949 y 1953, como veremos más adelante.

3. El despertar de una lucha en las plantaciones azucareras

Aunque el régimen de Trujillo había logrado enfrentar airoosamente los problemas sociales que podían emanar del campo, a partir de los diferentes procedimientos señalados, no había podido evitar que amplios sectores del campesinado se proletarizaran o semiproletarizaran en la agroindustria azucarera. Más bien ésa era una de las tendencias que se perfilaban dentro del proceso de desarrollo del capitalismo en el agro. En el sector azucarero se centraba el más alto porcentaje de trabajadores asalariados en la República y la mayoría de los ingenios continuaban en la región del este. Todavía en la primera parte de la década de los cuarenta el capital norteamericano continuaba controlando la agroindustria azucarera. Sería ya avanzada la década de los cincuenta cuando el Grupo Trujillo logra disminuir la inversión de capital norteamericano en esta rama, de un 93% a un 26, pasando el referido grupo o el Estado a controlar el sector azucarero dominicano.

El proletariado agrícola y en general los obreros azucareros habían logrado organizarse sindicalmente. De su seno surgieron valiosos líderes, no sólo capaces de enfrentarse a la tiranía sino fundamentalmente de organizar y elevar la conciencia de clase del proletariado. La coyuntura internacional de los años posteriores a la segunda guerra mundial, de lucha contra el fascismo, de aires democráticos que comenzaron a recorrer el continente, también llegaron a República Dominicana. Es así como el proletariado azucarero tiene la oportunidad de organizarse y comenzar a plantear sus demandas laborales. En 1942 se produce el primer intento de huelga en los ingenios azucareros del este. Tres años más tarde la huelga se hace realidad. Las informaciones de la época revelan la gran unidad de las organizaciones sindicales de la Romana y San Pedro de Macorís. El tirano accede muy rápidamente a las demandas laborales, incluso con un aumento salarial del 100 por ciento. El hecho se presentaba como algo sin precedentes. Los trabajadores agroazucareros habían logrado organizarse para defender sus intereses y lo habían conseguido. La figura del caudillo regional era sustituida por la del líder sindical. La

dictadura había podido desarmar al campesinado, pero con el proletariado cañero era más difícil hacerlo, era necesario arrebatarle su ideología, su conciencia de clase. Ello implicaba nuevos métodos represivos, que no descartaban el asesinato. Trujillo lo aplicó fríamente en el territorio nacional e incluso en el extranjero, a donde hubiesen ido a parar los dirigentes sindicales que habían participado en la huelga azucarera de 1946 (Galíndez, 1956; Del Orbe, 1981).

Desconocemos la repercusión que el movimiento haya logrado alcanzar en otros centros azucareros del país e incluso cómo impactó dentro del mismo campesinado del este, quien podía estar más estrechamente vinculado a la problemática en razón de que muchos de los braceros dedicados al corte de caña eran pequeños propietarios que vendían en cada estación su fuerza de trabajo. De todas maneras la lección más importante del movimiento estaba echada: la unidad del proletariado agrícola había permitido conquistar los objetivos propuestos. Sin embargo, Trujillo también supo interpretar muy rápidamente este resultado y se dispuso de inmediato eliminar de raíz el ejemplo que de éste pudiera emanar. Además de la represión física a la dirigencia obrera, a partir de la huelga se creó una comisión encargada de elaborar y redactar un código de trabajo que regulara las actividades laborales del proletariado, incluyendo al obrero agroazucarero. El código, conocido como "Código Trujillo de Trabajo", fue promulgado en junio de 1951, cinco años después de la huelga. Treinta años más tarde, en 1981, éste continúa vigente.

De esta manera, cuando el Grupo Trujillo llega a controlar la actividad azucarera cuenta con mecanismos institucionales más perfeccionados para someter al obrero agroazucarero. Además, algunas modalidades de operar el "Estado interventor" en la economía dominicana, particularmente en el sector industrial y agroindustrial, tornaban cada vez más difícil cualquier tipo de organización independiente del proletariado. En algunos centros de producción trabajaban soldados vestidos de civiles, realizando labores de obreros, pero recibiendo un sueldo en calidad de militares y no del proceso productivo en el que estaban inmersos. Los tractores de la Secretaría de Obras Públicas así como los camiones militares operaban en las plantaciones azucareras, como si éstas no fueran privadas, del Grupo Trujillo. Bajo estas nuevas condiciones laborales, el proletariado azucarero también requería de nuevas modalidades de lucha.

4. *Las invasiones antitrujillistas y el campesinado*

En la segunda mitad de la década de los cuarenta la dictadura de Trujillo se encontraba perfectamente consolidada, tanto política como económicamente. Sus opositores políticos reconocían que internamente no podían luchar contra el dictador, por lo que se marchaban al extranjero. Para esos años ya el exilio tenía una composición ideológica y social bastante heterogénea; las posiciones variaban desde las ideas democrático-liberales, hasta las marxistas. Pero muchos exiliados simplemente estaban en contra de Trujillo, y de alcanzar el poder aplicarían métodos no muy distantes a los del tirano. En lo social, existían sectores desde la pequeña burguesía intelectual hasta algunos terratenientes que habían entrado en disputa con Trujillo, e incluso ciertos líderes sindicales obreros.

Los exiliados, que en lo fundamental sólo tenían como elemento aglutinador el propósito de derrocar a Trujillo, comenzaron a organizarse y prepararse para invadir la República Dominicana. Para ello contaron con la ayuda de gobiernos amigos que veían en Trujillo un enemigo de la democracia. La mayor dificultad consistía en establecer vinculaciones con los sectores nacionales, en tanto que los sindicatos obreros eran controlados por Trujillo y el campesinado carecía de organización. Por lo demás, cualquier grupo que lograra desembarcar en el país tenía que contar con un mínimo apoyo del campesinado, en tanto que era desde el campo donde se suponía que se podría abrir un frente de lucha contra la dictadura. Sin embargo, tenemos la impresión de que los hombres que dirigieron las dos invasiones —la de 1949 por Luperon, en la costa norte, y la del 1959 por Constanza (en el centro de la República), Maimon y Estero Hondo, en la costa norte— al parecer habían perdido la perspectiva de los cambios que objetiva y subjetivamente se habían comenzado a producir en el campo dominicano.

Los exiliados antitrujillistas partían del supuesto de que tan pronto desembarcaran en la costa del país, el campesinado y otros sectores sociales los acompañaría en la lucha. No por otra razón había instrucciones de que cada combatiente llevara dos o tres fusiles que serían entregados a la población ansiosa de enfrentarse al tirano.

Entendemos que por lo menos los hombres del 49 quisieron suplir su desvinculación con los sectores nacionales, a través de la acogida que supuestamente tendrían algunos de sus líde-

res si desembarcasen en sus regiones nativas. Así, por ejemplo, en la Vega, región del Cibao, desembarcaría Juancito Rodríguez —un viejo terrateniente que había marchado al exilio y entregado su fortuna para derrocar a Trujillo. Este tipo de acción, con un luchador como éste, necesariamente nos remite —independientemente de su valentía y entrega total por la causa dominicana— a las modalidades de lucha que el país conociera en la época de las revueltas de los caudillos regionales. Sin embargo, por diversas circunstancias, ese plan original se modificó y los exiliados sólo pudieron desembarcar en la costa norte, por Luperon. En realidad los combatientes no tuvieron tiempo de abrir un frente de lucha al que pudiera incorporarse la población, pues fueron derrotados muy rápidamente por las tropas de Trujillo, pero sí lograron internarse en tierra y hacer contacto con la población campesina, aunque por muy pocos días.

Al parecer sólo los organizadores del 59 consiguieron vincularse a un frente interno, que luego fue inoperante por haber sido infiltrado por Trujillo. En cambio, esta invasión fue mejor organizada, y aunque también fracasó militarmente, a nivel político tuvo un gran impacto en la sociedad.

A mediados de 1959 el proyecto político-económico de Trujillo comenzaba a entrar en crisis. En el período 1951-1961 la inversión pública disminuye en más de un 40%; se produce una gran fuga de capitales al exterior, las importaciones disminuyen, el desempleo aumenta, etc. (*Planificación*, 1968: 23-24). Por otro lado, las condiciones externas se modificaban considerablemente, sobre todo a raíz del triunfo de la Revolución cubana. Precisamente en Cuba encontraron los exiliados la ayuda necesaria para emprender su acción contra el régimen dictatorial de Trujillo. El desembarque se produjo por tres lugares diferentes causando desconcierto en el ejército del dictador. Aunque el “frente interno” había sido infiltrado por la tiranía —lo cual debilitó las operaciones programadas—, de todas maneras se logró dar la batalla en las zonas montañosas del país, durante varias semanas. A partir de las condiciones expuestas con anterioridad, era muy difícil esperar participación activa del campesinado ni incluso pasiva, que pudiera favorecer a la guerrilla. Uno de los pocos sobrevivientes de la gesta antitrujillistas, Mayobanex Vargas, relata en sus memorias, que por las expresiones y actitudes de ciertos campesinos, pudo ver lo que “el régimen de Trujillo les estaba inculcando a los campesinos; les decían a la gente que nosotros veníamos a matarlos

y a quitarles todo lo que tenían" (Vargas, 1981:40), y tuvo que tomar bastante tiempo para explicarles que sus propósitos no eran los que Trujillo había difundido.

El mismo sobreviviente —que al parecer era uno de los pocos combatientes de extracción campesina— narra que después de haberse entregado a las autoridades de su poblado (donde había nacido y se había criado, por lo que se suponía que podía tener cierta acogida y protección), muchos le volteaban la cara para no saludarlo, aunque hubieran sido sus compañeros de escuela desde niños.

En pocas semanas la guerrilla fue derrotada. Muchos murieron en combate; otros torturados y asesinados; unos pocos lograron salvar la vida, pero a nivel político la situación era diferente. La invasión había logrado encender la chispa de la lucha social que muy rápidamente se comenzó a sentir en todo el país. A partir de ese momento surgieron organizaciones clandestinas, la principal de ellas se denominaba "14 de Junio" en conmemoración de la fecha del desembarco de 1959. Aunque las cárceles se abarrotaban de detenidos, la lucha no se detenía. La pequeña burguesía urbana había entrado en acción.⁴ En cambio, habría que esperar algunos años más para que el campesinado irrumpiera en el escenario político.

II. REFORMA AGRARIA Y RESISTENCIA CAMPESINA

La muerte de Trujillo en mayo de 1961 coincide con la reunión de Punta del Este y la estrategia que en ésta lanzara el imperialismo norteamericano de realizar reformas agrarias en Latinoamérica. Uno de los objetivos básicos de éstas era actuar como preventivo político ante los nuevos aires revolucionarios que comenzaban a respirarse en el continente, a raíz del triunfo de la Revolución cubana en 1959. Es decir, que en la República Dominicana muy rápidamente se darían tanto las condiciones internas como las externas para que se tratara de apli-

⁴ La Iglesia católica, que hasta el momento había sido uno de los pilares de apoyo del régimen, comenzó a dar un giro importante, entrando en conflicto con el dictador. El 25 de enero de 1960 el Episcopado Dominicano redactó una Carta Pastoral denunciando la represión del gobierno, para ser leída en las misas dominicales. Un estudio detenido del caso puede encontrarse en la obra de William Wipfler (1980).

car una reforma agraria. Por esa razón, la Dominicana sería uno de los primeros países donde se votaría un plan de reforma agraria, a la luz de la estrategia de Punta del Este, en abril de 1962.

Con la muerte de Trujillo parecía cerrarse una antigua y prolongada etapa de expropiación de tierra al campesinado, y al mismo tiempo surgían las condiciones para que se inaugurase una nueva época de lucha del campesinado por reapropiarse de las tierras que durante mucho tiempo se les había despojado.

Algunos de los factores que incidirían en la instrumentación de una reforma agraria, podrían sintetizarse en los siguientes aspectos: *a*] la desaparición del dictador dominicano, el mayor propietario de tierra en el país; *b*] el quiebre de los aparatos represivos sobre el campesinado; *c*] el deterioro de la producción agropecuaria; *d*] la fuerte presión del campesinado sobre la tierra.

Parece que el imperialismo comprendió muy rápido la situación dominicana, pues de inmediato comenzó a penetrar en el agro del país bajo diferentes modalidades: realizando investigaciones de alto nivel, con expertos especializados; presionando a los sectores oligárquicos dominicanos para que aplicaran una reforma agraria; proporcionando asesoramiento y préstamos a través de organismos internacionales; influyendo en las surgientes organizaciones campesinas, y asesorando al gobierno en los primeros brotes de rebeldía que el campesinado comenzaba a protagonizar.

Mientras los acontecimientos del campo tomaban este perfil, el eje de la lucha política se centraba en los medios urbanos, fundamentalmente en la ciudad de Santo Domingo, y de ésta en una zona muy específica, Ciudad Nueva, asiento de una pequeña burguesía estrechamente vinculada a la lucha antitrujillista desarrollada en el país. En tal grado se había convertido Ciudad Nueva en el escenario de la lucha popular, que los diferentes sectores sociales de la ciudad capital tenían que trasladarse hasta ella para emprender sus acciones de protesta contra los remanentes del régimen de Trujillo. En cierto momento esta lucha llegó a adquirir, aunque muy espontánea y primariamente, la modalidad de "guerrilla urbana". Una zona de Ciudad Nueva, protegida con alambrada electrificada y diversos obstáculos, fue declarada "territorio libre", por la juventud enardecida que la defendía. El saldo de la batalla con la policía antimotines fue de dos muertos y decenas de detenidos,

muchos de ellos heridos de gravedad (*¡Ahora!*, número 79, 1964:14). Tal importancia tuvo esta lucha en el proceso político que recién comenzaba a inaugurarse, que posteriormente se fundaría una organización política, la "Agrupación Patriótica 20 de Octubre", en conmemoración al día en que se librara la referida revuelta. La centralización de la actividad política en el medio urbano está estrechamente vinculado con la tenaz lucha desarrollada por la izquierda y sectores nacionalistas en general, para que las empresas estatales que habían sido heredadas del Grupo Trujillo, no fuesen vendidas a la iniciativa privada. El objetivo fue alcanzado y el sector de la oligarquía que hubiera podido emprender una marcha hacia el desarrollo burgués, vio sus planes frustrados. En cambio, las haciendas y demás propiedades agropecuarias del mismo Grupo Trujillo —que también habían pasado a manos del Estado— no ofrecieron resistencia alguna para que fueran transferidas a los medios privados, en parte porque sus antiguos propietarios, los campesinos, comenzaron a retomarlas y, además, pero fundamentalmente, porque a la oligarquía dominicana —entre reparto y reparto de los bienes de los Trujillo— no le quedaba otra cosa de la cual apropiarse que no fuesen las haciendas. De esta manera, el curso de los acontecimientos determinó que la oligarquía se reforzara aún más en el sector más atrasado de la economía dominicana, el agropecuario, ya que incluso la rama más avanzada, la agroindustria azucarera, también se convirtió en propiedad estatal, y la referida clase social no tuvo acceso a ella, a menos que no fuera muy secundariamente y con posterioridad, en calidad de colono, suministrando caña a los ingenios azucareros.

Es así como el campo —es decir la producción agropecuaria, la lucha del campesinado y su organización— fue descuidado por los sectores de izquierda, en tanto que la oligarquía y el imperialismo pasaron a actuar intensamente en él. No sería sino después de la insurrección popular y militar de abril de 1965, cuando la izquierda dominicana fija su atención en el medio rural. El hecho se podría resumir en la consigna de un partido de izquierda, el Movimiento Popular Dominicano (MPD), quien proclamaba "lo mejor al campo". Pero en rigor, no es sino hasta finales de la década de los sesenta cuando las diversas organizaciones de izquierda y los medios de comunicación comienzan a prestar un real interés por lo que ocurriera en el campo.⁵ Entrada ya la década de los setenta la lucha

⁵ Al respecto pueden consultarse algunos órganos de prensa como: a) la

social se desplazaba hacia el campo. Es decir, el campesinado irrumpe en la vida política dominicana de una manera destacada a partir de sus ocupaciones de tierra y de las diversas asociaciones fundadas en esos años.

1. Estructura agraria y éxodo campesino

La más fuerte penetración del capitalismo en el agro dominicano se produce alrededor de los años 1945-1960 (Maríñez, 1980: 36-77). A la par que se intensificaba la producción y se introducían nuevos cultivos, se manifestaban los siguientes fenómenos: a] una fuerte concentración de la propiedad en el sector azucarero al desaparecer 10 059 pequeñas fincas, a la vez que se incorporaban 1 463 633 hectáreas a dicho cultivo; b] incremento del minifundio; en diez años surgieron 163 014 pequeñas propiedades con menos de cinco hectáreas, es decir de 219 407 fincas menores de cinco hectáreas en 1950 se pasó a 382 421 en 1960. Esto significa por un lado que en tanto las pequeñas fincas del sector azucarero desaparecían dando paso a las grandes plantaciones, por el otro, los minifundios de otros sectores productivos se incrementaron considerablemente.

Ésta es la situación heredada por la oligarquía que gobierna el país tras el asesinato de Trujillo en 1961. Dentro de este contexto, la primera manifestación de resistencia del campesinado comienza a expresarse en dos modalidades: una pasiva, en forma de emigración a los centros urbanos; otra activa, ocupando las fincas del Grupo Trujillo o del Estado.

De 1960 a 1970 la población urbana a nivel nacional se incrementó considerablemente, pasando de 922 090 a 1 593 235 habitantes. En tanto que la ciudad de Santo Domingo creció durante el mismo período en 298 527 habitantes, es decir, pasó de 369 980 a 668 507 habitantes. Partimos del supuesto de que este incremento de la población urbana no se originó en un

revista *¡Ahora!*, fundamentalmente a partir de 1969. El número 294 trae un artículo de Narciso Isa Conde sobre el campesinado dominicano; el número 298 contiene una réplica de Fidelio Despradel. Ambos autores, aunque de organizaciones políticas diferentes, son destacados dirigentes de izquierda; b) *Estudios Sociales*, publicada por el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús, comenzó a publicar artículos o documentos sobre los problemas del campo, desde su primer número, en 1968; c) a partir de 1974 en que empieza a publicarse *Impacto Socialista*, los dirigentes del Partido Comunista Dominicano hicieron diversos análisis de la cuestión agraria dominicana.

crecimiento natural de la misma sino a partir de la llegada de grandes contingentes de migrantes, en parte procedentes de las zonas rurales. Es durante esta década que surgen las grandes barriadas de la capital.

A pesar de esta fuerte emigración a los centros urbanos, la presión del campesinado sobre la tierra no disminuía. Durante la década de los sesenta —juzgando por los datos de los censos agropecuarios de 1960 y 1970— el número de predios menores de cinco hectáreas disminuyó de 382 421 a 234 943, aumentando el número de latifundios. Por esta razón el campesinado no vislumbraba otra salida que la emigración o la ocupación de la tierra. Sin embargo, es importante señalar que paralelamente a los posibles elementos explicativos de carácter económico, como lo hemos venido manejando, en esa década se introdujo una variable de carácter político muy importante (primero, la muerte de Trujillo, en 1961, y después, en 1965, la intervención militar norteamericana) que sin lugar a dudas influyó mucho en la emigración campo-ciudad, e incluso también en la emigración hacia Estados Unidos.

La enorme masa de población migrante asentada en la ciudad de Santo Domingo se dedicaría a realizar los más diversos oficios, típicos de una superpoblación relativa de un país subdesarrollado y dependiente (durante, 1980). El desarrollo industrial dominicano era incapaz de absorber tan alto porcentaje de inmigrantes. Sólo la agroindustria azucarera podría acoger eventualmente —es decir, en los tiempos de zafra— una parte importante de esta población. Por esta razón, en 1970 el Sureste, que es donde se encuentra la mayor parte de los ingenios azucareros, atraía el 94.5% de los inmigrantes, mientras que para la misma fecha, la región del norte, fundamentalmente agrícola, expulsaba el 63.3% de los migrantes de la República (Dore, 1975:83).

Éstas son las condiciones que, agregando la inexistencia de una buena organización sindical, la falta de respaldo de las organizaciones de izquierda y la inoperancia de la anunciada reforma agraria, impulsan al campesinado, entre otros sectores de la población, a buscar nuevos horizontes donde poder vivir fuera de las fronteras del país. Es así como se inicia desde mediados de la década de los sesenta, es decir después de la intervención militar norteamericana, una corriente migratoria hacia los Estados Unidos, y en menor escala hacia Puerto Rico, y posteriormente a Venezuela. Las repercusiones de este fenó-

meno en el campo dominicano todavía no han sido estudiadas con la profundidad que demanda el caso.

Hasta mediados de 1960 la emigración dominicana a Estados Unidos estaba reservada a los sectores medios urbanos, fundamentalmente a una pequeña burguesía empobrecida. No hay noticias de que los emigrantes tuvieran que recurrir a métodos ilegales de viaje, como los que posteriormente se practicarían.

Desde nuestro punto de vista, en el estudio nos interesa más aproximarnos al componente social de los emigrantes que al número o volumen de éstos, que por lo demás es sumamente difícil de precisar por la cantidad de ilegales e indocumentados existentes. Hay varias vertientes para llegar a tal aproximación. Una de ellas —aunque sólo nos da indicios sobre la composición social de los migrantes, pues son viajes frustrados— es la de los hechos luctuosos, como el del “Regina Express”; en este barco murieron 22 campesinos ahogados en una bodega, en su fracasado intento de viajar a Estados Unidos (Vólquez Bello, 1981:12). Hay muchos otros casos reseñados por la prensa donde centenas de campesinos han perdido la vida en pequeñas y endebles embarcaciones, tratando de alcanzar las costas de Puerto Rico.

Otra vertiente de aproximación de la procedencia social de los migrantes, es la de las informaciones sobre la dependencia económica de la población dominicana de los envíos realizados por sus familiares en Estados Unidos. Chiqui Vicioso calcula que “aproximadamente un millón de dominicanos depende directamente de envíos provenientes de familiares de Nueva York”, para agregar que “En el pueblo de Sabana Iglesias, 60% de 146 cabezas de familia dependen de dinero enviado de Nueva York” (Vicioso, 1981:24). Este mismo fenómeno —que posiblemente se repite en muchas poblaciones rurales del país— ocurre en La Sierra de la región del Cibao, donde por cierto se trata de implementar un millonario plan que entre otras cosas tenga como objetivo evitar la emigración. En La Sierra, con 120 mil habitantes, no hay una sola familia “que no cuente con un miembro en Nueva York [...]” De acuerdo con los datos suministrados en la oficina del Plan, los habitantes serranos reciben, en su conjunto, entre 90 y 100 mil pesos mensuales enviados por familiares residentes en los Estados Unidos. Estos envíos constituyen “sin lugar a dudas, el más significativo y primordial ingreso económico de la región. Sin él, las condiciones sociales y humanas de los serranos serían muchísimo más precarias” (*¡Ahora!*, número 907, 1981:44).

INMIGRANTES Y NO-INMIGRANTES DOMINICANOS ADMITIDOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1951-1975

Año	Inmigrantes admitidos	No-inmigrantes admitidos*	Total admitidos
1951-1960	9 897	NA	NA
1961	3 045	9 102	12 147
1962	4 603	18 227	22 830
1963	10 683	56 236	66 919
1964	7 537	64 476	72 013
1965	9 504	52 638	62 142
1966	16 503	68 870	85 373
1967	11 514	78 791	90 305
1968	9 250	81 073	90 323
1969	10 670	101 454	112 124
1970	10 807	105 191	115 998
1971	112 624	74 252	86 876
1972	10 760	111 845	122 605
1973	13 921	124 528	138 449
1974	15 680	143 512	159 192
1975	14 066	149 386	163 452

* La inmensa mayoría de los admitidos como no-inmigrantes ha permanecido en los Estados Unidos como "ilegales".

FUENTE: *Informe Anual* del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Citado por Vicioso (1981, p. 24).

Ahora bien, entendemos que la población que logra emigrar en forma legal a los Estados Unidos pertenece a la de más altos recursos económicos, por supuesto que dentro de los emigrantes; o por lo menos es la población que dispone de mejores posibilidades para cubrir los requisitos de la supuesta "buena condición económica" que exige el consulado norteamericano en el país, como son los de poseer cuenta bancaria, bienes inmuebles, trabajo con alto ingreso mensual, etc. Los sectores sociales de peor condición económica, fundamentalmente los del campesinado, son los que se encuentran con mayores dificultades para probar su "solvencia económica". Por ello tienen que recurrir a los procedimientos ilegales, ya sea en la obtención del visado o en la del transporte. Sin embargo, cuando se pasa revisión a los gastos en que tiene que incurrir el emigrante ilegal, rápidamente se comprueba que no forma parte de los sectores sociales económicamente más desposeídos

del país, puesto que se requiere disponer de un promedio de mil a tres mil dólares, como mínimo, para emprender su aventura.⁶ Esta suma de dinero está muy por encima del ingreso per cápita anual en las zonas rurales del país. Consideramos que no es el campesinado sin tierra el que emigra a Estados Unidos, sino más bien una capa de campesinos medios, de pequeños propietarios con capacidad de vender, arrendar o hipotecar: tierra, casa y ganado, como se han visto precisados a declarar algunos indocumentados detenidos, entre ellos los del *Regina Express*.

Dentro de esta lógica de análisis, consideramos que la doble modalidad de resistencia antes apuntada, la pasiva y la activa, es practicada por sectores diferenciados del campesinado. Metodológicamente este aspecto no se puede perder de vista, ya que incluso tiene importantes implicaciones políticas en la lucha de clases en el campo.

A su vez, el que esté llegando a Estados Unidos un flujo de fuerza de trabajo de más baja calificación de la que llegaba hasta antes de mediados de la década de los sesenta, no sólo supone la crisis del sistema agrario dominicano, el fracaso de la reforma agraria y, en última instancia, los efectos de la penetración del capitalismo en el campo, sino que también implica otro fenómeno mucho más complejo. Este nuevo flujo de fuerza de trabajo menos calificada, sobre todo la que llega en condición de "ilegalidad", genera una tendencia a la baja del salario de la población migrante ya establecida en Estados Unidos. Estos nuevos inmigrantes se encuentran dispuestos —dada su condición de ilegalidad— a aceptar un salario por debajo del vigente. Si a esto agregamos que durante los primeros nueve años de la década de los setenta en Nueva York se suprimieron más de medio millón de empleos, a causa del traslado parcial o total a otros estados de diversas compañías, se podrá comprender mejor el significado del incremento de la migración hacia dicha metrópoli. "De las 140 compañías que habían en Nueva York y consideradas entre las 500 más importantes del país, quedaban sólo 95 en 1976. Para el mismo año, sólo

⁶ Esa cantidad de dinero, relativamente alta, incluye gastos de "visado falso", o en su defecto "transporte ilegal" a Estados Unidos así como un fondo mínimo para instalación del inmigrante. Los que viajan ilegalmente a Puerto Rico, posiblemente requieran de una cantidad menor de dinero ya que las tarifas de transporte en embarcaciones clandestinas son más bajas. Sin embargo, más de mil dominicanos han muerto ahogados de 1976 a 1982, tratando de cruzar el Canal de la Mona en endeble embarcaciones.

permanecían aquí 23 de 39 compañías ubicadas entre las 100 más grandes del mundo" (*La Noticia*, 1979: 4-B). Es a partir de estas nuevas condiciones que en los últimos años comienza a producirse una cierta tendencia de retorno de los migrantes que se habían establecido, fundamentalmente antes de 1965. Sin embargo, lo que está ocurriendo no es más que una especie de reacomodo de la fuerza de trabajo, según las necesidades del capital, en tanto que es así como éste puede mantener o aumentar su tasa de ganancia. Es decir, la fuerza de trabajo menos calificada —dentro de la que juega un papel importante la de extracción rural— está desplazando a la más calificada, que procedía de los medios urbanos. Las consecuencias de que el país expulse una masa importante de migrantes que envía mensualmente —o cada cierto tiempo— una remesa a su lugar de origen, el campo, y por otro lado, las implicaciones del retorno de los antiguos migrantes —si es que éste se incrementa y se consolida— es algo que aún está por verse.

De todas maneras, este tipo de resistencia pasiva es el que menos cuestiona y pone en peligro los intereses de la oligarquía y sectores de la burguesía en el país. Más bien resulta ser la más rentable, pues a la vez que aminora la presión del hombre sobre la tierra —o del desempleo y los conflictos sociales— remite una jugosa remesa anual de dólares. En julio de 1980, el Banco Central de la República Dominicana informó que los cientos de miles de dominicanos residentes en Estados Unidos y Puerto Rico, unas 150 mil familias, envían a sus parientes en el país un promedio de 50 dólares mensuales, calculándose que cada mes ingresan aproximadamente 7.5 millones de dólares, de Estados Unidos y Puerto Rico, es decir unos 90 millones de dólares al año. Estas remesas significan una quinta o sexta parte del presupuesto nacional (*El Sol*, 23 de julio, 1980:19). Ésta es la razón por la que ciertos sectores burgueses del país reclaman una mayor "cuota de emigración" hacia Estados Unidos, en los términos siguientes: "¿por qué la República Dominicana no puede negociar con los Estados Unidos un aumento de su cuota de emigración que le sirva de válvula de seguridad a los enormes problemas que genera la existencia de una población joven y llena de expectativas y aspiraciones, pero desempleada?" (Moya Pons, 1981:19). Sin embargo, por lo menos en la coyuntura actual, en este aspecto los intereses del imperialismo no parecen coincidir con los de la burguesía dominicana, pues Estados Unidos también afronta una fuerte crisis económica.

Mientras las condiciones económicas y sociales de la República Dominicana han impulsado a un sector del campesinado a optar por la resistencia pasiva, otro ha tenido que dar la batalla en el mismo territorio dominicano, ejerciendo la resistencia activa a través de ocupaciones de tierra, denuncias, demandas y organizaciones que defiendan sus intereses. De esta manera, el gobierno se ha visto presionado a tratar de implementar una reforma agraria que, al decir de Balaguer (1979: 225) "tenga un efecto mitigador sobre nuestras tensiones sociales".

2. Intentos y fracasos de la reforma agraria

Existen dos grandes intentos de implementar una reforma agraria en el país a partir de la década de los sesenta. El primero dura diez años (1962-1971); el segundo, seis (1972-1978).⁷ El primer intento recorre varios gobiernos: dos enteramente oligárquicos y pronorteamericanos (un Consejo de Estado, 1962-1963 y un triunvirato, 1963-1965); un corto período democrático de siete meses, en 1963, con Juan Bosch, y un gobierno reformista y acentuadamente pronorteamericano, el de Joaquín Balaguer, 1966-1971. El segundo, y más importante intento, se produce bajo el mismo gobierno de Balaguer, 1972-1978.

Entre mayo de 1961 —muerte del dictador Rafael L. Trujillo— y abril de 1962 —promulgación de la reforma agraria—

⁷ Aunque hemos preferido concluir nuestro estudio al final del gobierno de Balaguer, en 1978, el segundo intento de reforma agraria ha continuado en un franco declive con el gobierno del PRD desde agosto de 1978 hasta la actualidad (1981). "La meta que trazó el PRD fueron 5 mil asentamientos por año. El gobierno no ha cumplido los cinco mil, en más de dos años y medio, en sólo 24 lugares, incluyendo los asentamientos ganaderos" (García, 1980: 77). Del 16 de agosto de 1978 al 25 de junio de 1981, el IAD repartió un total de 30 551 hectáreas de tierra (Jiménez, 1981: 5). A su vez, las ocupaciones de tierra han continuado su ritmo creciente: "Como obedeciendo a una estrategia, los campesinos del país se han metido en campos privados o estatales en las cuatro regiones principales del territorio, en Las Matas de Farfán y San Cristóbal, por el sur, en San Francisco de Macorís y Nagua, por el norte y nordeste y en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en la región del Distrito Nacional. También en la zona de Puerto Plata". Los funcionarios del IAD argumentan que durante el año 1981 las ocupaciones no se han incrementado, puesto que "el año anterior en igual período fueron mucho más las invasiones en los campos". Todo ello durante el gobierno del PRD (García, 1981: 7-8).

transcurre uno de los años más convulsionados que política y socialmente conociera la historia dominicana durante muchas décadas. Aunque el espacio de la lucha política y social estaba reservado a los medios urbanos, como ya hemos visto, el campo no era ajeno a las transformaciones que reclamaba el país. La necesidad de introducir cambios en el régimen agrario era inapelable. La herencia del Grupo Trujillo en propiedad territorial convertía al Estado en el mayor terrateniente dominicano, situándolo en favorable condición para realizar una reforma agraria. Ante el temor de que el campesinado comenzara a ocupar dichas tierras, apenas a los dos meses de haber sido asesinado el dictador, el 8 de agosto de 1961, el entonces presidente Balaguer dispuso la distribución de más de mil hectáreas entre campesinos necesitados. Reparto que al parecer sólo fue en teoría, pero que tenía como objetivo abrir un compás de espera en el campesinado hasta tanto se hicieran los estudios necesarios y se promulgara una reforma agraria. Este espacio de tiempo a su vez fue aprovechado por los sectores oligárquicos para apropiarse de las mejores tierras que había dejado el Grupo Trujillo.

Antes de abril de 1962 se inicia una fuerte pugna entre los tres sectores protagonistas de la lucha por la tierra: el campesinado, la oligarquía dominicana y el imperialismo. El primero, como es lógico, presionando, sobre todo a partir de ocupaciones, para que se tomaran las medidas tendientes a resolverle su problema; el segundo —aunque con algunas contradicciones, en tanto que habían sectores proburgueses que defendían la aplicación de una reforma agraria—, tratando de apropiarse la tierra del Grupo Trujillo, y el tercero, el imperialismo, dentro de su política delineada en Punta del Este, presionando para que se aplicaran medidas de reforma agraria, así como pretendiendo ampliar sus propiedades de tierra en el país.

Dentro de este contexto comienzan a actuar diversas instituciones: la Comisión para el Planeamiento de la Aplicación de la Reforma Agraria; una Misión Especial de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID); el Instituto Agrario Dominicano (IAD); a la vez que se realizan varios anteproyectos de reforma agraria, imponiéndose el presentado por la Misión Especial de la IAD (Olivares, 1976). En este primer año, 1962, la oligarquía dominicana ofrece una fuerte resistencia a la promulgación de la reforma agraria.⁸ Paralelamente el impe-

⁸ J. B. Martín refiere que en conversaciones particulares con miembros

rialismo norteamericano, a través de su misión diplomática, utiliza diversos mecanismos para tener injerencia directa en los asuntos agrarios dominicanos.

a) *Primer intento, primer fracaso.* Por encima de las contradicciones que pudieran existir, el 27 de abril de 1962 se promulga la ley de reforma agraria.⁹ Una ley que consta de once capítulos y 65 artículos, y que en ninguno define lo que entiende por latifundio ni pone límite a las grandes propiedades; una ley que tampoco se pronuncia sobre la posesión de tierra por parte del capital extranjero; pero una ley que sí había costado cientos de miles de dólares al pueblo dominicano, en sueldos y honorarios a los técnicos y asesores norteamericanos y nacionales.¹⁰

No existen los menores indicios de que la aplicación de la reforma agraria durante el gobierno oligárquico del Consejo de Estado arrojará resultados positivos. Por lo menos hasta fines de diciembre de 1962 —en que se celebran elecciones presidenciales—, solamente se habían realizado cuatro asentamientos, beneficiando a 863 parceleros con un total de 3 848 hectáreas, lo cual apenas significaba un promedio de 4.5 hectáreas por familia. Muchos de los asentamientos referidos no eran más que la legalización de hechos consumados, puesto que se le entregaba título de propiedad a los campesinos que ya habían ocupado fincas. Pero muy poco se podía esperar del Consejo de Estado en el reparto de tierra ya que ni siquiera se había logrado contabilizar o censar “la extensión y colindancias de cada una de las propiedades del Estado”, en la que pretendía basarse el plan de reforma agraria. Diez años más tarde, el presidente Joaquín Balaguer se vería en la necesidad de crear una comisión con el objetivo de “localizar y determinar todas las tierras propiedad del Estado que se encuentren actualmente en manos de particulares”.

En realidad durante dicho gobierno la oligarquía se dedicó a hacer su propia reforma agraria, es decir, a apoderarse de las

del Consejo de Estado, uno de ellos, Donald Read Cabral, le manifestó que sería inflexible ante las proposiciones de realizar una reforma agraria durante su gobierno. “La atacaré en el Consejo, y si la aprueban allí, la atacaré fuera de él”, fueron las palabras de Read Cabral (Martin, 1975: 111).

⁹ Nos referimos a la Ley de reforma agraria número 5879 (IAD, 1980).

¹⁰ Juan Bosch (1964) señala que “Durante el Consejo de Estado, una firma hizo un estudio para la reforma agraria por el cual cobró una verdadera fortuna —doscientos cincuenta mil dólares, en dólares, no en pesos dominicanos—, y el estudio no sirvió para dar un paso” (p. 154).

más importantes y ricas fincas del Grupo Trujillo. Si se analiza detenidamente el período referido, se encuentra que la oligarquía dominicana contaba con las mejores condiciones para alcanzar sus objetivos: a] el carácter provisional de su gobierno, cuyo propósito fundamental era dar paso a un gobierno constitucional; b] toda la atención política se encontraba centrada en la campaña presidencial de diciembre de 1962; c] la confusión política existente en el país, en tanto no se veía claramente el papel y carácter de la oligarquía, ya que ésta encarnaba el "antitrujillismo" del que se hacía eco el pueblo; d] el descuido de los sectores de izquierda sobre la cuestión agraria dominicana.

Los esfuerzos realizados por la oligarquía, a través de su partido, Unión Cívica Nacional (UCN), para permanecer constitucionalmente en el gobierno, con las elecciones de 1962, eran enormes. Sin embargo, el pueblo en general —sobre todo si es que consideramos los 31 años de oscurantismo político de la dictadura de Trujillo—, con una gran intuición política, rechazaría las pretensiones presidenciales de la oligarquía, dándole su apoyo al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), liderado por Juan Bosch. Más tarde éste sería acusado de llevar la lucha de clases al pueblo.

Si la oligarquía desde el gobierno había hecho inoperante la reforma agraria, después de su derrota electoral pasaría a impedirla abiertamente, sobre todo al tener en cuenta que el PRD contaba con una importante base social en el campesinado. Una de las armas utilizadas por la oligarquía fue la de acusar de comunista al presidente Juan Bosch, lo que a su vez servía como pretexto para organizar varias concentraciones "de reafirmación cristiana", que decían tener el objetivo de detener el avance del comunismo. A los siete meses de gobierno, es decir, en septiembre de 1963, se produce el golpe de Estado que devuelve el gobierno a la referida oligarquía, ahora a través de un triunvirato.

No podemos precisar el número de asentamientos realizados durante el gobierno de Bosch ni el de parceleros y familias favorecidas, así como la cantidad de tierra repartida. Si nos guiamos por los informes del IAD, entendemos que los parceleros asentados no superaron los setecientos y la tierra distribuida no debió llegar a las cuatro mil hectáreas. Algunos autores consultados al respecto proporcionan las informaciones más diversas: para unos sólo fueron asentadas 108 familias,

para otros, 1 500.¹¹ De todas maneras, el hecho más significativo del breve régimen de Bosch radica en los planteamientos que al respecto se formularon en la Constitución votada por su gobierno. Entendemos que hay dos artículos claves: el número 23, que condena "los latifundios particulares, sea cual fuere la forma en que éstos se originaron", señalando además que la ley fijaría la extensión máxima de tierra que se podría poseer o tener en propiedad; el otro artículo es el número 25, que prohíbe a los extranjeros ser propietarios de tierra en el país. Ambos apuntaban a golpear a la oligarquía terrateniente y a los grandes consorcios norteamericanos. Por esta razón, los intereses de ambos se unirían en los planes golpistas consumados en septiembre de 1963.

Un balance general del gobierno oligárquico del Triunvirato que detenta el poder desde septiembre de 1963 hasta abril de 1965 arroja dos elementos importantes: la más alta corrupción que gobierno dominicano alguno haya conocido hasta ese momento; y un gran auge de la lucha popular con el objetivo de reponer al gobierno constitucional de Juan Bosch. A su vez, la caída de los precios de los productos agrícolas de exportación —como en el caso del azúcar, por citar un ejemplo— aumentó el desempleo del proletariado agrícola. Para hacer frente a tal situación, el Triunvirato fue favorecido en lo que se refiere a ayuda, asistencia, préstamos e inversiones, por Estados Unidos y organismos internacionales. Calculamos, de acuerdo con la documentación que manejamos, que el Triunvirato recibió una suma no menor de 300 millones de dólares en casi dieciocho meses de gobierno: 75 millones de parte de la OEA; 25 millones del FMI; 165 millones de inversionistas privados norteamericanos; 30 millones de seis bancos privados de Estados Unidos, y 1.7 millones de dólares del Banco Mundial; además de ayudas de la AID para la reforma agraria, construcción

¹¹ Carlos Dore (1973: 33) en su columna "Hechos Paralelos", en la revista *Ahora!*, núm. 512, señala que Juan Bosch "En su abortado mandato hizo 5 asentamientos, entre 11 132 tareas [una hectárea es igual a 15.9 tareas] de tierras, distribuidas entre 108 familias"; el autor indica usar el IAD como fuente. Franklin J. Franco (1966) en cambio apunta que Bosch: "En sólo siete meses asentó unas 1 500 familias campesinas" (p. 181); y Dan Kurzman (1966) por su parte plantea que: "Sólo 1 300 familias habían sido instaladas en su tierra en los siete meses que estuvo en el poder, pero a fines de septiembre, el número debía aumentar a 4 000, llegando a 20 000 para término del mando de Bosch en 1966" (p. 82).

de carreteras, etc., así como de otros organismos, de los que desconocemos el monto total (Martin, 1975).

Ahora bien, como la corrupción penetraba todas las esferas del régimen golpista oligárquico, es muy difícil que el dinero de ayuda y asistencia de organismos internacionales llegara a su verdadero destino, por lo que, para frenar la situación explosiva que ya se preveía en el país, el Triunvirato se dedicó a realizar repartos de tierra. Al igual que algunos de los del Consejo de Estado, muchos eran asentamientos de los campesinos que ya habían hecho ocupaciones de tierra, o eran entrega de títulos de propiedad, sin que se entregara tierra alguna. De todas maneras, según los datos del IAD, el Triunvirato repartió cerca de once mil hectáreas entre dos mil campesinos, lo que significaba un promedio de 5.5 hectáreas por familia.

A pesar de todo la insurrección popular estalló en abril de 1965 y, aunque una vez más el centro de la lucha se redujo —o fue reducido— a la ciudad de Santo Domingo, el movimiento era expresión de todo el pueblo a nivel nacional. El gobierno norteamericano, como es bien sabido, rápidamente hizo desembarcar sus tropas de ocupación para evitar la instauración de un “régimen comunista” o de una “nueva Cuba”. Lo que no se lograba percibir es que en ese mismo momento Estados Unidos comenzaba a mover enormes recursos para realizar investigaciones sobre la situación agraria del país, de manera que pudiera trazar una verdadera política que neutralizara la insurrección popular dominicana, por lo menos calculándolo a largo plazo, pues en lo inmediato ése era el papel de los *marines*. Es decir, a la par que en la República desembarcaba la soldadesca yanqui, comenzaban a llegar los técnicos y expertos en cuestiones agrarias, algunos con experiencia de trabajo en Vietnam y otros países donde Estados Unidos se había visto en la necesidad de impulsar medidas agrarias de carácter contra-insurgente. Quizás el más importante de los estudios realizados por estos expertos fuera el conocido *Informe del Grupo de Estudio sobre la Agricultura en la República Dominicana*,¹² de

¹² El Grupo de Estudio estaba integrado por los siguientes miembros: E. D. White: jefe del grupo, economista agrícola retirado, Unión City, Tennessee; William R. Bradley: representante en la América Latina de la Hawaiian Agronomics Co.; Milo Cox: subdirector de la División de Desarrollo Rural de la Oficina Latinoamericana de la AID, Washington, D. C.; Howard L. Hall: jefe de la Rama del Hemisferio Occidental del Servicio de Investigaciones Económicas del Departamento de Agricultura de

marzo de 1966. Después de realizar un excelente diagnóstico sobre el problema agrario dominicano, el Grupo de Estudio recomienda "programas osados" y urgentes, pues consideraba que si éstos no se implantaban "el alto grado de inquietudes y miserias sociales podrá producir una nueva explosión de catastróficas proporciones". Sin pretender considerar al imperialismo como *deus ex machina* de todas las actividades políticas y económicas de la República, lo cierto es que cuando uno lee detenidamente los discursos presidenciales de Joaquín Balaguer, donde hace planteamientos sobre el problema agrario dominicano, no puede dejar de volver la vista sobre la similitud que en el fondo guardan sus señalamientos y propósitos con los que se formularan en el referido *Informe del Grupo de Estudio*.

Pero Balaguer no podrá impulsar su reforma agraria sino después de seis años de haber asumido la presidencia del país con el apoyo de las tropas invasoras norteamericanas. Previamente necesitaría golpear a las principales organizaciones de izquierda que habían participado en la insurrección popular armada de abril de 1965; los encarcelamientos, asesinatos y demás violaciones se hicieron indiscriminadamente. Además Balaguer necesitó reestructurar los aparatos represivos, como los de la policía y el ejército nacional, que habían quedado bastante deteriorados a raíz de la contienda bélica. De todas maneras, antes de dictar sus leyes agrarias en 1972, Balaguer aceleró el primer intento de reforma agraria, aumentando los repartos de tierra a la par que incrementaba la presión campesina y las recomendaciones de los "expertos". Aunque entendemos que el mismo presidente Balaguer era partidario de una reforma agraria, capaz de detener la conspiración "contra la tranquilidad del país y que pone seriamente en peligro la estabilidad democrática de nuestras instituciones", como él mismo la definiera más tarde.

En sus primeros seis años de gobierno (1966-1971) Balaguer logra repartir 51 681 hectáreas de tierra entre 10 729 parceleros, con lo que se beneficiaba a un total de 70 149 campesinos. Pero se preveía que para tratar de darle un mayor impulso a la reforma agraria se hacía necesario recuperar las tierras del Estado, fundamentalmente las heredadas del Grupo Trujillo, que eran usufructuadas por la oligarquía y altas capas militares,

Estados Unidos, Washington, D. C.; W. Bailey Pace: oficial encargado del Desarrollo Rural de la USAID, embajada de Estados Unidos, Managua, Nicaragua.

como ya hemos señalado. Además, se tendría que tratar de ampliar la frontera agrícola con obras de riego e incluso afectar las propiedades de los terratenientes. Es decir, si se pretendía mínimamente alcanzar las recomendaciones que indicaban los "expertos", sería necesario tomar nuevas disposiciones y trazar nuevas estrategias, pues hasta el momento el intento de reforma agraria había constituido un fracaso.

En efecto, en el transcurso de diez años de reforma agraria apenas se habían asentado 14 525 familias campesinas, con un promedio de 4.9 hectáreas por cada una. Según los cálculos realizados por los especialistas, la solución del problema del campo dominicano demandaba que se asentaran no menos de 20 mil familias cada año. Si se aprecia cuán distante se estaba de la meta necesaria, se podrían comprender las fuerzas que impulsaban las ocupaciones de tierra, que ya para fines de la década de los sesenta y principios de los setenta, tomaban gran auge. Es esta lentitud de la reforma agraria lo que también nos permite entender el incremento de las organizaciones campesinas, así como las demandas y denuncias de diferentes sectores sociales —desde la Iglesia católica, hasta los partidos de izquierda—, exigiendo que se solucionara el problema del campo.

Además, como se podrá observar, el intento de reforma agraria se había limitado al reparto de tierra, sin que se tenga conocimiento de que las autoridades gubernamentales hayan mostrado interés en afrontar los problemas de financiamiento de los cultivos y la comercialización de los productos agropecuarios de los campesinos beneficiados en el referido reparto de tierra.

RESULTADOS DE LOS INTENTOS DE APLICACIÓN DE LA REFORMA
AGRARIA (1962-1975).

Años	<i>Parceleros asentados</i>	<i>Hectáreas asignadas</i>	<i>Personas beneficiadas</i>
1962-1965	3 796	19 955	24 468
1966-1971	10 729	51 681	70 149
1972-1975	18 657	97 056	122 326
Total	333 191	168 692	266 979

FUENTE: Elaborado con base en Munguía (1976: 113).

b] *Segundo intento, nuevo fracaso.* Los discursos de la campaña electoral de Joaquín Balaguer, en 1966, y fundamentalmente el de toma de posesión, en julio de 1966, no sólo permiten apreciar que en su plataforma política se encontraba contemplado un programa de reforma agraria, sino incluso las modalidades de la misma y los objetivos propuestos. En efecto, en un discurso del 1 de julio de 1966 Balaguer plantea que los "que acaparan el agro nacional" debieran ceder sus tierras al Estado, a cambio de que éste pagara su equivalente con inversiones en el sector industrial de su propiedad. Incluso llegó a señalar las industrias que se podían prestar a este tipo de operación. La propuesta tenía un claro contenido reformista o modernizante: el pasaje o conversión de los sectores terratenientes a uno más dinámico, el de la burguesía industrial. Sin embargo, la propuesta se quedó en el discurso formal, o no tuvo acogida alguna por la oligarquía terrateniente, pues tal proceso de conversión de un sector a otro de la economía no se produjo. En el mismo discurso referido, al pedir colaboración a los latifundistas en el reparto de tierra al campesinado, Balaguer agregaba que:

"Ese desprendimiento es el precio que los grandes terratenientes de este país tienen que pagar no sólo para que la República disfrute de instituciones justas y descansen sobre bases estables, sino también para que los que posean grandes riquezas conserven la parte que deben conservar sin temer a que los bienes regados con el sudor de su frente o recibidos de manos de sus mayores desaparezcan arrastrados por una conmoción social que ya se siente en la atmósfera" (Balaguer, 1979:30).

Este último planteamiento, no obstante que posteriormente fuera repetido reiteradamente, tampoco fue comprendido o aceptado por los terratenientes. Y es precisamente esta oligarquía terrateniente, como era lógico que ocurriera, la que presentará más fuerte resistencia a la aplicación de la reforma agraria, incluso conspirando contra Balaguer, no obstante éste representar los intereses de la derecha en su conjunto, ser abiertamente pronorteamericano, cumplir a cabalidad con una labor contrarrevolucionaria y haber posibilitado una gigantesca corrupción de donde surgieron —como él mismo lo reconociera— cientos de nuevos millonarios.

Entendiendo que la batalla que se libraría contra la oligarquía terrateniente sería bastante ardua, Balaguer posterga durante seis años su proyecto de reforma agraria, en espera de mejores condiciones políticas. Al margen de los repartos de

tierra ya referidos, sus primeros seis años de gobierno fueron dedicados enteramente a la más feroz represión que haya conocido la historia dominicana, superando con creces la de la tiranía de Trujillo.¹³ La situación era muy compleja, pues una parte del pueblo había logrado conservar armas de diferente calibre, después de la insurrección popular y militar. Hasta noviembre de 1971 se lograron incautar 2 145 armas de fuego, en tanto que de 1967 a 1971 se registraron "3 276 casos de persecuciones políticas y encarcelamientos" (Duarte y Pérez, 1979: 66). Sólo durante 1970 se contabilizaron 186 asesinatos políticos, la mayoría realizados por un grupo de ultraderecha denominado "La Banda", dirigido por la Policía Nacional y asistido directamente por la CIA.¹⁴

Una vez que Balaguer consideró que había desarticulado las organizaciones de izquierda, decidió pasar a instrumentar medidas reformistas, especialmente en el sector agropecuario. A través de éstas, se pretendía, además, restaurar la deteriorada imagen política de Balaguer ante los sectores populares.

No es por casualidad que las Leyes agrarias fueron presentadas al Congreso en febrero de 1972, cuando ya la etapa represiva había cumplido por lo menos su objetivo fundamental. Era necesario estar en condiciones para enfrentarse a la oligarquía terrateniente, en el nuevo frente de oposición que ésta organizara. Hasta cierto punto la oposición capitaneada por la oligarquía terrateniente resultaba más peligrosa para Balaguer, pues entre otros aspectos, los mecanismos represivos del sistema han sido diseñados para ser aplicados a los sectores populares, a la izquierda, pero no así a la oligarquía. Por lo demás, las armas con las que Balaguer se enfrenta a este sector social

¹³ En mayo de 1982, días antes de las elecciones presidenciales del mismo mes, donde Joaquín Balaguer se presentaba nuevamente como candidato presidencial del Partido Reformista, una organización denominada "Frente Nacional Antirregresionista Dominicano", editó, en 16 páginas, un *Album de la muerte de los 12 años balaguerista*, donde daba cuenta, año por año, de una nómina de cientos o quizás miles de jóvenes asesinados durante el referido régimen balaguerista.

¹⁴ Existen elementos suficientes de denuncias realizadas a través de la prensa —e incluso declaraciones oficiales, como la del presidente Balaguer, en el sentido de que los crímenes de "La Banda" eran cometidos por "fuerzas incontrolables"— que permiten plantear, sin caer en una acusación de carácter panfletario, que había asesoramiento o participación de la CIA. Por lo demás, la CIA no realiza sus actividades dejando constancia ante ningún notario público. Con suerte, se puede tener prueba de sus reales actuaciones a través de las mismas denuncias realizadas por desertores de la referida institución.

eran enteramente legales e institucionales, manejando únicamente ciertas medidas de violencia —las ocupaciones de tierra, a través del campesinado dirigido por los grupos oficialistas— con carácter demagógico ante el mismo campesinado y, muy secundariamente, como presión a la oligarquía terrateniente.

El papel desmovilizador de la reforma agraria ante los sectores populares, produjo una situación bastante compleja. Por un lado se incrementó la participación política del campesinado, no sólo con las ocupaciones de tierra, sino fundamentalmente a partir de sus propias organizaciones. Por otro, la izquierda se encontró algo entrampada, pues oponerse a medidas reformistas, populistas o modernizantes, implicaba el uso de nuevas armas de lucha, de las que la izquierda —quizás con muy raras excepciones— carecía. Además, por lo menos se consiguió arrastrar al Partido Comunista Dominicano (PCD), quien consideró que lo correcto era apoyar el proyecto agrario, y así lo hizo tenazmente, tratando de agudizar las contradicciones entre la oligarquía terrateniente y el sector reformista representado por Balaguer, así como de impulsar la lucha campesina a través de las ocupaciones de tierra, de sus organizaciones, etcétera.

Por esta razón y muy astutamente, Balaguer pidió a las Cámaras Legislativas el reconocimiento del PCD. Con ello se apuntaba a dos objetivos: por un lado, sumarse un aliado para enfrentarse a la oligarquía terrateniente; por otro, dividir aún más a la izquierda, en tanto que se calificaba al PCD como una organización integrada por “jóvenes intelectuales que profesan las ideas marxistas-leninistas”, que no habían cometido ningún acto que se riñera con la Constitución de la República, y se tildaba al resto de la izquierda de ser “asociaciones de malhechores [...] dedicados al terrorismo, al atraco, al secuestro, etc.” (Balaguer, 1979: 308-309). Lo cierto es que independientemente de los objetivos maquiavélicos que Balaguer se propusiera al legalizar al PCD, esta medida había que interpretarla dentro de la complejidad de las luchas populares que se libraban en el país, y desde este punto de vista la legalización no era más que una conquista del pueblo. Por esta razón el Partido Comunista Dominicano se apresuró a deslindar su apoyo brindado a las leyes agrarias, y sus relaciones de oposición y crítica abierta al régimen represivo de Balaguer. Es así como el carácter de este apoyo no era suficiente para que Balaguer, en términos de agitación y fuerza, pudiera combatir a los terra-

tenientes. Además, desde el punto de vista oficial no era conveniente permitirle mucha participación a la izquierda en esta lucha; su espacio de acción estaría limitado al análisis, críticas y denuncias en determinados medios de comunicación.¹⁵

Para tratar de imponer su proyecto de reforma agraria, Balaguer requirió crear dos organizaciones de agitación agrarias —inscritas dentro del reformismo, y por lo tanto controladas totalmente por el Partido Reformista, no obstante las contradicciones que parecían existir— que fueron las Juntas de Acción Agrarias (JUNAGRA), y el Movimiento Agrario Reformista (MAR). Esta última, dirigida por el ingeniero Osvaldo Leger, constituyó el mayor apoyo que pudiera recibir Balaguer en su pretendida reforma del agro dominicano. El MAR se autocalificaba como el “ala izquierda y espuela cortante del Partido Reformista” e incitaba al campesinado a realizar ocupaciones de tierras del Estado así como de fincas de algunos terratenientes que se mostraban muy reacios a la política oficial reformista. Osvaldo Leger, totalmente identificado con la aplicación de las leyes agrarias, amenazaba a los terratenientes en el sentido de que el MAR estaba dispuesto a apelar “a cualquier procedimiento que dé término en forma definitiva a esta situación”; es decir, a la de injusticia en el campo. A su vez, Leger reiteraba la consigna de que si no se permitiesen los cambios pacíficos que Balaguer estaba impulsando “La próxima revolución sangrienta que se haga en la República Dominicana se hará en el campo” (Mercallé Abreu, 1973).

Las leyes agrarias, o código agrario —como han preferido llamarla algunos— consiste en un juego de leyes¹⁶ con las que

¹⁵ Véanse apartados a) y c) de la nota 5. Además, los artículos de Orlando Martínez en la revista *¡Ahora!* y *El Nacional*, que posteriormente fueron recogidos en el tomo III de *Microscopio* (1980); F. S. Ducoudray, en *¡Ahora!*, núms. 500, 506 y 527 de 1973; Isis Duarte en *¡Ahora!*, núms. 532 y 533 de 1974. Alrededor de estos años la misma revista señalada y otros medios de comunicación dieron cabida a diversos artículos sobre la problemática. Véase también Franklin J. Franco (1973) en la revista *Renovación*, núm. 223.

¹⁶ Aunque son muchas leyes y decretos, queremos referirnos muy especialmente a los siguientes: Ley núm. 282, del 20 de marzo de 1972, que declara de utilidad pública y de interés social la adquisición por el Estado, para ser traspasadas al Instituto Agrario Dominicano, de todas las tierras baldías que existen en la República y de aquellas cuyos propietarios las hayan prácticamente abandonado; ley núm. 283, del 20 de marzo de 1972, que crea una Comisión encargada de realizar los procedimientos necesarios para recuperar las tierras del Estado que se encuentran en manos de particulares; ley núm. 287, del 26 de marzo de 1972, que declara de

se pretende, si no reformar las estructuras agrarias, por lo menos: a] permitir un efectivo control del Estado sobre las tierras de su propiedad, con el objeto de poder hacer uso de ellas y distribuirlas entre el campesinado; b] modificar ciertas formas de tenencia o de relaciones de producción; c] ampliar la frontera agrícola, a través de tres procedimientos: incorporando las tierras baldías a la producción agropecuaria, pasándola previamente a manos del Estado; haciendo cultivable amplias extensiones de tierra a través de obras de irrigación; limitando las haciendas ganaderas de carácter extensivo, con el fin de incorporar parte de éstas a la producción agrícola;¹⁷ d] amortiguar la lucha campesina.

Con el fin específico de recuperar las propiedades del Estado, fue creada una Comisión de Recuperación de Tierras, la que al decir de Balaguer, en el curso de diez meses logró recuperar 18 174 hectáreas; en tanto que en el mismo período se puso a disposición del Instituto Agrario Dominicano, un total de 5 143 hectáreas de tierras declaradas baldías (Balaguer, 1979:257. Hay serias dudas de que la Comisión de Recuperación de Tierras pudiera lograr sus objetivos a plenitud, pues no obstante las cifras referidas, las propiedades del Estado eran

interés social la resolución de todo contrato de arrendamiento relativo a tierras del Estado que exceden de 100 tareas (6.2 hectáreas), siempre que se trate de tierras irrigadas; ley núm. 289, del 29 de marzo de 1972, que prohíbe la celebración de contratos de arrendamientos o de aparcería o de cualquier otros en las regiones rurales de la República; ley núm. 290, del 29 de marzo de 1972, que declara de interés nacional el traspaso al IAD de todas las tierras del país que se hallan actualmente dedicadas al cultivo de arroz; ley núm. 292, del 29 de marzo de 1972, que concede un plazo para que todas las personas que detentan tierras del Estado, a título precario, las restituyan al dominio de éste; ley núm. 314, del 19 de abril de 1972, que define el latifundio en la República Dominicana; ley núm. 391, del 22 de septiembre de 1972, que establece la colectivización del cultivo de las tierras adquiridas por el Estado para ser destinadas a la producción de arroz.

¹⁷ En febrero de 1974, Balaguer manifestaba que "Este nuevo proyecto tiende a incorporar a la reforma agraria todas las tierras óptimas para la agricultura que actualmente se hallan dedicadas a la ganadería", y luego agregaba que "No podemos continuar afrontando el riesgo de que una vaca disponga para su alimentación de 10 tareas de tierras óptimas cuando en su alrededor hay centenares de campesinos que no disponen de una sola pulgada de tierra para el sustento de sus hijos. La ganadería dominicana, además, tiene que evolucionar y ponerse a la altura de los demás mediante el empleo de métodos y sistemas que hagan posible el engorde de ganado y la producción de leche en un área relativamente escasa" (Balaguer, 1979: 305-306). El proyecto fue rechazado por las Cámaras Legislativas.

mucho mayores. A nuestro entender la problemática radicaba en que las mejores fincas se encontraban en posesión de la oligarquía y de altos militares, que al parecer desarrollaron un amplio sistema de falsificación de títulos de propiedad.¹⁸

En lo referente a la modificación de las formas de tenencia o de algunas relaciones de producción la inoperancia parece haber sido mayor, pues se estableció un complicado sistema de clasificación de los terrenos, según su calidad, topografía, etc., que además de hacer difícil la aplicación de la ley, permitía que fincas de cerca de tres mil hectáreas no fueran afectadas. De esta manera se podían conservar los latifundios existentes. Por lo demás, no se llegó a conocer ningún caso en que se declarara como latifundio a finca alguna. Tampoco se conocieron casos de aplicación de la ley que prohibía la celebración de contratos de arrendamientos, aparcería o formas equivalentes. Dentro de este renglón, la única ley que logró un relativo éxito fue la de asentamientos colectivos en las tierras de cultivo de arroz. Generalmente se ha planteado que esta ley entraña una contradicción en la política agraria de Balaguer, en tanto que golpeaba a uno de los sectores más eficientes en el capitalismo agrario dominicano (al margen, por supuesto, del azucarero), corriéndose el riesgo de que se deteriorara la producción de arroz, uno de los productos básicos de la dieta popular dominicana, como en efecto ocurrió. Lo que se pierde de vista es que la reforma agraria de Balaguer, por su propio carácter contrainsurgente, se veía presionada a satisfacer las demandas campesinas, incluso a costa del deterioro de posibles cultivos muy avanzados. De todas maneras, se trató de combinar la eficiencia con las demandas populares; por esta razón se hicieron asentamientos colectivos y no individuales, como en otros.

Pero los que hayan querido encontrar en las leyes agrarias, medidas tendientes a impulsar el desarrollo agropecuario do-

¹⁸ "La falsificación de títulos de propiedad sobre tierras del Estado con que pretenden ampararse muchos latifundistas privados, se ha convertido en una ola de confecciones fraudulentas que está preocupando ya a la Comisión de Recuperación de Tierras del Estado" (*Ahora!*, núm. 446, 1972: 13). En julio de 1980, dos años después de Joaquín Balaguer haber perdido la Presidencia de la República, la prensa dominicana anunciaba el proyecto de desalojo del ex mayor general Enrique Pérez y Pérez (uno de los militares de más poder durante el régimen de Balaguer y a quien se le atribuye haber dirigido el grupo paramilitar conocido como "La Banda") de cerca de mil hectáreas de tierras, por considerarse mal adquiridas.

minicano, y no su verdadero carácter contrainsurgente, quizás no han reparado en las declaraciones del propio Balaguer ante la Asamblea Nacional, en febrero de 1973, cuando definía muy claramente uno de los objetivos centrales de las referidas leyes:

"El fin de la Reforma Agraria no es, como muchos pretenden, aumentar nuestra productividad, y cumplir con el deseo que todos tenemos de que nuestra agricultura prospere y se diversifique [...] Lo que la Reforma Agraria persigue es una mejor distribución de la tierra para beneficiar, gracias a un cambio de ese género, a la mayor cantidad posible de agricultores sin medios de subsistencia, hecho que conspira contra la tranquilidad del país y que pone seriamente en peligro la estabilidad democrática de nuestras instituciones. El aumento de la productividad es una de las tareas reservadas a la Secretaría de Estado de Agricultura que la realiza a través de sus organismos técnicos, con la asesoría de dominicanos y extranjeros" (Balaguer, 1979: 255).

Por lo demás, las irregularidades y negocios ilícitos que se hicieron con las tierras arroceras, fueron de todo tipo. Desde la venta de tierras al Estado que no eran para el cultivo de arroz, como si lo fueran, y a precios exorbitantes, hasta ventas que luego no se materializaban, es decir, que los propietarios vendían la tierra al Estado, recibían el dinero, pero luego continuaban cultivándola como si fuera propia. Al respecto se hicieron múltiples denuncias (Martínez, 1979: 100-223).

Uno de los aspectos más interesantes de la política agraria de los doce años de gobierno de Joaquín Balaguer fue el propósito de ampliar la frontera agrícola del país, aunque no se puede decir que éste fuera un objetivo propio de las Leyes agrarias. Al respecto se tomaron diversas medidas y se aplicaron algunas leyes. Una de ellas fue la de recuperación de tierras baldías; otra, la construcción de varias obras de irrigación que pusieron bajo cultivo a miles de hectáreas de tierra, y en último lugar habría que citar el intento —aunque frustrado— de incorporar parte de la tierra ganadera a la agricultura. En realidad el fenómeno consistía en ampliar la frontera agrícola a costa de la frontera ganadera. El 50% de las tierras cultivadas en la República Dominicana se encuentra dedicado a la ganadería, en un sistema tradicional, posible de ser modernizado e intensificado, lo que permitiría dedicar el resto a la producción agrícola.

Cuando Balaguer analizaba la composición de las tierras del país, y el régimen de tenencia existente, se daba cuenta que

estaba dentro de una especie de camisa de fuerza, pues de no tocar los intereses de los grandes latifundistas, nacionales o extranjeros, nunca podría satisfacer mínimamente las demandas del campesinado. No había mucho más hacia dónde expandir la frontera agrícola, a menos que no fuera realizando enormes inversiones en obras de irrigación. Un informe de Felipe Vicini Cabral, citado por Balaguer en 1970, indicaba que "en la República Dominicana sólo existen tierras suficientes para el asentamiento de 75 000 familias en un plan de reforma agraria científicamente elaborado". Ante la imposibilidad de continuar impulsando su política agraria al ritmo que demandaban las exigencias del campesinado, y estrellándose con los intereses de la oligarquía terrateniente, en febrero de 1976 Balaguer señalaría la posibilidad de que las tierras de las plantaciones azucareras fueran "colonizadas por agricultores de escasos recursos y de probada vocación para el trabajo". El planteamiento posiblemente no pretendiera pasar de la pura demagogia, ya que su régimen había sido incapaz de vencer a sectores terratenientes mucho más débiles. No olvidemos que detrás de la agroindustria azucarera se encontraba desde hacía algunos años la Gulf & Western, que muy rápidamente se había convertido en uno de los mayores propietarios de tierra en el país, con poderes enormes e inversiones en diversas ramas de la producción y actividades económicas (Del Castillo, 1974).

En todo caso, Balaguer podía recurrir a las tierras de los doce ingenios azucareros propiedad del Estado que administra el CEA, y distribuir, por lo menos parte de ellas, entre el campesinado. Sin embargo, la operación no era nada sencilla, pues si bien la reforma agraria no se preocupaba por la productividad, tampoco podía actuar de espalda a las posibles implicaciones que tal medida pudiera tener en el sector en el que descansa la economía dominicana.

En los primeros cinco años de aplicación de las Leyes agrarias (1972-1976), el total de tierra repartida fue de 107 907 hectáreas entre 21 752 familias. No obstante la baja proporción con relación a las necesidades del campesinado, fue el período de más alto nivel de distribución por año, desde que en 1962 se iniciara el primer intento de reforma agraria.

A pesar de todo el apoyo que tuvo el régimen de Balaguer del imperialismo norteamericano, las fuerzas internas que se movían en la sociedad dominicana parecen haber tenido el suficiente poder como para hacer frustrar el nuevo intento de reformar el agro. Todo parece indicar que nuevamente la oligar-

quía terrateniente salía triunfante. Desde 1972, cuando se presentaron las Leyes agrarias, comenzó a sentirse una fuerte crisis dentro del Partido Reformista. Posteriormente, en 1974, al presentarse el proyecto sobre la Ley ganadera se produce una fuerte resistencia de los terratenientes. El proyecto de ley fue rechazado en la Cámara Legislativa y uno de los principales colaboradores de Balaguer, el hacendado Luis Julián Pérez, renunció a su cargo oficial, fundando un nuevo partido político, el Movimiento de Salvación Nacional. Esta organización representaba los más oscuros y retrógrados intereses de la clase terrateniente dominicana. Ya en 1973 la oligarquía ganadera expresaba su descontento de las más diversas maneras posibles; por ejemplo, en la Feria Ganadera de 1973, los ganaderos aprovecharon la oportunidad para externar su desacuerdo con la política agraria de Balaguer y, públicamente, se negaron a recibir los diplomas y galardones que se les entregarían, por lo que tuvo que suspenderse el acto (*¡Ahora!*, número 487, 1973: 40-42).

A su vez, ya a mediados de la década de los setenta, la inmensa mayoría del pueblo dominicano estaba decidida a cualquier tipo de acción para impedir que Balaguer continuara en la Presidencia de la República. La opción política se expresaba en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), única fuerza organizada en ese momento y con arraigo popular capaz de derrotar los planes continuistas de Balaguer. Como además el PDR había dejado de ser un peligro para los intereses norteamericanos y para la oligarquía del país, y contaba además con el apoyo de algunos sectores burgueses, su triunfo en las elecciones de mayo de 1978 se tornaba como algo muy probable. Ciertamente, la derrota de Balaguer fue aplastante. A partir de agosto de 1978 la política agraria del país pasaba a manos del PDR, quien trataría de acelerar la reforma agraria ya iniciada en 1972 (Hernández Alberto, 1979; PRD, 1977).

Mientras tanto, la reforma agraria había sido aplazada una vez más, quizás para ser aplicada dentro de nuevos marcos sociales y con objetivos diferentes. Sólo restaría que cobrara vigencia aquel planteamiento de uno de los dirigentes del Partido Reformista, que "la próxima revolución sangrienta que se haga en la República Dominicana se hará en el campo", de no permitirse una pacífica reforma agraria.

Lo importante es que el campesinado ya había pasado a desarrollar una resistencia activa, a organizarse y a tener una mayor participación política, en tanto que los partidos de iz-

quierda y los diferentes sectores democráticos del país habían vuelto su vista sobre esa gran masa social depositaria de ese potencial revolucionario de que nos hablara Gerrit Huizer (1980).

Pero antes de que los acontecimientos sociales tomaran este curso el campesinado había sido víctima de fuertes represalias, entre las que cabe destacar en los últimos años la ocurrida en el poblado de Palma Sola.

3. *Movimiento campesino y manipulación política*

En diciembre de 1962, apenas año y medio después de la muerte de Trujillo, se produce en el país el primer hecho social de proyección nacional, en el cual el campesinado, aunque víctima de la represión, desempeñó un papel protagónico. En efecto, en Palma Sola —un paraje de San Juan de la Maguana, en el suroeste del país, próximo a la frontera con Haití— se produjo un movimiento campesino con carácter mesiánico que reviste gran importancia entre otras por las siguientes razones: por ser una especie de continuidad de otro movimiento campesino que cuarenta años antes se había producido alrededor de la figura del líder religioso Olivorio; por las implicaciones políticas que a nivel nacional tuvo el movimiento, sobre todo a raíz de la forma brutal en que fue reprimido; por los rasgos de movimiento mesiánico que parece presentar, siendo uno de los pocos casos conocidos en el país con estas características;¹⁹ por la continuidad o sobrevivencia del movimiento, veinte años después de haber sido Palma Sola incendiada y destruida en su totalidad como población.

Existe un gran vacío, en cuanto a estudio se refiere, sobre el olivorismo en los años que transcurren entre la muerte de su líder, Olivorio —en 1922—, y su resurgimiento, cuarenta años después —en 1962. Se tiene conocimiento de que se han conservado tradiciones orales que al parecer lo han mantenido vivo en la creencia del campesinado de la región donde se desarrolló el movimiento en cuestión. “Para muchos sanjuaneros, el nombre de Olivorio es sagrado y al mencionársele debe guardarse el merecido respeto, máxime si se trata de aquellas familias de avanzados años que le conocieron o le ayudaron a combatir a

¹⁹ Existe otro caso de mesianismo, aunque menos importante. Véase Tejada Ortiz (1978). Para un estudio del olivorismo en los años veinte, véase Blanco Fombona (s/f), Garrido Puello (1963) y Esteban Deive (1978).

las tropas norteamericanas que invadieron el país en 1916", escribía el periodista Carlos Luciano en junio de 1979. De no ser por esta memoria histórica es difícil explicarse que a los cuarenta años de la muerte de Olivorio, miles de campesinos se dieron cita en el paraje de Palma Sola, para revivir el olivorismo en la figura de los Mellizos.

El movimiento adquirió tal auge que Palma Sola, un poblado de unas decenas de casas, rápidamente pasó a tener cerca de 400 viviendas. Se organizó una especie de ejército o guardia civil, para establecer el orden entre el campesinado que concurría al lugar. Esta guardia, uniformada y con sueldo, carecía de armamento, por lo menos de fuego. Además, se llevaba un registro de afiliados al movimiento, un libro de 411 páginas con diez mil nombres registrados (Martínez, 1980). Las concentraciones campesinas en Palma Sola tenían por objeto, además de rendir culto al "dios Olivorio", recibir curaciones de algunas afecciones físicas o espirituales.

Al movimiento comenzó a vincularse con organizaciones o figuras políticas, locales o extranjeras, así como a una cierta injerencia exterior. La más seria acusación que se le hacía en ese momento era que la familia Trujillo —que hacía un año había salido al exilio— estaba detrás del movimiento, introduciendo armas y preparando la vuelta al poder; por otro lado, se señalaba que Palma Sola era un centro de entrenamiento guerrillero que contaba con el apoyo de Cuba para convertir el lugar en una nueva Sierra Maestra; también se manifestaba que se había detectado un contrabando de armas desde Haití, en el cual Duvalier estaba involucrado. Como se podrá observar, eran acusaciones muy contradictorias, pero trataban de influir en la opinión pública de las diferentes clases y capas sociales del país a partir del antitrujillismo, el antihaitianismo y el anticomunismo. Nunca se llegó a presentar prueba alguna de las acusaciones formuladas, y después de la matanza la prensa ni siquiera llegó a preguntarse sobre las armas, los guerrilleros o los Trujillo; tampoco hizo rectificación alguna. Lo que no decían los medios de comunicación es que detrás de las medidas represivas tomadas por las fuerzas armadas se ocultaban móviles muy confusos; tampoco se denunciaban los nexos de la embajada norteamericana, a través de sus agregados y asesores, con la represión que se orquestaba. John Bartlow Martin, quien fuera embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, aunque señala que la embajada y sus hombres estuvieron al margen de los acontecimientos, también apunta que las fuer-

zas armadas llegaron a solicitar a los agregados militares norteamericanos el siguiente equipo bélico: cuatro helicópteros, 500 proyectiles de calibre 2.7, y 60 tanques de napalm para aviones P-51, ¡para atacar a un puñado de pacíficos e indefensos campesinos! Algunos agregados norteamericanos estuvieron presentes en la matanza que más tarde se desarrollaría.

Es un hecho que para la oligarquía dominicana constituía un acto subversivo el que miles de campesinos se organizaran en torno a un líder, aunque fuera de carácter religioso o mesiánico, como ocurría en este caso. Por ello no se explica ni justifica el uso de un complejo armamento bélico contra el campesinado. Detrás de tal acción parecían moverse otros intereses.

Además, resulta inquietante que justamente a la semana de haberse celebrado las elecciones presidenciales la prensa se hiciera eco de acusaciones políticas sobre el movimiento campesino. Estas acusaciones nunca fueron probadas, pero dieron lugar a que, después de la derrota electoral de las fuerzas oligárquicas y pronorteamericanas, los militares dominicanos consideraran necesario ir a combatir a los campesinos de Palma Sola. "En pocas horas todo el potencial especializado, con sus armas modernas cayó sobre aquel lugar, sembrando una espantosa carnicería entre aldeanos que no tenían con qué defenderse. Tres aviones de combate aparecieron en el cielo y en seguida iniciaron el bombardeo con gasolina gelatinosa."²⁰

El resultado fue la destrucción total de Palma Sola: las casas incendiadas, los animales muertos, más de cuarenta personas asesinadas y cientos de heridos y detenidos. La oligarquía volvía a aplicar los más sanguinarios procedimientos represivos de la tiranía de Trujillo, a la que ella decía combatir.

En el análisis de este movimiento surgen varias interrogantes. La más importante es sobre la muerte del general Rodríguez Reyes, militar de vocación democrática que estaba llamado a ocupar un alto cargo en el nuevo gobierno constitucional de Juan Bosch. Posteriormente el mismo Bosch (1965, número 91: 17) llegó a manifestar que si Rodríguez Reyes estuviera vivo en septiembre de 1963 no se hubiera producido el golpe de Estado. No obstante, aunque Rodríguez Reyes fue asesinado, decenas de campesinos muertos, Palma Sola incendiada y destruida, y el golpe de Estado llevado a cabo, el olivorismo, como movimiento campesino con características

²⁰ Esta información fue publicada por el diario *La Nación* del 30 de diciembre de 1962 y reproducida por Lusitania Martínez (1980: 75).

mesiánicas, no pudo ser destruido. Aún continúa arraigado en la creencia del campesinado. "En Maguana Arriba, en el mismo lugar donde nació Olivorio, hay un calvario con tres cruces y un altar donde se desarrollan rituales el día de los fieles difuntos. Cerca de allí está una fuente natural denominada 'Agua de Olivorio'", que "cura" todas las enfermedades al que la bebe. El lugar es visitado regularmente por cientos de personas (Luciano, 1979: 4).

Después de 1962 se han producido por lo menos tres acontecimientos de gran importancia política y social, donde el campesinado, quizás por su falta de organización, no ha tenido una participación destacada, no obstante que dos de ellos —el movimiento guerrillero de fines de 1963 y la guerrilla de Caa-maño en 1973— tuvieron como escenario el medio rural, y el tercer acontecimiento, la insurrección popular de abril de 1965, quedó reducido al medio urbano.

4. Organizaciones campesinas y luchas sociales

Antes de 1962 es muy difícil poder detectar la existencia de organizaciones campesinas dominicanas, a menos que no fueran los clubes agrícolas creados por el régimen dictatorial de Trujillo, a partir de enero de 1945, y que muy rápidamente proliferaron por toda la República. En el curso de tres años, es decir, hasta finales de 1947, existían en todo el país 196 clubes agrícolas, con 15 373 miembros (*Agricultura*, 1948: 58). En realidad no eran organizaciones que surgían del mismo campesinado sino que tenían un carácter oficial, como si fuesen dependencias de la Secretaría de Estado de Agricultura, a través de las cuales el Estado irradiaba parte de su control sobre el campesinado. Además de estas organizaciones, en la década de los cincuenta se fundaron a través de instituciones religiosas, algunas cooperativas de comercio y consumo que al entrar en contradicción con el dictador tuvieron que abandonar el país. El otro tipo de organización campesina que existió durante esos años, pero que es muy difícil registrar, es la del tipo de socorro mutuo, como mecanismo de defensa ante las adversidades de la vida en el medio rural.

A partir de la década de los sesenta el desarrollo de las organizaciones campesinas conoce tres momentos. Uno, de 1962 a 1965, donde si bien es cierto que existen algunas organizaciones de izquierda, el campo se encuentra penetrado por entida-

des foráneas diversas; otro momento, de 1966 a 1971, donde las organizaciones de izquierda intentan la "vuelta al campo" y la Iglesia católica tiene gran influencia en el campesinado, a la vez que éste busca establecer su propia organización; y en último lugar, de 1972 a 1978, cuando el desarrollo de las organizaciones campesinas impulsadas desde el Estado llegan a su mayor apogeo, a la vez que el campesinado comienza a darse su propia organización, con carácter combativo.

i] A partir de 1962 empiezan a surgir organizaciones campesinas con una nueva proyección, desdobladas en dos vertientes. Por un lado, las de clara expresión de la injerencia imperialista, y por otro, las que realmente intentaban defender los intereses del campesinado. De 1962 a 1965 se instalaron en el país los siguientes organismos: The Community Development Counselling Service; Community Development Foundation; The American Institute for Free Labor Development; la Oficina de Desarrollo de la Comunidad, entre otros. Estas organizaciones, que aparentemente enseñaban al campesinado a superarse, a partir del "estímulo y esfuerzo propio" no eran más que centros de desmovilización y adoctrinamiento, donde incluso —al menos en una de ellas— se preparaba al campesino "para reconocer y contrarrestar las técnicas comunistas" (Arroyo, 1966: 48). Estas instituciones actuaban libremente en todo el país, disponiendo de buenos recursos provenientes de organismos internacionales e incluso nacionales.

En julio de 1962 fue creada la Oficina de Desarrollo Comunitario, según acuerdo de instituciones oficiales dominicanas y de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. En marzo de 1965 esa oficina fue convertida en Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, como una dependencia de la Secretaría de Estado de la Presidencia (Arroyo, 1966: 48).

En 1963 y desde la Secretaría de Agricultura, se comenzó a asesorar y promover la formación de clubes 5-D (burda copia de los existentes en Estados Unidos) cuyo objetivo era de penetración cultural, dirigido básicamente a la juventud del medio rural.

En ese mismo período, específicamente en 1962, se instala el Centro Interamericano de Adiestramiento Político (CIDAP), que haría algunas investigaciones sobre la vida del campesinado dominicano (Campos y Arredondo, 1963: 83-110). Además, se organizó el Centro Interamericano de Estudios Sociales (CIES) desde donde operó Sacha Volman, una de las figuras po-

líticas más polémicas que llegara al país en esa época. No obstante actuar como cercano colaborador del PRD, Volman fue acusado de ser un agente de la CIA. El hecho adquiriría más importancia por ser este hombre la figura clave de la organización campesina que apoyara al PRD a través de la Federación Nacional de Hermandades Campesinas (FENHERCA). Al ser derrotado el gobierno de Bosch por un golpe de Estado, inexplicablemente las Hermandades Campesinas no presentaron resistencia alguna. A partir de ese momento la FENHERCA quedó prácticamente desarticulada y desaparece.

Otro tipo de organización que alcanzó gran auge antes del 65, fue el cooperativismo. Según Gonzalo Arroyo, utilizando fuentes de la FEDECOOP, de 1961 a 1965 se fundaron 63 cooperativas de consumo, ahorro y crédito, de mercado y otras. Aunque no todas operaban en las zonas rurales, una gran parte de los socios eran campesinos. En 1963 durante el gobierno oligárquico del Triunvirato, fue creado el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), con el objeto de que el movimiento pasara a estar bajo control del Estado, además de asesorar al cooperativismo en la República. En esos mismos años se fundó la Federación Dominicana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDECOOP), la cual contaba con una gran cantidad de cooperativas afiliadas, con un capital de cerca de medio millón de pesos (Arroyo, 1966).

En último lugar, dentro de este primer período organizativo, también surgieron algunos gremios campesinos, donde había clara influencia del medio urbano, básicamente de organizaciones políticas. Entre ellos cabe citar la ya referida FENHERCA, dentro de los lineamientos políticos del PRD; la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC), que agrupaba a los trabajadores asalariados, a nivel de sindicatos, al semiproletariado, en ligas agrarias, y a los pequeños y medianos propietarios que no vendían su fuerza de trabajo, en asociaciones campesinas. Su vinculación con el Partido Cristiano, el apoyo internacional —sobre todo de Venezuela en los primeros años—, y sus relaciones con la Iglesia católica, le permitió a la FEDELAC disponer de los recursos necesarios para alcanzar ascendencia en el campesinado, que llega a tener vigencia en la actualidad. De los partidos de izquierda, fue el Movimiento Revolucionario 14 de Junio (IJ-4) quien realizó incursiones en el medio rural, tratando de organizar al campesinado. En 1962 se fundó la Federación Nacional de Campesinos (FENACA), que muy pronto desaparecería.

De estas últimas organizaciones campesinas —únicas que respondían a un proyecto político— sólo la FEDELAC ha logrado tener permanencia, aunque ha ido cambiando sus delineamientos, a la par que se han ido produciendo modificaciones en el movimiento socialcristiano a nivel internacional y nacional.

En este primer momento de las organizaciones campesinas, el sector que en realidad tuvo influencia en la vida política del país, fue el del proletariado agrícola cañero, dirigido por la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña (FENTRACA), constituida en 1963. Este gremio fue el más combativo de los vinculados a la producción agropecuaria, no obstante que por el hecho de pertenecer la mayoría de los ingenios azucareros al Estado, en ocasiones se declaraba la zafra como “de interés nacional”, como se hiciera en 1964, tratando de quebrar un movimiento huelguístico. Una relación de carácter preliminar sobre algunas de las huelgas más importantes desarrollados por el proletariado agroazucarero puede ilustrar nuestro señalamiento.

ALGUNAS HUELGAS IMPORTANTES DEL PROLETARIADO AGROAZUCARERO
(1962-1965)

<i>Fecha de realización</i>	<i>Empresa</i>	<i>Motivo</i>
abril de 1962	Central Río Haina	Salario
julio de 1962	Ingenio Colón	—
19 de agosto al 14 de septiembre de 1962	Central Romana	—
15-18 de abril de 1963	Central Romana	Económico
10-15 de julio de 1963	Central Romana	Pacto colectivo
agosto de 1963	Ingenio Ozama	Pacto colectivo
19-26 de diciembre de 1963	Corporación Azucarera de la Rep. Dominicana (doce ingenios)	Regalía pascual
12-31 de enero de 1964	Central Romana	Bonificaciones
noviembre de 1964	Central Río Haina	Bonificaciones
marzo de 1965	Central Romana	Pacto colectivo
14-18 de diciembre de 1965	Corporación Azucarera de la Rep. Dominicana	Regalía pascual

FUENTE: Elaborado con base en consultas de la revista *¡Ahora!* de 1962-1965.

ii] El segundo momento de la organización campesina se origina a raíz del fracaso de la insurrección popular armada de 1965, con la intervención norteamericana. La consigna lanzada por un partido político de enviar "lo mejor al campo", implicaba entre otras cosas: el fracaso de la izquierda en la lucha urbana, que desde 1962 se había desarrollado en dicho espacio, y la fuerte represión que desde 1965 comenzó a desatarse contra toda la izquierda y sectores populares en general, en los medios urbanos fundamentalmente.

Es muy difícil poder evaluar los resultados de la participación de la izquierda con el campesinado, al menos en cuanto a la elevación del nivel de conciencia de clase de éste, de su capacidad organizativa, etc., pues el trabajo realizado fue clandestino. Sin embargo, si reparamos en el auge del movimiento campesino justamente después de 1965 y aceptamos que las condiciones materiales de lucha se habían desarrollado bastante, se podría plantear como hipótesis que "la vuelta al campo" de la izquierda daría sus frutos para finales de la década de los sesenta y principios de los setenta.

Alrededor de esos años la Iglesia católica también estuvo trabajando muy seria y comprometidamente con el campesinado. Sectores del bajo clero llegaron a convivir en pequeños poblados, y más de uno fue expulsado por el gobierno bajo la acusación de introducir la agitación en el medio rural. A nivel oficial y extraoficial la Iglesia hizo diversos pronunciamientos en los medios de comunicación sobre algunas problemáticas del campesinado.²¹

La entrada del campesinado en el escenario político, la inoperancia de la reforma agraria y la situación explosiva del campo, fueron algunos de los elementos que impulsaron al presi-

²¹ Monseñor Juan F. Pepen, en 1966, dirigió una carta pública a los grandes terratenientes, donde entre otras cosas decía: "Los terratenientes deben convenirse que ha llegado para nuestro país el momento decisivo de su reforma económica [...] La Iglesia ve con preocupación nuestras realidades, decididamente no puede en conciencia dejar de llamar la atención maternalmente sobre esta materia a todos los responsables, sean éstos el Estado o sean los individuos particulares" (*¡Ahora!*, núm. 123, 1966: 43-44). El 30 de julio de 1977 los obispos de la República Dominicana emitieron una "Declaración conjunta del Episcopado dominicano sobre la situación campesina", en *Estudios Sociales* núm. 1, 1968, Santo Domingo, República Dominicana; a mediados de 1967 el padre Cipriano Caveró, director de "Radio Santa María" —emisora de gran influencia en el campesinado de la región del Cibao— hacía interesantes declaraciones a la prensa dominicana sobre el campesinado, *¡Ahora!*, núm. 200, 11 de septiembre, 1967, Santo Domingo, República Dominicana.

dente Joaquín Balaguer a hacerse cargo personalmente, en agosto de 1970, de la dirección del Instituto Agrario Dominicano con el objeto de dinamizar la reforma agraria. Al año siguiente, 1971, se llevarían a cabo el mayor número de asentamientos que desde 1962 hubiera hecho el IAD en un período similar. Paralelamente se preparaba la promulgación de las nuevas leyes agrarias, a la vez que el fomento desde el Estado, de las organizaciones campesinas. En el Simposium sobre "El problema agrario dominicano y su incidencia en el desarrollo de la paz social", celebrado a finales de la década de los sesenta, ya se apuntaban algunos de los temas más candentes de la cuestión agraria dominicana que demandaban una rápida solución.

Durante este mismo período (1966-1971) las organizaciones campesinas comienzan a tener un gran impulso, registrándose un total de 250 en todo el país; las de mayor presencia e importancia serían la organización de asentamientos y la organización de agricultores diversos. Era claro que no sólo los partidos políticos de izquierda habían vuelto su mirada hacia el campo, sino que también el gobierno, a través de múltiples instituciones y recursos, centraba su atención en el medio rural dominicano. Uno de los proyectos del gobierno era el de controlar el movimiento campesino antes de que pudiera ser presa "de la propaganda aviesa de los agentes del comunismo internacional o de los que alientan, por ambición o por despecho, planes subversivos contra la estabilidad de la democracia nacional y contra la paz a que tiene derecho la familia dominicana" (Balaguer, 1979: 66).

Este proyecto de controlar el movimiento campesino, sobre todo a partir de la instrumentación de sus organizaciones, conocería su mayor esplendor después de la promulgación de las Leyes agrarias. Se consideraba que el éxito de éstas dependía "en gran manera de la participación de las masas campesinas en los programas aplicados". Es así como desde el Movimiento Agrario Reformista (MAR), las Juntas de Acción Agraria (JUNAGRA), la Secretaría de Agricultura y del Partido Reformista se emprende una campaña de presión al campesinado para que se organice. Las armas de combate oficiales eran el crédito, la asistencia técnica y otras ayudas estatales. El campesinado no organizado no podía —o por lo menos encontraba mayores dificultades— recibir la asistencia oficial. La preocupación del gobierno al respecto, en parte, se encuentra plasmada en los dos registros levantados por la Secretaría de Agricultura, sobre

las organizaciones rurales y las organizaciones agropecuarias activas en la República Dominicana (SEA/CNIECA, 1977; SEA/IICA, 1977).

INVENTARIO DE ORGANIZACIONES RURALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA (1962-1976)

<i>Fecha de fundación</i>	<i>Asociaciones diversas</i>	<i>Asentamientos del IAD</i>	<i>Cooperativas INDECOOP</i>	<i>Total general</i>
1962-1965	5	16	10	31
1966-1971	117	95	38	250
1972-1976	796	244	59	1 099
TOTAL	918	355	107	1 380

FUENTE: Elaborado con base en Secretaría de Estado de Agricultura, SEA, 1977.

iii] Los elementos distintivos del tercer momento (1972-1978) que conoce la trayectoria organizativa del campesinado dominicano se sintetizan en los siguientes aspectos: 1] participación activa del Estado, a través de los mecanismos ya señalados, en la fundación de organizaciones campesinas; 2] las ocupaciones de tierra que se producen. Sobre el primero ya hemos hecho algunos señalamientos. Respecto al segundo, no hemos podido precisar con rigor el contenido específico de cada una de las ocupaciones, pero al parecer la tendencia es que éstas iban dirigidas tanto a los latifundios privados como a las propiedades estatales.²² Ante esta situación, la oligarquía terrateniente lanzaría la acusación de que se estaba violando y poniendo en juego el derecho a la propiedad privada. Las decenas, y quizás centenas de ocupaciones de tierra que se escenificaron en

²² El fenómeno es muy difícil de precisar por el carácter contradictorio de las informaciones. Los campesinos suelen argumentar que las tierras que invaden son de propiedad estatal, en tanto que los presuntos propietarios reclaman su derecho sobre las mismas. De 40 invasiones de tierra que hemos contabilizado de 1980 a 1982 (aunque es un período posterior al que nos ocupa, tiene un valor ilustrativo), 21 eran de propiedad estatal y 19 aparecían como privadas.

las principales regiones del país —fundamentalmente en el sur, el este y algunas provincias del norte—, aunque conocieron una larga secuela de atropellos que iban desde la detención y encarcelamiento hasta el asesinato, cobró una víctima a fines de 1974 que pronto se convirtió en el símbolo de la lucha campesina dominicana. Nos referimos a Florinda Muñoz Soriano, mejor conocida como “Mamá Tingó”, dirigente agraria que murió acribillada a balazos cuando defendía la tierra ocupada en una finca de Yamasá, al norte de la ciudad de Santo Domingo.

Durante este período los asentamientos aumentaron a la par que se incrementan las invasiones de tierra y las asociaciones campesinas. Durante 1972-1976 se fundaron 1 099 asociaciones, en un promedio de 220 por año, cuando en el período anterior (1966-1971) había sido de 42 por año. De la misma manera, solamente en los primeros cuatro años de la aplicación de las leyes agrarias (1972-1975) fueron asentados 18 657 parceleros, a un promedio de 4 664, en tanto que en el período (1966-1971) el promedio de parceleros asentados por año fue de 1 788.

Desde mediados de la década de los setenta comienza a producirse un desgaste en la asistencia oficial al campesinado, tanto en lo referente al reparto de tierra como a la aplicación de las Leyes agrarias en su conjunto. La presión de la oligarquía terrateniente y el repliegue del gobierno haciendo concesiones a ésta, culminarían con el fracaso de este nuevo intento de reformar el agro.

De todas maneras ya las condiciones habían sido creadas para que en la segunda parte de la década de los setenta, concretamente a raíz del triunfo del PRD en mayo de 1978, surgiera un nuevo movimiento campesino con asociaciones más sólidas, mayor nivel de conciencia de clase y un proyecto político mejor delineado. Pensamos que los primeros pasos comenzaron a darse con los eventos campesinos realizados a partir de enero de 1979. El primer Evento Nacional Campesino fue celebrado en el país los días 26, 27 y 28 de enero de 1979, con la participación de 28 federaciones y juntas municipales; el objetivo central es la creación de un movimiento campesino independiente. Para alcanzar tal propósito se realizó un análisis de la situación campesina a nivel de las condiciones socioeconómicas, y otro sobre las organizaciones propiamente dichas. En esta parte se trató de delimitar la posición y el papel que desempeñaría un movimiento campesino independiente, para lo cual fue necesario tomar posición respecto a la Federación Nacio-

nal de Campesinos (FENAC), vinculada a los intereses del imperialismo norteamericano; la Federación de Campesinos Dominicanos (FECADO) controlada por el PRD y la Federación de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC), controlada por los socialcristianos. El segundo Evento Nacional Campesino se celebró en San José de Ocoa, en la región sur, del 27 al 29 de abril del mismo año. En él se denunció el intento del gobierno por controlar el movimiento campesino a través del Consejo Nacional Agrario y se hizo una lista de 36 demandas que abarcaba aspectos económicos, sindicales, políticos y sociales. El tercer Evento Nacional Campesino se efectuó del 28 de octubre al 1 de noviembre de 1979, con la participación de 40 federaciones. El mayor avance tendiente a la formación y consolidación de un movimiento campesino independiente fue la creación de un Comité Nacional pro Confederación Campesina. Otro aspecto que se debe destacar de este evento son los planteamientos de carácter cada vez más clasista y antimperialista.

Es así como después de varias décadas de opresión y resistencia el campesinado dominicano no sólo hace su irrupción en el escenario político del país, sino que también comienza a construir su propio camino, en la búsqueda de la transformación de la sociedad que tan duramente lo ha explotado.

BIBLIOGRAFÍA

- Cuarto Censo Nacional Agropecuario de 1950, Ciudad Trujillo, Rep. Dominicana, Dirección General de Estadística.
- Quinto Censo Nacional Agropecuario de 1960, Santo Domingo, Rep. Dominicana, Oficina General de Estadística.
- Sexto Censo Nacional Agropecuario de 1971 (vols. I, II y III), Santo Domingo, Rep. Dominicana, Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina de Estadística.
- "Declaraciones de las pocilgas", Revista *Realidad Contemporánea* núms. 14-15, Santo Domingo, Rep. Dominicana, abril de 1980.
- Gaceta Oficial*, C. Trujillo, R. D., 1953.
- Grupo de Estudio: "Informe del Grupo de Estudio sobre la agricultura en la República Dominicana" (mimeo.), 1966.
- Hernández Alberto, Tomás, "Política agrícola, agraria y pecuaria del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, presidido por don Antonio Guzmán", Santo Domingo, R. D., 1979.
- Instituto Agrario Dominicano, *Compendio de leyes agrarias*, impreso por el taller de IAD, Santo Domingo, R. D., 1980.

Partido Revolucionario Dominicano, "Proyecto de programa económico y social de gobierno (1978-1982)"; IX Convención Nacional: Departamento Nacional de Asuntos Técnicos; Comisión Técnica Nacional, Santo Domingo, R. D., 1977.

Planificación, Oficina Nacional: "Plataforma para el Desarrollo Económico y Social de la República Dominicana (1968-1985)", editado por la Sec. Técnica de la Presidencia, Santo Domingo, R. D., 1968.

"Por un movimiento campesino independiente", documento con las resoluciones del 1er. y 2o. Eventos Nacionales Campesinos de 1979 (sin pie de imprenta).

SEA/CNIECA, "Inventario de organizaciones rurales", República Dominicana, 1977.

SEA/ICA, "Inventario de organizaciones agropecuarias activas en la República Dominicana", D. R., 1977.

"Tercer Evento por un movimiento nacional de campesinos independientes", revista *Realidad Contemporánea*, núms. 14-15, Santo Domingo, Rep. Dominicana, abril de 1980.

Revistas

Agricultura, 1948.

¡Ahora!, desde 1962.

Eme-Eme. Estudios Dominicanos, desde 1976.

Realidad Contemporánea, desde 1975.

Impacto Socialista, desde 1974.

Estudios Sociales, desde 1968.

Migración y Sociedad, 1981.

Periódicos

El Sol (varios meses).

Hablan los Comunistas, 1978-1980.

Vanguardia del Pueblo, 1974-1980.

Libros

Arroyo, Gonzalo y otros, *El campesino dominicano: un estudio de marginalidad*, DESAL (mimeo.), 1966.

Báez, Franc, *Azúcar y dependencia en la República Dominicana*, Santo Domingo, Ed. UASD, 1978.

Blaguier, Joaquín, *Mensajes presidenciales*, Barcelona, M. Pareja, 1979.

- Blanco Fombona, Horacio, *Crímenes del imperialismo norteamericano*, México, Ed. Churubusco, s/f.
- Bosch, Juan, *Crisis de la democracia de América en la República Dominicana*, México, Centro de Estudios y Documentación Sociales, 1964.
- Crassweller, Robert, *Trujillo. La trágica aventura del poder personal*, Barcelona, Bruguera, 1968.
- De la Rosa, Antonio, *Las finanzas de Santo Domingo y el control americano*, Santo Domingo, Ed. Nacional, 1969.
- Deive, Carlos Estevan, "El mesianismo olivorista", en *El indio, el negro y la vida tradicional dominicana*, Santo Domingo, Ed. Museo del Hombre Dominicano, 1978.
- Del Castillo, José y otros, *La Gulf and Western en República Dominicana*, Santo Domingo, UASD, 1974.
- , *La inmigración de braceros azucareros en la República Dominicana, 1900-1930*, Santo Domingo, Cuadernos del CENDIA-UASD, s/f.
- Del Orbe, Justino, *Mauricio Báez y la clase obrera*, Santo Domingo, Ed. Taller, 1981.
- Duarte, Isis, *Capitalismo y superpoblación en Santo Domingo*, Santo Domingo, Ed. CODIA, 1980.
- Ducoudray, Servio, *Los "Gavilleros" del Este: una epopeya calumniada*, Santo Domingo, Ed. Taller, 1976.
- Españillat, Arturo, *Trujillo. Anatomía de un dictador*, Barcelona, Ed. de Cultura, 1967.
- Estrella, Julio C., *La moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana*, Santiago, Rep. Dominicana, Ed. UCM, 1971.
- Eusebio Pol, Noris, *Las asociaciones campesinas dominicanas y el caso de San Juan de la Maguana*, tesis de licenciatura en sociología, Santo Domingo, UNPHU, 1980.
- Franco, Franklin J., *República Dominicana, clases, crisis y comandos*, Cuba, Casa de las Américas, 1966.
- Galíndez, Jesús de, *La era de Trujillo*, Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1956.
- Garrido Pueblo, E. O., *Olivorio. Ensayo histórico*, Santo Domingo, Ed. Librería Dominicana, 1963.
- Gilbert, Gregorio U., *Mi lucha contra el invasor yanqui de 1916*, Santo Domingo, Ed. UASD, 1975.
- Hendricks, Glenn, *Los dominicanos ausentes: un pueblo en transición*, Santo Domingo, Ed. Alfa y Omega-Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, 1978.
- Hoepelman, Antonio y Juan A. Senior, *Documentos históricos que se refieren a la intervención armada de los Estados Unidos de Norteamérica y la implantación de un gobierno militar americano en la República Dominicana*, Santo Domingo, Col. Pensamiento Dominicano, 1973.

- Huizer, Gerrit, *El potencial revolucionario del campesino en América Latina*, México, Siglo XXI, 1980.
- Jiménez Grullón, J. I., *La República Dominicana. Análisis de su pasado y su presente*, Santo Domingo, Ed. Nacional, 1974.
- Knight, Melvin M., *Los americanos en Santo Domingo. Estudio del imperialismo americano*, Ciudad Trujillo, Imprenta Listin Diario, 1939.
- Kurzman, Dan, *Santo Domingo, la revuelta de los condenados*, Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1966.
- López, José Ramón, *El gran pesimismo dominicano*, Santiago, R. D., Ed. UCM, 1975.
- Martínez, Pablo A., *Agroindustria, Estado y clases sociales en la República Dominicana (1935-1960)*, tesis de maestría en sociología, México, FLACSO, 1980.
- Martin, John Bartlow, *El destino dominicano. La crisis dominicana desde la caída de Trujillo hasta la guerra civil*, Santo Domingo, 1975.
- Martínez, Orlando, *Microscopio*, t. III, Santo Domingo, Ed. Taller, 1980.
- Mir, Pedro, *Cuando amaban las tierras comuneras*, México, Siglo XXI, 1978.
- Rodríguez Demorizi, E., *Papeles de Pedro F. Bonó*, Santo Domingo, Ed. Taller, 1964.
- Tejeda Ortiz, Dagoberto, *Mana: monografía de un movimiento mesiánico abortado*, Santo Domingo, Alfa y Omega, 1978.
- Trujillo, Rafael L., *Discursos, mensajes y proclamas*, t. I, Santiago, R. D., Ed. El Diario, 1946.
- Vargas, Mayobanex, *Textimonio histórico, junio 1959*, Santo Domingo, Ed. Cosmos, 1961.

Artículos

- Bosch, Juan, "La acumulación originaria en la República Dominicana", t. III, 23 pp., Santo Domingo, Imprenta Mercedes, 1979.
- , "(Entrevista concedida a Eduardo Sánchez Cabral)", en *¡Ahora!*, núm. 91, Santo Domingo, 1965.
- Brugal P., Rafael, "La producción azucarera en la zona de Puerto Plata: 1520-1919", en *Eme-Eme. Estudios Dominicanos*, núm. 39, Santiago, R. D., 1978.
- Bryan, Patrick E., "La cuestión obrera en la industria azucarera de la República Dominicana a finales del siglo XIX y principios del XX", en *Eme-Eme. Estudios Dominicanos*, núm. 41, Santiago, R. D., 1979.
- Campos y Arredondo, "Las condiciones de vida del campesino dominicano", en *Panoramas*, núm. 4, México, CEDS, 1963.
- Del Castillo, José, "Las emigraciones y su aporte a la cultura domi-

- nicana (finales del siglo XIX y principios del XX)", en *Eme-Eme. Estudios Dominicanos*, núm. 45, Santo Domingo, 1979.
- Desprader, Fidelio, "Los problemas de la revolución agraria en nuestro país", en *¡Ahora!*, núm. 298, Santo Domingo, 1969.
- Dore, Carlos, "La emigración rural en la República Dominicana (hipótesis, cuadros, bibliografía)", *Ciencia*, vol. II, núm. 4, Santo Domingo, 1975.
- , "Reforma agraria y luchas sociales en la República Dominicana: 1966-1978", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, núms. 25 y 26, San José, Costa Rica, 1980.
- Duarte, Isis, "Dominación social en la República Dominicana y leyes agrarias de 1972", en *¡Ahora!*, núms. 532 y 533, Santo Domingo, 1974.
- Duarte, Isis y José Fco. Perea, "Consideraciones en torno a la política represiva y asistencial del Estado dominicano: 1966-1978", en *Realidad Contemporánea*, núms. 10-11, Santo Domingo, 1979.
- Franco, Franklin J., "La cuestión agraria. El PC y Balaguer", en *Renovación*, núm. 223, Santo Domingo, 1973.
- García, Juan Ml. "La reforma agraria va lenta, pero es distinta", en *¡Ahora!*, núm. 880, Santo Domingo, 1980.
- Jiménez, Felucho, "Para los campesinos sin tierra. El PR y el PRD: astillas de un mismo palo", en *Vanguardia del Pueblo*, núm. 307, Santo Domingo, 1981.
- Jorge Blanco, Salvador: "La barranquita", en *Aquí*, suplemento cultural de *La Noticia*, núm. 441, Santo Domingo, 1982.
- Luciano, Carlos, "Aseguran que a Olivario lo mató un teniente del ejército de EU que ocupó el país en 1916", en *El Sol*, suplemento *Nuestros Pueblos* (23-junio), 1979.
- Martínez, Lusitania, "Un estudio preliminar del movimiento de Palma Sola como movimiento mesiánico y social campesino", trabajo presentado al curso de posgrado del CERESD (nov., 1978-agosto, 1979), Santo Domingo, UASD, 1980.
- Mercallé Abreu, Roberto, "Dice el ingeniero Leger: los campesinos deben ocupar violentamente las tierras del Estado", en *¡Ahora!*, núm. 508, Santo Domingo, 1973.
- Moya Pons, Frank, "La integración del Caribe: conceptos y realidades", ponencia presentada al Seminario Internacional sobre la integración caribeña: conceptos y realidades, julio, 28-30 (mimeo.), Santo Domingo, 1981.
- Munguía, Jorge: "Asentamientos colectivos, fincas estatales y economía de escala", en *Estudios Sociales*, núm. 35, Santo Domingo, 1976.
- Olivares, Félix, "Apuntes para la historia de la reforma agraria en la República Dominicana", en *Eme-Eme. Estudios Dominicanos*, núm. 22, Santiago, R. D., 1976.
- Peña Rivera, Víctor A., "El destino trágico de Petan Trujillo", en *¡Ahora!*, núm. 943, Santo Domingo, 1981.

Vicioso, Chiquí, "La emigración dominicana hacia los Estados Unidos", en *Migración y Sociedad*, núm. 2, Santo Domingo, 1981.

Vólquez Bello, Ml., "La tragedia del Regina Express", en *Migración y Sociedad*, núm. 2, Santo Domingo, 1981.

EL CAMPESINADO Y LA ESTRUCTURA AGRARIA EN PUERTO RICO (1898-1969).

FELIPE PÉREZ *

INTRODUCCIÓN

En nuestros días se habla de la extinción del campesinado puertorriqueño o de su desaparición como clase de la estructura agraria puertorriqueña. El declive que sufrió esta clase después de la segunda guerra mundial en el contexto de un amplio proceso de proletarianización y emigración, ha hecho creer a mucha gente que no existe en la actualidad un campesinado puertorriqueño. No estamos seguros de que realmente esta clase se haya extinguido. Sí podemos afirmar que el campesinado ha dejado de ser un segmento importante en la estructura agraria del país.

Los estudiosos de la historia agraria puertorriqueña han analizado la evolución histórica del hacendado cañero y cafetalero, tal vez por el propio proceso histórico por el que atravesaron estas clases desde principios de siglo, por el papel hegemónico de los hacendados cafetaleros a fines del siglo XIX en el plano económico y el desplazamiento que sufren por las corporaciones azucareras posterior a la intervención norteamericana, y en el caso de los hacendados azucareros nativos o españoles, por su papel integrista del proceso productivo azucarero que se inicia con las corporaciones azucareras norteamericanas. Es necesario recordar que nuestra sociedad agraria no ha estado dividida sólo en hacendados y peones desprovistos de medios de producción que ofrecen su fuerza de trabajo a las haciendas o plantaciones azucareras. Una preponderante proporción de cultivo es realizada por pequeños y medianos productores desde fines del siglo pasado. Su presencia en la historia agraria puertorriqueña se ha hecho evidente no sólo por su

* Agradezco la colaboración de Francisco Maldonado por sus comentarios relacionados con la caracterización del campesinado que aparece en el presente escrito.

contribución en el plano económico al mercado interno del país, sino además por su contribución o participación en los conflictos sociales y políticos del país. Aunque la participación de esta clase no llegó a expresarse en luchas políticas abiertas, consideramos que jugó un papel importante en la orientación que tuvo la resistencia a la dominación y explotación del régimen español a finales del siglo XIX y bajo el imperialismo norteamericano en las décadas de los treinta y el cuarenta del presente siglo.

El campesinado puertorriqueño, como más adelante intentaremos definir, ha tenido una larga historia y sólo su tenacidad le ha permitido sobrevivir y reproducirse frente a otros modos de producción. Ha existido como un modo de producción independiente —productor de alimentos para el autoconsumo de subsistencia—, pero además y con más frecuencia dentro de otros sistemas como fueron el esclavista, precapitalista, y por último el capitalista.

En este trabajo intentaremos responder a varias preguntas:

1. ¿Qué procesos estructurales y políticos han provocado que el campesinado puertorriqueño haya dejado de ser una clase importante en el país?

2. ¿Cuál ha sido la participación del campesinado en las luchas sociales y políticas del país y cuáles han sido sus portavoces en esas luchas?

3. ¿En qué medida los grandes movimientos migratorios ocurridos a partir de la segunda guerra mundial han tenido que ver con la desintegración o decadencia de esta clase?

Las respuestas a estas interrogantes nos llevarán a hacer una reconstrucción de la evolución de esta clase y de su significación en el ámbito del desarrollo agrícola que ha vivido Puerto Rico. Con ello, intentaremos hacer una periodización en forma muy general de la historia agraria puertorriqueña que cubrirá dos etapas:

1. La expansión del capitalismo en el agro puertorriqueño y la crisis del modelo agroexportador de 1898 a 1940.

2. Las reformas y los procesos políticos, económicos y demográficos que se inician en 1941 hasta 1969.

I. ANTECEDENTES

1. Iniciamos esta investigación comentando brevemente cuál era la ubicación del campesinado en las sociedades puertorriqueñas del siglo XIX.

La sociedad puertorriqueña a fines del siglo XIX, estaba constituida por una masa de unidades económicas heterogéneas (familias campesinas, haciendas, etc.), que producían valores de uso como medio directo de subsistencia para quienes lo producen y valores de cambio convertibles en mercancías. La cantidad de moneda que circulaba en el país era sumamente baja y la integración monetaria insular, muy débil.¹ La unidad básica de producción no era el latifundio, sino la distribución parcelaria de la tierra; no era el monocultivo, sino la producción diversificada de productos agrícolas. La isla tenía en 1897, 2 089 761 cuerdas * de tierra en explotación variada de cultivos y aprovechamiento, de las cuales 61 498.23 estaban dedicadas al cultivo de la caña; 122 329.76 al cultivo del café; 4 264.07 al cultivo del tabaco; 93 511.08 al cultivo de frutos menores; 16 277.23 a otros cultivos; 1 127 537.55 a pastos y 644 273.37 cuerdas a otros aprovechamientos.² La región del interior del país desde mediados de siglo había venido experimentando un notable crecimiento en la producción de café y en el litoral se había venido expandiendo la producción de caña de azúcar.

Una extensa población rural es dueña de los terrenos que cultivan y residen permanentemente en ellos. Reporta Cayetano Coll y Toste que el número total de propietarios era de 50 733 con un total de 60 953 fincas rústicas. La población rural se caracterizaba por una alta proporción propiamente campesina. Wilfredo Matos Cintrón comenta que en esa época la tierra cultivada en fincas administradas por sus propios dueños era el 91%.³ Manuel Maldonado-Denis, remitiéndose a

¹ A. G. Quintero Rivera, "La clase obrera y el proceso político en Puerto Rico", artículo mimeografiado, 1972.

* Cuerda: medida agraria de superficie igual aproximadamente a una fanega, o sea 0.39 hectáreas.

² Cayetano Coll y Toste, "Reseña del estado social, económico e industrial de la isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos".

³ Wilfredo Matos Cintrón, *La política y lo político en Puerto Rico*, Serie Popular, México, ERA, 1980 p. 171.

En el censo de 1899 sobre la tenencia de la tierra incluido en las notas reportadas por Wilfredo Matos aparece la siguiente tabla:

D. y J. Dibbie, plantea que "para 1899 los agricultores puerriqueños eran dueños del 93% de las fincas existentes en Puerto Rico".⁴ Ramón de Armas, describiendo el momento inmediatamente previo a 1898, dice lo siguiente: "...una estructura pequeño-parcelaria de la propiedad de la tierra, dentro de la cual la célula básica de una economía de exportación plenamente constituida —el latifundio—, si bien no está excluida, no ocupa una posición predominante. Y ello nos sitúa, consiguientemente ante el cuadro de una economía que todavía conserva apreciables perspectivas de desarrollo ulterior: de una organización económica de cuyos beneficios es partícipe si bien en muy diferentes grados una mayoría significativa de la población rural. A su vez esta población rural se caracteriza en el período de una alta proporción de población propiamente campesina (o pequeños agricultores), por una menos proporción de trabajadores agrícolas asalariados (o proletariado agrícola)...".⁵ Por último, es el mismo Ramón de Armas quien remitiéndose a unas palabras de Pedro Albizu Campos pronunciadas en 1939, dice que "los pobres de Puerto Rico en 1898 tenían de 8 a 10 cuerdas de terreno y doscientos o trescientos pesos guardados en las medias de sus esposas".

Como puede verse por los datos antes mencionados, a fines del siglo xix existía en Puerto Rico una clase de pequeños propietarios agrícolas, la cual era bastante numérica y disponía de una cantidad considerable de tierras y de medios rudimentarios

	Número de fincas	Área total cultivada
Fincas de 0-4 cuerdas	22 327	50 271
Fincas de 5-9 cuerdas	7 417	48 760
Fincas de 10-19 cuerdas	4 503	58 760
Fincas de 20-49 cuerdas	2 929	83 783
Fincas de 50-99 cuerdas	994	64 942
Fincas de más de 100 cuerdas	851	171 392
TOTAL	39 021	

La población de la isla era de 953 243 habitantes y la familia promedio de 5.3 personas. Las fincas de menos de 50 cuerdas constituían el mayor número de fincas con áreas cultivadas.

⁴ Manuel Maldonado-Denis, *Puerto Rico: una interpretación histórico-social*, México, Siglo XXI, 1969, p. 72.

⁵ Ramón de Armas, "El otro pasado de Puerto Rico", en *Casa de las Américas*, núm. 70, La Habana, 1972, p. 150.

de producción con los cuales cultivaban alimentos principalmente para el autoconsumo familiar.

Con esto no queremos negar que el latifundio a fines del siglo XIX se encontraba presente en la estructura de la sociedad rural puertorriqueña, sin embargo, no ocupa una posición preponderante.

2. *Formas de producción y relaciones sociales de producción campesina*

La pequeña producción agrícola en Puerto Rico se ha caracterizado por un tipo de familia nuclear, pero que agrupa conjuntamente en el marco de su organización, a parientes de algunos de sus cónyuges. El suministro de alimentos es realizado por los miembros del núcleo familiar con el ocasional apoyo de algún pariente. El trabajo generalmente no se recompensa monetariamente sino a través de regalos que pueden ser productos cosechados en la misma finca.⁶

La actividad productiva de la pequeña producción agrícola que existió aisladamente, se dirigía principalmente al autoabastecimiento y sólo cuando necesitaba adquirir alguna otra mercancía utilizaba el trueque como medio de intercambio o adquiría la mercancía monetaria como medio para adquirir la mercancía que necesitaba consumir. No tenían una división del trabajo que separara la explotación agrícola propiamente dicha de la actividad doméstica. Los miembros de la familia se alternaban las tareas propiamente productivas con las relacionadas con el cuidado de los animales, la de ir a cortar la leña para cocinar o ir al río u aljibe⁷ a buscar el agua que consumían, etc. Existía una unidad entre las actividades domésticas y las que se hacían en la siembra y recolección de los productos.

A mediados del siglo pasado tuvo lugar un cambio en el modo de producción campesina: pasó de una dedicación exclusiva para la subsistencia a una combinación de ésta y una agricultura de exportación. Fue así como los campesinos aislados independientes se fueron relacionando con la estructura de la hacienda en arreglo de compartir cosechas ("medianeros") trabajando parte del tiempo en la hacienda por servicio

⁶ Fernando Picó, *Amargo café*, Río Piedras, Puerto Rico, Ediciones Huracán, 1981, p. 85.

⁷ Aljibe, cisterna para el agua llovediza.

o por un ingreso suplementario. Los medianeros son los campesinos que trabajan terrenos por cuyo uso pagan al dueño una mitad, una tercera o una cuarta parte de la producción. Esto le permitía al campesino tener cierto grado de independencia frente al hacendado que le arrendaba la tierra. El derecho al uso de la tierra y del trabajo por parte del campesino vinculado al modo de producción de la hacienda en arreglo de compartir cosechas, era diferente a las formas de relación que existían entre el hacendado y el peón. El peón, que también se vinculaba a la hacienda y que en ocasiones vivía en la misma hacienda como agregado,⁸ estaba desprovisto de tierras y demás medios de producción, sólo disponía de su fuerza de trabajo. El campesino que comparte cosechas como medianero en la hacienda, tiene cierto dominio sobre la tierra y los medios de producción que le da cierta autonomía a diferencia del peón. La autonomía que tiene proviene del derecho de uso de la tierra expresado en el tributo que el campesino le pagó al hacendado a cambio de usar ese terreno. Además, los campesinos arrendadores podían dar alojamiento a trabajadores desprovistos de tierra, con lo que los terrenos en los cuales se daba esta relación quedaban sujetos a un complejo sistema de prestaciones y obligaciones.

El peón que estaba desprovisto de medios de producción también tenía oportunidad de ocupar tierras en las haciendas, aun cuando viviera como agregado sin pagar una renta. A menudo éstos cultivaban tierras a media, lo que les permitía usar gratis una parcela pequeña en la cual cultivaban frutos menores para su autosubsistencia.

A las ventajas que ofrecía la hacienda por sus recursos técnicos de producción, por su acceso al crédito y por la utilización que hacían de la mano de obra de las familias que vivían en sus fincas en agregó, ¿qué recursos o mecanismos podía oponer la pequeña explotación?

Los pequeños productores que se relacionaban con el mercado para poder competir con las haciendas, que eran las principales unidades exportadoras de mercancía, se veían obligados a intensificar las operaciones manuales de producción y procesamiento.⁹ Sólo una actividad mayor del trabajo familiar les permitía aumentar su producción por lo que el campe-

⁸ Agregado: Se llamaba así al peón y su familia que vivían en la finca sin pagar una renta.

⁹ Eric R. Wolf, *San José: Subcultures of a "traditional" coffee municipality*, p. 192.

sinado además de condenarse al trabajo condenaba también a su familia, viéndose obligados a recurrir al trabajo de los niños, lo cual impedía que éstos pudieran estudiar o desarrollar alguna otra actividad. Con ello también se buscaba restringir los gastos al mínimo. El crédito, si encontraban quién se lo diera, sólo lo utilizaban cuando no tenían otras posibilidades de sobrevivir.

Otro mecanismo utilizado por los pequeños productores para poder competir en el mercado, era el trabajo en equipo, que consistía en trabajar en forma rotativa de una finca en otra para evitar mayores costos de producción. Era un sistema de favores con el que los pequeños propietarios compartían mano de obra, animales, equipo, etcétera.

Algunos de estos mecanismos continuaban usándose en el momento en que Eric R. Wolf, antropólogo norteamericano, estudia la comunidad San José en una región cafetalera de Puerto Rico en el año 1948.¹⁰

¿Qué factores determinan el volumen de producción de la unidad campesina?

La unidad familiar campesina la integraban todos los miembros capacitados para el trabajo agrícola más los que no podían trabajar. La cantidad de productos obtenida anualmente varía de una explotación a otra, según la fuerza de trabajo o el tamaño y la composición de la familia capacitada para trabajar. Éste es un concepto ampliamente desarrollado por A. V. Chayanov en su libro *La organización de la unidad económica campesina*.¹¹ La cantidad de productos obtenidos por la unidad campesina variará según el número de miembros en la familia capaces de trabajar y el grado de esfuerzo productivo desarrollado en un lapso determinado. La familia campesina puertorriqueña para lograr un grado mayor de esfuerzo productivo tratará de retener la mano de obra disponible capacitada para el trabajo. Fernando Picó, en su libro *Amargo café*, describe las varias tácticas o mecanismos que consciente o inconscientemente emplea la familia campesina en la región cafetalera para evitar el fraccionamiento de las tierras, y en consecuencia, preservar la unidad familiar y con ello una fuerza de trabajo estable.¹² Entre otras tácticas dice que restringían el matrimonio en las

¹⁰ Eric R. Wolf, *op. cit.*

¹¹ A. V. Chayanov, *La organización de la unidad económica campesina*, Ediciones Nueva Visión, 1974.

¹² Fernando Picó, *op. cit.*, p. 92.

generaciones jóvenes y recurrían a los matrimonios consanguíneos. Así evitaban la desintegración de las fincas y a mi entender de las familias. De esa forma la familia campesina busca conservar su cohesión interna.

El movimiento campesino que se inicia a mediados del siglo xix y que llevó a muchos de éstos en la dirección del mercado de exportación, no llegó necesariamente a transformar la lógica de manejo de la producción que desde sus orígenes caracterizó al campesinado puertorriqueño. Las relaciones existentes en su unidad de producción están basadas exclusivamente en el trabajo familiar y no existe el salario, pues generalmente la recompensa por el trabajo se hace con los productos que se cosechan en la misma finca. Es posible que una parte de su producción se dirija al mercado con lo que buscan tener un ingreso suplementario para satisfacer una necesidad del grupo familiar, pero con ello no buscan una acumulación de capital como ocurría con las haciendas y las plantaciones azucareras. Estas unidades de producción campesina eran las que más se encontraban al margen de la esfera de las formas de producción capitalistas. Su relación con el mercado capitalista se produce a través de las ventas que hacen a negociantes o a intermediarios en la localidad.

Por lo general este tipo de economía no lleva computarizada una relación exacta de los gastos materiales como son la semilla, abonos, desgaste de los instrumentos de trabajo en relación con las ganancias o el producto restante el cual es considerado exclusivamente como producto familiar, sin establecer, en consecuencia, distinción alguna entre los gastos de reproducción de los propios productores y el trabajo excedente.

Por otro lado, tan pronto como eran satisfechas las necesidades del grupo familiar, la cantidad de esfuerzo productivo que debía desarrollar disminuía. Cuando el equilibrio entre el esfuerzo productivo y las necesidades del grupo familiar no habían sido alcanzadas, la familia campesina tenía una razón suficiente para continuar sus trabajos y, si era necesario, buscar nuevas salidas a su precaria situación económica empleándose como jornalero en la localidad donde residía o emigrando hacia otras áreas hasta encontrar trabajo o el ingreso que le permitiera alcanzar el equilibrio o la satisfacción de sus necesidades. A finales del siglo xix y principios del presente se producen varios movimientos migratorios de campesinos que ante la precariedad de su situación económica, buscan un in-

greso que les permita satisfacer sus necesidades, lo que los lleva, incluso, a emigrar hacia países del Caribe y a Hawaii.¹³

II. PRESIONES QUE HAN ATENTADO CONTRA LA ESTABILIDAD DEL CAMPEPINADO PUERTORRIQUEÑO

La pequeña producción campesina ha sufrido cambios debido a presiones que han atentado contra su estabilidad. Dejando a un lado los riesgos de tipo ambiental, que los hombres dominan sólo en parte pero no del todo, como son las torrenciales lluvias o huracanes que en Puerto Rico han afectado cosechas, viviendas, ranchos, etc., nos referiremos en este apartado a aquellas que dimanan del sistema social y económico en el cual se desenvuelve la familia campesina.

Las formas de producción y de relaciones sociales de producción campesina, como intentamos explicar anteriormente, han existido aisladamente y con más frecuencia articuladas a otros sistemas como fue el que se caracterizó por la hacienda cafetalera y azucarera. En esta articulación de modos de producción campesina con las haciendas, surgen conflictos que van a desembocar en luchas sociales y políticas. A fines del siglo XIX había dos clases (los jornaleros y los pequeños propietarios) que tenían intereses antagónicos respecto a los hacendados y comerciantes. En el momento de la invasión norteamericana en Puerto Rico (1898) se organizan "partidos sediciosos" que atacan las haciendas en Ciales y otros pueblos de la isla. Pero en este momento no vamos a tratar aquellas presiones y las consecuentes luchas sociales y políticas que se producen bajo los sistemas de la hacienda frente a la pequeña producción campesina. Aquí nos vamos a referir a los cambios estructurales y sociales que se producen a partir de la expansión del sistema capitalista que le impondrá sus exigencias al modo campesino y le obligará a adaptarse a ellos. Es decir, nos vamos a referir a la expansión del capitalismo monopolista que el imperialismo norteamericano impuso en la isla a partir de su intervención militar ocurrida en 1898.

La expansión capitalista en el agro puertorriqueño le permi-

¹³ Carmelo Rosario Natal, *Éxodo puertorriqueño (Las emigraciones al Caribe y Hawaii: 1900-1915)*, San Juan, Puerto Rico, 1983.

tió a las corporaciones azucareras norteamericanas controlar los medios de producción y gran parte de los recursos naturales del país. Con ello fueron conformando las unidades tradicionales de producción (familias campesinas, haciendas) a las nuevas condiciones de distribución de la propiedad y en general de la política colonial.

“En las primeras dos décadas de su intervención el país recibe cerca de 120 millones de dólares en inversiones de capital.”¹⁴

Se amplía la cantidad de tierras dedicadas a la producción de azúcar. Si para 1899 se dedicaban cerca de 70 000 acres de tierras al cultivo del azúcar, ya para 1929 se empleaban 240 000. Las exportaciones aumentaron. Si en 1895 la industria azucarera producía \$4 400 000 en exportaciones, representando el 29% de la exportación total del país, en 1920 producía \$74 000 000 constituyendo el 66% del valor total de exportaciones. Durante las primeras cuatro décadas esta ampliación de la producción azucarera quedó en manos de cuatro grandes corporaciones que operaban unos once centrales, los cuales producían la mitad del azúcar de Puerto Rico. Mientras que en 1894 la producción estaba dispersa entre 205 haciendas, para 1930 los centrales se reducían a 42 y ya en 1948, 35 centrales ocupaban el procesamiento de la caña de azúcar.¹⁵

Para comprender la magnitud o el impacto que tuvo la inversión de capital norteamericano en la isla durante las primeras décadas, podemos considerar con base en el siguiente cuadro, el proceso de extensión de la tierra dedicada al cultivo de la caña de azúcar, así como la del café. El café fue el producto principal de exportación para el país antes de la intervención norteamericana, pero debido a la renovada producción del café brasileño y a que éste ocupaba los mercados norteamericanos, el café de Puerto Rico fue perdiendo sus mercados europeos y con ello el interés por parte de los productores grandes y pequeños en dicho producto.

¹⁴ Gerardo Novas Dávila, *La dialéctica del desarrollo nacional. El caso de Puerto Rico*, segunda parte, Editorial Universitaria, UPR, 1978, p. 54.

¹⁵ Mathews Thomas, *La política puertorriqueña y el Nuevo Trato*, Editorial Universitaria, UPR, 1970, p. 14.

USO DE TERRENOS CULTIVADOS PARA CAÑA Y CAFÉ (*en miles de cuerdas*)

Año	1899	1908	1919	1929
Total de cuerdas cultivadas	478.0	542.7	660.6	756.6
Tierras dedicadas a la caña	72.1	145.4	227.8	237.8
Tierras dedicadas al café	197.0	186.9	193.6	191.7
Total de tierras	2 198.4	2 198.4	2 198.4	2 198.4

FUENTE: J. A. HERRERO, *En torno a la mitología del azúcar. Un ensayo de historia económica de Puerto Rico — 1500-1970*, mimeografiado, Universidad de Puerto Rico.

Es evidente que la tierra destinada al café se mantiene estable, en tanto que crece la que se dedica a la caña.

Este movimiento de capitales provocó un proceso de disolución de la hacienda cafetalera y de proletarización del pequeño y mediano agricultor que cultivaba este grano. La falta de mercados favorables a la producción de café provoca una crisis económica entre los sectores de la población que cultivan el grano que repercute en la estructura agraria de la región interior del país.

Con el auge del azúcar los comerciantes que tradicionalmente proveían el crédito a las haciendas dejan de interesarse en el café. El azúcar, que recibe un nuevo trato por los arreglos arancelarios, pasará a ocupar su principal interés. Y como afirmara Fernando Picó, las tierras de la montaña bajan de valor. La crisis sumerge a la montaña en el letargo. La gente emigra. Los municipios donde se concentraban los sectores dinámicos del azúcar presentaban las oleadas migratorias compuestas por antiguos agregados y pequeños productores despojados de la descomposición del mundo de la hacienda.

La antigua clase de hacendados españoles o criollos es desplazada como clase dominante al perder el poder económico con las corporaciones norteamericanas.

Como complemento a las grandes inversiones de capital se implementaron, por parte de la administración colonial que le impusieron a la isla, varias medidas de tipo jurídico-económico que favorecieron al capital norteamericano. Una de estas medidas afectó la tenencia de la tierra de los hacendados. Ésta fue la que limitó la tenencia de la tierra a un máximo de 500 acres, contenida en la Ley Foraker de 1900, lo que obligó a los

hacendados a vender su excedente de tierra a las corporaciones norteamericanas que venían organizándose o que ya estaban organizadas. Dicha ley favoreció la redistribución de la propiedad agraria que acelera el proceso de concentración de la tierra, necesario para la instauración por los norteamericanos de nuevas formas de producción capitalista en las plantaciones azucareras.

Sobre la medida que limitaba la tierra a 500 acres, nos dice Wilfredo Matos: "la ley sirvió para quebrar el agarre que sobre la tierra tenían los latifundistas españoles y nativos. Resultó un mecanismo efectivo para facilitar la compra de tierras por las corporaciones. Una vez el propósito general se cumplió, la ley cayó en desuso aunque no fue revocada."¹⁶

Finalmente la hacienda de café afectada por el movimiento de capitales norteamericanos en la producción del dulce tendrá que diversificar mucho más su producción para poder ser rentable. El cultivo que más se generaliza en estas circunstancias es el tabaco. Además, la diversificación los llevó al mercado de plátanos, naranjas, animales y madera. Se tiende a desarrollar un tipo de producción agrícola que redondee el año. El maíz, el arroz, las habichuelas y más tarde otros cultivos como el tomate, harán de la hacienda cafetalera una unidad de continua producción.¹⁷

El régimen norteamericano, al iniciar su intervención y con ello el ordenamiento de la realidad social puertorriqueña, carga la mano sobre los terratenientes que poseían más de 500 acres. Era necesario establecer un nuevo orden a través del cual el beneficio se reorientara. Los hacendados y comerciantes habían sido dos sectores dominantes de la estructura económica y política que se apropiaban el excedente producido por los demás sectores explotados. Con el nuevo ordenamiento se reorientaría el excedente que producía la sociedad hacia los nuevos propietarios de la tierra y el trabajo. En ese sentido, con el nuevo ordenamiento que beneficiaba la expansión del capital, se hacía una nueva distribución de funciones con las cuales se fueron determinando los límites de las clases. Muchos hacendados pasaron a ser administradores de los usurpadores del poder, y la pequeña producción agrícola proveedores de materia prima para los centrales azucareros. Así se fueron conformando las clases en un sistema de estratificación social nue-

¹⁶ W. Matos Cintrón, *op. cit.*, p. 184.

¹⁷ Fernando Picó, *op. cit.*, p. 39.

vo que no era otra cosa que "la consecuencia de un invento de los menos impuesto a los más, aplicado sobre un trasfondo de recursos naturales y de nivel tecnológico".¹⁸

La pequeña producción agrícola, cuya función productiva a fines del siglo xix se dedicaba principalmente a la producción de alimentos para el autoconsumo, ahora se encontraba integrada a la estratificación de la sociedad que el capitalismo monoexportador impuso a la sociedad colonial puertorriqueña. Ésta sufre un cambio que la llevará en dirección del mercado y sus tendencias a través de un sistema llamado el colono. Como el azúcar era el cultivo más favorecido en el mercado, muchos pequeños productores agrícolas se fueron especializando en este producto abandonándose el cultivo de otros productos alimenticios o de autosubsistencia para orientarse al mercado. Necesariamente esto no lo hace un empresario capitalista pues en muchos de los casos no ocurrirá el ciclo de acumulación que orientaba a los centrales azucareros. En el mercado muchos pequeños colonos intercambiaban la mercancía (caña de azúcar) por dinero y el dinero lo convertían en otra mercancía. En otros casos, los colonos entregaban caña de azúcar y a cambio recibían otra mercancía (azúcar) que luego era intercambiada por dinero y con este dinero compraban otra mercancía que podía ser abono, maquinaria o algún otro artículo manufacturado industrialmente. En este sentido creemos que la fórmula correspondiente a la circulación de la mercancía, en este caso *M-D-M*, era diferente al ciclo productivo que orientaban los centrales azucareros que invertían dinero para comprar la mercancía (caña de azúcar) y ésta a su vez convertirla en más dinero o capital. En estas circunstancias, entendemos que era sumamente difícil para el colono o pequeño cosechero de azúcar acumular capital como lo hacían las corporaciones azucareras.

Los primeros centrales azucareros dependían por entero de estos productores, llamados colonos, que se ocupaban de la siembra y recolección de la caña de azúcar, para mantener la provisión de materia prima para los centrales. Hubo terratenientes pequeños que en un principio cultivaban azúcar y molían caña en sus propios trapiches. Dadas las condiciones de la explotación azucarera por los centrales que poseían una mayor tecnología, los pequeños terratenientes, arrendatarios y agricul-

¹⁸ Sergio Bagú, *Tiempo, realidad social y conocimiento*, México, Siglo XXI, 1970, p. 133.

tores independientes en general, encontraban más ventajoso enviar su caña a moler a un central cercano que molerla en su propio trapiche. Un solo central podía moler caña de unos 200 agricultores, o como se les llamaba colonos.

Pero lo que es de especial importancia es la relación que establecen los colonos con los centrales en forma de contratos, quedando a merced de las corporaciones establecidas en la isla. Los colonos establecían contratos con las corporaciones azucareras entregándoles a éstas su producción de caña.

Había dos tipos de contrato. El primero estipulaba que por cada cien libras de caña entregada al central el colono recibiría una cantidad de azúcar estipulada de antemano. La otra modalidad era que el colono recibiría una cantidad del contenido de la producción azucarera. Es obvio que los colonos preferían el primer sistema, pues cultivaban caña de mayor peso, aunque de menor rendimiento. Y es también claro que los centrales preferían el segundo sistema.

El central vendía la caña del colono al precio de los mercados en Nueva York sustrayendo de la suma pagada al colono, su comisión, gastos de transportación y los gastos incurridos en el mercado.¹⁹

Otro de los aspectos que muestra la dependencia del colono hacia el central se produce con relación al crédito. Como el colono tiene que esperar un año o más para producir su caña, se ve en la necesidad de pedir dinero como anticipo al central, tanto para atender a su producción como para subsistir. Tanto el interés pagado por estos préstamos como las bases de su contrato se verán condicionadas por la competencia entre los centrales.

Por otro lado, el colono tiene que incurrir en todos los gastos de cultivo, pagar intereses a una tasa exorbitante sobre el dinero prestado, pagar un impuesto sobre la propiedad y tomar todos los riesgos de poca y mucha lluvia y huracanes, como el de 1920 que dañó la cosecha. Luego tiene que llevar su caña al central para ser probada y molida y confiar en que recibirá la cantidad a él debida.

Como si esto fuera poco los colonos estaban afectados por los costos y lo difícil del acarreo de la caña y falta de fondos para renovar las siembras. Otro de sus problemas era la falta de equipo adecuado y la tendencia de su productividad a tener un

¹⁹ Edgar A. Pratts Rivera, "Discusiones en torno a la hacienda y a la plantación azucarera de Puerto Rico", tesis de doctorado en ciencias políticas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

bajo rendimiento. Las fincas mayores se cultivaban con más eficiencia, lo cual redundaba en más poder adquisitivo. Con relación al riesgo resultaba menos costoso regar una extensión mayor de tierra que una pequeña. Los latifundistas poseían las tierras de primera en las extensas llanuras del país. El pequeño colono estaba obligado a conformarse con las llamadas tierras marginales.²⁰

Hasta aquí hemos visto en qué forma se relaciona el colono con el central y otra serie de características del colono con la que intento dar una visión general sobre su función en la estratificación social que se produce con la expansión del capitalismo en el agro.

La otra actividad en la que hubo mucha participación de pequeños agricultores, fue en la producción de tabaco. Esta producción, al igual que la del azúcar, serán privilegiadas por los Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las tierras cañeras, los productores de tabaco no gravitaron hacia los intereses corporativos. Lo que sí estuvo bajo el control monopolista fue la elaboración final de la hoja y la manufactura de cigarrillos. El consorcio American Tobacco Corp. compró las más importantes fábricas de elaboración de la rama. Éstas controlaban más del 80% de esta fase de la industria tabacalera. En 1899, el área cultivada de tabaco era de 5 700 cuerdas y en 1927 aumentó a 82 000. Las ventas de tabaco sin elaborar con destino a los Estados Unidos aumentaron de 562 000 libras en 1901 a un máximo de 35 677 000 en 1928. En 1935 había 17 600 fincas sembradas de tabaco. El tamaño promedio de estas fincas es de 19 cuerdas, lo que demuestra que los dueños, en su mayoría, son pequeños productores.²¹

Al igual que el colono azucarero, el cosechero de tabaco se veía obligado a mercadeear su cosecha por medio de corporaciones absentistas.

1. *Declive de la pequeña producción agrícola*

El declive de la pequeña producción agrícola que se produce durante las primeras cuatro décadas de dominación norteamer-

²⁰ Jaime Baqué, "Movimientos de reforma agraria en Puerto Rico", *Revista de Agricultura de Puerto Rico*, vol. 55, enero-diciembre de 1968, núms. 1 y 2, p. 89.

²¹ R. Colón Torres, "Estudio económico de la Estación Experimental Agrícola", Puerto Rico, *Boletín* 50, junio de 1939.

ricana, sucede por razones que nada tuvieron que ver con la Ley Foraker (que limitaba la tenencia de la tierra a 500 acres), como ocurrió con las haciendas cafetaleras, azucareras y ganaderas. Wilfredo Matos Cintrón en su libro *La política y lo político en Puerto Rico*, sostiene que "la expansión capitalista en el campo no se hizo a expensas del pequeño campesino, en términos absolutos, por dos razones: una, la posibilidad de expansión para las corporaciones, a través de la expropiación de terrenos por encima de las 500 cuerdas, y por otro lado, la disponibilidad del régimen yanqui a cargar políticamente la mano sobre esos terratenientes, quienes eran el cuerpo social verdaderamente organizado a la llegada de los yanquis".²²

Fueron otras las razones que impidieron el desarrollo económico de la pequeña producción agrícola y en consecuencia su deterioro. Entre otras razones mencionaremos las siguientes:

a) Con el cambio que sufre el campesino que lo lleva en la dirección del mercado irá progresivamente abandonando los cultivos de autosubsistencia. Se verá en la necesidad de comprar lo que ya no se produce en la finca o se produce en menor cantidad. El mercado interno de productos alimenticios cada vez más será suplido por Estados Unidos. En 1895, las importaciones representaban un valor aproximado de 16.8 millones de dólares y para 1920 sobrepasaban 105. A principios de la década de los 20, Puerto Rico era ya el noveno país comprador de productos alimenticios a los Estados Unidos; para 1935 era el tercero.²³ El monopolio de la tierra era un obstáculo para la diversificación de la producción agrícola.

b) Para poder competir con las explotaciones más grandes la pequeña y mediana producción agrícola se vieron precisadas a endeudarse por medio del crédito. Sol Luis Descarte, en un estudio sobre la situación hipotecaria del país, dice que de 1920 a 1930 la deuda rural hipotecaria se duplicó, para reducirse un poco en 1930 y 1934. De 1731 fincas estudiadas 906, o sea el 52.4% —valoradas en \$7 319 000— estaban hipotecadas con poco más de \$6 000 000. En 1934 el Departamento de Justicia estimó la deuda hipotecaria rural de la isla en 104 612 000

²² W. Matos Cintrón, *op. cit.*, p. 185.

²³ A. G. Quintero Rivera, "La base social de la transformación ideológica del Partido Popular en la década del '40", en *Cambio y desarrollo en Puerto Rico: La transformación ideológica del PPD*, Editorial Universitaria, 1980, p. 43.

dólares; y según el censo de 1940, del total de 42 990 fincas administradas por sus dueños, 6 655 estaban hipotecadas.²⁴

c] La imposibilidad de la mediana y pequeña producción de obtener tierras dado el monopolio que de las mismas tenían las corporaciones, impedía la diversificación de la producción agrícola y con ello la posibilidad de aumentar los empleos en el campo. Es así como las unidades campesinas se van proletarizando o se incorporan a las masas asalariadas marginadas que crecen a un ritmo mayor al crecimiento o expansión de los medios de producción. En 1930 y 1940 la población del país creció en un 21.1%; sin embargo el empleo aumentó solamente en un 1.7%. Desde 1899 hasta 1930, la proporción del empleo de la población total fluctuó alrededor del 33% y en 1940, bajó hasta el 27.4 por ciento.

Esta baja en el empleo y el consiguiente aumento en la población fueron formando una sobrepoblación relativa cuyas consecuencias se hacían más trágicas dado el carácter estacional del empleo en la industria azucarera y la inexistencia de otras fuentes de trabajo en el campo. Todo esto había dado lugar a la creación de un enorme proletariado rural.

La familia campesina creció en el número de sus miembros. Sin embargo, las fincas pequeñas (de 19 cuerdas o menos) no tuvieron igual ritmo de crecimiento. Muchos de sus miembros que estaban imposibilitados de hacerse de una pequeña finca se empleaban como obreros agrícolas o emigraban a la ciudad en busca de empleo.

El retraso de los medios de producción con que operaba la pequeña producción, lo costoso y difícil del acarreo de la caña, la falta de fondos que le permitieran renovar sus siembras, la falta de equipo adecuado, su ubicación en las fincas menos fértiles, etc., le van imponiendo límites al nivel de su producción y de su eficiencia que llevará en muchos casos a la pauperización.

Toda esta problemática planteada lleva al pequeño productor agrícola a sentirse presionado y, en consecuencia, a abandonar la tierra y transformarse en migrante. De campesinos de tierras o con algún dominio sobre las mismas se transforman en obreros rurales de zonas decadentes hasta verse desocupados, lo que les hace emigrar.

²⁴ S. L. Descarte, *La situación hipotecaria rural en Puerto Rico, Estación Experimental Agrícola, Boletín 42, 1936.*

III. LA CAMPESINIZACIÓN DE LOS PEONES AGRÍCOLAS Y EL PROCESO DE PROLETARIZACIÓN Y EMIGRACIÓN QUE SE PRODUCE A PARTIR DE 1941

La tendencia general del desarrollo capitalista en la agricultura no es lineal o ininterrumpida. Existen diversas vías de desarrollo capitalista en la agricultura. Entiendo que así ha ocurrido en Puerto Rico. En determinado momento la formación del proletariado agrícola o los procesos de descampesinización pueden verse interrumpidos. Los programas de reforma agraria, que se venían implementando desde finales de la década del 30, vienen a ser una excepción a la tendencia general que describimos anteriormente. La reforma agraria de 1941, al entregar parcialmente la tierra a los peones que vivían en su mayoría agregados, los campesiniza, es decir, los transforma en pequeños productores. Sin embargo, esta reforma agraria pronto se altera con los procesos que se van a producir a partir de la década de los cuarenta, los cuales aceleraron la proletarianización del campesinado puertorriqueño.

La reforma agraria que se produce en 1941 fue promovida principalmente por los sectores medios, profesionales, tecnócratas, etc. y tenía dos objetivos: uno económico, lograr que los sectores más explotados tuvieran algún ingreso. Para que esto sucediera era necesario que hubiera una expansión del mercado interno. Aun cuando para las clases medias su fuente de venta, sus servicios son muy independientes de las estructuras agrarias, en otras palabras, sus ingresos no están condicionados por el acceso que tienen, o que no tienen, a la tierra, sí está condicionada por la extensión que pueda tener el mercado interno. Muchos profesionales y tecnócratas no podrían tener empleo si el mercado interno no se amplía. Es decir, si el poder de compra de las grandes masas es muy reducido. Es fundamentalmente por esto por lo que estas capas sociales están interesadas en un cambio de las estructuras agrarias.

Las capas medias esperan, aunque no se lo formulen de una manera muy clara, una ampliación de sus propias posibilidades de acción.

Por otro lado, la gran crisis que sufrió el sistema capitalista mundial en la década de los treinta hizo imprescindible la adopción de una política de mayor intervención del gobierno en el proceso económico. La estrategia imperialista a estos efectos se estableció bajo la presidencia de Franklin Delano Roose-

vult y fue conocida como la política del nuevo trato. En estas circunstancias el poder metropolitano, en contubernio con los sectores dirigentes de la colonia, se encontraron con la necesidad de establecer planes y programas con cierto grado de racionalidad como alternativa para mediatizar los graves problemas en que estaba sumido el país, y asegurar la estabilidad política del sistema que estaba siendo cuestionado por la clase obrera y los propios campesinos. La agitación política y la lucha de clases se agudizan en todo el país durante esta década. Las protestas y huelgas en las plantaciones azucareras se constituyen en una evidente amenaza para el capital extranjero y la dominación imperialista.²⁵ En este sentido la reforma agraria tiene un propósito político.

Ante esta situación explosiva, el imperialismo, en alianza con los sectores medios, implementa una reforma agraria que recibió el apoyo de todas las clases, menos el de los sectores dueños absentistas de las corporaciones azucareras y de sus representantes en el país.

En una de sus partes la ley de reforma agraria dice lo siguiente:

"Es evidente por tanto que la concentración de tierras ha creado en la isla una situación social grave, poniendo la más valiosa fuente de riqueza bajo el dominio de grandes intereses, entre los cuales descuellan los absentistas. La gran masa de agricultores y trabajadores sufre una situación desesperante tendiendo los primeros a convertirse en simples peones y éstos en mendigos, viéndose miles de familias convertidas en 'agregados', o sea, siervos sin derecho ni control alguno sobre el pedazo de tierra que da cabida a su hogar; mientras que el producto del trabajo de la inmensa mayoría del proletariado se convierte en gran parte en capital absentista en vez de transformarse en poder adquisitivo para el pueblo."²⁶

En cuanto a las disposiciones de la ley, ésta limitaba la tenencia de la tierra a 500 acres para las compañías azucareras norteamericanas; sin embargo, esta limitación no se aplicó a individuos particulares que continuaron siendo propietarios latifundistas, es decir, no alteró totalmente la tenencia de la tierra ni atentó contra el monopolio de la tierra como tal, sino

²⁵ Leonardo Santana Rabell, "La experiencia de la planificación en Puerto Rico: 1940-1964", tesis de doctorado en Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Estudios de Posgrado, enero de 1981.

²⁶ Ley de tierras de Puerto Rico.

contra el que sustentaban las compañías azucareras. El gobierno pagó indemnizaciones a los propietarios y adquirió las tierras, lo que lo convierte en el principal propietario de tierras.

Las medidas específicas de la ley crearon lo que se conoció como las fincas de beneficio proporcional, las fincas familiares y la parcela.

Las fincas de beneficio con cabida de 100 a 500 acres fueron arrendadas a agricultores, agrónomos u otras personas dispuestas a seguir la política agraria establecida por el gobierno. El fin de estas fincas era la explotación agrícola a gran escala con el fin de sostener la provisión permanente de materia prima a los centrales azucareros. Con esta medida se satisfacía el interés yanqui o como ellos le llaman el nervio de la cuestión que estribaba en "si la disolución de la propiedad que sobrevendría como consecuencia de la ejecución de la ley de 500 acres, necesariamente provocaría un aumento en los costos de producción en Puerto Rico, hasta el extremo de comprometer la industria azucarera de la isla, y así sucesivamente. Éste es el nervio de la cuestión, porque entiendo que todo el mundo está de acuerdo que para Puerto Rico sería una tragedia si perdiese su aptitud para producir azúcar de caña y obtener las entradas que de ella se derivan." (Cita de Turgurell que aparece en el trabajo de Jaime Baqué, "Movimientos de reforma agraria en Puerto Rico", p. 86, 1968.)

Para tener una idea de algunos de los resultados que tuvo esta medida llamada fincas de beneficio proporcional, en 1960 se instituyeron 70 fincas con una extensión de tierra de 49 778 acres, cuyo valor fue de \$12 826 471.

Las fincas individuales se crearon con el fin de "promover y estimular la creación de pequeñas unidades agrícolas, en armonía con el medio económico y geográfico..." El gobierno colonial para el establecimiento de estas fincas lo que hace es aprovechar el remanente de aquellas tierras que no se prestan para el establecimiento de fincas de beneficio proporcional ni de comunidades rurales y las entrega a familias campesinas. El tamaño de las fincas fluctuaba entre 5 y 25 acres y su precio de venta no sobrepasa, por ley, dos mil dólares. Creemos que las tierras que se entregaron en fincas familiares fueron menos fértiles y menos productivas. Dentro de esta clasificación se habían entregado 1 350 unidades en 1962, las cuales abarcan una superficie de 22 104 cuerdas de tierra.

La parcela fue la otra clasificación que manejó la ley de reforma agraria para referirse a la tierra que cabía en un cuadro

(un cuadro de acre) que nunca pasará de tres cuerdas o acres. Especialmente con esta entrega de parcelas se pensaba ubicar a la masa de peones y desempleados que vivían agregados. Se estima que en el momento de la Reforma había más de 100 mil familias viviendo agregadas. El usufructuario no podía vender estas parcelas, ni transferirlas a otra persona. El agregado estaba obligado a levantar una casa en su parcela dentro del término de 100 días subsiguientes a la firma del contrato de usufructo. En 1962 se habían repartido 58 320 parcelas con una cabida de 35 848.09 cuerdas.²⁷

En resumen, la reforma agraria había manejado en el año 1962, 107 730.09 cuerdas de tierra de un total de 1 222 284 que en ese momento se cultivaban. El área total de tierras en Puerto Rico es de 2 198 400 cuerdas. Con estos datos se podrían ir aclarando algunas hipótesis sobre el papel político que jugó la reforma agraria en Puerto Rico, aun cuando no se cumplieron todas sus proyecciones. Los objetivos en términos de lo que denominamos al principio el proceso de recampesinización al entregar parcialmente las tierras a los peones que vivían agregados y transformarlos en pequeños productores, se logró sólo en partes. Las fincas individuales recibieron la menor cantidad de tierra y los problemas de mercado de los productos no se solucionaron, por lo que estos pequeños agricultores se vieron imposibilitados de reproducir efectivamente su fuerza de trabajo. Sobre esto se han hecho algunos estudios que me propongo revisar con más detenimiento. El otro de los objetivos de la reforma, que no se logró hasta 1962, fue el de relocalizar las más de 100 mil familias que vivían agregadas. Sólo se relocalizó la mitad: 58 320. Estas familias que fueron relocalizadas en parcelas de una a tres cuerdas de extensión constituirían la fuerza de trabajo que se dedicaría a las labores industriales y de la construcción. En este sentido con la reforma agraria se atendían las necesidades de producción de azúcar a través de las Fincas de Beneficio Proporcional suplidoras del dulce a los centrales y se relocalizaba una fuerza de trabajo que vivía agregada a unidades de tierra de un cuadro en el cual podían producir parte de su alimentación durante el año y a la vez servía como mano de obra para la actividad industrial que a fines de los años cuarenta el gobierno colonial desarrolla.

²⁷ Jaime Baqué, *op. cit.*

1. *De campesinos a proletarios: la militarización y la descampesinización*

Esta interrupción que se produce con la reforma agraria al proceso de descampesinización que se inicia a principios de este siglo, pronto se altera con los procesos que se van a producir a partir de la década de los cuarenta. La proletarianización del campesinado esta vez se producirá en forma más acelerada y con ello se producirá también una acelerada emigración hacia E.U.

Hasta la segunda guerra mundial la descampesinización y la consecuente emigración de pequeños campesinos y de proletariado rural estaba determinada directamente por el deterioro de sus unidades económicas tradicionales (familia campesina, hacienda, etc.), la imposibilidad de reproducirse, la expansión del latifundio, el aumento de la población más allá del posible aumento de los medios de producción, la degradación de los niveles de vida, etc.; todo esto en el marco del dominio de la propiedad por parte de las corporaciones azucareras.

A partir de la segunda guerra mundial el proceso de descampesinización y la consecuente emigración sufren el siguiente impacto:

En primer lugar, Puerto Rico toma una importancia estratégica y militar para Estados Unidos no vista antes, que tendrá consecuencias desastrosas para la producción agrícola puertorriqueña. Fueron movilizadas más de 114 000 jóvenes fuertes procedentes de toda la isla privando a las regiones agrícolas de una parte estratégica de su reserva de trabajo. Muchos de ellos a su regreso de la guerra no se integraron a las actividades agrícolas por acogerse a los sistemas de pensión para veteranos, además se les ofrecía la oportunidad de colocarse en empleos del gobierno colonial.

Con la guerra se construye el Borinquen Airfield cerca de Aguadilla, que más tarde se transfiere a la fuerza aérea convirtiéndose en la base de bombarderos nucleares Ramey; se expande el fuerte Buchanan hasta ocupar 1 514 acres de tierra; se construye la base naval Roosevelt Roats en un predio de 37 000 cuerdas en Ceiba, y se comienzan a expropiar tierras en las islas adyacentes de Vieques y Culebra. Este proceso significó el desplazamiento permanente de un gran número de personas de sus tierras, como en Vieques donde se llegaron a expropiar 26 mil cuerdas de un total de 33 mil.²⁸

²⁸ M. Meyn J. Rodríguez, "El aparato militar norteamericano en Puerto Rico". *Casa de las Américas*, núm. 123, Cuba, 1980, p. 14.

El programa de construcciones militares tuvo un importante impacto económico por la infraestructura que creó, lo que contribuyó a acelerar el proceso de industrialización que se inicia a mediados de la década de los cuarenta. Puerto Rico en ese momento de la guerra llegó a ocupar el décimo lugar en asignaciones de dinero para esos propósitos, teniendo por debajo a 41 estados y territorios.²⁹

FONDOS ASIGNADOS POR EL CONGRESO PARA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS Y PUENTES

<i>Año</i>	<i>Ayuda federal a carreteras</i>
1937-1938	\$ 625 000
1938-1939	609 375
1939-1940	487 500
1940-1941	560 625
TOTAL	\$2 282 500

En estas construcciones trabajaron miles de obreros que habían estado desempleados. Sobre el amplio programa militarista que se implementó en Puerto Rico con motivo de la segunda guerra mundial J. Buell Snyder, representante y presidente del Subcomité de Asignaciones Militares de la Cámara, dice que urge "la adopción de un amplio programa de defensa que provea nuevas carreteras, aeródromos, artillería movable y baterías antiaéreas en todo Puerto Rico, Hawaii, la zona del Canal de Panamá y otras áreas estratégicas".

"Deberíamos poner a los desempleados a trabajar allí, construyendo una red de carreteras. Se necesitan más campos de aterrizaje en Puerto Rico y en la Zona del Canal."

El otro efecto que produjo la guerra en la sociedad puertorriqueña y no ya para los sectores relacionados con las actividades agrícolas fue en el plano subjetivo. Desde antes de iniciarse la guerra y luego durante todo el período de su duración la prensa y demás medios informativos estuvieron alertando al país sobre una posible invasión de los nazis y la necesidad de

²⁹ "Programa de construcciones militares en Puerto Rico", *El Mundo*, 8 de enero de 1940.

la "defensa nacional". De tal forma que los puertorriqueños se sintieran implicados en la guerra. Con este fin se llevaron a cabo ejercicios y despliegues militares en todo el territorio a través de los cuales se simulaba que el país sería atacado por el enemigo. Me parece que la segunda guerra mundial, al igual que la de Corea, tuvo un efecto a nivel subjetivo en la población puertorriqueña que debe ser considerado si se quieren entender los esquemas ideológicos o en general las concepciones políticas de la sociedad puertorriqueña durante los últimos 30 años.

2. Proceso de industrialización y abandono de la agricultura

El otro proceso que se inicia en la década de los cuarenta va a ser producido por un cambio en la tendencia inversionista de los capitalistas norteamericanos. Su interés por las inversiones agropecuarias va a disminuir y se dirigirá hacia el desarrollo de la industria liviana. La segunda guerra mundial había terminado y con ello los inversionistas tienen un nuevo cuadro de posibilidades que afectarán a Puerto Rico. Los factores básicos de este momento histórico fueron expuestos por Saúl J. Pratts Ponce de León en los siguientes puntos:³⁰

i] La economía norteamericana, debido a la producción durante la guerra, había acumulado un excedente de capital.

ii] La economía de gran parte de los países europeos se encontraba en un estado de fragilidad. Estos países representaban nuevos mercados para ser atendidos por otros países.

iii] El gobierno de Puerto Rico comenzó con una política de atracción de capital norteamericano. Esta política comenzó con las leyes de incentivos industriales de 1947 y 1948 las cuales ofrecían una exención contributiva total a las fábricas de capital extranjero, facilidades físicas, construcción de infraestructura, adiestramiento al trabajador y otras ventajas.

iv] Una escala salarial inferior a la de los Estados Unidos debido a que el gobierno de Puerto Rico no exigía la aplicación de la ley de salario mínimo federal que rige en los Estados Unidos. En adición, la alta tasa de desempleo aseguraba una

³⁰ Saúl J. Pratts Ponce de León, "La emigración y las condiciones de vida de los puertorriqueños que residen en Nueva York", trabajo preparado para el proyecto "Migración y relaciones internacionales en el Caribe", auspiciado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, mayo de 1981.

reserva de trabajadores que aceptarían trabajar por unos bajos salarios.

A partir de 1945 el movimiento de capitales a la isla se fue intensificando a tal ritmo que ya entre 1960 a 1970 las inversiones de capital aumentaron de \$1.5 billones a cerca de \$7.0 billones. Esta tendencia ha continuado y en 1977 se habían acumulado en Puerto Rico unos \$18.6 billones de capital.

Paradójicamente este proceso de industrialización y las transformaciones de la estructura económica que provoca dejaba sin resolver uno de los problemas más serios que tenía Puerto Rico: el desempleo. Reporta Saúl J. Pratts que entre los años 1950 a 1970 la tasa de desempleo fue una de las más altas, fluctuando entre el 12 al 14% de la fuerza trabajadora y concluye: "el proceso de industrialización, en ese período, continúa creando un excedente de población y no soluciona los problemas básicos del puertorriqueño.

La industrialización que se inicia en la década de los cuarenta dependería de capitales extranjeros y no absorbería toda la mano de obra desempleada en Puerto Rico. Por otro lado los capitalistas que habían invertido en la agroindustria del azúcar y en el cultivo del tabaco pronto dejarían de interesarse en dichos productos. Entonces el gobierno colonial pone todos los recursos en la industria liviana y se interpreta que éste sería el sector más avanzado de la economía. La agricultura representaba el sector más rezagado o estancado. De esa forma se establece una dicotomía entre el desarrollo industrial y el desarrollo agrícola. No se concebía la idea de un desarrollo integral de todos los sectores de la economía.

Los resultados de esa estrategia de desarrollo económico van a traer un alto crecimiento en algunos sectores de la economía, pero lejos de un desarrollo integral que beneficiara a todos los sectores de la población. En el año fiscal 1959-1960, la economía de Puerto Rico creció más que en ningún otro período desde la guerra de Corea. El ingreso aumentó 9.4% pero, sin embargo, este crecimiento fue un crecimiento desigual, pues en contraste con un aumento de 14% en el ingreso neto agrícola, la manufactura total subió un 16%. El ingreso neto de la agricultura para el período 1949-1950 fue de \$149 000 000 elevándose a \$172 millones en el año 1958-1959 y permaneciendo casi al mismo nivel, \$177 millones, en el año fiscal 1960. Sin embargo la industria de manufacturas tuvo un progreso sin precedentes: de \$90 000 000 en 1949-1950 pasó a \$252 000 000 en 1958-1959 alcanzando \$292 000 000 en 1959-1960.

Dentro del sector agrícola la más afectada fue la producción de caña, que redujo su rendimiento a 10.6%, clasificado como uno de los más bajos.

En 1949, la producción del sector agrícola constituye el 25.4% de la producción neta, mientras que en 1959 fue el 14.1%. Paralelamente la importancia del sector manufacturero subió de 13.6% a 20.0 por ciento.

La decadencia en la importancia de la agricultura queda manifiesta al estudiar la distribución del ingreso por familias y ocupaciones en el período de 1953 a 1963. A continuación incluimos un cuadro sobre la distribución del ingreso recibido por familias en Puerto Rico en 1953 y 1963.

Porcentaje de familias	Porcentaje de ingresos recibidos		Cambio (+) Mejoró (-) Empeoró
	1953	1963	
10 por ciento más pobres	1.6	1.0	-0.6
10 20	3.4	3.0	-0.4
20 30	5.0	4.0	-1.0
30 40	5.5	5.0	-0.5
40 50	6.0	6.5	0.0
50 60	7.5	7.5	0.0
60 70	9.5	11.5	+2.0
70 80	11.0	10.5	-1.0
80 90	15.5	17.5	+1.5
90 100	35.0	34.5	-0.5
5 por ciento más alto	22.0	22.5	0.0

FUENTE: Depto. del Trabajo. Esta tabla es una ampliación de la presentada en el "Informe económico al gobernador, 1964", segunda parte, p. 47

En este cuadro se puede observar que el 60% de las familias de más bajos ingresos empeoró su participación del ingreso total en un 2%. En 1953 estas familias recibían el 29% del ingreso total mientras que en 1963 sólo recibían el 27%. El 40% de las familias restantes que son las que más altos ingresos reciben, aumentaron su participación de un 71% a un 73 por ciento.³¹

³¹ Rolando Castañeda y José A. Herrero, *La distribución del ingreso en Puerto Rico: algunos comentarios en base a los años 1953-1963*, p. 354.

La comparación del incremento de los ingresos promedio de algunos tipos de ocupaciones entre los años 1953-1963, ofrece una idea clara de cómo el proceso de distribución de ingreso se ha volcado en contra de las familias de ingresos más bajos.

INGRESO PROMEDIO DE ALGUNOS TIPOS DE FAMILIAS OBRERAS

<i>Familias obreras con ocupaciones de</i>	<i>1953</i>	<i>1963</i>	<i>Por ciento de aumento</i>
Trabajadores agrícolas	938	1 401	42
Obreros no agrícolas	1 170	2 129	83
Operarios	1 320	2 713	106
Artesanos y capataces	1 672	2 916	74

FUENTE: Junta de Planificación, "Informe económico al gobernador, 1964", segunda parte, p. 52.

Como se ve, las familias de los trabajadores agrícolas han aumentado sus ingresos considerablemente menos que los de cualquier otro de los grupos presentados, siendo precisamente los obreros agrícolas aquellos que tenían el menor ingreso en 1953.

El cuadro desolador que afectaba tanto a los obreros agrícolas como a los pequeños campesinos en la década de los cincuenta, los obliga a buscarse un trabajo accesorio, pero ahora lejos de su vecindad. Necesitaban encontrar un trabajo que aliviara su necesidad monetaria debido a los bajos ingresos que obtenían trabajando en su vecindad. Esto los lleva a emigrar hacia otras regiones en busca de trabajos mejor remunerados. En Estados Unidos la fuerza de trabajo dedicada a las labores agrícolas es insuficiente y los agricultores se plantean la posibilidad de reclutar obreros de otros países que trabajen en sus fincas. Así se van dando las condiciones para que miles de trabajadores agrícolas puertorriqueños abandonen la agricultura de Puerto Rico para irse a trabajar a los Estados Unidos. El pequeño productor agrícola, cuya explotación es ya irracional, halla fácilmente trabajo en fincas de los EU en condiciones casi esclavistas.

En la década de los cincuenta miles de trabajadores y pequeños productores agrícolas emigran no sólo a trabajos en la industria o las áreas de servicio de los Estados Unidos, sino

a trabajos en la cosecha de diversos productos para regresar luego de terminadas dichas cosechas.

Para ser exacto, en el lapso que va de 1950 a 1959 alrededor de 430 000 puertorriqueños emigraron hacia los Estados Unidos y entre 1945 a 1960 alrededor del 25% de la población total. La emigración fue el factor responsable en la reducción del crecimiento poblacional ocurrido en la década de los cincuenta. A continuación incluimos un cuadro de los cambios en el aumento de población ocurridos en Puerto Rico de 1899 a 1960 para que se vea cómo en 1960 la población crece a un ritmo menor del crecimiento que había experimentado en los años anteriores. Esto se debió a la salida del país de una gran parte de la población.

CAMBIOS EN LA POBLACIÓN TOTAL, PUERTO RICO, 1899-1960

<i>Año del censo</i>	<i>Población total</i>		<i>Aumentos sobre el censo anterior</i>	
	Habitantes	Habitantes	Por ciento	
1899	953 243	154 678	19.4	
1910	1 118 012	164 789	17.3	
1920	1 299 809	181 797	16.3	
1930	1 543 913	244 104	18.8	
1940	1 869 255	325 342	21.1	
1950	2 210 703	341 448	18.3	
1960	2 349 544	138 841	6.3	

FUENTE: U.S. Census of Population, 1960, Puerto Rico, U.S. Department of Commerce.

Durante este siglo, en ninguna de las décadas anteriores, el porcentaje de aumento de una década a otra había sido tan bajo como el que se registró en la década de los cincuenta. El aumento promedio de una década a otra durante las primeras cinco de este siglo fue alrededor de un 18%. El ritmo de crecimiento de la población total durante la década de los cincuenta se redujo en alrededor de dos terceras partes al compararlo con el porcentaje de aumento promediado en las décadas anteriores. El aumento poblacional de 1950 a 1960 fue de 138 841 personas, o sea un aumento de 6.3 por ciento.

La siguiente gráfica muestra los aumentos de población de Puerto Rico de 1899 a 1960.



Cabe señalar que la tasa de incremento natural durante la década de los cincuenta se mantuvo suficientemente alta para que la población total alcanzara un índice de crecimiento mucho mayor, por lo que concluimos que fue la emigración la responsable de que se produjera una reducción tan alta del crecimiento poblacional en ese período.

Los obreros, como los pequeños propietarios agrícolas, emigran dejando a su familia al cuidado de su pequeña finca o de su casa. En el periódico *El Mundo* encontramos el testimonio de dos obreros agrícolas que fueron a Estados Unidos en dos ocasiones para dedicarse a la recolección de cosechas. El articulista, que los entrevista en una pieza de caña, dice que uno de ellos emigró a Búfalo en 1953 y en 1957 fue a Pensilvania. En el momento de la entrevista (marzo de 1961) "el obrero anhela volver de nuevo a Estados Unidos porque dice

que allá se ganan buenos jornales. En su último viaje ahorró \$400.00, compró una pequeña finca que tiene 9 000 matas de tabaco sembradas. Mantiene una familia de 8 hijos, y la finquita no le es suficiente para ganar el sustento, razón por la cual se ve obligado 'a agarrar el machete'. Dice que otros dos obreros del barrio le acompañaron a Pensilvania y todos han regresado porque el intenso frío les afecta mucho."

"Les entusiasma en Estados Unidos un jornal mínimo de 75 centavos la hora que según el obrero, va a subir a \$1.25 por acción del Congreso."

"Reanudaron su propósito de volver a Estados Unidos en el 'tiempo muerto', porque cuando en Puerto Rico es la bruza, allá es la zafra."³²

Como éstos muchos miles de puertorriqueños han emigrado a trabajar en fincas agrícolas de los Estados Unidos. Se estima que durante la década de los sesenta entre 60 y 200 mil trabajadores han emigrado a trabajos en fincas agrícolas todos los años. Muchos lo hacen independientemente, otros son reclutados por agencias privadas o por los propios agricultores. Estos reclutadores lo hacen en forma ilegal pues las leyes de Puerto Rico prohíben dicha práctica. La forma legal de reclutamiento es suscribiendo un contrato que les gestiona el Departamento del Trabajo de Puerto Rico con los agricultores norteamericanos interesados en reclutar trabajadores puertorriqueños. Estos contratos se firmaron por primera vez en la década de los cuarenta y desde entonces el gobierno es el principal exportador de mano de obra boricua. Desde los últimos 35 años, más de 350 000 trabajadores puertorriqueños han emigrado con contratos para ser empleados en 22 estados donde recogen peras en el sur de California, manzanas en Vermont, tabaco en Connecticut, vegetales en New Jersey y otros.³³

Según un estudio citado por Ernesto Ramos Antonini, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mientras pronunciaba un discurso ante la Convención de Futuros Agricultores de América el 28 de mayo de 1962, "en los últimos 20 años hubo 60 mil hombres menos entre las edades de 20 a 45 años viviendo en las áreas rurales. Este grupo, que es el más productivo y que representaba en 1940 la tercera parte de la

³² Rafael Santiago Sosa, "Agricultores se quejan de la escasez de brazos", *El Mundo*, 7 de marzo de 1961.

³³ *NACLA report on the Americas*, volumen xi, núm. 8, noviembre-diciembre de 1977.

TRABAJADORES POR CONTRATO EN LOS ESTADOS UNIDOS
POR ESTADOS, 1960-1977

Año	Total	NJ	NY	Penn.	Del.	Md.	Conn.	Mass.	NH	Rd.	Mich.	Ohio	SC	Otros
1960	12 986	6 852	1 003	914	1 122	194	2 207	480	82	—	16	7	—	109
1961	13 765	6 749	1 698	913	1 294	254	2 089	567	89	11	—	6	—	95
1962	13 526	8 347	1 502	693	298	186	1 885	452	88	5	12	—	—	58
1963	13 116	8 022	1 475	416	368	106	1 832	409	51	20	383	—	—	34
1964	14 628	9 201	1 677	107	346	177	2 042	460	43	16	333	—	—	226
1965	17 385	10 095	1 577	138	314	30	3 245	423	38	16	613	—	—	906
1966	19 537	9 812	2 301	219	366	50	5 618	447	33	28	498	158	—	7
1967	21 648	9 388	3 471	140	1 677	6	5 684	450	41	36	51	333	—	369
1968	(n.d.)													
1969	21 862	9 463	2 188	655	1 832	311	6 113	486	54	105	121	299	192	43
1970	18 884	8 770	1 735	512	1 786	114	4 928	487	23	95	46	171	180	37
1971	14 119	6 836	1 237	151	1 543	68	3 669	397	20	61	16	—	94	27
1972	11 900	5 158	957	99	1 691	79	3 351	284	19	81	—	—	129	52
1973	14 641	6 255	1 375	134	1 634	114	4 337	289	27	92	—	—	304	80
1974	12 760	5 112	1 156	134	1 543	51	4 111	162	14	93	—	—	311	73
1975	5 639	3 398	743	112	1 077	—	—	108	81	63	—	—	52	5
1976	5 251	2 208	908	118	1 242	1	—	190	7	30	—	—	280	101
1977	4 191	2 020	773	113	896	15	—	51	36	—	—	—	258	29

FUENTE: Migration-Division, Department of Labor, Commonwealth of Puerto Rico, *Cumulative Weekly Reports of Arrivals*.

población rural, se redujo a una cuarta parte de la población de 1960". (*El Mundo*, 28 de mayo de 1962.)

Mientras se producen estos movimientos migratorios en forma masiva, los terrenos agrícolas en Puerto Rico se van perdiendo a ritmos cada vez más acelerados. La industrialización fue produciendo un crecimiento de población mayor en las áreas urbanas. Entre 1910 y 1950, Puerto Rico perdió terrenos agrícolas a razón de unas 6 700 cuerdas por año. Sin embargo, entre 1950 y 1960, los perdió a razón de 15 000 cuerdas por año y entre 1964 y 1974 a razón de 38 000 cuerdas por año. En otras palabras, Puerto Rico ha perdido casi la misma cantidad de terrenos agrícolas entre 1964 y 1974 que lo que perdió durante todo el período comprendido entre 1910-1964 cuando se perdieron 444 570 cuerdas.

Los grandes movimientos migratorios ocurridos a partir de la segunda guerra mundial provocaron un declive casi absoluto de la pequeña producción agrícola. Decimos casi absoluto porque no estamos seguros de que esta clase se haya extinguido. Aún existe una población en el campo que se resiste a ser extinguida. No tenemos la menor duda de que el campesinado puertorriqueño ha dejado de ser un segmento importante dentro de la estructura económica del país.

IV. LA PRESENCIA DEL CAMPESINADO PUERTORRIQUEÑO EN LAS LUCHAS SOCIALES Y POLÍTICAS

A fines del siglo xix, el campesinado representa a una clase de pequeños propietarios agrícolas bastante numerosa que disponía de una cantidad considerable de tierras y medios de producción con los cuales cultivaba alimentos en forma diversificada, principalmente para el autoconsumo familiar. Entre ellos existían relaciones de parentesco, económicas, religiosas, etc., en el marco de unas formas de producción que se transmitían de padres a hijos. La aplicación de la tecnología es tradicional. La mayor parte del trabajo que se realiza es manual, y los instrumentos de trabajo más comunes, especialmente para los campesinos más pequeños, son el arado de tracción animal, la azada y el sable.

El tratamiento de la semilla y las plantas con métodos

químicos es una práctica común entre los campesinos más grandes, pero no así entre los pequeños y medianos.

En general el desarrollo de las fuerzas productivas es pobre.

Los campesinos en tanto que productores se distinguen de los obreros porque todavía no están separados de sus medios de producción y por lo tanto no tienen que vender en el mercado su fuerza de trabajo, pero además, porque su forma de producción los aísla a unos de otros y se establecen pocas relaciones entre ellos. Los campesinos de la región montañosa, debido a lo difícil de los medios de comunicación, viven aún más aislados que los del litoral. Cada familia produce gran parte de sus alimentos en la finca, pero no se basta a sí misma en la obtención de ropa y otros alimentos que tiene que conseguir en la tienda de algún hacendado del área rural donde vive, o moviéndose al pueblo más cercano.

En la medida en que estas unidades de producción campesina viven en condiciones económicas de existencia más o menos similares, y en la medida en que se diferencian como dijo Marx ³⁴ por su modo de vivir, por sus intereses y por su cultura, de otros grupos o clases, los campesinos puertorriqueños constituyen una clase.

En el plano económico, los campesinos puertorriqueños constituyen una clase social puesto que están ubicados en una misma situación estructural, que objetivamente los opone a otras clases de la respectiva formación social como son los hacendados, los comerciantes, la burguesía azucarera, etc. Esta situación tuvo sus repercusiones al grado de producirse conflictos sociales y políticos muy poco estudiados por analistas de la historia agraria puertorriqueña. La escasa información estudiada al respecto, hace pensar que estas luchas campesinas no llegaron a convertirse en luchas políticas abiertas y que la participación del campesinado se limitó a alianzas con otras clases sociales.

Algunos de estos conflictos sociales y políticos en los que la presencia del campesinado ha quedado manifiesta en el período correspondiente a nuestro estudio, han sido los siguientes:

1. En el momento en que se produce la invasión norteamericana (1898) ocurren en varios pueblos de la isla levantamientos campesinos separatistas que enfrentan al ejército español y a los hacendados y comerciantes representantes de la clase

³⁴ En *El 18 brumario*, Marx se interesa en la base económica del campesinado parcelario francés y lo analiza como una clase, cuya condición se inscribe en el proceso concreto de la lucha de clases en la formación social de la Francia del siglo XIX.

dominante bajo el colonialismo español. A estos levantamientos se les llamó Partidas Separatistas y principalmente participaron en ellos jornaleros, pequeños y medianos propietarios agrícolas. Sobre las Partidas Separatistas en el pueblo de Ciales, Juan Manuel Delgado dice lo siguiente:³⁵

“En muchos casos las partidas armadas queman sus almacenes y casas y celebran juicios revolucionarios en contra de los hacendados más sanguinarios y explotadores. A otros se les perdona la vida y se la respeta su morada. Toda acción estaba determinada por las relaciones que había tenido el hacendado con su peonada.” Y más adelante, al referirse a la etapa final de las revueltas, anota. “Las Partidas fueron reprimidas violentamente por los ejércitos de Estados Unidos y España. También recibieron la resistencia del personal de muchas haciendas. Hacendados, mayordomos y capataces armados, así como la peonada fiel de la hacienda, le hicieron frente a la insurrección. A partir de octubre (1898) Estados Unidos armó a todos los hacendados con rifles Remington y envió soldados a las haciendas para contrarrestar los ataques y la tropa de caballería se internó en los campos a reprimir la revuelta. Algunos ayuntamientos también organizaron patrullas armadas lideradas por españoles y simpatizantes, la propiedad privada había que defenderla, no importaba la nacionalidad del propietario.”

“Algunas Partidas estaban lideradas por anarquistas que le indicaban a los campesinos que las tierras debían pasar a sus manos. Era la guerra. La guerra del campesino contra la burguesía de las haciendas.”

2. Los campesinos puertorriqueños a la llegada de los invasores norteamericanos a la isla, arremetieron contra los hacendados, los comerciantes y en algunos casos contra el propio ejército norteamericano que intervino las Partidas Separatistas. Con respecto al estado de la Iglesia católica ante el cambio en los poderes políticos y militares sobre Puerto Rico arrebatados por parte de los Estados Unidos a España, el pueblo estaba dividido. Había muchos antiespañoles en Puerto Rico. El clero estaba identificado con el gobierno español, y lógico era que vieran en el sacerdote al “poderoso del cual nos hemos zapateado y que su sola presencia nos exacerba [...] Esto hizo que muchos sacerdotes, por su seguridad personal y por temor

³⁵ Juan Manuel Delgado, *El levantamiento de Ciales*, Río Piedras, Ed. Guasabara, 1980.

a represalias, huyeran a otro lugar seguro. Muchos pueblos de la isla se quedaron sin pastor y tuvieron que ser atendidos dos y hasta tres pueblos a la vez por un solo sacerdote.”³⁶

Otras razones que motivaron la fuga de sacerdotes fueron: “la suspensión del sueldo a los sacerdotes por el Estado, el pueblo no estaba acostumbrado a sostener sus sacerdotes, muchos de ellos se vieron en tal estrechez económica que tuvieron que regresar a España”.

Por otra parte, “la realidad era que los protestantes venían en plan de conquista y de una conquista planificada, nada improvisada. Se dividen la isla en cuatro zonas adjudicando a cada una de ellas una de las denominaciones más importantes”.

Este esfuerzo de los protestantes por propagar su credo religioso en los pueblos y campos de Puerto Rico y el consiguiente ataque a los católicos, se convirtió en una amenaza para muchos campesinos que eran celosos de su fe católica.

En el contexto de este conflicto religioso nace un movimiento llamado los Hermanos Cheos en cuya base se encontraban pequeños productores agrícolas y jornaleros de la zona cafetalera del país.

Los Hermanos Cheos predicaban un tipo de fe católica práctica y moralista. Censuraban a los grandes hacendados “por sus relaciones ilícitas con las esposas de sus arrimados y las violaciones de cuanta cosa se levantaba en el barrio”.

El movimiento de los Hermanos Cheos, surgido entre el campesinado de la montaña, no tenía el reconocimiento de la jerarquía de la Iglesia católica y tuvo que provocar revuelo entre los sacerdotes y misioneros protestantes que les tildaban de embrujados, hechiceros, buscones, etcétera.

Los Hermanos Cheos “le decían a los jíbaros entre otras cosas que no fueran a los cultos protestantes, ni vivieran amancebados, ni se casaran por lo civil, sino por lo católico, que bautizaran a sus hijos en la Iglesia católica...”

Finalmente podemos concluir que el movimiento de los Hermanos Cheos fue un movimiento de resistencia a la penetración ideológica que tras la invasión norteamericana en 1898 se proponen realizar los misioneros protestantes.

3. A raíz de la primera guerra mundial se producen en el país varios movimientos huelguísticos en cuya base se encontraban obreros agrícolas y pequeños propietarios cosecheros de

³⁶ Rev. P. Esteban Santaella Rivera, *Historia de los Hermanos Cheos*, Santo Domingo, Editorial Alfa y Omega, 1979.

tabaco. Los primeros eran empleados en la fábrica de elaboración de tabaco llamada Porto Rican American Tobacco Company y los segundos cosechaban tabaco para suplir a las fábricas de esta compañía.

Con la guerra se fueron acumulando grandes existencias de cigarrillos manufacturados en los almacenes que tenía la compañía en Nueva York y Brooklyn debido a que supuestamente las ventas disminuyeron notablemente con motivo de un impuesto de guerra que el Congreso estaba por aprobar, así como por haber cancelado el gobierno federal todas las órdenes de cigarrillos manufacturados que hasta 1918 había estado exportando a las tropas en Europa. Esto llevó a la compañía a cerrar algunas de sus fábricas y a dejar de comprar tabaco a los cosecheros puertorriqueños provocándoles una pérdida, pues al no poder vender su tabaco y éste acumularse en el mercado, los precios eran más bajos.

Esta situación llevó al estallido de huelgas que se suceden durante la década de los veinte.

4. Otras manifestaciones de protesta en las que participa el campesinado ocurren durante la década de los treinta, como consecuencia de la depresión económica que afecta al capitalismo mundial. La vinculación de la estructura económica de Puerto Rico a los Estados Unidos da lugar a que se afecte la economía del país al producirse el colapso final del café, la drástica caída del cultivo y manufactura del tabaco y el estancamiento del sector azucarero. La población sufre un empobrecimiento general que produce un descontento de los sectores explotados: proletariado agrícola, pequeños productores, desempleados, etcétera.

Entre 1931 y 1936 se producen en Puerto Rico un total de 207 huelgas, que ponen de manifiesto la crisis social y política por la que atraviesa el régimen colonial.

El proletariado agrícola, representado por la Federación Libre de Trabajadores (FLT) y el Partido Socialista, comienza a exigir aumentos salariales y a cuestionar los arreglos que el liderato del Partido Socialista tenía con el Partido Republicano (representante de los grandes intereses azucareros) mediante la coalición que habían formado para las elecciones políticas de 1932 y que lo había llevado a ocupar posiciones burocráticas en el régimen colonial.

Los agricultores puertorriqueños dedicados al cultivo de la caña (los colonos) tampoco favorecían los arreglos que hacía el liderato de la Federación Libre con los grandes intereses

azucareros. En muchas ocasiones los colonos no aceptaron las estipulaciones de los convenios colectivos que llevaba a cabo la Federación Libre de Trabajadores con las corporaciones azucareras y hacían sus propios arreglos de carácter colectivo con sus trabajadores.

Todo este cuestionamiento llegó a su punto más álgido en la huelga cañera de 1934 cuando la FLT firma un acuerdo con los patrones de las corporaciones azucareras que fue rechazado y denunciado como una traición a los intereses de los trabajadores. Este rechazo implicó más que una desavenencia entre los líderes y la base de la FLT. Implicó un rechazo a la política de colaboración de clase del Partido Socialista y rompió el control casi monopolístico de la FLT sobre el proletariado puertorriqueño.

Las consecuencias de las huelgas y de las demás expresiones de resistencia al gobierno colonial y a los grandes intereses azucareros, van creando las condiciones para que se acerquen clases o sectores de clases que habían estado distanciados hasta ese momento. Se perfilan las condiciones de una alianza política antiimperialista. El peligro potencial que representaba una alianza entre los nacionalistas y los obreros se produce cuando estos últimos llaman al líder nacionalista, Pedro Albizu Campos, para que dirija la huelga. Los nacionalistas representaban un nacionalismo militante que favorecía la restitución de las tierras y demás propiedades monopolizadas por las compañías azucareras a su antiguos dueños. En este sentido tenían la simpatía de muchos antiguos pequeños propietarios agrícolas arruinados o en vías de arruinarse.

Aun cuando se dio el acercamiento entre los obreros de la FLT y el liderato del Partido Nacionalista, la alianza no llegó a cuajar debido a que el imperialismo se encargó de frenar la emergencia con que se movía la pequeña burguesía que se agrupaba en el Partido Nacionalista.

El gobierno colonial, bajo la gobernación del general Blanton W. Whiship, el hombre designado para enfrentarse a la crisis colonial, comenzó un proceso de represión política contra los nacionalistas. Ese proceso se inicia con la masacre de Río Piedras en 1935 y culmina con la masacre de Ponce en 1937. En ese mismo período es encarcelado el líder del Partido Nacionalista y se recrudece la represión contra todo individuo que se opusiera al dominio norteamericano en la isla.

El gobierno colonial no sólo actuó reprimiendo al sector nacionalista militante que cuestionaba al régimen imperante,

sino que acompañó las medidas represivas con una serie de programas de ayuda y bienestar social dirigidos a aliviar en parte, la crisis socioeconómica. Entre los años 1932 y 1938 trajo a la isla un total de aproximadamente 100 millones de dólares. Más adelante, en 1941, se llevó a cabo una reforma agraria, respondiendo a las presiones que hicieron los sectores medios agrupados en el Partido Popular Democrático y demás sectores campesinos, principalmente aquellos que producían caña de azúcar.

Previo a que se aprobara por la legislatura colonial el proyecto de reforma agraria que limitaba la tenencia de la tierra a 500 cuerdas, éste fue considerado por una comisión creada por Washington llamada Comisión Tugwell. A estas audiencias acudieron los grandes propietarios terratenientes o sus representantes en la isla, partidarios de la continuación de la siembra y cultivo de la caña de azúcar en gran escala; los pequeños propietarios, en su mayoría colonos defensores de la limitación de la tenencia de tierra a 500 cuerdas y otros grupos, sostenían que la ley no sólo debía aplicarse a las corporaciones sino también a los individuos.

El proyecto de reforma agraria fue aprobado en 1941 y los resultados del mismo fueron expuestos anteriormente en este trabajo. El imperialismo en esa etapa no sólo estaba presionado por los conflictos sociales y políticos que tenían lugar en el país, sino que se enfrentaba a los conflictos a nivel mundial que desembocarían en la segunda guerra mundial. Tal vez esto tuvo que ver en su decisión de apoyar la reforma agraria y con ello limitar los grandes intereses azucareros norteamericanos. No sólo intervino en los procesos económicos de la isla en ese período crítico, sino que también modificó su forma de gobernar la isla, concediéndole a los puertorriqueños una participación más directa. Se valió de un mecanismo que llamaremos autonomía relativa respecto a la administración de la colonia. En el plano económico y político, la autonomía relativa se refiere a que en la medida en que los intereses corporacionistas azucareros ocupen menos el aparato productivo y en la medida en que los norteamericanos dejen de ocupar posiciones políticas o burocráticas en la isla para ser ocupadas por los propios puertorriqueños, su dominio se hará menos visible y se producirán menos conflictos.

En el período de 1938-1940 se da además un proceso de constitución de una alianza política que recoge el Partido Popular Democrático. El liderato de ese partido comienza un pro-

ceso de negociación con la población del interior del país, especialmente de las zonas cafetaleras y tabacaleras, zonas de mucha población de pequeños propietarios agrícolas y de proletariado agrícola que vivía agregado en la finca de algún hacendado. El campesinado puertorriqueño no tenía una expresión política propia y participaba en los partidos que históricamente dominaban los hacendados o grandes propietarios. Éstos requerían del campesino su lealtad en los asuntos políticos y en ocasiones utilizaban mecanismos de control como eran la intimidación o la compra del voto.

El liderato del PPD recorre los campos y poblados del interior ofreciendo cambios en la política del país. Ofrece una reforma agraria, tierras, hogar seguro, etc., y a cambio pide prestado el voto a la población campesina. Su impacto sobre la población rural queda demostrado con el triunfo que obtiene en las elecciones de 1940.

El Partido Popular desde entonces aparecía como un movimiento agrarista interesado en los problemas que afectaban la población rural. Creemos que el PPD ayudó a acelerar el proceso del despertar de la conciencia política del campesinado en lo que respecta a su rechazo a los mecanismos de control que usaban los hacendados, como eran la intimidación, la compra del voto, etc. Sin embargo, en lo que respecta a la dirección de ese movimiento agrarista que se inicia en el PPD, el campesinado sólo fue un espectador, se mantuvo marginado del mismo. La falta de politización y de organizaciones que representaran sus intereses, impidió que asumiera una posición más combativa. La dirección de todo el movimiento agrarista en la década de los cuarenta la asumieron las capas medias de profesionales, tecnócratas, etc., en ascenso. Éstos lograron hegemonizar en el PPD a elementos nacionalistas, socialistas, antiimperialistas dispersos.

Todavía el PPD sigue teniendo su base de apoyo en cada elección de las regiones del interior del país donde se encuentran los reductos de lo que un día fue una inmensa población campesina. Los procesos de industrialización, militarización y emigración dieron al traste con esa población campesina que hoy ha dejado de tener la importancia que tuvo hace apenas 25 años.

BIBLIOGRAFÍA

- Baqué Jaime, "Movimientos de reforma agraria en Puerto Rico", en *Revista de Agricultura de Puerto Rico*, vol. 55, núms. 1 y 2, enero-diciembre de 1968.
- Chayanov, A. V., *La organización de la unidad económica campesina*, Ediciones Nueva Visión, 1974.
- De Armas, Ramón, "El otro pasado de Puerto Rico", en *Casa de las Américas*, núm. 70, La Habana, 1972.
- Delgado, Juan Manuel, *El levantamiento del Ciales*, Río Piedras, Editorial Guasabara, 1980.
- Descarte, S. L., "La situación hipotecaria rural en Puerto Rico", *Estación Experimental Agrícola*, núm. 42, 1936.
- Maldonado-Denis, Manuel, *Puerto Rico: una interpretación histórico-social*, México, Siglo XXI, 1969.
- Matos Cintrón, Wilfredo, *La política y lo político en Puerto Rico*, Serie Popular, México, ERA, 1980.
- Navas Dávila, Gerardo, *La dialéctica del desarrollo nacional. El caso de Puerto Rico*, segunda parte, Editorial Universitaria, UPR, 1978.
- Picó, Fernando, *Amargo café*, Río Piedras, Puerto Rico, Ediciones Huracán, 1981.
- Pratts Rivera, Edgar A., *Discusiones en torno a la hacienda y a la plantación azucarera de Puerto Rico*, Tesis de doctorado en Ciencias Políticas, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
- Quintero Rivera, A. G., "La base social de la transformación ideológica del Partido Popular en la década del '40", en *Puerto Rico: la transformación ideológica del PPD*, Editorial Universitaria, UPR, 1980.
- Rosario Natal, Carmelo, *Éxodo puertorriqueño (Las emigraciones del Caribe y Hawaii: 1900-1915)*, San Juan, Puerto Rico, 1983.
- Santaella Rivera, Rev. P. Esteban, *Historia de los Hermanos Cheos*, Santo Domingo, Editorial Alfa y Omega, 1979.
- Thomas, Mathews, *La nueva política puertorriqueña y el Nuevo Tratado*, Editorial Universitaria, UPR, 1970.



impreso en editorial galache, s. a.
priv. dr. márquez núm. 81, col. doctores
delegación cuauhtémoc, 06720 méxico, d. f.
tres mil ejemplares y sobrantes para reposición
4 de diciembre de 1984

Cuando se estudia a los campesinos latinoamericanos se les ve como parte de los problemas agrarios o rurales, pocas veces se piensa en ellos como actores políticos. Esta obra abarca la actuación política de los campesinos en todos los países de la región, incluido Puerto Rico, y es fundamental para comprender el momento actual que vive América Latina. Aunque una parte de la narración y del análisis histórico comprende etapas anteriores a la contemporánea, el foco principal de atención es nuestro tiempo. El libro que tiene el lector en sus manos corresponde a la serie *Historia política de los campesinos latinoamericanos* que Siglo XXI Editores, en coedición con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta a la consideración de su público. Consta de cuatro volúmenes, de los cuales éste, que es el primero, comprende los siguientes países: México, Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.

Volumen 1

Colaboradores:

MÉXICO: Arturo Warman

CUBA: Adelfo Martín Barrios

HAITÍ: Suzy Castor

REPÚBLICA DOMINICANA: Pablo A. Maríñez

PUERTO RICO: Felipe Pérez

